I N D I C E
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo por el que se otorga al señor Christopher J. Dodd, la Condecoración Orden Mexicana del Aguila Azteca en grado de Placa 2

Acuerdo por el que se otorga al señor Alan Riding, la Condecoración Orden Mexicana del Aguila Azteca en grado de Insignia 2

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 3

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Quinta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior para 2002 25

Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a Arrendadora Lease, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, por aumento de capital 27

Circular F-13.5 mediante la cual se da a conocer a las instituciones de fianzas, el Programa
de Autocorrección 28

Circular S20.10 mediante la cual se da a conocer a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, el Programa de Autocorrección 29

Circular CONSAR 16-2, Reglas generales que establecen los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro respecto a los gastos que genere el Sistema de Emisión, Cobranza y Control de Aportaciones que deberán cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social 30

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2003 en los que las administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones 31

SECRETARIA DE ENERGIA

Resolución por la que se modifica la diversa número RES/216/2001 para habilitar días y se da a conocer el calendario en que suspenderán labores, así como el horario de atención al público para el año 2003 de la Comisión Reguladora de Energía 33

SECRETARIA DE ECONOMIA

Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-24/2002 34

Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-025/2002 34

Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-26/2002 35

Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-27/2002 36

Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-28/2002 36

Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-29/2002 36

Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-30/2002 37

Insubsistencia de declaratorias de libertad de terreno número I-031/2002 37

Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-32/2002 38

Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-33/2002 38

Aviso sobre la presentación de solicitudes de examen para determinar si la supresión de cuotas compensatorias daría lugar a la continuación o repetición de la discriminación de precios
y del daño 39

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

Aviso por el que se modifica el primer periodo de veda para la captura de lisa (*Mugil cephalus*) y liseta o lebrancha (*Mugil curema*), en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México correspondientes al litoral del Estado de Tamaulipas y en la zona norte del Estado de Veracruz, en la zona delimitada desde el Río Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco,
hasta el Río Pánuco, establecida en el artículo segundo fracción XIV del diverso publicado el 16 de marzo de 1994 39

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Coatzacoalcos, Ver. y 26 localidades más del Estado de Veracruz, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. 41

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 39-TVR-8.6) 42

Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Tehuacán, Pue. y 61 localidades más del Estado de Puebla, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. 44

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 41-TVR-8.8) 45

Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Chilpancingo de los Bravo, Gro. y 26 localidades más del Estado de Guerrero, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. 47

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 43-TVR-8.10) 48

Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Iguala de la Independencia, Gro. y 24 localidades más del Estado de Guerrero, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. 50

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 44-TVR-8.11) 51

Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Cuautla, Mor. y 18 localidades más del Estado de Morelos, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. 53

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 46-TVR-9.5) 54

SECRETARIA DE SALUD

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas, para la ejecución del Programa Salud para Todos (Seguro Popular de Salud) 56

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-24-82 hectárea de temporal de uso común, de terrenos del ejido Cihuatlán, Municipio de Cihuatlán, Jal.
(Reg.- 267) 69

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-88-15 hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Loreto, Municipio de Loreto, B.C.S.
(Reg.- 268) 71

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-37-04 hectárea de temporal de uso común, de terrenos del ejido Santo Tomás, Municipio de Zempoala, Hgo. (Reg.- 269) 73

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-09-00 hectárea de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Nexpa, Municipio de Lázaro Cárdenas, Mich. (Reg.- 270) 75

Resolución que declara como terreno nacional el predio Mayte, expediente número 734611, Municipio de Calakmul, Camp. 76

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Yanete, expediente número 734612, Municipio de Calakmul, Camp. 78

Resolución que declara como terreno nacional el predio Buenos Aires, expediente número 734613, Municipio de Calakmul, Camp. 79

Resolución que declara como terreno nacional el predio Camino de Luz, expediente número 734614, Municipio de Calakmul, Camp. 80

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Esperanza, expediente número 734615, Municipio de Calakmul, Camp. 82

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 83

Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional 84

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 84

AVISOS

Judiciales y generales 85

SEGUNDA SECCION

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2000 1

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 82

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, *Director.*
Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Tel. 5093-3200 extensiones: *Dirección* 35006, *Producción* 35094 y 35100,
Inserciones 35079, 35080, 35081 y 35082; Fax 35068
Suscripciones y *quejas:* 35054 y 35056
Correo electrónico: *dof@segob.gob.mx.* Dirección electrónica: *www.gobernacion.gob.mx*
Impreso en Talleres Gráficos de México—México

091202-11.50 Esta edición consta de dos secciones

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

Tomo DXCI No. 6 México, D. F., Lunes 9 de diciembre de 2002

CONTENIDO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE ENERGIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
BANCO DE MEXICO
AVISOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

ACUERDO por el que se otorga al señor Christopher J. Dodd, la Condecoración Orden Mexicana del Aguila Azteca en grado de Placa.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 3o., 5o., 6o. fracción II, 33, 40 y 42 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y

CONSIDERANDO

Que es propósito del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reconocer al señor Christopher J. Dodd, por sus esfuerzos y por ser activo promotor de la paz, prosperidad y democracia en el mundo, y haber mostrado gran interés sobre los problemas que enfrenta nuestro país, durante diversas reuniones Interparlamentarias México-Estados Unidos, así como por fomentar la comunicación bilateral. En 1987 luchó por la eliminación del proceso de certificación y en 1996 respaldó la Ley de Reforma Migratoria;

Que de acuerdo con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se otorga a extranjeros con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana, y

Que conforme a los procedimientos establecidos en la Ley anteriormente mencionada, el Honorable Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, me ha propuesto otorgar al señor Christopher J. Dodd, la citada Condecoración en el grado de Placa, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga al señor Christopher J. Dodd, la Condecoración Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de Placa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Condecoración será entregada en la ciudad de México, Distrito Federal, el nueve de diciembre de dos mil dos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en el **Diario Oficial de la Federación**.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de diciembre de dos mil dos.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Jorge Castañeda Gutman**.- Rúbrica.

ACUERDO por el que se otorga al señor Alan Riding, la Con decoración Orden Mexicana del Aguila Azteca en grado de Insignia.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 3o., 5o., 6o. fracción II, 33, 40 y 42 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y

CONSIDERANDO

Que es propósito del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reconocer al señor Alan Riding, por sus aportaciones analíticas sobre la política de nuestro país y el devenir económico-político que enfrenta el Estado Mexicano en el siglo XXI;

Que las obras de distinguidos intelectuales y académicos de Estados Unidos han enriquecido la reflexión y el conocimiento sobre México y, con ello, han fortalecido las relaciones entre ambos países. Uno de los textos más influyentes producido en décadas recientes es el libro *Vecinos Distantes,* publicado por el señor Riding en 1985, el cual, por su originalidad, integridad y lucidez, se convirtió en un texto seminal para el estudio de la política, la economía y la cultura del México contemporáneo;

Que la obra de Riding, producto de la cercanía que da la experiencia directa pero también de la distancia que implica la reflexión independiente, generó un intenso debate en México sobre el rumbo de nuestro país y sus vínculos con la sociedad estadounidense. Con ello, su autor contribuyó a superar las suspicacias y prejuicios del pasado y a promover una nueva asociación entre ambos países;

Que de acuerdo con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se otorga a extranjeros con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana, y

Que conforme a los procedimientos establecidos en la Ley anteriormente mencionada, el Honorable Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, me ha propuesto otorgar al señor Alan Riding, la citada Condecoración en el grado de Insignia, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga al señor Alan Riding, la Condecoración Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de Insignia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Condecoración será entregada en la ciudad de México, Distrito Federal, el nueve de diciembre de dos mil dos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en el **Diario Oficial de la Federación**.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de diciembre de dos mil dos.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Jorge Castañeda Gutman**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 18 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

Artículo Único.- Se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública para quedar como sigue:

"REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o.- La Secretaría de Seguridad Pública es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2o.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Consejo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

II. Instituto, el Instituto de Formación de la Policía Federal Preventiva;

III. Ley Orgánica, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

IV. Ley, la Ley de la Policía Federal Preventiva;

V. Policía, la Policía Federal Preventiva;

VI. Programa Nacional, el Programa Nacional de Seguridad Pública;

VII. Reglamento de la Policía, el Reglamento de la Policía Federal Preventiva;

VIII. Reglamento, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública;

IX. Secretaría, la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados;

X. Secretario, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y

XI. Sistema, el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 3o.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos competencia de la Secretaría, el Secretario se auxiliará de las unidades administrativas siguientes:

I. Subsecretaría de Seguridad Pública;

II. Oficialía Mayor;

III. Unidad de Evaluación;

IV. Coordinación General de Asuntos Jurídicos;

V. Coordinación General de Planeación de Operaciones de Seguridad Pública;

VI. Coordinación General de Asuntos Internos;

VII. Coordinación General de Derechos Humanos y Participación Ciudadana;

VIII. Dirección General de Comunicación Social;

IX. Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada;

X. Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto;

XI. Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos;

XII. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;

XIII. Dirección General de Desarrollo Tecnológico;

XIV. Dirección General de Evaluación;

XV. Dirección General de Innovación y Calidad;

XVI. Órganos Administrativos Desconcentrados:

a) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

b) Policía Federal Preventiva;

c) Prevención y Readaptación Social, y

d) Consejo de Menores.

La Secretaría contará con un Órgano Interno de Control, que se regirá conforme al artículo 31 de este Reglamento.

Además, la Secretaría contará con las unidades subalternas que figuren en su presupuesto, cuya adscripción y funciones deberán especificarse y regularse en el Manual de Organización General de la propia Secretaría y, en su caso, en los de sus Órganos Administrativos Desconcentrados.

Artículo 4o.- La Secretaría, a través de sus Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de Planeación y a las políticas y programas que determine el Ejecutivo Federal.

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

Artículo 5o.- El trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría corresponden originalmente al Secretario, quien para la mejor distribución y el desarrollo del trabajo podrá delegar facultades en servidores públicos subalternos, con excepción de las enumeradas en el artículo siguiente. Los acuerdos de delegación de facultades deberán ser publicados en el **Diario Oficial de la Federación**.

La delegación de facultades y la asignación de éstas a los servidores públicos de las unidades administrativas de la Secretaría establecidas en el presente Reglamento, no impedirán al Secretario el ejercicio directo de tales facultades.

Artículo 6o.- El Secretario tendrá las facultades indelegables siguientes:

I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal que comprenda las normas, instrumentos y acciones, para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos;

II. Proponer al Ejecutivo Federal las medidas que garanticen la congruencia de la política criminal entre las dependencias de la administración pública federal;

III. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

IV. Representar al Presidente de la República en los juicios constitucionales, en los términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, en los casos en que lo determine el titular del Poder Ejecutivo Federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento;

V. Proponer al Consejo la designación del Secretario Ejecutivo del Sistema y, en su caso, removerlo libremente;

VI. Proponer en el seno del Consejo políticas, acciones y estrategias de coordinación, en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional;

VII. Proponer al Ejecutivo Federal el nombramiento del Comisionado de la Policía;

VIII. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;

IX. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema, con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación;

X. Intervenir en el nombramiento y la remoción de los servidores públicos de la Secretaría, así como de los representantes de ésta en comisiones, entidades federativas y organismos nacionales e internacionales en que participe;

XI. Aprobar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría, de las comisiones que la misma presida por ley o por encargo del Ejecutivo Federal;

XII. Proponer al Ejecutivo Federal los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás disposiciones relativas a la seguridad pública, así como los anteproyectos de reformas a la legislación vigente;

XIII. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas por los servidores públicos y las unidades administrativas que de él dependan directamente, así como las demás que legalmente le correspondan;

XIV. Delegar las atribuciones que le corresponden en los funcionarios subalternos, en el orden que este Reglamento menciona;

XV. Adscribir las unidades administrativas mediante acuerdo publicado en el **Diario Oficial de la Federación**;

XVI. Refrendar los proyectos de decretos y acuerdos que deba emitir el Presidente de la República, competencia de la Secretaría, y

XVII. Las demás que le señalen los ordenamientos jurídicos aplicables o el Ejecutivo Federal.

Artículo 7o.- A fin de cumplir con las funciones asignadas al Secretario en el artículo 30 bis, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, consistentes en organizar, dirigir, administrar y supervisar a la Policía, si las necesidades del servicio así lo requieren, el nombramiento de Comisionado de la Policía podrá recaer en dicho servidor público, sin gozar de remuneración adicional alguna a las que perciba como titular de la Secretaría, y siempre que reúna los requisitos que para dicho cargo exige la ley.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBSECRETARIO, DEL OFICIAL MAYOR Y DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN

Artículo 8o.- El Subsecretario, el Oficial Mayor y el Titular de la Unidad de Evaluación tendrán las siguientes facultades genéricas:

I. Acordar con el Secretario los asuntos y la ejecución de los programas que le sean encomendados;

II. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas que tengan adscritas, informando al Secretario de las actividades que éstas realicen;

III. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las unidades administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política que determine el Secretario;

IV. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan por suplencia y aquellos otros que les instruya el Secretario;

V. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto anual de las unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución;

VI. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de la Secretaría, en la parte que les corresponda;

VII. Proponer al Secretario la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos;

VIII. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las propuestas de modernización, desconcentración y simplificación administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad;

IX. Suscribir los convenios o bases de colaboración a celebrarse con otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y del Distrito Federal, así como los convenios de concertación con los sectores social y privado. En caso de que el acto jurídico incluya asuntos que correspondan a la subsecretaría, deberá firmarse por el titular de la misma;

X. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría las actividades que les hayan sido encomendadas;

XI. Designar y remover a su personal de apoyo, así como nombrar y remover, con aprobación del Secretario, a los servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas;

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;

XIII. Proporcionar la información o la cooperación que les sean requeridas por otras dependencias del Ejecutivo Federal, previo acuerdo con el Secretario;

XIV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los servidores públicos titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas, así como las demás que legalmente les correspondan;

XV. Suplir al Secretario en los juicios de amparo, laborales, administrativos, civiles, penales y en todos aquéllos en los que deba intervenir el propio Secretario, en el orden que establece el artículo 32 de este Reglamento;

XVI. Coordinar a los órganos administrativos desconcentrados que le sean asignados por este Reglamento o por el Secretario, y

XVII. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 9o.- Corresponde al titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública las siguientes atribuciones:

I. Establecer criterios de operación, en los términos del Acuerdo respectivo, a las unidades administrativas que le sean adscritas por el Secretario;

II. Establecer las normas, políticas y procedimientos para el desarrollo e instrumentación de programas de visitas e inspecciones, así como para la práctica de investigaciones con motivo de las quejas o denuncias para dar cuenta a la superioridad de las irregularidades operativo-administrativas detectadas en la Secretaría y de aquellas que puedan ser causales de responsabilidad por integrantes de la Secretaría;

III. Observar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas y administrativas relativas al registro, autorización y control de empresas y servicios de seguridad privada que se brindan en dos o más entidades federativas;

IV. Definir y observar el cumplimiento de políticas y lineamientos que regulen la prestación del servicio de seguridad pública y, el respeto estricto a los derechos humanos;

V. Fomentar la participación ciudadana y de organizaciones sociales, en la planeación, supervisión y evaluación del servicio de seguridad pública y en la prevención de hechos delictivos;

VI. Instrumentar convenios, políticas, lineamientos generales de coordinación y apoyo interinstitucional en materia de seguridad pública con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, organismos públicos, sociales y privados, para la prevención del delito y atención a víctimas vigilando que sean respetados los derechos humanos;

VII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de participación ciudadana, prevención de delitos y derechos humanos;

VIII. Planear, elaborar y evaluar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, los programas regionales de participación ciudadana en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública;

IX. Instruir la realización de campañas, encuestas y sondeos de opinión para difundir la prestación del servicio de seguridad pública, y evaluar sus resultados en coordinación con la Unidad de Evaluación, a fin de mejorar la calidad del mismo y la imagen institucional, así como difundir las políticas encaminadas a la prevención de conductas ilícitas en la ciudadanía;

X. Desarrollar y aplicar las políticas, programas, proyectos o acciones de la Secretaría en materia de servicios a la comunidad y participación social, así como de protección a los derechos humanos, en el ámbito de su competencia;

XI. Proporcionar orientación jurídica a los miembros de la comunidad para el mejor ejercicio de sus derechos, y la protección a sus derechos humanos;

XII. Promover e impulsar acciones institucionales a efecto de facilitar a la comunidad el acceso a los servicios de la Secretaría;

XIII. Establecer el Sistema Nacional de Emergencia Telefónica, así como el Sistema de Orientación e Información al público y recepción de sugerencias;

XIV. Regular, en su ámbito de competencia, los servicios de localización e información sobre personas físicas, y

XV. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA OFICIALÍA MAYOR

Artículo 10.- Corresponden al Titular de la Oficialía Mayor las siguientes atribuciones:

I. Someter a la consideración del Secretario el Programa Operativo Anual, el anteproyecto de presupuesto anual y los demás programas que se le encomienden, así como la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de la Secretaría;

II. Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto asignado y presentar al Secretario lo que corresponda a las erogaciones que deberán ser autorizadas por él, conforme a la legislación aplicable y al presente Reglamento;

III. Establecer las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la organización y funcionamiento de la Secretaría, y para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales, informáticos, de comunicaciones y equipo diverso que requiera de soluciones tecnológicas en la Secretaría, darles seguimiento, verificar su observancia y evaluar sus resultados;

IV. Conducir, con apoyo de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, las relaciones laborales de la Secretaría conforme a los lineamientos que al efecto establezca el Secretario;

V. Acordar los sistemas de motivación al personal, otorgar los premios, estímulos y recompensas que se prevean en los ordenamientos aplicables, así como aplicar las sanciones por incumplimiento a las obligaciones laborales;

VI. Coordinar y apoyar la ejecución de los programas de capacitación técnico-administrativos para el personal de la Secretaría;

VII. Expedir los nombramientos de los servidores públicos de la Secretaría y resolver sobre los movimientos del personal y los casos de terminación de los efectos del nombramiento, previo acuerdo con el Secretario;

VIII. Coordinar la formulación y ejecución de los programas anuales y acciones en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, servicios, conservación y mantenimiento de bienes de la Secretaría, así como la regularización de estos últimos;

IX. Aprobar los lineamientos para la operación de los comités de obras, adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenación relacionados con bienes de la Secretaría;

X. Suscribir los contratos, convenios y acuerdos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los demás documentos que impliquen actos de administración, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y previa opinión, en su caso, de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos;

XI. Aprobar el Programa Anual para el Destino Final de Bienes Muebles a cargo de la Secretaría, conforme a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en las Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal, emitidas por la dependencia competente;

XII. Establecer, controlar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil; así como la ejecución del Programa de Seguridad y Vigilancia de la Secretaría;

XIII. Someter a la consideración del Secretario propuestas de cambios a la organización interna de

la Secretaría y las medidas técnicas y administrativas que mejoren su funcionamiento, emitiendo los dictámenes administrativos correspondientes, así como apoyar la actualización del Reglamento Interior de la Dependencia;

XIV. Someter a la consideración del Secretario el anteproyecto del Manual de Organización General de la Secretaría y los demás Manuales de Organización Específicos, Procedimientos y de Servicios al Público, así como gestionar su aprobación ante la instancia correspondiente;

XV. Coordinar la formulación y ejecución del Programa de Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría;

XVI. Dirigir el diseño, aplicación, y seguimiento de las políticas y procedimientos de mejora orgánico-funcional en la Secretaría, así como participar en la evaluación en coordinación con las unidades administrativas competentes;

XVII. Diseñar en coordinación con la Unidad de Evaluación, los estudios y análisis para el mejoramiento de la gestión gubernamental en materia de desarrollo administrativo en la Secretaría;

XVIII. Participar en las materias de su competencia en la formulación y ejecución de los programas a cargo de la Secretaría que deriven del Plan Nacional de Desarrollo;

XIX. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, cuando proceda;

XX. Establecer el sistema de orientación, de información y de recepción de sugerencias de los servidores públicos de la Secretaría;

XXI. Establecer y difundir, en el ámbito de su competencia, las normas, políticas, estrategias y criterios adecuados para la adquisición y óptima explotación de la infraestructura y los recursos informáticos de cómputo, telecomunicaciones y de modernización tecnológica y administrativa, que requieran las unidades administrativas de la Secretaría;

XXII. Planear, diseñar, desarrollar, implantar, evaluar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informáticos de telecomunicaciones y de modernización tecnológica
y administrativa de la Secretaría y sus unidades administrativas, así como instrumentar el apoyo técnico que requieran en estas materias;

XXIII. Establecer propuestas para lograr la cooperación de diversos organismos públicos, sociales y privados, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer y consolidar los sistemas informáticos y de telecomunicaciones de la Secretaría;

XXIV. Procesar y controlar la información estadística de las unidades administrativas de la Oficialía Mayor, que incremente su eficiencia y coadyuven en la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos propuestos;

XXV. Evaluar la ejecución y el cumplimiento de las metas comprometidas en el programa presupuesto anual de la Secretaría;

XXVI. Recibir las propuestas del Secretario Ejecutivo del Sistema, para la distribución de apoyos presupuestales a las entidades federativas, y someterlas a acuerdo del Secretario, para su gestión ante la autoridad competente;

XXVII. Participar con la representación de la Secretaría en la Academia Nacional del Sistema, y

XXVIII. Las demás que le señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN

Artículo 11.- Corresponde al Titular de la Unidad de Evaluación las siguientes atribuciones:

I. Proponer los planes, políticas y programas para la innovación y calidad en la dependencia y someterlos a la aprobación del Secretario;

II. Coordinarse con otras unidades administrativas para evaluar y proponer acciones de mejora en el diseño, instrumentación y flujo de operación de los sistemas, métodos y

procedimientos de trabajo, que apliquen las unidades administrativas adscritas a la Secretaría, para que cumplan con las disposiciones legales y administrativas aplicables;

III. Practicar evaluaciones operativo-administrativas, previo acuerdo del Secretario, solicitando para ello, la colaboración de las distintas unidades administrativas de la Secretaría, a fin de implementar medidas de mejora e innovación;

IV. Auxiliar, por acuerdo del Secretario, con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control en la Secretaría, en los procesos de investigaciones judiciales
o administrativas correspondientes;

V. Efectuar las evaluaciones que garanticen la seguridad de la información de la Secretaría, así como proponer las medidas preventivas y correctivas que procedan;

VI. Instrumentar mecanismos de evaluación al desempeño de los servidores públicos de la Secretaría, para constatar su eficiencia, eficacia y probidad en el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables;

VII. Instrumentar un programa de evaluación para las áreas de la Secretaría, de acuerdo a las normas, políticas y criterios establecidos en materia de seguridad pública;

VIII. Proponer las acciones que permitan detectar y prevenir irregularidades en los servicios que presta la Secretaría, coordinando para ello, las acciones correctivas a que haya lugar;

IX. Coordinar el seguimiento de las recomendaciones que en materia de evaluación, innovación
y calidad de los procesos internos, emita esta Unidad;

X. Mantener actualizado y controlar el acervo de información de la documentación referente al ingreso, evaluación, desempeño, reconocimiento y superación del personal de evaluación;

XI. Dirigir la atención de las observaciones y recomendaciones formuladas por las distintas instancias fiscalizadoras, así como la instrumentación de las medidas y acciones de mejora y preventivas al interior de la Secretaría;

XII. Coordinar la instrumentación y ejecución del Programa Anual para la Transparencia y el Combate
a la Corrupción en la Secretaría y evaluar los resultados en el sector, y

XIII. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

CAPÍTULO QUINTO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS COORDINACIONES GENERALES Y DIRECCIONES GENERALES

Artículo 12.- Corresponde a los titulares de las unidades administrativas a que se refiere este capítulo lo siguiente:

I. Planear, programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar, controlar y evaluar los programas necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;

II. Acordar con el superior jerárquico que corresponda la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de su competencia;

III. Ejercer las atribuciones que les sean delegadas y aquellas que les correspondan por suplencia,
así como realizar los actos que les instruya su superior;

IV. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior;

V. Proponer a su superior inmediato el ingreso, las promociones, las licencias y las remociones del personal de la unidad administrativa a su cargo, para los fines que procedan;

VI. Acordar con su superior la suscripción de los contratos y convenios relativos al ejercicio de sus atribuciones;

VII. Elaborar proyectos sobre la creación o reorganización de las unidades administrativas a su cargo y proponerlos al superior jerárquico, vigilando la permanente actualización de documentos técnicos y administrativos en la materia;

VIII. Proponer a su superior jerárquico, en lo relativo a la unidad o unidades administrativas a su cargo, los manuales de organización, de procedimientos y, en su caso, de servicios al público;

IX. Formular los proyectos de programas y de presupuestos relativos a la unidad administrativa a su cargo;

X. Ejercer los presupuestos autorizados a la unidad administrativa a su cargo de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como informar periódicamente a su superior jerárquico del desarrollo de los programas bajo su responsabilidad;

XI. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a los servidores públicos de la Secretaría;

XII. Coordinar sus actividades con otras unidades administrativas de la Secretaría y dependencias de la administración pública, cuando así lo requiera para su mejor funcionamiento, conforme a las atribuciones que a cada una de ellas correspondan;

XIII. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, así como las resoluciones o acuerdos de autoridades superiores que consten por escrito y aquellos que emitan con fundamento en las facultades que les correspondan;

XIV. Aplicar los ordenamientos que integran el marco jurídico de la Secretaría, conforme a las facultades y atribuciones que les confiere este Reglamento y demás disposiciones aplicables o que les sean delegadas y, en su caso, imponer las sanciones que procedan y resolver los recursos administrativos que al respecto se promuevan;

XV. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que les sea requerida por otras dependencias y entidades de la administración pública federal o por las unidades administrativas de la propia Secretaría, previo acuerdo de su superior jerárquico;

XVI. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la unidad administrativa a su cargo, así como emitir las constancias de la información que se encuentre en los medios magnéticos o electrónicos a su cargo, siempre y cuando ésta no sea de índole confidencial;

XVII. Proponer los sistemas informáticos requeridos para el sustento de las funciones asignadas, conforme a lo previsto en este Reglamento;

XVIII. Administrar los recursos humanos de su adscripción de acuerdo a la normatividad vigente;

XIX. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas por servidores públicos subalternos y por los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas, así como sustanciar aquellos recursos que en razón de su competencia les correspondan, y someterlos a la consideración y firma de los servidores públicos que conforme a la ley deban resolverlos, y

XX. Las demás que le señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y sus superiores.

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Artículo 13.- Corresponden al titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, las siguientes atribuciones:

I. Acordar con el Secretario los asuntos relevantes cuya tramitación le corresponda;

II. Representar legalmente al Secretario y, en su caso, a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría en los procedimientos judiciales, laborales y

administrativos o cualquier otro asunto de carácter legal, en que tenga interés e injerencia la Secretaría, con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales;

III. Interponer juicios de amparo, así como intervenir y rendir los informes correspondientes en los mismos, y verificar que las demás unidades administrativas cumplan con las resoluciones que en ellos se pronuncien, prestando la asesoría que se requiera e informando al superior jerárquico de aquéllas en caso de incumplimiento;

IV. Formular, a nombre de la Secretaría, las denuncias y querellas que legalmente procedan, así como desistirse y otorgar el perdón en aquellos delitos que se persigan a petición de parte, en estos dos últimos casos previo acuerdo del Secretario;

V. Presentar demandas o contestarlas, reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, así como ofrecer pruebas, formular alegatos, absolver posiciones, interponer toda clase de recursos y, en general, vigilar y atender la tramitación de los juicios y procedimientos judiciales, laborales o contencioso-administrativos, y en aquellos asuntos en los que la Secretaría participe;

VI. Proporcionar asesoría jurídica al Secretario;

VII. Opinar sobre las consultas que en materia jurídica formulen los integrantes de la Secretaría con motivo del desempeño de sus funciones, así como fijar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que normen su procedimiento;

VIII. Suscribir, en ausencia del Secretario, escritos y desahogar los trámites que correspondan a los casos urgentes relativos a términos, interposición de recursos y recepción de toda clase de notificaciones;

IX. Requerir, por cualquier medio de comunicación, a las demás unidades administrativas la documentación e información necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. En caso de omisión, podrá solicitarse a través de su superior jerárquico;

X. Asesorar, en materia jurídica, a los órganos colegiados e integrantes de la Secretaría con relación a los actos del servicio y dictaminar sobre las bajas del personal de la Secretaría, por las causas establecidas en las disposiciones aplicables en la materia, así como reconsiderar, en su caso, los dictámenes que hubiere emitido;

XI. Emitir opiniones sobre proyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, manuales, convenios y contratos relacionados con la competencia de la Secretaría, que le sean sometidos a su consideración;

XII. Dictaminar convenios, acuerdos, contratos y bases de coordinación celebrados con las autoridades locales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, así como de los sectores público y privado, para el desarrollo y operación de las acciones y programas del ámbito de competencia de la Secretaría;

XIII. Defender, en averiguaciones previas y en los procedimientos jurisdiccionales que correspondan, los actos de autoridad que se realicen dentro de la competencia de la Secretaría;

XIV. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría en los procedimientos de licitación y adjudicación de contratos;

XV. Llevar el registro y control de convenios, acuerdos y demás actos jurídicos de los que se generen derechos y obligaciones a cargo de la Secretaría;

XVI. Compilar y sistematizar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos federales, locales y particularmente, las normas relacionadas con la competencia de la Secretaría;

XVII. Participar en los procesos de actualización y adecuación del orden jurídico que rige el funcionamiento de la Secretaría;

XVIII. Elaborar estudios comparados sobre las legislaciones de las entidades federativas en materia de seguridad pública, reglamentos, bandos de policía y gobierno;

XIX. Coordinar las áreas jurídicas que existan en la Secretaría, y

XX. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

En todos los asuntos en que participe el Coordinador General, o algún representante acreditado, las acciones legales que éstos lleven a cabo a nombre, en representación o por acuerdo del Secretario,
se entenderán ratificadas por este último para todos los efectos legales.

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 14.- Corresponden al titular de la Coordinación General de Planeación de Operaciones de Seguridad Pública las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones de integración del Programa Nacional de Seguridad Pública con el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Diseñar, normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística de Seguridad Pública;

III. Planear la instrumentación de los diagnósticos de la seguridad pública en el país y su clasificación geodelictiva;

IV. Aportar, por parte de la Secretaría, la información requerida para la integración del Plan Nacional
de Desarrollo;

V. Coordinar acciones con instituciones que, dentro del ámbito de su competencia puedan apoyar a la Secretaría o requieran apoyo de ésta, para la realización de las tareas de seguridad pública y de prevención de conductas delictivas;

VI. Promover las acciones de coordinación interinstitucional con otros cuerpos de seguridad pública federales, estatales, municipales y del Distrito Federal;

VII. Organizar la realización de estudios e investigaciones sobre el fenómeno criminal, con la finalidad de elaborar estrategias de planeación y proyectos de normatividad para combatirlo;

VIII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, en la instrumentación
y manejo de un sistema de medición con indicadores que permita evaluar el desempeño y resultados en la prevención y combate del delito en todo el país y en cada nivel de gobierno;

IX. Verificar e integrar la información estadística proporcionada por las diferentes unidades administrativas de la Secretaría y de las dependencias federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, generadoras de la misma;

X. Procurar la coordinación de las actividades con las distintas instituciones de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno, y del Distrito Federal, encaminadas a la integración de programas a mediano y largo plazo que permitan la modernización de funciones sustantivas y adjetivas en materia de seguridad pública;

XI. Proponer medidas a las autoridades competentes para que las instituciones de seguridad pública de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios optimicen el aprovechamiento de los recursos;

XII. Difundir la información estadística delictiva a los diferentes cuerpos policiales de nivel federal y al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

XIII. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS

Artículo 15.- Corresponden al titular de la Coordinación General de Asuntos Internos, las siguientes atribuciones:

I. Acordar con el Secretario, los asuntos relevantes cuya tramitación le corresponda;

II. Supervisar que el personal y miembros de la Secretaría que desempeñen funciones de seguridad pública, observen el cumplimiento de las normas establecidas en los ordenamientos legales que rigen sus actuaciones;

III. Desempeñar la función de Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Federal Preventiva, conforme a los procedimientos establecidos;

IV. Establecer y realizar visitas e inspecciones de conformidad con el Programa de Trabajo previamente autorizado por el Titular;

V. Practicar las investigaciones correspondientes, con motivo de quejas o denuncias y dar cuenta
a la superioridad de las irregularidades operativas detectadas y de aquellas que presumiblemente puedan ser causales de responsabilidad civil o penal;

VI. Vigilar que el personal adscrito a esta Unidad Administrativa se someta a un proceso externo de evaluación con la periodicidad requerida por la Secretaría;

VII. Establecer y evaluar el cumplimiento de los principios y manuales de disciplina y ética por parte del personal y miembros de la Secretaría;

VIII. Proponer y establecer mediante los acuerdos respectivos, los métodos y procedimientos de investigación e inspección que deban establecerse en la Secretaría;

IX. Mantener actualizados los procedimientos de investigación;

X. Prever los canales más oportunos, eficientes y seguros para proporcionar al personal de inspección en operación, la información y análisis de la misma que requieran;

XI. Intercambiar información y mantenerla actualizada ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XII. Disponer el apoyo técnico logístico y de los medios físicos que se requieran para el mejor desempeño del personal de supervisión;

XIII. Remitir, a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, las copias certificadas de los expedientes relativos a las investigaciones de las quejas o denuncias de las que se derive la probable comisión de un delito o de responsabilidad civil por integrantes de la Secretaría;

XIV. Solicitar, a la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Federal Preventiva, el inicio del procedimiento disciplinario, remitiendo para ello el expediente respectivo y, en su caso, fungir como parte acusadora en los asuntos que se sometan a la Comisión, observando los procedimientos establecidos en la materia y coordinando su adecuada observancia hasta
la conclusión del proceso;

XV. Proponer los operativos en materia de seguridad pública, a fin de disminuir las incidencias registradas y coordinar su seguimiento;

XVI. Mantener relaciones con instituciones similares nacionales e internacionales, con objeto de intercambiar información, para mejorar las condiciones de tratamiento justo y equitativo del personal;

XVII. Establecer un sistema de estímulos y recompensas al personal que en justicia reconozca su esfuerzo, dedicación y empeño, y repare en beneficio de sus intereses, el daño que pueda ocasionarle el cumplimiento de su deber, y

XVIII. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 16.- Corresponden al titular de la Coordinación General de Derechos Humanos y Participación Ciudadana las siguientes atribuciones:

I. Fomentar entre los servidores públicos de la Secretaría y la ciudadanía una cultura de respeto a los derechos humanos;

II. Intervenir, conforme a las normas aplicables, en la investigación, resolución y seguimiento de quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones, así como en las visitas que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría;

III. Solicitar se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos de la Secretaría, a quienes se les imputen actos violatorios de los derechos fundamentales de las personas;

IV. Verificar que las denuncias y quejas en contra de servidores públicos, relacionadas con el servicio y la actuación de éstos, sean tramitadas con respeto a los derechos humanos;

V. Establecer las relaciones de la Secretaría con la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales
y del Distrito Federal de Derechos Humanos y los organismos públicos no gubernamentales que existan en la materia;

VI. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría;

VII. Establecer e instrumentar los mecanismos que faciliten la presentación de quejas y denuncias por violaciones a los Derechos Humanos por parte de los servidores públicos de la Secretaría;

VIII. Fomentar la realización de campañas de exhorto a los ciudadanos para denunciar hechos ilícitos, falta del servicio, prepotencia, corrupción y extorsión de los servidores públicos de que se tenga conocimiento, a fin de combatir la impunidad y proteger los derechos humanos, proporcionando la asesoría legal que se requiera;

IX. Mantener un sistema de comunicación abierta al público durante todo el año y las veinticuatro horas del día para recibir las quejas y denuncias en materia de seguridad pública por violación a los derechos humanos;

X. Establecer y ejecutar programas de vinculación, recepción, atención, orientación y en su caso, seguimiento y canalización de las quejas y denuncias de la ciudadanía en materia de Seguridad Pública por violación a sus derechos humanos;

XI. Promover la participación de los habitantes, organismos empresariales, cámaras de comercio, asociaciones de banqueros, organizaciones no gubernamentales y centros académicos, entre otros, para que se involucren en la supervisión y evaluación de las actividades policiales para evitar la comisión de ilícitos;

XII. Establecer e instrumentar programas de estímulos y recompensas para los elementos que se hayan distinguido en el cumplimiento de sus funciones, donde participe la comunidad;

XIII. Estimular y organizar la participación de la sociedad en grupos de observadores ciudadanos, que colaboren con la policía en la desactivación de los lugares de alto riesgo delictivo;

XIV. Fomentar la cultura preventiva del delito en la ciudadanía promoviendo la participación de los sectores social y privado;

XV. Estudiar las conductas antisociales de los ciudadanos y los factores que las propician y elaborar programas de prevención del delito en el ámbito de su competencia;

XVI. Promover el intercambio con entidades federativas e instituciones nacionales e internacionales
de carácter público o privado para la participación ciudadana, cooperación y fortalecimiento de acciones en materia de prevención del delito, así como de mejoramiento en la atención que prestan los servidores públicos de la Secretaría hacia la comunidad;

XVII. Brindar, en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social, información general sobre las atribuciones y servicios encomendados a la Secretaría, así como recoger las opiniones de la población en torno a la seguridad pública;

XVIII. Establecer los lineamientos conforme a las políticas institucionales para orientar a las víctimas de delitos, sobre los servicios legales, médicos y psicológicos necesarios, y

canalizarlas a las instituciones correspondientes para procurar su restablecimiento y contribuir a la protección de sus derechos humanos;

XIX. Establecer y coordinar sistemas, mecanismos y procedimientos, que permitan captar información ciudadana sobre la posible comisión de delitos del fuero federal;

XX. Administrar y operar el Sistema Nacional de Emergencia Telefónica;

XXI. Operar y ejecutar bases, convenios y otros instrumentos de coordinación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como aplicar, en el ámbito de su competencia, los instrumentos internacionales de los que México sea parte en materia de participación ciudadana en seguridad pública, y

XXII. Las demás que le señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 17.- Corresponden al titular de la Dirección General de Comunicación Social las siguientes atribuciones:

I. Difundir las actividades de la Secretaría, así como los resultados de las mismas a través de los medios de comunicación;

II. Diseñar, proponer y coordinar la realización de publicidad y programas de difusión en materia de prevención de delitos y seguridad pública;

III. Registrar, analizar, evaluar y procesar la información que difundan los medios de comunicación referente a las materias de interés de la Secretaría;

IV. Contribuir con las unidades administrativas de la Secretaría y con otras instituciones para la difusión de programas de servicio y orientación, con el objeto de garantizar la participación de la Secretaría ante la ciudadanía;

V. Concentrar, supervisar y aprobar los programas de difusión y relaciones públicas de las unidades administrativas de la Secretaría y orientar los servicios de apoyo en esta materia;

VI. Proponer, organizar y supervisar entrevistas y conferencias de prensa con los medios de comunicación estatales, nacionales o internacionales, en las materias de competencia de la Secretaría, así como emitir comunicados de prensa y ser la vocería oficial de la Secretaría;

VII. Aprobar el diseño de las campañas de difusión de interés de la Secretaría, intervenir en la contratación y supervisión de los medios de comunicación que se requieran para su realización, así como ordenar la elaboración de los elementos técnicos necesarios;

VIII. Coordinar y apoyar a las instancias correspondientes de la Secretaría y a las organizaciones ciudadanas o académicas, en la realización de cursos, coloquios, mesas redondas, foros o cualquier otra actividad de carácter cultural o académico en materia de prevención de delitos y seguridad pública;

IX. Someter a la consideración del Secretario los programas de comunicación social y relaciones públicas de la Secretaría que elaborará con la intervención de las unidades administrativas competentes y otras instituciones a fin de mantener debidamente informada a la sociedad;

X. Diseñar y proponer los lineamientos de participación y enlace ciudadano en materia de prevención del delito y de seguridad pública;

XI. Preparar con la participación de las unidades administrativas correspondientes el material de difusión de la Secretaría;

XII. Coordinar y apoyar, a solicitud de las unidades administrativas de la Secretaría, la celebración de conferencias, congresos y seminarios relacionados con la competencia de las mismas;

XIII. Difundir estudios e investigaciones que se realicen en materias de prevención del delito y de seguridad pública, así como promover el intercambio de resultados y experiencias en el ámbito local, nacional e internacional;

XIV. Evaluar los resultados de la estrategia de comunicación y de la imagen institucional de la Secretaría;

XV. Coordinarse con las demás unidades de comunicación social;

XVI. Diseñar, proponer y supervisar la ejecución de las estrategias para fomentar y consolidar la imagen institucional, interna y externa, de la Secretaría;

XVII. Elaborar instrumentos y dar seguimiento a encuestas, estudios de opinión, prospectiva policiaca
e impacto de imagen institucional para conocer la percepción de la ciudadanía respecto a los programas de la Secretaría, y

XVIII. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 18.- Corresponden al titular de la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada las siguientes atribuciones:

I. Expedir, suspender y cancelar las licencias oficiales individuales de portación de armas a los empleados federales, previa inscripción, en su caso, de las armas en el Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional;

II. Autorizar, suspender y cancelar las credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones policiales al amparo de una licencia colectiva oficial de portación de armas,
y que se asimilen a licencias individuales;

III. Regular los servicios de seguridad privada a cargo de particulares en la República Mexicana, conforme a lo dispuesto por la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; dichos servicios comprenden la protección o custodia de personas, inmuebles e instalaciones; establecimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad; de bienes y valores, incluido
su traslado; registro de clubes o asociaciones de deportistas o similares de tiro o cacería y, en general, los relacionados con toda actividad vinculada directamente con los servicios de seguridad privada;

IV. Llevar el Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada;

V. Supervisar que el funcionamiento de las empresas que brindan el servicio de seguridad privada se adecue a las disposiciones legales en los términos de la autorización expedida;

VI. Aplicar las infracciones y sanciones que, por el incumplimiento de las normas jurídicas aplicables, incurran los prestadores de servicios de seguridad privada;

VII. Recibir las consultas de particulares que presten el servicio de seguridad privada, debidamente autorizado, respecto de la justificación para que su personal operativo pueda portar armas de fuego en el desempeño del servicio y, dar respuesta a través de la emisión de la opinión correspondiente;

VIII. Comprobar que el personal operativo de las empresas de seguridad privada esté debidamente capacitado;

IX. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos presuntamente delictivos de que tenga conocimiento en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley;

X. Expedir, a costa del prestador del servicio, la cédula de registro al personal operativo, la cual será de uso obligatorio;

XI. Concertar con los prestadores del servicio acuerdos para la instrumentación de los planes y programas de capacitación y adiestramiento a través de las instituciones educativas de la Secretaría, y

XII. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Artículo 19.- Corresponden al titular de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto las siguientes atribuciones:

I. Determinar las políticas, lineamientos, normas y procedimientos para la administración eficiente de los recursos financieros de la Secretaría;

II. Determinar las políticas, lineamientos y procedimientos internos para la integración del anteproyecto anual del programa-presupuesto de la Secretaría, de conformidad con la normatividad y lineamientos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Coordinar la elaboración y llevar a cabo la integración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto de la Secretaría, de acuerdo con las disposiciones aplicables en la materia y previo acuerdo con el Oficial Mayor, gestionar su aprobación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IV. Informar a las unidades administrativas de la Secretaría sus presupuestos aprobados y las disposiciones normativas sobre el ejercicio programático-presupuestal que emitan las dependencias globalizadoras y las que se establezcan internamente;

V. Normar, dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio del programa-presupuesto anual de las unidades administrativas de la Secretaría;

VI. Elaborar los informes que se requieren sobre la ejecución del programa-presupuesto anual de la Secretaría;

VII. Evaluar y gestionar ante las dependencias globalizadoras, la Tesorería de la Federación y otras instituciones competentes, los asuntos y documentos que se requieran para la adecuación y el ejercicio del presupuesto autorizado de la Secretaría, de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables en la materia;

VIII. Vigilar el ejercicio programático y presupuestal de la Secretaría, así como el trámite de pago de sus compromisos, de acuerdo con las leyes y disposiciones aplicables en la materia;

IX. Autorizar, en el ámbito de su competencia, las solicitudes de modificación programático-presupuestal que presenten las unidades administrativas de la Secretaría, así como llevar su registro y control;

X. Establecer normas y procedimientos para el trámite de pago de la documentación comprobatoria de operaciones realizadas que afecten el presupuesto autorizado de la Secretaría, supervisar su aplicación y llevar al cabo el resguardo de dicha documentación;

XI. Controlar los ingresos de ley que sean captados en las unidades administrativas de la Secretaría, y enterarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XII. Llevar la contabilidad general de la Secretaría conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y a las normas que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XIII. Evaluar, conjuntamente con la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, el funcionamiento de los sistemas informáticos de programación, presupuesto, operación financiera y contabilidad de la Secretaría;

XIV. Establecer las actividades inherentes al Sistema Integral de Información Programático-Presupuestal

y Contable, así como integrar el informe del avance físico-financiero de la Secretaría y elaborar los reportes financieros que correspondan;

XV. Elaborar y tramitar las declaraciones fiscales que deban presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como realizar los trámites, para el ejercicio del presupuesto, ante las instituciones bancarias;

XVI. Formular la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de la Secretaría e integrar las correspondientes a los Órganos Administrativos Desconcentrados de la misma;

XVII. Emitir lineamientos y criterios técnicos en materia de organización, funcionamiento, modernización y simplificación administrativa de la Secretaría;

XVIII. Dictaminar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las unidades administrativas de la Secretaría y gestionar su aprobación ante las autoridades competentes;

XIX. Dictaminar y difundir, en coordinación con la Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos, las estructuras ocupacionales y salariales de la Secretaría, así como establecer y aplicar las políticas y lineamientos de productividad administrativa de la dependencia;

XX. Normar, integrar y mantener actualizado el Manual de Organización General, normar y dictaminar los proyectos de manuales de organización y procedimientos de las unidades administrativas
de la Secretaría, así como coordinar la integración de los manuales de servicios al público de la Dependencia y establecer los lineamientos para su actualización;

XXI. Promover la optimización de los procesos administrativos en las unidades administrativas de la Secretaría, a través de propuestas de acciones de mejora y aplicación de métodos administrativos.

XXII. Diseñar, proponer e instrumentar las políticas y procedimientos para la mejora orgánico-funcional de la Secretaría, en coordinación con otras unidades administrativas competentes, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita el Ejecutivo Federal;

XXIII. Emitir las políticas y lineamientos en materia administrativa para la Secretaría;

XXIV. Promover que las unidades administrativas de la Secretaría, den cumplimiento al seguimiento, evaluación y en general, a las disposiciones presupuestales aplicables a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, así como gestionar ante las instancias correspondientes el registro y demás trámites presupuestarios que sean solicitados por las unidades administrativas de la Secretaría;

XXV. Proporcionar asesoría en el ámbito de su competencia a las unidades administrativas de la Secretaría, y

XXVI. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 20.- Corresponden al titular de la Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos las siguientes atribuciones:

I. Proponer, implantar y operar políticas, lineamientos y normatividad en materia de administración
y desarrollo de personal;

II. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría en lo concerniente al capítulo de servicios personales, autorizar a las unidades administrativas el ejercicio de las asignaciones presupuestales correspondientes a dicho capítulo, supervisar su correcta aplicación e integrar la información correspondiente para la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública;

III. Formular el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto anual e informar del avance y cumplimiento de metas, así como del ejercicio del gasto correspondiente a la Dirección General a su cargo;

IV. Expedir los nombramientos del personal operativo y de enlace, así como las constancias y certificaciones que con motivo de la relación laboral se requiera;

V. Emitir, con la aprobación del Oficial Mayor, normas y procedimientos para el pago de las remuneraciones al personal de la Secretaría, determinar la emisión o suspensión de cheques
y la aplicación de descuentos y retenciones autorizados conforme a la Ley y, en su caso, la recuperación de las cantidades correspondientes a salarios no devengados, así como aplicar
las medidas disciplinarias y sanciones administrativas contempladas en la normatividad aplicable;

VI. Operar, normar y coordinar el sistema de pago al personal de la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Tesorería de la Federación;

VII. Atender, con el apoyo de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, las relaciones con el personal y con los organismos competentes en materia de derechos, obligaciones y prestaciones del personal al servicio de la Secretaría;

VIII. Aplicar las políticas en materia de administración de personal emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la formulación, instrumentación y ejecución de los programas y medidas específicos para la Secretaría;

IX. Definir, elaborar, emitir y promover sistemas y procedimientos en materia de reclutamiento, selección, contratación, nombramientos, inducción, remuneraciones, prestaciones, servicios sociales, motivación, capacitación y movimientos del personal, así como de medios y formas de identificación de los servidores públicos de la Secretaría;

X. Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes que contengan los documentos personales y administrativos de los servidores públicos de la Secretaría, en coordinación con otras unidades administrativas competentes;

XI. Formular y mantener actualizados el Catálogo Institucional de Puestos y el Tabulador de Sueldos de la Secretaría, en concordancia con los del Gobierno Federal;

XII. Diseñar, operar y administrar el Programa de Capacitación, Adiestramiento y Desarrollo de Personal de la Secretaría, con base en las necesidades de las diferentes unidades administrativas;

XIII. Mantener actualizado el registro presupuestal de las estructuras orgánicas ocupacionales y salariales de la Secretaría y verificar que sus unidades administrativas se ajusten a lo autorizado;

XIV. Cuantificar, costear y validar, en su caso, los programas de reclasificación y requerimientos de recursos humanos que demanden las unidades administrativas de la Secretaría, en coordinación con las instancias competentes de la misma;

XV. Instrumentar y operar el sistema escalafonario, así como difundirlo entre el personal operativo
y administrativo de confianza y a las demás comisiones mixtas establecidas y las que se establezcan de manera análoga;

XVI. Coordinar el sistema de evaluación del desempeño y el otorgamiento de premios, estímulos, recompensas y reconocimientos a los trabajadores de la Secretaría, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVII. Operar y mantener actualizado el Sistema Integral de Información de Recursos Humanos y proporcionar asesoría y apoyo en esta materia a las unidades administrativas de la Secretaría;

XVIII. Establecer, promover y coordinar programas internos de bienestar social, salud y acciones de protección al ingreso económico de los trabajadores, a través del otorgamiento de servicios y el fomento de la participación de ellos y sus familias en actividades culturales, deportivas
y recreativas;

XIX. Operar los servicios del Centro de Desarrollo Infantil y del Centro Cultural y Deportivo de la Secretaría;

XX. Coadyuvar con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en las diligencias e investigaciones relativas al incumplimiento de obligaciones laborales en que pudiera incurrir el personal e instrumentar las medidas correctivas de carácter administrativo a que se haga acreedor;

XXI. Participar en la formulación, instrumentación y evaluación de los programas en materia de recursos humanos;

XXII. Participar en el Programa Interno de Protección Civil y establecer las normas en materia de prevención de riesgos profesionales y accidentes de trabajo, atendiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene;

XXIII. Instrumentar la aplicación de los dictámenes sobre la composición de la fuerza de trabajo de las unidades administrativas de la Secretaría;

XXIV. Brindar los apoyos y servicios necesarios para el desarrollo de los actos sociales y culturales, festividades dirigidas a los trabajadores de la Secretaría y, en su caso, eventos institucionales;

XXV. Diseñar, actualizar y vigilar la aplicación de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a formar parte de la Secretaría;

XXVI. Desarrollar y coordinar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes e integrantes de la Secretaría;

XXVII. Emitir los criterios académicos aplicables y definir criterios y lineamientos para el desarrollo y ejecución de los programas y planes de estudio aplicables en la Secretaría, y

XXVIII. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Artículo 21.- Corresponden al titular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales las siguientes atribuciones:

I. Emitir y supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos para la administración de recursos materiales, prestación de servicios generales y obra pública de la Secretaría;

II. Establecer lineamientos para la formulación de los programas anuales de las unidades administrativas de la Secretaría, en materia de adquisiciones de bienes y servicios y de obra pública, así como coordinar su integración y dar seguimiento a su ejecución;

III. Realizar las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios autorizados y normar, dictaminar, vigilar y supervisar las que efectúen las unidades administrativas de la Secretaría, de acuerdo con la normatividad aplicable;

IV. Proponer lineamientos y normas para regular la asignación, utilización, conservación, aseguramiento, reparación, mantenimiento, rehabilitación y aprovechamiento de todos los bienes muebles e inmuebles al servicio de las unidades administrativas de la Secretaría, así como mantener regularizada la posesión de estos últimos;

V. Atender las necesidades de las unidades administrativas de la Secretaría en materia de espacio físico, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento de inmuebles;

VI. Realizar la contratación y supervisión de la construcción, reparación, mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles al servicio de las unidades administrativas de la Secretaría;

VII. Proponer las directrices generales en materia de asesoramiento y supervisión de obras de construcción, remodelación o remozamiento, en los aspectos técnicos y administrativos que competan a las unidades administrativas de la Secretaría, así como para los dictámenes correspondientes a licitaciones públicas;

VIII. Aplicar las normas y supervisar los sistemas de control de inventarios de bienes, y dictaminar
y vigilar su afectación, baja y destino final;

IX. Formular lineamientos para aprobación superior y proponer y operar sistemas electrónicos para el adecuado registro y sistematización de la información de adquisiciones, servicios y almacenes;

X. Vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al trámite de pago de las adquisiciones, arrendamientos, servicios en materia de bienes muebles, así como de obra pública y verificar el cumplimiento de las condiciones y garantías que deban otorgar los proveedores;

XI. Realizar y controlar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles al servicio de la Secretaría;

XII. Proponer y vigilar la aplicación de normas y lineamientos para la prestación de los servicios de administración y distribución de documentos oficiales y el sistema de archivo de la Secretaría,
de conformidad con las disposiciones del Archivo General de la Nación, así como determinar los esquemas para su control y supervisión;

XIII. Contratar y coordinar los servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles y sus contenidos,
así como de los demás bienes y valores de la Secretaría;

XIV. Controlar el uso, mantenimiento y reparación del equipo de transporte de la Secretaría, así como el consumo de los combustibles e insumos que requiera dicho equipo;

XV. Dirigir, controlar y evaluar los servicios generales de apoyo;

XVI. Participar en la formulación, instrumentación y evaluación de los programas sectoriales en materia de recursos materiales y servicios generales;

XVII. Supervisar el registro, control, asignación, resguardo, mantenimiento, baja y en su caso, sustitución o reemplazo del armamento y municiones de la Secretaría;

XVIII. Supervisar la ejecución de los programas del Sistema Nacional de Protección Civil en lo que corresponda a la Secretaría;

XIX. Emitir lineamientos sobre la ocupación y aprovechamiento de espacios para uso de unidades administrativas, así como verificar el óptimo aprovechamiento de los bienes a través de las unidades administrativas responsables;

XX. Determinar el destino final de bienes muebles a cargo de las Unidades Administrativas de la Secretaría, incluyendo la destrucción de los que previamente se haya determinado su baja por inutilidad o inaplicación en el servicio, conforme a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y las Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal, emitidas por la SECODAM; y

XXI. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Artículo 22.- Corresponden al titular de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el programa de desarrollo informático, de telecomunicaciones y de desarrollo tecnológico en general de la Secretaría;

II. Proponer políticas, normas y lineamientos en materia de cómputo, telecomunicaciones y equipamiento en general de dispositivos científicos y técnicos especializados para la operación de la Secretaría;

III. Apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría en el desarrollo, implantación y operación de los sistemas de información definidos en el programa institucional de

desarrollo informático y de telecomunicaciones;

IV. Realizar investigaciones, evaluaciones y estudios comparativos de programas y dispositivos de cómputo, de sistemas de telecomunicaciones y de equipos especializados, para adoptar las mejores soluciones disponibles en el mercado en las tareas de seguridad pública;

V. Participar en los procedimientos de contratación de bienes y servicios informáticos, de telecomunicaciones y de equipos especializados de la Secretaría;

VI. Fungir como Secretario Técnico del Comité de Informática y Telecomunicaciones de la Secretaría;

VII. Planear, establecer, coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática, telecomunicaciones y de equipamiento especializado, instalados en las unidades administrativas de la Secretaría;

VIII. Vigilar el cumplimiento de las garantías otorgadas por los proveedores de bienes y servicios informáticos y de telecomunicaciones adquiridos por la Secretaría;

IX. Mantener el control y resguardo de licencias de paquetes de programación para computadoras
de la Secretaría y aportar los criterios para la descripción de bienes en el inventario general de activos tecnológicos;

X. Proporcionar los servicios de transmisión de voz, información e imágenes que requieran las unidades administrativas de la Secretaría;

XI. Evaluar en forma permanente las tecnologías de punta en materia de informática y de telecomunicaciones en la Secretaría;

XII. Diseñar las políticas de seguridad en cuanto al manejo de la información y las telecomunicaciones así como coordinar los mecanismos de control de éstas;

XIII. Ser el enlace de la Secretaría con dependencias, entidades, instituciones y empresas tanto nacionales como internacionales relacionadas con la informática, las telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico en general;

XIV. Asesorar a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal en la actualización y adopción de tecnologías para la atención de responsabilidades en el campo de la seguridad pública;

XV. Vincularse con los centros de formación y capacitación para la actualización de contenidos y métodos para la enseñanza, derivada de las investigaciones y planes de desarrollo tecnológico a su cargo, y

XVI. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

Artículo 23.- Corresponden al titular de la Dirección General de Evaluación las siguientes atribuciones:

I. Verificar con base en el resultado de las evaluaciones que se practiquen, que el personal y miembros de la Secretaría observen el cumplimiento de las normas establecidas en los ordenamientos legales que rigen sus actuaciones, así como recomendar las medidas preventivas conducentes que eviten desviaciones;

II. Verificar que el personal adscrito a esta unidad administrativa se someta a un proceso externo de evaluación con la periodicidad requerida por la Secretaría;

III. Coordinar, desarrollar y supervisar el apoyo externo de evaluaciones especializadas, a fin de dar cumplimiento a las responsabilidades conferidas;

IV. Evaluar y coordinar el seguimiento de los asuntos que impliquen acciones de naturaleza interna, civil o penal e informar de sus resultados a la superioridad;

V. Establecer, organizar y coordinar el sistema de evaluación de la gestión en materia de seguridad pública, para dar seguimiento al cumplimiento de los planes, programas, metas y proyectos en la materia;

VI. Proponer, al Titular de la Unidad de Evaluación, lineamientos y políticas que optimicen las actividades competencia de la Secretaría y vigilar, en su caso, la aplicación de las recomendaciones y medidas correctivas;

VII. Instrumentar la operación de un sistema de información directiva, sobre la evaluación de la gestión de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría y dirigir la integración de informes consolidados de los resultados de dicha evaluación;

VIII. Establecer un sistema de información periódica para llevar a cabo el seguimiento y evaluación sobre la atención de las observaciones y recomendaciones que realicen las diversas instancias fiscalizadoras;

IX. Dirigir la elaboración, instrumentación y coordinación de la ejecución del Programa Anual para la Transparencia y el Combate a la Corrupción de la Secretaría;

X. Realizar la evaluación de las irregularidades administrativas detectadas y de aquellas que presumiblemente puedan ser causales de responsabilidad administrativa; disponiendo del apoyo técnico, logístico y de los recursos humanos y materiales necesarios, y

XI. Las demás que le señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

Artículo 24.- Corresponden al Titular de la Dirección General de Innovación y Calidad las siguientes atribuciones:

I. Diseñar, proponer e instrumentar las políticas y procedimientos para la innovación gubernamental de la Secretaría, así como de sus Órganos Administrativos Desconcentrados de conformidad con los lineamientos que al efecto emita el Ejecutivo Federal;

II. Implantar el Programa de Innovación de la Secretaría, así como establecer los procedimientos para la evaluación y control del mismo;

III. Dirigir las investigaciones, estudios y análisis para el mejoramiento de la gestión gubernamental sobre desarrollo administrativo integral en la Secretaría, así como de sus Órganos Administrativos Desconcentrados;

IV. Diseñar e instrumentar en coordinación con las áreas de la Oficialía Mayor el modelo de gestión gubernamental en materia de desarrollo administrativo integral orientado a incrementar la productividad de las áreas basado en la mejora de resultados, y

V. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

CAPÍTULO SEXTO

DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Artículo 25.- La Secretaría tendrá los siguientes Órganos Administrativos Desconcentrados:

I. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Policía Federal Preventiva;

III. Prevención y Readaptación Social, y

IV. Consejo de Menores.

Los Órganos Administrativos Desconcentrados se sujetarán a sus ordenamientos específicos y al presente Reglamento, siempre bajo la dirección y supervisión del Secretario o del funcionario que éste señale.

Los Órganos Administrativos Desconcentrados, en todo momento se sujetarán a las acciones de supervisión, evaluación e inspección que determine la Secretaría.

Artículo 26.- En los casos que así procedan, los titulares de los Órganos Administrativos Desconcentrados, acordarán con el Secretario, o por conducto del funcionario correspondiente, la resolución de los asuntos de su competencia.

DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 27.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría, cuyo objeto es apoyar la operación y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 28.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar, por conducto de su titular, las propuestas del contenido del Programa Nacional de Seguridad Pública para someterlas a la aprobación del Consejo;

II. Apoyar la ejecución, seguimiento y evaluación de los acuerdos y resoluciones del Consejo;

III. Proponer, al Consejo las políticas, lineamientos y acciones para el buen desempeño de las instituciones de seguridad pública del país;

IV. Coadyuvar en la elaboración y publicación de informes de actividades del Consejo;

V. Realizar estudios e investigaciones que permitan a la Secretaría, diseñar políticas, lineamientos
y acciones sobre seguridad pública;

VI. Auxiliar en la coordinación del servicio nacional de apoyo a la carrera de los servidores de las instituciones de seguridad pública;

VII. Apoyar en la formulación y modificación de programas de formación básica, de especialización, de promoción y de actualización en las modalidades preventivas, judicial, ministerial, pericial
y de custodia;

VIII. Auxiliar en las propuestas de constitución y funcionamiento de academias o institutos regionales de seguridad pública para la formación y capacitación del personal de seguridad pública de Estados y Municipios;

IX. Coadyuvar con las unidades competentes de la Secretaría en el diseño, desarrollo, instrumentación y administración de los sistemas de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyendo los instrumentos o procedimientos para salvaguardar la confidencialidad y restricción de la información;

X. Intervenir, en apoyo de la unidad responsable de la Secretaría, en la captación, captura, procesamiento y análisis de datos para los sistemas de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XI. Apoyar en la formulación de informes que deberán rendirse periódicamente al Consejo;

XII. Coadyuvar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en la instalación y funcionamiento de los consejos locales y regionales de seguridad pública;

XIII. Formular, en coordinación con las unidades responsables de la Secretaría, sugerencias a las autoridades competentes, para que las instituciones de seguridad pública de la Federación,
los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, desarrollen de manera eficaz sus funciones;

XIV. Promover, por conducto de las instituciones de seguridad pública, la realización de acciones conjuntas, conforme a las bases y reglas que emita el Consejo, sin menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes, regidas por el principio de confidencialidad;

XV. Apoyar en la planeación, instrumentación y ejecución de acciones policiacas en coordinación con los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y otras dependencias federales, en los términos de los artículos 5 y 17, fracción XIII, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XVI. Auxiliar en la coordinación de las conferencias nacionales de prevención y readaptación social, de procuración de justicia y de participación municipal;

XVII. Elaborar conjuntamente con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, propuestas de reformas al marco jurídico sobre seguridad pública para su presentación al Consejo;

XVIII. Promover, bajo los lineamientos de las unidades competentes de la Secretaría, el desarrollo de los sistemas de organización de servicios a la comunidad en materia de seguridad pública y participar en los comités de consulta y participación ciudadana;

XIX. Coadyuvar con la Secretaría de la Defensa Nacional en materia del Registro Nacional de Armamento y Equipo, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas;

XX. Auxiliar en el seguimiento y evaluación de los convenios y sus anexos técnicos que por acuerdo del Consejo se suscriban con las entidades federativas en materia de seguridad pública, así como de la operación de los fideicomisos que se constituyan en esa misma materia, y

XXI. Las que le confiere el Secretario y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

Artículo 29.- Corresponden al titular de Prevención y Readaptación Social las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar las sentencias penales dictadas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación en todo el territorio nacional;

II. Vigilar la ejecución de las medidas de tratamiento a adultos inimputables impuestas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación en todo el territorio nacional;

III. Aplicar la normatividad sobre readaptación social y ejecución de sentencias en los centros penitenciarios federales, y dictar las medidas conducentes para que sea aplicada a los sentenciados del fuero federal que cumplan condena en establecimientos dependientes de los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal;

IV. Promover la adopción de las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados por parte de las entidades federativas y del Distrito Federal, a fin de organizar y homologar el sistema penitenciario en el país;

V. Coordinar, con la participación que corresponda a las entidades federativas y al Distrito Federal, los programas de carácter nacional en materia de prevención, readaptación y reincorporación social;

VI. Participar en la elaboración y cumplimiento de los convenios de coordinación que se celebren con los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, en materia de prevención de la delincuencia, supervisión de los sustitutivos penales y de los beneficios que otorga la ley de la materia, para el traslado de reos del fuero común a establecimientos dependientes del Poder Ejecutivo Federal y para que los reos del fuero federal cumplan su sentencia en establecimientos dependientes de los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios;

VII. Orientar, con la participación que corresponda a los Estados y al Distrito Federal, los programas de trabajo y de producción penitenciarios que permitan al interno obtener ingresos para bastarse a sí mismo, colaborar al mantenimiento de la institución en la que se encuentra recluido,

realizar el pago de la sanción pecuniaria y de la reparación del daño, y contribuir a sufragar los gastos de su familia;

VIII. Establecer en coordinación con la Oficialía Mayor los criterios tipo para la selección, formación, capacitación, evaluación y promoción del personal que preste sus servicios en las instituciones de prevención y readaptación social, así como brindar el apoyo técnico a las autoridades penitenciarias estatales, del Distrito Federal y municipales en la programación e impartición de cursos de formación en la materia;

IX. Proporcionar antecedentes penales a las autoridades competentes y expedir, previa solicitud, constancias de los mismos, para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber legalmente previsto;

X. Emitir los criterios tipo para la organización, administración y operación de establecimientos para la detención de personas sujetas a proceso, la ejecución de sentencias y la aplicación de tratamientos de readaptación social que correspondan a las condiciones socioeconómicas
del lugar, a la seguridad de la sociedad y a las características biopsicosociales de los reos;

XI. Señalar, previa valoración de los sentenciados, el lugar donde deban cumplir sus penas, y vigilar:

a) Que todo reo participe en las actividades laborales, educativas y terapéuticas en los casos en que estas últimas formen parte del tratamiento;

b) Que a los reos se les practiquen con oportunidad estudios de diagnóstico, clasificación y los que muestren su esfuerzo y la evolución de su tratamiento, y

c) Que los reos tengan condiciones para mantener relaciones con su núcleo social primario;

XII. Adecuar las modalidades de aplicación de la sanción impuesta, considerando edad, sexo, salud
o constitución física del reo;

XIII. Otorgar a los sentenciados por delitos federales el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena, en los supuestos y con los requisitos fijados en las leyes aplicables;

XIV. Apercibir, amonestar, revocar o suspender, según el caso, la modalidad de ejecución de la pena otorgada, por incumplimiento de las condiciones que se hubieren determinado;

XV. Instrumentar lo procedente en los casos de conmutación de la pena, los sustitutivos de pena de prisión, condena condicional y reconocimiento de inocencia;

XVI. Adecuar, en los términos que previene la legislación penal, la sanción impuesta a los sentenciados que se encuentren a su disposición cuando por la entrada en vigor de una nueva ley, ésta resulte más favorable;

XVII. Establecer la coordinación necesaria con las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, para el mejor ejercicio de las atribuciones que le corresponden conforme a este Reglamento y a otras disposiciones legales aplicables;

XVIII. Vigilar que el régimen de cumplimiento de ejecución de la pena impuesta a los internos procesados o sentenciados sea conforme a la Ley, a la sentencia y con respeto a los derechos humanos;

XIX. Aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento externo o interno de menores infractores, de conformidad con la ley de la materia, tendientes a su adaptación social;

XX. Dar por extinguida la pena en los casos previstos por las leyes aplicables;

XXI. Integrar los expedientes de indultos para su trámite ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

XXII. Atender la procuración de justicia en el ámbito de los menores infractores y realizar la prevención general y especial a efecto de evitar la comisión de infracciones;

XXIII. Vigilar que los menores que se encuentren a disposición del Consejo de Menores cuenten en su expediente con el estudio de diagnóstico de personalidad, para que éste sea enviado a la autoridad jurisdiccional para la individualización de la medida;

XXIV. Vigilar que las medidas establecidas en el estudio del tratamiento del menor infractor se cumplan para facilitar el proceso de adaptación social;

XXV. Promover, ante la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, la homologación legislativa respecto de ejecución de medidas y beneficios a favor de adultos para aplicarse a menores infractores;

XXVI. Coordinar el Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo;

XXVII. Coordinar y dirigir las obras e instalaciones en Reclusorios Federales, normando especificaciones, elaborando proyectos, supervisando trabajos y capacitando para su mantenimiento y operación, y

XXVIII. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

DEL CONSEJO DE MENORES

Artículo 30.- Corresponden al Titular del Consejo de Menores las siguientes atribuciones:

I. Promover la instrumentación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en lo relativo a menores infractores, a fin de organizar y homologar el Sistema Nacional de Justicia de Menores;

II. Establecer la coordinación necesaria con las autoridades de los gobiernos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, para el mejor ejercicio de las atribuciones que le corresponden conforme a la ley de la materia, este Reglamento y con las disposiciones legales aplicables;

III. Operar y mantener actualizado el Registro Nacional sobre Menores Infractores;

IV. Elaborar y coordinar, con la participación que corresponda a las entidades federativas y al Distrito Federal, los programas de carácter nacional en materia de justicia de menores;

V. Resolver la situación jurídica de los menores de 18 años y mayores de 11 años, cuya conducta esté tipificada como delito por las leyes penales, y

VI. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Secretario.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Artículo 31.- El Contralor Interno, titular del Órgano Interno de Control, será designado en términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien, en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, designados en los mismos términos.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el artículo 26, fracciones III y IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Para el debido cumplimiento de las atribuciones a cargo del Contralor Interno y de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, los servidores públicos de la Secretaría estarán obligados a proporcionarles el auxilio que les sea requerido.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 32.- El Secretario será suplido en su ausencia por los funcionarios que se indican en el siguiente orden: Subsecretario de Seguridad Pública, el Oficial Mayor y en ausencia de éstos por el

Titular
de la Unidad.

Artículo 33.- Cuando la Subsecretaría se encuentre sin titular, sus funciones serán desempeñadas y las realizará el Oficial Mayor y a la falta de ambos el Titular de la Unidad.

Artículo 34.- Las ausencias del Subsecretario, del Oficial Mayor y del Titular de la Unidad serán suplidas por los Coordinadores Generales o Directores Generales que de ellos dependan, en los asuntos de sus respectivas competencias.

Artículo 35.- Las ausencias de los titulares de las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales, Órganos Administrativos Desconcentrados, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones, Subdirecciones
y Jefaturas de Departamento serán suplidas por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependan, en los asuntos de sus respectivas competencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 6 de febrero de 2001.

TERCERO.- La Oficialía Mayor de la Secretaría realizará las acciones necesarias para que los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía y a la Dirección General de Vinculación con Instituciones Policiales, sean transferidos a las unidades administrativas que correspondan, en los términos del presente ordenamiento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dos.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad Pública, **Alejandro Gertz Manero**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

QUINTA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o.
y 144 de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 4o., fracción XVII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el Servicio de Administración Tributaria resuelve expedir la:

QUINTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL

EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2002

Primero. Se realizan las siguientes modificaciones y adiciones a la Resolución que establece las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2002, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de mayo de 2002:

A. Se reforman las siguientes reglas:

- 1.5.2., primer párrafo.
- 2.7.2., numeral 2.
- 3.2.6., la tabla de su numeral 2.

B. Se adicionan las siguientes reglas:

- 2.7.2., con un último párrafo.
- 2.7.3., con un último párrafo.

Las modificaciones anteriores quedan como sigue:

1.5.2. Quienes tengan en su poder mercancías que, con anterioridad al 1o. de enero de 2001, hubieran ingresado a territorio nacional bajo el régimen de importación temporal, podrán optar por retornarlas virtualmente hasta el 31 de diciembre de 2002, siempre que no se trate de contenedores y cajas de trailers.

.....

2.7.2. .....

2. Una cámara fotográfica y una de videograbación y, en su caso, su fuente de poder; hasta 12 rollos de película virgen o video cassettes; material fotográfico impreso o filmado; un aparato de telefonía celular y un radiolocalizador; una máquina de escribir; un equipo de cómputo portátil nuevo o usado, de los denominados laptop, notebook, omnibook o similares; una copiadora o impresora portátiles, ya sean nuevas o usadas. En el caso de equipo de cómputo, copiadora e impresora, no se requerirá contar con el permiso previo de importación.

.....

Durante el periodo comprendido entre el 1o. de diciembre de 2002 y el 10 de enero de 2003, los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que arriben al país por vía terrestre y acrediten con la documentación migratoria correspondiente su residencia en el extranjero, podrán introducir las mercancías a que se refiere el segundo párrafo de esta regla, hasta por un valor de 300 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras.

2.7.3. .....

Durante el periodo comprendido entre el 1o. de diciembre de 2002 y el 10 de enero de 2003, los pasajeros podrán introducir las mercancías a que se refiere el primer párrafo de esta regla, hasta por un valor de 3,000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras. No se estará obligado a acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias cuando se trate de bienes de uso personal en cantidades no susceptibles de comercialización, siempre que no se trate de regulaciones en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional.

3.2.6. .....

Año y modelo del vehículo	**Importe de la garantía en dólares de los Estados Unidos de América**
1999 hasta 2003	400
.....	.....
.....	.....

.....

Transitorio

Unico. La presente Resolución entrará en vigor el día 1o. de diciembre de 2002.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 27 de noviembre de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, **Rubén Aguirre Pangburn**.- Rúbrica.

ACUERDO mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a Arrendadora Lease, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, por aumento de capital.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Dirección General de Seguros y Valores.- Dirección de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.- 366-I-B-4702.- 723.1/311846.

AUTORIZACIONES A ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CREDITO.- Se modifica la otorgada a esa sociedad por aumento de capital.

Arrendadora Lease, S.A. de C.V.
Organización Auxiliar del Crédito
Av. Matamoros No. 1285 Pte., 1er. piso
Col. Centro
27000, Torreón, Coah.

Esa sociedad con el objeto de acreditar el cumplimiento al numeral segundo del Acuerdo por el que se establecen los capitales mínimos pagados con que deberán contar los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero y casas de cambio, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 2 de mayo de 2001, remitió el primer testimonio de la escritura pública número 319 del 3 de junio de 2002, otorgada ante la fe del Notario Público número 8, licenciado Hugo García Sánchez, con ejercicio en Torreón, Coah., misma que contiene la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 3 de junio de 2002, donde acordaron aumentar su capital fijo sin derecho a retiro, totalmente suscrito y pagado de $21'690,000.00 (veintiún millones seiscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.) a $25'710,000.00 (veinticinco millones setecientos diez mil pesos 00/100 M.N.), modificando al efecto la cláusula séptima de sus estatutos sociales, para estar en posibilidad de apegarse a la opción contenida en el punto cuarto del mencionado Acuerdo de capitales y con ello cumplir con el capital mínimo establecido en el mismo, por lo que esta Secretaría con base en el artículo 6o. fracción XXII de su Reglamento Interior y con fundamento en el artículo 5o. de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ha resuelto dictar el siguiente:

ACUERDO

Se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada el 6 de septiembre de 1991, modificada el 30 de septiembre de 1996, 30 de diciembre de 1998, 17 de abril de 2000 y 11 de abril de 2001, que faculta a Arrendadora Lease, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para llevar a cabo las operaciones a que se refiere el artículo 24 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO SEGUNDO.- .....

I.- .....

II.- El capital social es variable, el capital fijo sin derecho a retiro, totalmente suscrito y pagado es de $25'710,000.00 (veinticinco millones setecientos diez mil pesos 00/100 M.N.).

III.- .....

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 30 de julio de 2002.- En suplencia por ausencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, y de conformidad con el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, **Agustín Guillermo Carstens Carstens**.- Rúbrica.

(R.- 171631)

CIRCULAR F-13.5 mediante la cual se da a conocer a las instituciones de fianzas, el Programa de Autocorrección.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

CIRCULAR F-13.5

Asunto: Programa de autocorrección.- Se dan a conocer disposiciones generales.

A las instituciones de fianzas.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 fracción VIII Bis-3, 15 Bis-1 fracción IV y 104 Bis-2 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, esas instituciones deberán someter a la aprobación de esta Comisión un programa de autocorrección, cuando la propia institución como parte de la realización de sus actividades o el Contralor Normativo como resultado de las funciones que tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en dicha ley y demás disposiciones aplicables, señalando en dicho Programa de Autocorrección las irregularidades o incumplimientos cometidos y las disposiciones que se consideren contravenidas, con apego a las siguientes disposiciones generales:

PRIMERA.- El Programa de Autocorrección, así como las correcciones y modificaciones al mismo, deberán presentarse ante esta Comisión, mediante escrito de solicitud firmado por el Director General de la institución. Dicho programa deberá estar acompañado de la opinión del Contralor Normativo, la cual deberá contener la siguiente leyenda:

"El presente programa de autocorrección cumple con los requisitos establecidos en el artículo 104 Bis-2 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas."

SEGUNDA.- Esas instituciones deberán presentar ante esta Comisión escrito firmado por el Secretario del Consejo de Administración, en el que haga constar que el Contralor Normativo presentó al Consejo de Administración el Programa de Autocorrección de que se trate, dentro de los 30 días naturales posteriores
a la celebración de la sesión correspondiente.

TERCERA.- Los informes del Contralor Normativo sobre el avance de la instrumentación de los programas de autocorrección que se encuentren vigentes, deberán presentarse ante esta Comisión mediante escrito firmado por dicho Contralor Normativo, dentro de los primeros 20 días naturales siguientes al cierre de cada mes, acompañado de los documentos que, en su caso, soporten el avance reportado. Lo anterior, sin perjuicio de que esta Comisión pueda establecer una periodicidad distinta considerando el calendario y las acciones del programa.

En caso de que no se subsanen las irregularidades o incumplimientos objeto del Programa de Autocorrección en el plazo previsto, el Contralor Normativo deberá presentar el informe correspondiente a esta Comisión, señalando las causas por las que a su juicio, se incumplió el programa.

El Contralor Normativo deberá presentar el informe de avance de los programas de autocorrección al Director General de la institución cuando menos con la periodicidad señalada en la presente disposición, y al Consejo de Administración en las sesiones del mismo.

CUARTA.- En caso de ausencia temporal del Contralor Normativo, la documentación correspondiente deberá ser firmada por la persona que lo sustituya conforme a las bases previstas en los manuales internos de la institución.

TRANSITORIA

Unica.- La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 68 fracción VI de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 108 fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente, la facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 4 de enero de 1999.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 25 de noviembre de 2002.- El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, **Manuel S. Aguilera Verduzco**.- Rúbrica.

CIRCULAR S-20.10 mediante la cual se da a conocer a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, el Programa de Autocorrección.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

CIRCULAR S-20.10

Asunto: Programa de Autocorrección.- Se dan a conocer disposiciones generales.

A las instituciones y sociedades
mutualistas de seguros.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 fracción VII Bis-3, 29 Bis-1 fracción IV y 74 Bis-2 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, esas instituciones y sociedades deberán someter a la aprobación de esta Comisión un Programa de Autocorrección cuando la propia institución o sociedad como parte de la realización de sus actividades o el Contralor Normativo como resultado de las funciones que tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en dicha ley y demás disposiciones aplicables, señalando en dicho Programa de Autocorrección las irregularidades o incumplimientos cometidos y las disposiciones que se consideren contravenidas, con apego a las siguientes disposiciones generales:

PRIMERA.- El Programa de Autocorrección, así como las correcciones y modificaciones al mismo, deberán presentarse ante esta Comisión, mediante escrito de solicitud firmado por el Director General de la institución o sociedad. Dicho programa deberá estar acompañado de la opinión del Contralor Normativo, la cual deberá contener la siguiente leyenda:

"El presente programa de autocorrección cumple con los requisitos establecidos en el artículo 74 Bis-2 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros."

SEGUNDA.- Esas instituciones o sociedades deberán presentar ante esta Comisión escrito firmado por el Secretario del Consejo de Administración, en el que haga constar que el Contralor Normativo presentó al Consejo de Administración el Programa de Autocorrección de que se trate, dentro de los 30 días naturales posteriores a la celebración de la sesión correspondiente.

TERCERA.- Los informes del Contralor Normativo sobre el avance de la instrumentación de los programas de autocorrección que se encuentren vigentes, deberán presentarse ante esta Comisión mediante escrito firmado por dicho Contralor Normativo, dentro de los primeros 20 días naturales siguientes al cierre de cada mes, acompañado de los documentos que, en su caso, soporten el avance reportado. Lo anterior, sin perjuicio de que esta Comisión pueda establecer una periodicidad distinta considerando el calendario y las acciones del programa.

En caso de que no se subsanen las irregularidades o incumplimientos objeto del Programa de Autocorrección en el plazo previsto, el Contralor Normativo deberá presentar el informe correspondiente a esta Comisión, señalando las causas por las que a su juicio, se incumplió el programa.

El Contralor Normativo deberá presentar el informe de avance de los programas de autocorrección al Director General de la institución o sociedad cuando menos con la periodicidad señalada en la presente disposición, y al Consejo de Administración en las sesiones del mismo.

CUARTA.- En caso de ausencia temporal del Contralor Normativo, la documentación correspondiente deberá ser firmada por la persona que lo sustituya conforme a las bases previstas en los manuales internos de la institución o sociedad.

TRANSITORIA

Unica.- La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 108 fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente, la facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 4 de enero de 1999.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 25 de noviembre de 2002.- El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, **Manuel S. Aguilera Verduzco**.- Rúbrica.

CIRCULAR CONSAR 16-2, Reglas generales que establecen los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro respecto a los gastos que genere el Sistema de Emisión, Cobranza y Control de Aportaciones que deberán cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

CIRCULAR CONSAR 16-2

REGLAS GENERALES QUE ESTABLECEN LOS TERMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO RESPECTO A LOS GASTOS QUE GENERE EL SISTEMA DE EMISION, COBRANZA Y CONTROL DE APORTACIONES QUE DEBERAN CUBRIR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en su sesión de fecha 23 de octubre de 2002, con fundamento en los artículos 5o. fracción II, 8o. fracción VI de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Circular CONSAR 16-1 publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día 30 de junio de 1997, se establecieron las reglas que deberán observar las Administradoras de Fondos para el Retiro respecto de los gastos que genere el Sistema de Emisión, Cobranza y Control de Aportaciones que deberán cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social;

Que con fecha 20 de diciembre de 2001 fue publicado, en el **Diario Oficial de la Federación**, el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, entre las que destaca la modificación al artículo 183 del referido ordenamiento legal, el cual prevé que los gastos que genere el sistema de emisión, cobranza y control de aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores, serán cubiertos al Instituto Mexicano del Seguro Social por las Administradoras por cada dispersión de recursos, en lugar de por cuenta individual, y

Que resulta necesario adecuar el mecanismo de cobro y facturación que lleve a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social para facilitar su operación, ha tenido a bien expedir las siguientes:

REGLAS GENERALES QUE ESTABLECEN LOS TERMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO RESPECTO A LOS GASTOS QUE GENERE EL SISTEMA DE EMISION, COBRANZA Y CONTROL DE APORTACIONES QUE DEBERAN CUBRIR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CAPITULO I

Disposiciones Generales

PRIMERA.- Las presentes reglas tienen por objeto establecer los lineamientos, términos y condiciones a los que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro, respecto a los gastos que se generen por la emisión, cobranza y control de aportaciones que deberán cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEGUNDA.- Para los efectos de estas reglas, se entenderá por:

I. Ley, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro;

II. Reglamento, el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro;

III. Comisión, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;

IV. Administradoras, las Administradoras de Fondos para el Retiro;

V. Empresas Operadoras, las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, y

VI. Instituto, al Instituto Mexicano del Seguro Social.

TERCERA.- Los gastos generados por el sistema de emisión, cobranza y control a que se refieren las presentes reglas, serán cubiertos por las Administradoras mediante el pago de una comisión equivalente a dos pesos con ochenta y dos centavos por dispersión recibida en cada una de las cuentas individuales por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

La comisión referida en el párrafo anterior, deberá ser abonada por las Administradoras en la cuenta que para tal efecto designe el Instituto, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de la entrega de la factura. En caso de incumplimiento en el plazo para pago de la comisión, las Administradoras deberán cubrir al Instituto la actualización y recargos moratorios correspondientes en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

CUARTA.- El Instituto generará y entregará la factura correspondiente a los servicios de emisión, cobranza y control de cuotas y aportaciones, realizados a las Administradoras, dentro de los primeros siete días hábiles del segundo mes posterior a aquel en que se llevaron a cabo los procesos de dispersión de cuotas y aportaciones, previa verificación de la consolidación de las cifras derivadas de la individualización y distribución de los recursos con alguna Empresa Operadora, de tal forma que los servicios correspondan a los que se tienen registrados en dicha empresa.

Las Empresas Operadoras deberán conciliar con las Administradoras el número de dispersiones que correspondan a las cuentas individuales, a efecto de que dichas empresas proporcionen al Instituto el número de dispersiones sobre las cuales se deberá facturar a las Administradoras.

QUINTA.- En caso de que las Administradoras consideren que hay diferencias entre lo real y lo facturado, comunicarán tal situación al Instituto para que conjuntamente por conducto de la Tesorería General de éste y la Empresa Operadora, revisen la factura original y, en su caso, el Instituto proceda a sustituirla. Tratándose de pagos en exceso, el Instituto llevará a cabo la compensación correspondiente en el siguiente pago, situación que quedará asentada en la factura que se emita, y en caso de cantidades faltantes, el Instituto deberá realizar el cargo que corresponda dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la nueva factura.

SEXTA.- Con el objeto de que el Instituto cuente con la información necesaria para poder emitir las facturas a que se refiere la regla cuarta de las presentes reglas, las Empresas Operadoras deberán transferir la información correspondiente a los procesos de dispersión a dicho Instituto, a más tardar la tercer semana del mes inmediato siguiente a aquel en que se haya generado dicha información.

SEPTIMA.- Las cuotas y aportaciones que hubieren sido objeto de aclaración, así como los intereses generados durante el tiempo en que las cuotas y aportaciones permanezcan en la Cuenta Concentradora, de conformidad con lo previsto en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión, y respecto de las cuales no se hubiere aplicado el cobro de comisión alguna por las Administradoras, no deberán ser consideradas en el pago de la comisión prevista en las presentes reglas, hasta en tanto no se realice su dispersión hacia las Administradoras.

OCTAVA.- Las Administradoras deberán pagar la comisión establecida en las presentes reglas tanto por las dispersiones a las cuentas individuales de los trabajadores que se hayan registrado ante las mismas, así como por la de las cuentas de los trabajadores que hayan sido asignados a dichas entidades financieras.

TRANSITORIAS

PRIMERA.- La presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDA.- Se abroga la Circular CONSAR 16-1, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día 30 de junio de 1997.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de diciembre de 2002.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, **Vicente Corta**.- Rúbrica.

DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2003 en los que las administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en los artículos 12 fracciones I, II, VIII y XVI, 90 fracción XI y 94 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 29 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes:

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL QUE SEÑALAN LOS DIAS DEL AÑO 2003 EN LOS QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO Y EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, DEBERAN CERRAR SUS PUERTAS Y SUSPENDER OPERACIONES

PRIMERA.- Las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, establecidas en

cualquier parte de la República Mexicana, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones, además de los días sábados y domingos, los siguientes días: 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 17 y 18 de abril, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 12 y 25 de diciembre del año 2003.

SEGUNDA.- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, suspenderá sus labores, además de los días sábados y domingos, los días 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 17 y 18 de abril, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, así como el día 25 de diciembre del año 2003.

TERCERA.- Los días señalados en las disposiciones primera y segunda que anteceden, se consideran inhábiles para la interposición y resolución de recursos administrativos a que se refiere el artículo 102 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como para el cómputo de los plazos de entrega de información requerida en relación con dichos procedimientos que se sigan ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y demás requerimientos de información que realice esta autoridad.

CUARTA.- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro podrá ordenar a las referidas entidades cerrar sus puertas y suspender operaciones en días distintos a los señalados en la disposición primera anterior, cuando así lo considere necesario.

Con fundamento en los artículos 90 fracciones I y XI de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, podrá ordenar a las referidas entidades abrir sus puertas y continuar operaciones en los días señalados en la disposición primera, cuando así lo considere necesario, para efectos de ejercer sus facultades de inspección, mediante la realización de visitas de inspección.

QUINTA.- Las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, podrán presentar ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro un proyecto de calendario de días en que pretendan cerrar sus puertas y suspender operaciones, adicionales a los previstos en la disposición primera, a efecto de obtener, en su caso, la autorización correspondiente siempre que así lo justifiquen. Los días autorizados conforme a esta disposición se considerarán hábiles para todos los efectos legales.

SEXTA.- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro resolverá las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de las presentes disposiciones, así como los casos de excepción que deban reconocerse y dictará las medidas que para el mismo fin estime pertinentes.

SEPTIMA.- Se considerarán como días inhábiles para las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, adicionales a los previstos en la disposición primera anterior, aquellos en que el Sistema Financiero deba suspender operaciones por así establecerlo alguna otra autoridad competente.

Se considerarán como días hábiles aquellos que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro habilite para la práctica de visitas de inspección, con independencia de que el Sistema Financiero deba suspender operaciones por así establecerlo alguna otra autoridad competente.

TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las presentes Disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2003.

SEGUNDA.- Se otorga a las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, un término que vencerá el 31 de enero del año 2003, para que presenten a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro el proyecto de calendario a que se refiere la disposición quinta, en el cual podrán incluir los días que sus contratos o condiciones generales de trabajo señalen como no laborales, al igual que los días en que habitualmente no se labora de acuerdo a sus prácticas y costumbres, que no estén contemplados en la disposición primera.

Con fundamento en el artículo 12 fracciones II y VIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de diciembre de 2002.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, **Vicente Corta**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE ENERGIA

RESOLUCION por la que se modifica la diversa número RES/216/2001 para habilitar días y se da a conocer el calendario en que suspenderán labores, así como el horario de atención al público para el año 2003 de la Comisión Reguladora de Energía.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora
de Energía.

RESOLUCION No. RES/254/2002

RESOLUCION POR LA QUE SE MODIFICA LA DIVERSA No. RES/216/2001 PARA HABILITAR DIAS Y SE DA A CONOCER EL CALENDARIO EN QUE SUSPENDERAN LABORES, ASI COMO EL HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO PARA EL AÑO 2003 DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA.

RESULTANDO

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las autoridades deben publicar en el **Diario Oficial de la Federación** el acuerdo en que se establezcan los días en que tengan vacaciones generales, así como aquellos en que se suspendan las labores a fin de dar seguridad jurídica a las personas que realicen trámites que resulten de su competencia;

SEGUNDO. Que de acuerdo al cuarto párrafo del artículo mencionado en el resultando inmediato anterior, la autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días inhábiles, y

TERCERO. Que conforme a los artículos 28 y 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las dependencias del gobierno federal harán del conocimiento público, mediante publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, los días que no se consideren hábiles, así como los horarios en que se efectuarán las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el 10 de diciembre de 2001 esta Comisión Reguladora de Energía publicó en el **Diario Oficial de la Federación** la Resolución número RES/216/2001 mediante la cual se estableció el calendario anual de actividades, que señala como no laborables, entre otros, los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre de dos mil dos;

SEGUNDO. Que con el propósito de realizar adecuadamente las funciones que la Ley de la Comisión Reguladora de Energía le encomienda a este órgano, es necesario habilitar el periodo comprendido entre el 17 y el 20 de diciembre de dos mil dos, y

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 fracciones XIV y XXII y 4 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y 1, 4, 28 y 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta Comisión Reguladora de Energía:

RESUELVE

PRIMERO. Se habilitan los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre de dos mil dos, señalados como días no laborables por esta Comisión Reguladora de Energía en su calendario anual publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 10 de diciembre de 2001.

SEGUNDO. Se habilitan los días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de dos mil dos, únicamente para el efecto de que esta Comisión Reguladora de Energía, a través de la Dirección General de Administración continúe, en su caso, la tramitación de los procedimientos de licitación, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

TERCERO. El calendario de actividades de la Comisión Reguladora de Energía, para el año dos mil tres no comprenderá como días hábiles a los siguientes: los sábados, los domingos, del 1 al 7 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, así como los siguientes periodos vacacionales: del 14 al 18 de abril; del 21 al 25 de julio y del 19 al 31 de diciembre.

CUARTO. El horario de atención al público en la Comisión Reguladora de Energía para el año 2003 será de 9:00 a 18:00 horas.

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEXTO. Inscríbase la presente Resolución en el registro a que se refiere la fracción XVI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, bajo el número RES/254/2002.

México, D.F., a 21 de noviembre de 2002.- El Presidente, **Dionisio Pérez-Jácome**.- Rúbrica.- Los Comisionados: **Rubén Flores**, **Raúl Monteforte** y **Raúl Nocedal**.- Rúbricas.

SECRETARIA DE ECONOMIA

INSUBSISTENCIA de declaratoria de libertad de terreno número I-24/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIA DE LIBERTAD DE TERRENO I-24/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se deja insubsistente la declaratoria de libertad contenida en la "Relación de Declaratorias de Libertad de Terreno 16/2002", publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002, cuyos datos se precisan a continuación:

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO
189407	LA PAZ, B.C.S.	321.4/5861	CAOPAS	1163	MULEGE	B.C.S.

Lo anterior, en virtud de que el título 189407 antes citado, fue sustituido legalmente por el título de concesión de exploración 202714 y a su vez éste por el título de concesión de explotación 212137, actualmente vigente.

México, D.F., a 25 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.- Rúbrica.

INSUBSISTENCIA de declaratoria de libertad de terreno número I-025/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIA DE LIBERTAD DE TERRENO I-025/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se dejan insubsistentes las declaratorias de libertad contenidas en la relación de declaratoria de libertad de terreno número 16/2002, la cual fue publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002. Esta insubsistencia se efectúa en virtud de que el acuerdo de cancelación dictado por la Dirección de Revisión de Obligaciones, por no haber acreditado el concesionario el pago de derechos mineros, ha sido revocado, toda vez que se ha acreditado ante dicha Dirección el pago de los derechos requerido.

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO

202839	CHIHUAHUA, CHIH.	23338	LA KEILA	85	AHUMADA	CHIH.
192914	CHIHUAHUA, CHIH.	22232	EL PARAJE	10	ALDAMA	CHIH.
172181	CHIHUAHUA, CHIH.	321.1/9-83	ASTRID	34.8876	ALDAMA	CHIH.
188240	DURANGO, DGO.	19981	EL PORVENIR	525	CANELAS	DGO.
166003	EX-TORREON, COAH.	14507	LA VICTORIA	5.729	CUENCAME	DGO.
171982	EX-TORREON, COAH.	2226	SAN MATEO	4.6134	CUENCAME	DGO.
194007	DURANGO, DGO.	321.1/9-626	SANTO NIÑO	10.3354	PUEBLO NUEVO	DGO.
194319	DURANGO, DGO.	2/1.2/796	2 HERMANOS	120	PUEBLO NUEVO	DGO.
194784	DURANGO, DGO.	321.1/2-619	JUAN MANUEL TRES	334.5201	SAN DIMAS	DGO.
190946	DURANGO, DGO.	20157	TEMEHUAYA	900	SAN DIMAS	DGO.
185436	DURANGO, DGO.	20054	MARIA FERNANDA	171.7529	TOPIA	DGO.
182286	DURANGO, DGO.	321.42/1233	UNIFICACION SANTA EDUWIGES	33.0311	TOPIA	DGO.
189837	DURANGO, DGO.	321.1/9-779	LA ABUNDANCIA SIETE	5.7482	TOPIA	DGO.
196116	DURANGO, DGO.	321.42/1234	UNIFICACION LA MARQUESA	24.2042	TOPIA	DGO.
197871	EX-MEXICO, D.F.	7498	CERRO PELON	56	TAXCO DE ALARCON	GRO.
204216	GUADALAJARA, JAL.	14423	AURELIO I	2400	CUQUIO	JAL.
208518	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	19148	EL ARENAL	100	SAN LUIS POTOSI	S.L.P.
210568	CULIACAN, SIN.	10721	LA MORITA	156	CULIACAN	SIN.
206286	CULIACAN, SIN.	9572	EL DUENDE	50	CONCORDIA	SIN.
175653	CULIACAN, SIN.	321.1/2-142	SANTA TERESITA	20	CONCORDIA	SIN.
207056	EX-CUMPAS, SON.	11271	PURICA FRACC.I	7630.1303	NACOZARI DE GARCIA	SON.
199010	HERMOSILLO, SON.	321.1/4-721	LA FARAMALLA	20	LA COLORADA	SON.
205558	HERMOSILLO, SON.	16634	SAN CARLOS	287.5789	SAN JAVIER	SON.
204870	EX-SOMBRERETE, ZAC.	8/1.3/672	EL LUCERO	25	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	ZAC.
201029	AGUASCALIENTES, AGS.	8/1.3/497	SAN ANDRES	70	PINOS	ZAC.

México, D.F., a 25 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.- Rúbrica.

INSUBSISTENCIA de declaratoria de libertad de terreno número I-26/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIA DE LIBERTAD DE TERRENO I-26/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se deja insubsistente la declaratoria de libertad contenida en la "Relación de Declaratorias de Libertad de Terreno 16/2002", publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002, cuyos datos se precisan a continuación:

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO
189603	CULIACAN, SIN.	321.1/2-516	AMPLIACION EL ESCANDALO	39	SAN IGNACIO	SIN.

Lo anterior, en virtud de que el título 189603 antes citado, fue declarado nulo mediante oficio 4188 de fecha 31 de mayo de 2002, por haberse titulado sobre terreno no libre, ocupado por los lotes mineros
EL TAMBOR 95/3284 y LA TAMBORA 95/4705, con mejores derechos.

México, D.F., a 25 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.-Rúbrica.

INSUBSISTENCIA de declaratoria de libertad de terreno número I-27/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIA DE LIBERTAD DE TERRENO I-27/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se deja insubsistente la declaratoria de libertad contenida en la "Relación de Declaratorias de Libertad de Terreno 17/2002", publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002, cuyos datos se precisan a continuación:

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO
215581	CHIHUAHUA, CHIH.	1/2.4/01233	REDUCCION CAROLINA	5119.3	BATOPILAS	CHIH.

Lo anterior, en virtud de que mediante oficio 610.-8102 de fecha 21 de octubre de 2002 fue revocada la cancelación por desistimiento del lote antes citado.

México, D.F., a 25 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.-Rúbrica.

INSUBSISTENCIA de declaratoria de libertad de terreno número I-28/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIA DE LIBERTAD DE TERRENO I-28/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera, y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se deja insubsistente la declaratoria de libertad contenida en la "Relación de Declaratorias de Libertad de Terreno 16/2002", publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002, cuyos datos se precisan a continuación:

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO
190373	DURANGO, DGO.	20893	11a. AMPLIACION LA CIENEGA	5075	SANTIAGO PAPASQUIARO	DGO.

Lo anterior, en virtud de que mediante oficio 610.-401 de fecha 29 de enero de 1997 fue declarada la nulidad del título antes citado, expidiéndose en sustitución de éste el título 212392, actualmente vigente.

México, D.F., a 25 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.-Rúbrica.

INSUBSISTENCIA de declaratoria de libertad de terreno número I-29/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIA DE LIBERTAD DE TERRENO I-29/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se deja insubsistente la declaratoria de libertad contenida en la "Relación de Declaratorias de Libertad de Terreno 16/2002", publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002, cuyos datos se precisan a continuación:

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO
200683	HERMOSILLO, SON.	17531	BARB	2832	LA COLORADA	SON.

Lo anterior, en virtud de que la publicación de la declaratoria de libertad de terreno del citado lote ya fue efectuada previamente en la relación de declaratorias 43/2001 en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 14 de noviembre de 2001.

México, D.F., a 25 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.- Rúbrica.

INSUBSISTENCIA de declaratoria de libertad de terreno número I-30/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIA DE LIBERTAD DE TERRENO I-30/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se deja insubsistente la declaratoria de libertad contenida en la "Relación de Declaratorias de Libertad de Terreno 16/2002", publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002, cuyos datos se precisan a continuación:

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO
188060	EX - SOMBRERETE, ZAC.	9332	PROVIDENCIA	55.5997	CHALCHIHUITES	ZAC.

En virtud de que la cancelación de la citada concesión, dictada en oficio 610.-7325 de fecha 11 de mayo de 2001, fue revocada mediante oficio 610.-18612 del 22 de noviembre de 2001 enviado por esta Dirección General de Minas.

México, D.F., a 27 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.- Rúbrica.

INSUBSISTENCIA de declaratorias de libertad de terreno número I-031/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIAS DE LIBERTAD DE TERRENO I-031/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se dejan insubsistentes las declaratorias de libertad contenidas en la relación de declaratorias de libertad de terreno número 16/2002, la cual fue publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002. Esta insubsistencia se efectúa en virtud de que el acuerdo de cancelación dictado por la Dirección de Revisión de Obligaciones, por no haber acreditado el concesionario el pago de derechos mineros, ha sido revocado, toda vez que se ha acreditado ante dicha Dirección el pago de los derechos requeridos.

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO
198673	CHIHUAHUA, CHIH.	22699	LEO	403	AHUMADA	CHIH.
210521	CHIHUAHUA, CHIH.	24018	SAN ANDRES	23949.0149	CHIHUAHUA	CHIH.
198862	MORELIA, MICH.	6810	EL INDIO	100	JUAREZ	MICH.
202703	MONTERREY, N.L.	14122	MONICA I	93.7508	VICTORIA	TAMPS.
152366	EX - SOMBRERETE, ZAC.	6416	EL TRIANGULO	18	JIMENEZ DEL TEUL	ZAC.

México, D.F., a 27 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.- Rúbrica.

INSUBSISTENCIA de declaratoria de libertad de terreno número I-32/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIA DE LIBERTAD DE TERRENO I-32/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se deja insubsistente la declaratoria de libertad

contenida en la "Relación de Declaratorias de Libertad de Terreno 16/2002", publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002, cuyos datos se precisan a continuación:

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO
195741	LA PAZ, B.C.S.	4/1.2/950	LA TERQUEDAD	480	LA PAZ	B.C.S.

En virtud de que el citado título de concesión minera de exploración fue sustituido legalmente por el título de concesión minera de explotación número 211414, actualmente vigente.

México, D.F., a 27 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.- Rúbrica.

INSUBSISTENCIA de declaratoria de libertad de terreno número I-33/2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

INSUBSISTENCIA DE DECLARATORIA DE LIBERTAD DE TERRENO I-33/2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley Minera y 6o. párrafo final de su Reglamento, y de acuerdo con la atribución conferida por el artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se deja insubsistente la declaratoria de libertad contenida en la "Relación de Declaratorias de Libertad de Terreno 16/2002", publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de noviembre de 2002, cuyos datos se precisan a continuación:

TITULO	AGENCIA	EXPEDIENTE	NOMBRE DEL LOTE	SUPERFICIE (HAS.)	MUNICIPIO	ESTADO
205200	HERMOSILLO, SON.	19168	CARMEN	10000	BACANORA	SON.

En virtud de que el desistimiento de la concesión minera, presentado por el titular del citado lote, fue dejado sin efecto mediante oficio 610.-3965 de fecha 29 de marzo de 2001, enviado por la Dirección de Revisión de Obligaciones de esta Dirección General de Minas.

México, D.F., a 27 de noviembre de 2002.- El Director General de Minas, **Luis Raúl Escudero Chávez**.- Rúbrica.

AVISO sobre la presentación de solicitudes de examen para determinar si la supresión de cuotas compensatorias daría lugar a la continuación o repetición de la discriminación de precios y del daño.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

AVISO SOBRE LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE EXAMEN PARA DETERMINAR SI LA SUPRESION DE CUOTAS COMPENSATORIAS DARIA LUGAR A LA CONTINUACION O REPETICION DE LA DISCRIMINACION DE PRECIOS Y DEL DAÑO.

1.- Con fundamento en los artículos 70 de la Ley de Comercio Exterior, 109 de su Reglamento y 11.3 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, se comunica que los productores nacionales de las mercancías que se indican a continuación, solicitaron con una antelación prudencial al 23 y 30 de diciembre de 2002,

respectivamente, un examen para determinar si la supresión de las cuotas compensatorias daría lugar a la continuación o repetición la discriminación de precios y del daño:

PRODUCTO	FRACCION ARANCELARIA	PAIS DE ORIGEN	RESOLUCION DEFINITIVA PUBLICADA EN D.O.F.
Peróxido de hidrógeno	2847.00.01	Estados Unidos de América	23 de diciembre de 1993
Calzado y sus partes	De las partidas 64.01, 64.02, 64.03, 64.04 y 64.05	República Popular China	30 de diciembre de 1993

2.- La procedencia de dichas solicitudes está siendo analizada por la Secretaría de Economía en los términos de la legislación de la materia, por lo que próximamente se publicarán en este órgano informativo las resoluciones de inicio correspondientes o, en su caso, las resoluciones por la que se declare la eliminación de las cuotas compensatorias respectivas.

México, D.F., a 28 de noviembre de 2002.- El Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, **Alejandro N. Gómez Strozzi**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

AVISO por el que se modifica el primer periodo de veda para la captura de lisa (*Mugil cephalus*) y liseta o lebrancha (*Mugil curema*), en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México correspondientes al litoral del Estado de Tamaulipas y en la zona norte del Estado de Veracruz, en la zona delimitada desde el Río Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco, hasta el Río Pánuco, establecida en el artículo segundo fracción XIV del diverso publicado el 16 de marzo de 1994.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PERIODO DE VEDA PARA LA CAPTURA DE LISA (*Mugil cephalus*) Y LISETA O LEBRANCHA (*Mugil curema*), EN LAS AGUAS DE JURISDICCION FEDERAL DEL GOLFO DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL LITORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA ZONA DELIMITADA DESDE EL RIO TUXPAN Y LA LAGUNA DE TAMPAMACHOCO, HASTA EL RIO PANUCO, ESTABLECIDA EN EL ARTICULO SEGUNDO FRACCION XIV DEL DIVERSO PUBLICADO EL 16 DE MARZO DE 1994.

JAVIER BERNARDO USABIAGA ARROYO, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o. y 3o. fracción VI de la Ley de Pesca; 24 y 25 de su Reglamento y con base en lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993, Que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas, en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 4 de marzo de 1994, y

CONSIDERANDO

Que en el **Diario Oficial de la Federación** del 16 de marzo de 1994 se publicó el Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en el artículo segundo fracción XIV del instrumento legal señalado en el considerando anterior, se establecieron las épocas y zonas de veda para la captura de lisa (*Mugil cephalus*) y liseta o lebrancha (*Mugil curema*), en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, correspondientes al litoral del Estado de Tamaulipas y en la zona norte del Estado de Veracruz, en la zona delimitada desde el Río Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco, hasta el Río Pánuco inclusive, durante los periodos comprendidos del 1 al 31 de diciembre y del 1 al 28 de febrero de cada año.

Que el Instituto Nacional de la Pesca a través del Centro Regional de Investigación Pesquera en Tampico, Tamaulipas, ha reportado que el volumen de captura de lisa en el periodo enero-octubre se encuentra un 49% por debajo de la captura promedio registrada en el mismo periodo durante los últimos 12 años, estimándose una captura 12% por debajo del promedio para el periodo enero-noviembre, lo que en consecuencia produciría un remanente de reclutas con posibilidad de ser aprovechadas, en los primeros días de diciembre sin poner en riesgo la población del recurso.

Que las mismas investigaciones indican que evaluando la vulnerabilidad al arte de pesca se observa que la población comercial se encuentra de la edad de tres años en adelante que corresponden a organismos completamente maduros que ya han pasado por un periodo reproductivo y que los análisis de la estructura de la captura en número de individuos en los últimos dos años presenta una mayor distribución hacia organismos de mayor edad (de seis a siete años) en comparación con los años anteriores, lo cual asegura una mayor disponibilidad de biomasa remanente para asegurar su reproducción y permitir la sustentabilidad del recurso.

Que en atención a las referidas investigaciones, el Instituto Nacional de la Pesca a través del Centro Regional de Investigación Pesquera en Tampico, Tamaulipas, ha determinado técnicamente factible la modificación de la fecha de inicio del primer periodo de veda del año 2002, en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, correspondientes al litoral del Estado de Tamaulipas y la zona norte del Estado de Veracruz, 10 días posteriores a lo previsto.

Que en consecuencia, fundándose las presentes disposiciones en razones de orden técnico y de interés público, he tenido a bien dar a conocer el siguiente:

AVISO

PRIMERO.- Se modifica, el primer periodo de veda para la captura de lisa (*Mugil cephalus*) y liseta o lebrancha (*Mugil curema*), en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, correspondientes al litoral del Estado de Tamaulipas y en la zona norte del Estado de Veracruz, en la zona delimitada desde el Río Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco, hasta el Río Pánuco, mismo periodo que tendrá vigencia del 10 al 31 de diciembre de 2002.

SEGUNDO.- El segundo periodo de veda para la captura de lisa (*Mugil cephalus*) y liseta o lebrancha (*Mugil curema*), en las aguas de jurisdicción federal correspondientes a la zona delimitada desde el Río Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco, hasta el Río Pánuco inclusive, se mantiene sin modificación alguna, es decir del 1 al 28 de febrero de 2003.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Provéase la publicación inmediata de este Aviso en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- El presente Aviso, únicamente surte sus efectos para la temporada 2002-2003.

TERCERO.- En consecuencia, a partir de la temporada 2003-2004, seguirá vigente la época de veda señalada en la fracción XIV del artículo segundo del Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 16 de marzo de 1994.

México, D.F., a 3 de diciembre de 2002.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, **Javier Bernardo Usabiaga Arroyo**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

EXTRACTO del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Coatzacoalcos, Ver. y 26 localidades más del Estado de Veracruz, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR UNA BANDA DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USO DETERMINADO, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V., EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado en los Estados Unidos Mexicanos que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, en lo sucesivo la Comisión, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero de 2000, adjudicándole el concurso 39-TVR-8.6.

1. Objeto. El presente Título otorga una Concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado que a continuación se describen:

1.1. Bandas de frecuencias (MHz):

Grupos de canales:

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3 y CITTX.

3. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas de la red pública de telecomunicaciones concesionada y el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias objeto de esta Concesión, deberán ajustarse a lo dispuesto por la ley, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos, las normas oficiales mexicanas, demás disposiciones administrativas aplicables y a las siguientes especificaciones:

3.1. Zona geográfica. La establecida en el ABS objeto de la licitación en que el Concesionario resultó ganador y que comprende la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. y 26 localidades del Estado de Veracruz.

4. Obligaciones de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la concesión, ofrecer el servicio con la Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de la o las regiones concesionadas.

6. Servicios que podrá prestar el Concesionario. La banda de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado materia de la presente Concesión, se destinará exclusivamente a la prestación de los servicios de televisión y audio restringidos, de conformidad con las condiciones establecidas en los anexos A y B del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga en esta misma fecha el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, en favor de el Concesionario.

Si el Concesionario pretendiera prestar, a través de las bandas de frecuencias objeto de la presente Concesión, servicios no contemplados en los anexos A y B del Título de Concesión mencionado en el párrafo anterior, éste deberá solicitarlo previamente a la Secretaría en los términos del artículo 24 de la ley y demás disposiciones que resulten aplicables, la que resolverá con base en lo establecido por la ley.

8. Vigencia. La Concesión tendrá una vigencia de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de firma de la presente Concesión.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23

del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento
a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 171737)

EXTRACTO del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 39-TVR-8.6)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V., EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria
y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero de 2000, adjudicándole el concurso 39-TVR-8.6.

1.3. Servicios. El Concesionario se obliga a instalar, operar y explotar la Red y a prestar los servicios de televisión y audio restringido a que se refieren los anexos del presente Título, en los términos y condiciones ahí indicados.

1.4. Cobertura. El Concesionario prestará los servicios que se describen en los anexos del presente Título, en el Area Básica de Servicio (ABS) a la que hace referencia el numeral 3 del Título de Concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de televisión y radio restringido que otorga en este mismo acto administrativo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría a favor de el Concesionario.

1.5. Vigencia. La vigencia de esta Concesión será de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de su firma, y podrá ser prorrogada de conformidad con lo establecido por el artículo 27 de la ley.

2.1. Calidad de los servicios. El Concesionario se obliga a prestar los servicios comprendidos en esta Concesión en forma continua y eficiente, garantizando en todo momento la calidad del servicio prestado al suscriptor, de conformidad con la legislación aplicable y las características técnicas establecidas en el (los) anexo(s) de esta Concesión y las disposiciones administrativas aplicables.

2.4. Equipo de medición y control de calidad. El Concesionario se obliga a tomar las medidas necesarias para asegurar la precisión y confiabilidad de los equipos que utilice para la medición de la calidad y para la facturación de los servicios. Para estos efectos, el Concesionario deberá efectuar pruebas de calibración a sus equipos y proporcionar a la Comisión, cuando ésta lo requiera, los resultados de las mismas por trimestre calendario y, en su caso, los documentos donde conste que se han realizado los ajustes correspondientes.

2.6. Servicios de emergencia. El Concesionario deberá poner a disposición de la Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente Título, un plan de acciones para prevenir la interrupción de los servicios, así como para proporcionar servicios de emergencia, en casos fortuitos o de fuerza mayor.

Anexo A de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

A.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de televisión restringida.

A.3. Requerimientos de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la concesión, ofrecer el servicio con su propia Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de las Areas Básicas de Servicio Concesionadas.

A.11. Derechos de las señales. El Concesionario queda obligado a contar con los derechos respectivos de las señales que distribuya en su servicio de televisión restringida.

A.12. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando
el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de televisión restringida.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos en la presente Concesión.

A.14. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan
los servicios.

Anexo B de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

B.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de audio restringido.

Adicionalmente, el servicio de audio restringido a que se refiere el presente anexo, incluyendo la transmisión de conciertos en vivo o diferidos o de cualquier otro tipo de evento musical, se ajustará a lo siguiente:

B.1.1. El contenido de la programación que transmita el Concesionario se limitará a la difusión de fonogramas musicales y a la transmisión en vivo o diferida de conciertos o de cualquier otro tipo de evento musical, estará prohibido hacer transmisiones de cualquier tipo de programa hablado;

B.1.2. Las transmisiones no deberán contener comerciales, patrocinios, publicidad o propaganda, inclusive cuando se pretenda informar o promover la programación del propio servicio, y

B.1.3. Deberá ser únicamente para servicio fijo.

B.10. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando

el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de audio restringido.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos
en la presente Concesión.

B.12. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan
los servicios.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento
a lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 171739)

EXTRACTO del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Tehuacán, Pue. y 61 localidades más del Estado de Puebla, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR UNA BANDA DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USO DETERMINADO, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V., EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado en los Estados Unidos Mexicanos que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A.
de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, en lo sucesivo la Comisión, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero
de 2000, adjudicándole el concurso 41-TVR-8.8.

1. Objeto. El presente Título otorga una Concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado que a continuación se describen:

1.1. Bandas de frecuencias (MHz):

Grupos de canales:

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3 y CITTX.

3. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas de la red pública de telecomunicaciones concesionada y el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias objeto de esta Concesión, deberán ajustarse a lo dispuesto por la ley, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos, las normas oficiales mexicanas, demás disposiciones administrativas aplicables y a las siguientes especificaciones:

3.1. Zona geográfica. La establecida en el ABS objeto de la licitación en que el Concesionario resultó ganador y que comprende la ciudad de Tehuacán, Pue. y 61 localidades del Estado de Puebla.

4. Obligaciones de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la Concesión, ofrecer el servicio con la Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de la o las regiones concesionadas.

6. Servicios que podrá prestar el Concesionario. La banda de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado materia de la presente Concesión, se destinará exclusivamente a la prestación de los servicios de televisión y audio restringidos, de conformidad con las condiciones establecidas en los anexos A y B del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga en esta misma fecha el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, en favor de el Concesionario.

Si el Concesionario pretendiera prestar, a través de las bandas de frecuencias objeto de la presente Concesión, servicios no contemplados en los anexos A y B del Título de Concesión mencionado en el párrafo anterior, éste deberá solicitarlo previamente a la Secretaría en los términos del artículo 24 de la ley y demás disposiciones que resulten aplicables, la que resolverá con base en lo establecido por la ley.

8. Vigencia. La Concesión tendrá una vigencia de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de firma de la presente Concesión.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 171740)

EXTRACTO del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 41-TVR-8.8)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V., EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria
y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero de 2000, adjudicándole el concurso 41-TVR-8.8.

1.3. Servicios. El Concesionario se obliga a instalar, operar y explotar la Red y a prestar los servicios de televisión y audio restringido a que se refieren los anexos del presente Título, en los términos y condiciones ahí indicados.

1.4. Cobertura. El Concesionario prestará los servicios que se describen en los anexos del presente Título, en el Area Básica de Servicio (ABS) a la que hace referencia el numeral 3 del Título de Concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de televisión y radio restringido que otorga en este mismo acto administrativo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría a favor de el Concesionario.

1.5. Vigencia. La vigencia de esta Concesión será de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de su firma, y podrá ser prorrogada de conformidad con lo establecido por el artículo 27 de la ley.

2.1. Calidad de los servicios. El Concesionario se obliga a prestar los servicios comprendidos en esta Concesión en forma continua y eficiente, garantizando en todo momento la calidad del servicio prestado al suscriptor, de conformidad con la legislación aplicable y las características técnicas establecidas en el (los) anexo(s) de esta Concesión y las disposiciones administrativas aplicables.

2.4. Equipo de medición y control de calidad. El Concesionario se obliga a tomar las medidas necesarias para asegurar la precisión y confiabilidad de los equipos que utilice para la medición de la calidad y para la facturación de los servicios. Para estos efectos, el Concesionario deberá efectuar pruebas de calibración a sus equipos y proporcionar a la Comisión, cuando ésta lo requiera, los resultados de las mismas por trimestre calendario y, en su caso, los documentos donde conste que se han realizado los ajustes correspondientes.

2.6. Servicios de emergencia. El Concesionario deberá poner a disposición de la Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente Título, un plan de acciones para prevenir la interrupción de los servicios, así como para proporcionar servicios de emergencia, en casos fortuitos o de fuerza mayor.

Anexo A de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

A.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de televisión restringida.

A.3. Requerimientos de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la concesión, ofrecer el servicio con su propia Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de las Areas Básicas de Servicio Concesionadas.

A.11. Derechos de las señales. El Concesionario queda obligado a contar con los derechos respectivos de las señales que distribuya en su servicio de televisión restringida.

A.12. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando
el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de televisión restringida.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos en la presente Concesión.

A.14. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan
los servicios.

Anexo B de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

B.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de audio restringido.

Adicionalmente, el servicio de audio restringido a que se refiere el presente anexo, incluyendo la transmisión de conciertos en vivo o diferidos o de cualquier otro tipo de evento musical, se ajustará a lo siguiente:

B.1.1. El contenido de la programación que transmita el Concesionario se limitará a la difusión de fonogramas musicales y a la transmisión en vivo o diferida de conciertos o de cualquier otro tipo de evento musical, estará prohibido hacer transmisiones de cualquier tipo de programa hablado;

B.1.2. Las transmisiones no deberán contener comerciales, patrocinios, publicidad o propaganda, inclusive cuando se pretenda informar o promover la programación del propio servicio, y

B.1.3. Deberá ser únicamente para servicio fijo.

B.10. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando
el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de audio restringido.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos
en la presente Concesión.

B.12. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan
los servicios.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento
a lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 171743)

EXTRACTO del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Chilpancingo de los Bravo, Gro. y 26 localidades más del Estado de Guerrero, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR UNA BANDA DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USO DETERMINADO, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V., EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado en los Estados Unidos Mexicanos que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, en lo sucesivo la Comisión, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero de 2000, adjudicándole el concurso 43-TVR-8.10.

1. Objeto. El presente Título otorga una Concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado que a continuación se describen:

1.1. Bandas de frecuencias (MHz):

Grupos de canales:

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3 y CITTX.

3. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas de la red pública de telecomunicaciones concesionada y el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias objeto de esta Concesión, deberán ajustarse a lo dispuesto por la ley, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos, las normas oficiales mexicanas, demás disposiciones administrativas aplicables y a las siguientes especificaciones:

3.1. Zona geográfica. La establecida en el ABS objeto de la licitación en que el Concesionario resultó ganador y que comprende la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Gro. y 26 localidades del Estado de Guerrero.

4. Obligaciones de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la Concesión, ofrecer el servicio con la Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de la o las regiones concesionadas.

6. Servicios que podrá prestar el Concesionario. La banda de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado materia de la presente Concesión, se destinará exclusivamente a la prestación de los servicios de televisión y audio restringidos, de conformidad con las condiciones establecidas en los anexos A y B del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga en esta misma fecha el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, en favor de el Concesionario.

Si el Concesionario pretendiera prestar, a través de las bandas de frecuencias objeto de la presente concesión, servicios no contemplados en los anexos A y B del Título de Concesión mencionado en el párrafo anterior, éste deberá solicitarlo previamente a la Secretaría en los términos del artículo 24 de la ley y demás disposiciones que resulten aplicables, la que resolverá con base en lo establecido por la ley.

8. Vigencia. La Concesión tendrá una vigencia de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de firma de la presente Concesión.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento
a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 171745)

EXTRACTO del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 43-TVR-8.10)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V., EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria
y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero de 2000, adjudicándole el concurso 43-TVR-8.10.

1.3. Servicios. El concesionario se obliga a instalar, operar y explotar la Red y a prestar los servicios de televisión y audio restringido a que se refieren los anexos del presente Título, en los términos y condiciones ahí indicados.

1.4. Cobertura. El Concesionario prestará los servicios que se describen en los anexos del presente Título, en el Area Básica de Servicio (ABS) a la que hace referencia el numeral 3 del Título de Concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de televisión y radio restringido que otorga en este mismo acto administrativo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría a favor de el Concesionario.

1.5. Vigencia. La vigencia de esta Concesión será de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de su firma, y podrá ser prorrogada de conformidad con lo establecido por el artículo 27 de la ley.

2.1. Calidad de los servicios. El Concesionario se obliga a prestar los servicios comprendidos en esta Concesión en forma continua y eficiente, garantizando en todo momento la calidad del servicio prestado al suscriptor, de conformidad con la legislación aplicable y las características técnicas establecidas en el (los) anexo(s) de esta Concesión y las disposiciones administrativas aplicables.

2.4. Equipo de medición y control de calidad. El Concesionario se obliga a tomar las medidas necesarias para asegurar la precisión y confiabilidad de los equipos que utilice para la medición de la calidad y para la facturación de los servicios. Para estos efectos, el Concesionario deberá efectuar pruebas de calibración a sus equipos y proporcionar a la Comisión, cuando ésta lo requiera, los

resultados de las mismas por trimestre calendario y, en su caso, los documentos donde conste que se han realizado los ajustes correspondientes.

2.6. Servicios de emergencia. El Concesionario deberá poner a disposición de la Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente Título, un plan de acciones para prevenir la interrupción de los servicios, así como para proporcionar servicios de emergencia, en casos fortuitos o de fuerza mayor.

Anexo A de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

A.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de televisión restringida.

A.3. Requerimientos de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la concesión, ofrecer el servicio con su propia Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de las Areas Básicas de Servicio Concesionadas.

A.11. Derechos de las señales. El Concesionario queda obligado a contar con los derechos respectivos de las señales que distribuya en su servicio de televisión restringida.

A.12. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de televisión restringida.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos en la presente Concesión.

A.14. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan los servicios.

Anexo B de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

B.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de audio restringido.

Adicionalmente, el servicio de audio restringido a que se refiere el presente anexo, incluyendo la transmisión de conciertos en vivo o diferidos o de cualquier otro tipo de evento musical, se ajustará a lo siguiente:

B.1.1. El contenido de la programación que transmita el Concesionario se limitará a la difusión de fonogramas musicales y a la transmisión en vivo o diferida de conciertos o de cualquier otro tipo de evento musical, estará prohibido hacer transmisiones de cualquier tipo de programa hablado;

B.1.2. Las transmisiones no deberán contener comerciales, patrocinios, publicidad o propaganda, inclusive cuando se pretenda informar o promover la programación del propio servicio, y

B.1.3. Deberá ser únicamente para servicio fijo.

B.10. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando
el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de audio restringido.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos en la presente Concesión.

B.12. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan
los servicios.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento
a lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.-171747)

EXTRACTO del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Iguala de la Independencia, Gro. y 24 localidades más del Estado de Guerrero, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR UNA BANDA DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USO DETERMINADO, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V.,
EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado en los Estados Unidos Mexicanos que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, en lo sucesivo la Comisión, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero
de 2000, adjudicándole el concurso 44-TVR-8.11.

1. Objeto. El presente Título otorga una Concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado que a continuación se describen:

1.1. Bandas de frecuencias (MHz):

Grupos de canales:

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3 y CITTX.

3. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas de la red pública de telecomunicaciones concesionada y el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias objeto de esta Concesión, deberán ajustarse a lo dispuesto por la ley, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos, las normas oficiales mexicanas, demás disposiciones administrativas aplicables y a las siguientes especificaciones:

3.1. Zona geográfica. La establecida en el ABS objeto de la licitación en que el Concesionario resultó ganador y que comprende la ciudad de Iguala de la Independencia, Gro. y 24 localidades del Estado de Guerrero.

4. Obligaciones de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la concesión, ofrecer el servicio con la Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de la o las regiones concesionadas.

6. Servicios que podrá prestar el Concesionario. La banda de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado materia de la presente Concesión, se destinará exclusivamente a la prestación de los servicios de televisión y audio restringidos, de conformidad con las condiciones establecidas en los anexos A y B del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga en esta misma fecha el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, en favor de el Concesionario.

Si el Concesionario pretendiera prestar, a través de las bandas de frecuencias objeto de la presente Concesión, servicios no contemplados en los anexos A y B del Título de Concesión mencionado en el párrafo anterior, éste deberá solicitarlo previamente a la Secretaría en los términos del artículo 24 de la ley y demás disposiciones que resulten aplicables, la que resolverá con base en lo establecido por la ley.

8. Vigencia. La Concesión tendrá una vigencia de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de firma de la presente Concesión.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 171749)

EXTRACTO del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 44-TVR-8.11)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V., EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la

Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria
y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero de 2000, adjudicándole el concurso 44-TVR-8.11.

1.3. Servicios. El Concesionario se obliga a instalar, operar y explotar la Red y a prestar los servicios de televisión y audio restringido a que se refieren los anexos del presente Título, en los términos y condiciones ahí indicados.

1.4. Cobertura. El Concesionario prestará los servicios que se describen en los anexos del presente Título, en el Area Básica de Servicio (ABS) a la que hace referencia el numeral 3 del Título de Concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de televisión y radio restringido que otorga en este mismo acto administrativo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría a favor de el Concesionario.

1.5. Vigencia. La vigencia de esta Concesión será de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de su firma, y podrá ser prorrogada de conformidad con lo establecido por el artículo 27 de la ley.

2.1. Calidad de los servicios. El Concesionario se obliga a prestar los servicios comprendidos en esta Concesión en forma continua y eficiente, garantizando en todo momento la calidad del servicio prestado al suscriptor, de conformidad con la legislación aplicable y las características técnicas establecidas en el (los) anexo(s) de esta Concesión y las disposiciones administrativas aplicables.

2.4. Equipo de medición y control de calidad. El Concesionario se obliga a tomar las medidas necesarias para asegurar la precisión y confiabilidad de los equipos que utilice para la medición de la calidad y para la facturación de los servicios. Para estos efectos, el Concesionario deberá efectuar pruebas de calibración a sus equipos y proporcionar a la Comisión, cuando ésta lo requiera, los resultados de las mismas por trimestre calendario y, en su caso, los documentos donde conste que se han realizado los ajustes correspondientes.

2.6. Servicios de emergencia. El Concesionario deberá poner a disposición de la Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente Título, un plan de acciones para prevenir la interrupción de los servicios así como para proporcionar servicios de emergencia, en casos fortuitos o de fuerza mayor.

Anexo A de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

A.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de televisión restringida.

A.3. Requerimientos de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la concesión, ofrecer el servicio con su propia Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de las Areas Básicas de Servicio Concesionadas.

A.11. Derechos de las señales. El Concesionario queda obligado a contar con los derechos respectivos de las señales que distribuya en su servicio de televisión restringida.

A.12. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando
el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de televisión restringida.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos en la presente Concesión.

A.14. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan
los servicios.

Anexo B de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

B.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de audio restringido.

Adicionalmente, el servicio de audio restringido a que se refiere el presente anexo, incluyendo la transmisión de conciertos en vivo o diferidos o de cualquier otro tipo de evento musical, se ajustará a lo siguiente:

B.1.1. El contenido de la programación que transmita el Concesionario se limitará a la difusión de fonogramas musicales y a la transmisión en vivo o diferida de conciertos o de cualquier otro tipo de evento musical, estará prohibido hacer transmisiones de cualquier tipo de programa hablado;

B.1.2. Las transmisiones no deberán contener comerciales, patrocinios, publicidad o propaganda, inclusive cuando se pretenda informar o promover la programación del propio servicio, y

B.1.3. Deberá ser únicamente para servicio fijo.

B.10. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando
el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de audio restringido.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos en la presente Concesión.

B.12. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan
los servicios.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento
a lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 171750)

EXTRACTO del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, en Cuautla, Mor. y 18 localidades más del Estado de Morelos, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR UNA BANDA DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USO DETERMINADO, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V., EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado en los Estados Unidos Mexicanos que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, en lo sucesivo la Comisión, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero de 2000, adjudicándole el concurso 46-TVR-9.5.

1. Objeto. El presente Título otorga una Concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado que a continuación se describen:

1.1. Bandas de frecuencias (MHz):

Grupos de canales:

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3 y CITTX.

3. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas de la red pública de telecomunicaciones concesionada y el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias objeto de esta Concesión, deberán ajustarse a lo dispuesto por la ley, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos, las normas oficiales mexicanas, demás disposiciones administrativas aplicables y a las siguientes especificaciones:

3.1. Zona geográfica. La establecida en el ABS objeto de la licitación en que el Concesionario resultó ganador y que comprende la ciudad de Cuautla, Mor. y 18 localidades del Estado de Morelos.

4. Obligaciones de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la concesión, ofrecer el servicio con la Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de la o las regiones concesionadas.

6. Servicios que podrá prestar el Concesionario. La banda de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado materia de la presente Concesión, se destinará exclusivamente a la prestación de los servicios de televisión y audio restringidos, de conformidad con las condiciones establecidas en los anexos A y B del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga en esta misma fecha el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, en favor de el Concesionario.

Si el Concesionario pretendiera prestar, a través de las bandas de frecuencias objeto de la presente Concesión, servicios no contemplados en los anexos A y B del Título de Concesión mencionado en el párrafo anterior, éste deberá solicitarlo previamente a la Secretaría en los términos del artículo 24 de la ley y demás disposiciones que resulten aplicables, la que resolverá con base en lo establecido por la ley.

8. Vigencia. La Concesión tendrá una vigencia de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de firma de la presente Concesión.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el Presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 171752)

EXTRACTO del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de Ultravisión, S.A. de C.V. (Concurso 46-TVR-9.5)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, OTORGADO A FAVOR DE ULTRAVISION, S.A. DE C.V., EL 6 DE OCTUBRE DE 2000.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones:

II. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, una vez analizada y evaluada la documentación correspondiente a la solicitud de el Concesionario, y seguido el procedimiento previsto por la convocatoria
y las bases referidas, emitió fallo a favor del mismo, con fecha 24 de febrero de 2000, adjudicándole el concurso 46-TVR-9.5.

1.3. Servicios. El Concesionario se obliga a instalar, operar y explotar la Red y a prestar los servicios de televisión y audio restringido a que se refieren los anexos del presente Título, en los términos y condiciones ahí indicados.

1.4. Cobertura. El Concesionario prestará los servicios que se describen en los anexos del presente Título, en el Area Básica de Servicio (ABS) a la que hace referencia el numeral 3 del Título de Concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de televisión y radio restringido que otorga en este mismo acto administrativo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría a favor de el Concesionario.

1.5. Vigencia. La vigencia de esta Concesión será de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de su firma, y podrá ser prorrogada de conformidad con lo establecido por el artículo 27 de la ley.

2.1. Calidad de los servicios. El Concesionario se obliga a prestar los servicios comprendidos en esta Concesión en forma continua y eficiente, garantizando en todo momento la calidad del servicio prestado al suscriptor, de conformidad con la legislación aplicable y las características técnicas establecidas en el (los) anexo(s) de esta Concesión y las disposiciones administrativas aplicables.

2.4. Equipo de medición y control de calidad. El Concesionario se obliga, a tomar las medidas necesarias para asegurar la precisión y confiabilidad de los equipos que utilice para la medición de la calidad y para la facturación de los servicios. Para estos efectos, el Concesionario deberá efectuar pruebas de calibración a sus equipos y proporcionar a la Comisión, cuando ésta lo requiera, los resultados de las mismas por trimestre calendario y, en su caso, los documentos donde conste que se han realizado los ajustes correspondientes.

2.6. Servicios de emergencia. El Concesionario deberá poner a disposición de la Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente Título, un plan de acciones para prevenir la interrupción de los servicios, así como para proporcionar servicios de emergencia, en casos fortuitos o de fuerza mayor.

Anexo A de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

A.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de televisión restringida.

A.3. Requerimientos de cobertura. El Concesionario deberá, en un plazo de 3 (tres) años contados a partir del otorgamiento de la concesión, ofrecer el servicio con su propia Red en los municipios o delegaciones políticas en que, de acuerdo al último censo disponible, habite el 40% de la población total de cada una de las Areas Básicas de Servicio Concesionadas.

A.11. Derechos de las señales. El Concesionario queda obligado a contar con los derechos respectivos de las señales que distribuya en su servicio de televisión restringida.

A.12. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando
el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de televisión restringida.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos
en la presente Concesión.

A.14. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan
los servicios.

Anexo B de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de Ultravisión, S.A. de C.V., con fecha 6 de octubre de 2000.

B.1. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de audio restringido.

Adicionalmente, el servicio de audio restringido a que se refiere el presente anexo, incluyendo la transmisión de conciertos en vivo o diferidos o de cualquier otro tipo de evento musical, se ajustará a lo siguiente:

B.1.1. El contenido de la programación que transmita el Concesionario se limitará a la difusión de fonogramas musicales y a la transmisión en vivo o diferida de conciertos o de cualquier otro tipo de evento musical, estará prohibido hacer transmisiones de cualquier tipo de programa hablado;

B.1.2. Las transmisiones no deberán contener comerciales, patrocinios, publicidad o propaganda, inclusive cuando se pretenda informar o promover la programación del propio servicio, y

B.1.3. Deberá ser únicamente para servicio fijo.

B.10. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando

el domicilio del interesado se encuentre en aquellas poblaciones o zonas, dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red, donde ofrezca el servicio de audio restringido.

Para la contratación del servicio a que se refiere este anexo, el Concesionario en ningún caso podrá condicionar o exigir la contratación de otros servicios de telecomunicaciones, estén o no comprendidos en la presente Concesión.

B.12. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10 fracción III del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para el caso de que se interrumpan los servicios.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 171754)

SECRETARIA DE SALUD

ACUERDO de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas, para la ejecución del Programa Salud para Todos (Seguro Popular de Salud).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD, REPRESENTADO POR SU TITULAR DR. JULIO JOSE FRENK MORA, EN LO SUCESIVO "LA SSA", CON LA PARTICIPACION DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LIC. MARIA EUGENIA DE LEON-MAY, DEL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION FINANCIERA EN SALUD, LIC. MAURICIO BAILON GONZALEZ Y DEL DR. HECTOR HERNANDEZ LLAMAS, Y POR LA OTRA, EL ESTADO DE ZACATECAS, EN ADELANTE "EL ESTADO", REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR C. DR. RICARDO MONREAL AVILA, CON LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, ORGANISMO REPRESENTADO POR EL DR. GERARDO DE JESUS FELIX DOMINGUEZ, QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA SALUD PARA TODOS (SEGURO POPULAR DE SALUD), EN ADELANTE SEGURO POPULAR DE SALUD, EN LA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. el derecho a toda persona a la protección a la salud, compromiso que es asumido por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, donde se establece seguir desarrollando los sistemas de salud en coordinación con los gobiernos estatales, a fin de potencializar su cobertura a toda la población, y mediante estrategias conjuntas que permitan mejorar la calidad y oportunidad de los servicios, en beneficio de la salud de todos los mexicanos, evitando la duplicidad de las acciones.

2.- El Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales han ampliado la cobertura de los servicios de salud a la gran mayoría de la población. No obstante, cada año en el país entre 2 y 3 millones de

familias están en peligro de empobrecerse, debido a los gastos catastróficos en salud, originados por los pagos de bolsillo que destinan las personas por concepto de pago de los servicios de salud que incluye medicamentos y/o intervenciones que reciben en instituciones privadas o del sector público.

3.- La Encuesta Nacional de Salud y el Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 señalan que más de la mitad de la población no cuenta con un seguro de salud debido a su modalidad de empleo, y/o por su bajo poder adquisitivo que le impide pagar un seguro médico para toda la familia ya sea en el IMSS o en una institución privada. Este amplio sector observa un mayor riesgo de empobrecimiento por gastos catastróficos en salud.

4.- El Seguro Popular de Salud lo instrumentará el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos estatales, como parte de una estrategia integral estructurada de la nueva política social.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 25, 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 22, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 1, 2 y 3 fracciones I, II y III y 5, 13, 23, 28 y 35 de la Ley General de Salud; artículos 33, 34, 35, 36 y 44 de la Ley de Planeación; artículos 1, 2, 4, 5 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación del Seguro Popular de Salud, artículo 1 fracción VI, 6 y 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 5 y 6 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2002; así como en los artículos 1o., 26, 73, 74, 82 fracciones XX y XXI y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; los artículos 3o., 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, artículos 4, 12 y 20 de la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables, las partes suscriben el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene como objeto establecer los compromisos de las partes para llevar a cabo la ejecución en “EL ESTADO” del Seguro Popular de Salud a efecto de poner a disposición de la población no derechohabiente de la seguridad social en el Estado de Zacatecas un mecanismo de protección financiera que garantice su acceso a la atención médica mediante la aportación de las familias beneficiarias y el subsidio establecido por el gobierno federal ofrecido mediante el Catálogo de Beneficios Médicos y recibiendo, en su caso, los medicamentos necesarios y otros insumos para la salud asociados a este Catálogo (detallados en el Anexo 1), el cual forma parte integrante de este Acuerdo de Coordinación.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Acuerdo de Coordinación, las partes se sujetarán a lo previsto en éste, los anexos que debidamente firmados por las partes forman parte integrante del mismo y a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Seguro Popular de Salud.

SEGUNDA.- Para la ejecución del presente Acuerdo de Coordinación “LA SSA” se compromete a:

I.- Definir el marco organizacional en los ámbitos federal y estatal.

II.- Establecer los lineamientos para la integración y administración del padrón de asegurados.

III.- Diseñar, desarrollar y suministrar el instrumento para evaluar la capacidad de pago y aplicación del sistema de puntajes.

IV.- Diseñar y elaborar los materiales de sensibilización, difusión, promoción y metodología de capacitación que se utilizará en la operación del Seguro Popular de Salud.

V.- Analizar y determinar la procedencia de la elegibilidad de los grupos de población a incorporar de acuerdo a beneficiarios en otros programas sociales del Ejecutivo Federal, con la finalidad de evitar duplicidades o interferencias.

VI.- Realizar la transferencia de recursos para la ejecución de las tareas de promoción, afiliación y credencialización de beneficiarios del Seguro Popular de Salud.

VII.- Remitir mensualmente a "EL ESTADO" el subsidio federal correspondiente, con base en los padrones de familias con aseguramiento vigente. Dichos recursos se depositarán a la cuenta bancaria abierta específicamente para este programa por "EL ESTADO".

VIII.- Establecer las políticas de aplicación de las aportaciones familiares de afiliación, que en el primer año se destinarán íntegras al reforzamiento de la infraestructura y creación de fondos de
reserva estatales.

IX.- Definir e instrumentar el seguimiento, control y evaluación para la operación y determinación de impacto del Seguro Popular de Salud.

La transferencia de los recursos a que se refiere el presente capítulo se realizará en los plazos que establezca "LA SSA".

TERCERA.- Para la ejecución del presente Acuerdo de Coordinación "EL ESTADO" se compromete a lo siguiente:

I.- Definir y promover la adecuación del marco normativo estatal que permita la operación eficiente del Seguro Popular de Salud.

II.- Llevar a cabo las acciones de identificación de grupos a beneficiar, de difusión, así como de afiliación y administración del padrón de asegurados en la entidad.

III.- Asumir y cumplir con los compromisos y metas contempladas en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud (detalladas en el Anexo II), particularmente en lo que se refiere a la certificación de nosocomios y unidades médicas.

IV.- Prestar los servicios comprendidos en la cobertura acordada (detalladas en el Anexo 1), así como garantizar el suministro de insumos y medicamentos para su oferta oportuna y de calidad.

V.- Apoyar a los solicitantes del Seguro Popular de Salud para facilitarles la obtención de actas de nacimiento y Clave Unica de Registro de Población (CURP).

VI.- Sustituir para las familias beneficiarias, el pago de cuotas de recuperación por el de aportación familiar, como forma de incorporación de los beneficios del Seguro Popular de Salud.

VII.- Integrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios, de la entidad, de acuerdo a lo establecido por "LA SSA" para fines de radicación del monto del subsidio destinado al aseguramiento, entre otros.

VIII.- Aplicar los recursos que se reciban por concepto de promoción, afiliación y subsidio para la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Federal; para lo cual se compromete a:

1. Abrir una cuenta de cheques productiva y exclusiva para el manejo de los recursos del Seguro Popular de Salud.

2. Enviar a "LA SSA" su programa de adquisición de bienes de consumo, conservación, mantenimiento y capacitación a nivel de partida presupuestal.

3. Expedir un recibo por el importe transferido dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los recursos.

4. Registrar, a nombre de "LA SSA" la documentación comprobatoria de los gastos efectuados (RFC SSA630502CU1).

5. Conservar la documentación original comprobatoria de los gastos originados con los recursos del Seguro Popular de Salud.

6. Llevar a cabo los procesos de adquisición de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del programa en estricto apego a la normatividad federal aplicable.

7. Enviar a "LA SSA" en forma mensual el avance del ejercicio del presupuesto de los recursos asignados, a nivel de partida presupuestal, dentro de los 10 días posteriores al mes que se reporta.

8. Enviar a "LA SSA" la conciliación bancaria correspondiente a la cuenta de cheques en que se manejen los recursos del Seguro Popular de Salud, dentro de los 10 días posteriores al mes que se reporta.

9. Enterar y reintegrar a la Tesorería de la Federación los intereses generados mensualmente en la cuenta de cheques a través de los formularios correspondientes.

10. Reintegrar a la Tesorería de la Federación los saldos disponibles que existan en la cuenta de cheques al 31 de diciembre, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Ingresos 2002, y numeral 42 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

11. Recaudar, salvaguardar y ejercer los recursos obtenidos por concepto de aportación familiar de acuerdo a lo estipulado por la Federación.

12. Destinar el presupuesto de subsidio al aseguramiento radicado a la entidad a los capítulos de gasto autorizados por la Federación.

13. Promover que sus servicios de salud adopten esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen su administración, registros clínicos y alienten la certificación de su personal.

14. Proporcionar a "LA SSA" la información relativa a la transferencia de los recursos, así como la correspondiente a los montos y rubros de gasto de los recursos transferidos, con la regularidad y modalidad que ésta establezca.

15. Aplicar los instrumentos y procedimientos necesarios para el seguimiento operativo del Seguro Popular de Salud en la entidad, así como la evaluación del impacto.

CUARTA.- RUBROS DE GASTO.

"EL ESTADO" se obliga a canalizar los recursos recibidos exclusivamente a los siguientes rubros de gasto:

- Afiliar a la población objetivo del Seguro Popular de Salud.
- Capacitar al personal de afiliación y personal médico.
- Equipo de cómputo que se utilizará en la administración del Seguro Popular de Salud.
- Estrategias de difusión del Seguro Popular de Salud.
- Prestar los servicios de salud incluidos en el Catálogo de Beneficios Médicos.
- Asegurar el abasto de medicamentos asociados al Catálogo de Beneficios Médicos.
- Compra de equipo médico en la unidades participantes en el Seguro Popular de Salud.
- Mejoramiento de imagen de las unidades médicas participantes.
- Mecanismos innovadores para mejorar el acceso a los servicios.
- Gastos marginales de operación.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL

QUINTA.- Compromisos conjuntos asumidos por "LA SSA" y "EL ESTADO".

I.- Definir las regiones, los subsistemas de servicios y la población objetivo para el Seguro Popular de Salud en cada entidad.

II.- Establecer las metas de afiliación y atención de asegurados.

III.- Definir y establecer las acciones que con financiamiento del Seguro Popular de Salud se llevarán

a cabo para elevar la calidad de los servicios, mejorar su acceso a la población beneficiaria, estimular al personal de salud y garantizar en general la disponibilidad de insumos y medicamentos.

IV.- Estudiar y definir las acciones necesarias en materia de infraestructura, equipamiento y personal para elevar la capacidad y la calidad en la dotación de los servicios.

V.- Diseñar y desarrollar el proceso permanente de evaluación.

VI.- Apoyar las acciones de control, vigilancia y evaluación del Seguro Popular de Salud, a través de la participación de las familias incorporadas, mediante la instrumentación de la Contraloría Social.

CATALOGO DE BENEFICIOS MEDICOS

SEXTA.- Los servicios médicos considerados por el Seguro Popular de Salud que se ofrecerán a sus afiliados son los incluidos en el Catálogo de Beneficios Médicos, así como la Lista de Medicamentos, contenidos ambos en el Anexo I, y que forma parte integrante de este Acuerdo de Coordinación.

DISPOSICIONES FINALES

SEPTIMA.- "LA SSA" vigilará que la ejecución de las acciones a que se refiere este Acuerdo de Coordinación se cumplan apegados a los requisitos y parámetros fijados en las Reglas de Operación del Seguro Popular de Salud y al marco normativo vigente.

OCTAVA.- Los recursos federales transferidos a "EL ESTADO" con motivo de la celebración del presente Acuerdo de Coordinación, no podrán ser destinados a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a la naturaleza del gasto, sea de capital o corriente.

Los recursos que se transfieran, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser incorporados en la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, sin que por ello pierdan su carácter federal.

NOVENA.- La administración de los recursos por parte de "EL ESTADO", estará sujeta a lo establecido
en las Reglas de Operación del Seguro Popular de Salud, así como a las leyes, normatividad y reglamentación vigentes.

DECIMA.- Las partes convienen en que la SECODAM podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de "EL ESTADO", en los términos del presente instrumento.

DECIMA PRIMERA.- El presente Acuerdo de Coordinación comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y estará vigente durante el presente ejercicio fiscal, sin menoscabo a lo establecido en la cláusula décima segunda, debiéndose publicar en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Estado.

DECIMA SEGUNDA.- Será causa de suspensión y/o cancelación de los apoyos financieros, que "EL ESTADO" dé un uso distinto a los recursos que le transfieran con motivo del presente Acuerdo de Coordinación, por lo que "LA SSA", sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que conforme a la legislación aplicable resulten procedentes, podrá determinar otros mecanismos para la instrumentación del Seguro Popular de Salud en la entidad.

DECIMA TERCERA.- En caso de cualquier controversia que pudiera surgir con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo de Coordinación, será competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dirimirlas.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Acuerdo de Coordinación, lo firman en Zacatecas, Zacatecas, a los ocho días del mes de octubre de dos mil dos.- Por la SSA: el Secretario de Salud, **Julio José Frenk Mora**.- Rúbrica.- La Subsecretaria de Administración y Finanzas de la SSA, **María Eugenia de León-May**.- Rúbrica.- **Héctor Hernández Llamas**.- Rúbrica.- El Director General de Protección Financiera en Salud, **Mauricio Bailón González**.- Rúbrica.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, **Ricardo Monreal Avila**.- Rúbrica.- El Director General de los Servicios de Salud de Zacatecas, **Gerardo de Jesús Félix Domínguez**.- Rúbrica.

ANEXO 1

CATALOGO DE BENEFICIOS MEDICOS

PLAN FAMILIAR

SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA

INMUNIZACIONES, DETECCION Y PREVENCION

1	Inmunización contra poliomielitis
2	Inmunización contra sarampión, rubéola y parotiditis
3	Inmunización con vacuna pentavalente
4	Inmunización con BCG
5	Inmunización contra DPT
6	Inmunización contra difteria y tétanos, Td
7	Inmunización con toxoide tetánico
8	Inmunización contra influenza en el adulto
9	Inmunización contra neumococo en el adulto
10	Detección de la Diabetes Mellitus
11	Detección de la Hipertensión Arterial
12	Detección de trastornos de la agudeza visual en niños
13	Detección de cáncer cérvico-uterino
14	Detección de cáncer de mama (clínica, mastografía y biopsia)
15	Detección de hipertrofia de próstata (clínica, antígeno y toma de biopsia)

SERVICIOS DE CONSEJERIA MEDICA, PSICOLOGICA, DIETA Y EJERCICIO

16	Vigilancia de la nutrición, crecimiento y consulta del niño sano
17	Examen físico anual para adultos mayores de 40 años
18	Consejería Nutricional y de Ejercicio (obesidad, hipercolesterolemia, osteoporosis, HTA)
19	Grupos de autoayuda para desarrollar conductas saludables
20	Detección, consejería y referencia de adicciones
21	Consejería sobre Salud Reproductiva
22	Detección y consejería para la prevención de ITSs (VIH, sífilis, Hep. B y chlamidia)

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

MEDICINA FAMILIAR

23	Diagnóstico y tratamiento farmacológico de diabetes mellitus tipo II
24	Diagnóstico y tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial

25	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad péptica (incluye endoscopia)
26	Diagnóstico y tratamiento del asma (incluye urgencias y hospitalización)
27	Diagnóstico y tratamiento de gota
28	Diagnóstico y tratamiento anemia ferropriva
29	Diagnóstico y tratamiento de enfermedad articular degenerativa
30	Diagnóstico y tratamiento de dermatosis simples
31	Diagnóstico y tratamiento de la Otitis Media Aguda
32	Diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda
33	Diagnóstico y tratamiento del Cólera
34	Diagnóstico y tratamiento de parasitosis intestinal
35	Diagnóstico y tratamiento de infección respiratoria aguda
36	Diagnóstico y tratamiento de tuberculosis
37	Diagnóstico y tratamiento del dengue clásico y hemorrágico (incluye urgencias y hospital)
38	Diagnóstico y tratamiento del paludismo
39	Diagnóstico y tratamiento de brucelosis
40	Diagnóstico y tratamiento de la lepra
41	Diagnóstico y tratamiento de las infecciones de vías urinarias y pielonefritis
42	Diagnóstico y tratamiento de ITS (sífilis, gonorrea, candidiasis, clamidia y tricomonas)
	SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA
43	Diagnóstico y consejería del tabaquismo en adolescentes
44	Diagnóstico y consejería del alcoholismo
45	Diagnóstico y tratamiento farmacológico ambulatorio de la depresión
46	Diagnóstico y tratamiento farmacológico de la epilepsia
	SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA
47	Planificación familiar con métodos temporales, anticonceptivos
48	Planificación familiar con métodos temporales, preservativos
49	Planificación familiar con métodos temporales, DIU
50	Planificación familiar con métodos definitivos: vasectomía
51	Clínica de displasias y conización
	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
52	Rehabilitación de fracturas
53	Rehabilitación de parálisis facial
54	Estimulación temprana del prematuro

	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA
55	Prevención de caries (curetaje, odontoxesis y aplicación tópica de flúor)
56	Obturación de caries de 1er. y 2o. grado con amalgama
	SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y CIRUGIA
	ATENCION DE URGENCIAS
57	Manejo de lesiones traumáticas de tejidos blandos (curaciones y suturas)
58	Diagnóstico y tratamiento de fracturas cerradas de huesos largos
59	Diagnóstico y tratamiento de envenenamientos
60	Prevención de la rabia y manejo de mordeduras
61	Diagnóstico y tratamiento de mordedura de serpiente
62	Diagnóstico y tratamiento del alacranismo y picaduras
63	Estabilización de pacientes (Hipertensión, Diabetes, Angor pectoris)
	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION
64	Diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis
65	Diagnóstico y tratamiento de la neumonía
66	Diagnóstico y tratamiento de meningitis
	ATENCION DEL EMBARAZO, PARTO Y RECIEN NACIDO
67	Atención prenatal del embarazo y detección y referencia del embarazo de alto riesgo
68	Atención del parto normal y del puerperio
69	Atención perinatal del recién nacido
70	Tamiz metabólico del recién nacido (hipotiroidismo y fenilcetonuria)
71	Tratamiento del hipotiroidismo congénito
	SERVICIOS QUIRURGICOS
72	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de hernia inguinal
73	Planificación familiar con métodos definitivos: salpingoclasia
74	Atención del parto por cesárea y puerperio
75	Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones de aborto
76	Colecistectomía abierta
77	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico del abdomen agudo quirúrgico
78	Cirugía de útero (histerectomía)

ANEXO 2

LISTA DE MEDICAMENTOS ASOCIADOS AL CATALOGO DE BENEFICIOS MEDICOS DEL SEGURO POPULAR

	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION	GENERICO INTERCAMBIAB LE	UNIDAD DE MEDIDA
1	Acarbosa	Tabletas de 50 mg, envase c/30		Miligramos
2	Acetaminofén solución oral	Frasco de 120 ml, 32 mg/ml		Miligramos
3	Acetaminofén gotas	100 mg/ml, frasco 15 ml		Miligramos
4	Acetaminofén tabletas	Tabletas 300 mg. caja con 10		Miligramos
5		Tabletas 500 mg		Miligramos
6	Acetato de medroxiprogesterona y cipionato de estradiol	Ampolleta 25 mg		Ampolleta
7	Acido fólico, inyectable	Ampolletas		Ampolletas
8	Acido fólico, tabletas	Tabletas de 5 mg c/20	GI, HEMATOLOGIA	Tabletas
9	Albendazol Susp.	20 mg/ml Fco. 20 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
10	Albendazol, suspensión	Suspensión 20 mg Fco. 20 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
11	Albendazol, tabletas	Caja con 2 tabletas de 200 mg c/u	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
12	Ambroxol, comprimidos	Comprimidos de 30 mg c/20	GI, NEUMOLOGIA	Miligramos
13	Ambroxol, solución oral	Frasco con 120 ml	GI, NEUMOLOGIA	Miligramos
14	Amitriptilina			Miligramos
15	Amoxicilina, suspensión	Suspensión 250 mg, envase con 60 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
16	Amoxicilina, tabletas	Tabletas 500 mg, caja c/12	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
17	Amoxicilina/ Ac. Clavulánico 125/31.25 mg	Suspensión 60 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
18	Amoxicilina/ Ac. Clavulánico 250/62.5 mg	Suspensión 60 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
19	Ampicilina, cápsulas	Cápsulas de 250 mg. caja con 20	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
20	Ampicilina, inyectable	Ampolleta de 1 gr	GI, ENF. INFECC.	Ampolleta
21	Ampicilina, suspensión 125 mg	Suspensión 125 mg, envase con 60 ml		Miligramos
22	Ampicilina, suspensión 250 mg	Suspensión 250 mg/5 ml, envase 60 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
23	Atropina			Ampula
24	Aztemizol	Tabletas 10 mg, c/10		Tableta
25	Beclometasona aerosol	Envase c/200 dosis	GI, NEUMOLOGIA	Disparos
26	Benzoato de bencilo	Emulsión dérmica 300 mg con 120 ml		Envase
27	Betametasona, solución inyectable	Ampolleta 3 mg	GI, ENF. INMUNOALERGICAS	Ampolletas
28	Bicarbonato de sodio inyectable	Ampolleta 10 ml	GI, SOL. ELECTROLITICAS	Ampolletas
29	Bromuro de ipatropio	Aerosol 10 ml (200 dosis)		Disparos
30	Butilhioscina, inyectable	Solución inyectable 20 mg c/3 Amp. de 1 ml	GI, GASTROENTERO-LOGIA	Ampolleta
31	Butilhioscina, solución	15 ml, 6.67 mg		Mililitros

32	Butilhioscina, tabletas	Caja de 20 tabletas de 10 mg c/u	GI, GASTROENTERO-LOGIA	Miligramos
33	Captopril	Tabletas 25 mg, envase c/30	GI, CARDIOLOGIA	Miligramos
34	Carbamazepina, suspensión	Suspensión 120 ml		Miligramos
35	Carbamazepina, tabletas	Tabletas 200 mg	GI, NEUROLOGIA	Miligramos
36	Cefalexina	Tabletas 500 mg, caja c/20	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
37	Cefotaxima, 1 g	Ampolleta 1 g, 4 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
38	Cefotaxima, 500 mg	Ampolleta 500 mg, 2 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
39	Ceftriazona	Ampolleta de 0.5 g, en 5 ml	GI, ENF. INFECC.	Ampolletas
40	Cefuroxime	Tabletas 500 mg		Miligramos
41	Cimetidina	Tabletas 200 mg		Miligramos
42	Ciprofloxacina, tabletas	Tabletas 500 mg, caja c/12	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
43	Citalopram			Miligramos
44	Claritomicina	Tabletas 250 mg		Miligramos
45	Clindamicina	Tabletas 300 mg, caja c/12	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
46	Clioquinol	Envase 60 g	GI, DERMATOLOGIA	Envase
47	Clioquinol/hidrocortisona	Envase 20 g		Envase
48	Clomipramina			Miligramos
49	Cloranfenicol solución oftálmica	Frasco con 15 ml	GI, OFTALMOLOGIA	Mililitros
50	Clorfeniramina, jarabe	Jarabe 0.5 mg frasco 120 ml	GI, ENF. INMUNOALERGICAS	Frasco
51	Clorfeniramina, tabletas	Tabletas de 4 mg caja c/20	GI, ENF. INMUNOALERGICAS	Miligramos
52	Cloropropamida	Tabletas 250 mg, caja c/50		Miligramos
53	Cloroquina	Tabletas de 150 mg caja c/1000		Miligramos
54	Clorotiacida	Tabletas 250 mg, caja c/20		Miligramos
55	Clorpromacina	Comprimidos 100 mg		Miligramos
56	Clortalidona	Tabletas 50 mg caja c/20	GI, CARDIOLOGIA	Miligramos
57	Cloruro de potasio	Ampolleta 100 mg, 5 ml	GI, SOL. ELECTROLITICAS	Mililitros
58	Crema Cold-Cream	Envase 75 ml		Envase
59	Cromoglicato sódico	Aerosol, envase 16 g, 112 disparos		Disparos
60	Dapsona	Tabletas 100 mg c/1000		Miligramos
61	Desipramina			Miligramos
62	Desogestril y Etinilestradiol	Envase con 28 tabletas		Tableta
63	Diazepam	Ampolleta 10 mg, 2 ml, c/50		Ampolletas
64	Diclofenaco	Tabletas 75 mg	GI, REUMATOLOGIA	Miligramos
65	Dicloxacilina	Cápsulas de 250 mg c/12	GI, ENF. INFECC.	Miligramos

66	Difenidol	Tabletas de 25 mg caja c/30	GI, OTORRINOLARING.	Miligramos
67	Doxiciclina, tabletas	Cápsulas de 100 mg caja c/10	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
68	Electrolitos orales	Sobre 27.9 gr	GI, SOL. ELECTROLITICAS	Sobres
69	Epinefrina subcutánea	Ampolleta de 1 ml		Ampolleta
70	Eritromicina, cápsulas	Cápsulas de 250 mg caja c/20		Miligramos
71	Eritromicina, suspensión	Suspensión 125 mg envase 120 ml		Miligramos
72	Eritromicina/sulfisoxazol	Frasco de 150 ml, 200/600 mg c/5 ml		Miligramos
73	Estreptomicina inyectable	1 gm frasco ámpula 2 ml	GI, ENF. INFECC.	Ampolleta
74	Etambutol	Comprimidos 400 mg, caja c/50		Miligramos
75	Famotidina	Tabletas 10 mg, c/10		Miligramos
76	Fenitoína, suspensión	Suspensión oral 37.5 mg/ 5ml		Miligramos
77	Fenitoína, tabletas	Tabletas, caja c/50		Miligramos
78	Fenobarbital	Comprimidos 50 mg, c/30		Miligramos
79	Flumazenil	Ampolleta 5 ml		Ampolleta
80	Fluovoxamina			Miligramos
81	Fluoxetina		GI, PSIQUIATRIA	Miligramos
82	Fosfato de Clindamicina	Ampolleta de 300 mg, 2 ml		Ampolleta
83	Fumarato ferroso, suspensión	Suspensión oral 2.9 mg/100 ml, Equiv. a 0.953 mg de Fe	GI, HEMATOLOGIA	Mililitros
84	Fumarato ferroso, tabletas	Tabletas 200 mg, c/50	GI, HEMATOLOGIA	Tabletas
85	Gentamicina, 20 mg	Solución inyectable 20 mg/2 ml	GI, ENF. INFECC.	Ampolletas
86	Gentamicina, 80 mg	Solución inyectable 80 mg/2 ml	GI, ENF. INFECC.	Ampolletas
87	Glibenclamida	Tabletas 5 mg, caja c/50	GI, ENDOCRINOLOGIA	Miligramos
88	Glimepirida			Miligramos
89	Gluconato de calcio, solución al 10%	(Calcium amp 10 x 10 ml)		Mililitros
90	Imipramina			Miligramos
91	Indometacina	Cápsulas 25 mg, c/30	GI, REUMATOLOGIA	Miligramos
92	Inmunoglobulina humana antirrábica			Dosis
93	Inmunoglobulina humana antitetánica	Unidosis		Dosis
94	Insulina Humana	Fco. 10 ml 100 u/ml	GI, ENDOCRINOLOGIA	Mililitros
95	Ipecacuana	Jarabe		Mililitros
96	Isoniacida	Tabletas 100 gr envase c/200 Tab.		Miligramos
97	Isoniazida y Rifampicina	Tabletas 200/150 mg, envase c/120 Tab.		Tabletas
98	Isoniazida, Rifampicina y Pirazinamida	Tabletas o grageas 75 mg/150 mg/400 mg, c/240		Tabletas
99	Ketorolaco	Tabletas 10 mg, c/10		Miligramos
100	Ketorolaco, inyectable	Ampolleta 30 mg, c/3	GI, ANALGESIA	Ampolleta

101	Ketotifeno	Frasco con 120 ml	GI, ENF. INMUNOALERGICAS	Mililitros
102	Levonorgestrel y etilenestradiol	Envase con 28 tabletas	GI, PLAN. FAMILIAR	Tableta
103	Levotiroxina	Tabletas de 0.025 mg, c/50		Tableta
104	Lidocaína al 2% con epinefrina	Frasco Amp. 1 g/0.25 g 50 ml		Frasco
105	Lidocaína al 2%, 50 ml	Frasco Amp. 1 gm/50 ml	GI, ANALGESIA	Fco. ámpula
106	Lidocaína al 5%	Sol. Inyectable 100 mg/2 ml, c/5 ámpulas		Fco. ámpula
107	Lindano shampoo	Shampoo de 1g/100 ml		Frasco
108	Loperamida	Tabletas 2 mg, c/12	GI, GASTROENTERO-LOGIA	Miligramos
109	Loratadina	Tabletas 10 mg, c/20	GI, ENF. INMUNOALERGICAS	Miligramos
110	Maprotilina			Miligramos
111	Mebendazol, suspensión	Suspensión, 30 ml, 100 mg/5 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
112	Mebendazol, tabletas	Tabletas 100 mg, c/6	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
113	Metamizol, inyectable	Ampolleta de 1 gramo	GI, ANALGESIA	Ampolletas
114	Metamizol, tabletas	Tabletas 500 mg, c/10	GI, ANALGESIA	Miligramos
115	Metformina	Tabletas de 850 mg, envase c/30	GI, ENDOCRINOLOGIA	Miligramos
116	Metilergometrina	Grageas de 0.125 mg, c/30		Miligramos
117	Metoprolol	Tabletas 100 mg envase c/20	GI, CARDIOLOGIA	Miligramos
118	Metronidazol, inyectable	Ampolleta 200 mg, 2 X 10 ml	GI, ENF. INFECC.	Ampolletas
119	Metronidazol, óvulos	Ovulos o tabletas vaginales de 500 mg caja c/10	GI, GINECO-OBSTETRICIA	Ovulos
120	Metronidazol, suspensión	Suspensión 250 mg/5 ml frasco c/120 ml	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
121	Metronidazol, tabletas	Tabletas 250 mg, c/20		Miligramos
122		Tabletas 500 mg, c/30		Miligramos
123	Mianserina			Miligramos
124	Miconazol crema	Tubo 20 g, nitrato de miconazol 20 mg/g	GI, DERMATOLOGIA	Pieza
125	Morfina			Ampolletas
126	Moxifloxacin			Miligramos
127	Nalbufina, Sol. inyectable	Ampolletas 10 mg, 1 ml, caja c/5	GI, ANALGESIA	Ampolletas
128	Naproxeno, tabletas	Tabletas (Flanax, 275 mg, c/20)	GI, REUMATOLOGIA	Miligramos
129	Nicardipino	Cápsulas 20 mg, envase con 60 cápsulas		Miligramos
130	Nifedipino	Tabletas 10 mg caja c/20	GI, CARDIOLOGIA	Miligramos
131	Nistatina, crema	Envase de 60 g		Envase
132	Nistatina, tabletas	Tabletas		Tabletas
133	Nistatina, tabletas vaginales	Tabletas vaginales		Tab. Vag.
134	Nitrofurantoína	Furadantina tabletas 100 mg c/40		Miligramos
135	Noretindrona y Etinilestradiol	Envase con 21 tabletas		Tableta
136	Noretisterona	Ampolleta 200 mg		Ampolleta
137	Norgestrel, progestágeno sintético y estradiol	Envase con 28 tabletas		Tableta

138	Omeprazol, cápsulas	Cápsulas 20 mg, c/7	GI, GASTROENTERO-LOGIA	Miligramos
139	Omeprazol, inyectable	Ampolleta 40 mg, 10 ml	GI, GASTROENTERO-LOGIA	Ampolletas
140	Oxido de zinc	(Pasta de lassar) tubo 30 g		Tubo
141	Oxitocina	Ampolletas	GI, GINECO-OBSTETRICIA	Ampolleta
142	Paracetamol, tabletas	Tabletas 500 mg	GI, ANALGESIA	Miligramos
143	Penicilina G. Benzatínica	Ampolletas 1,200 000 U		Ampolletas
144	Penicilina G. Procaínica	Ampolletas 800 000 U		Ampolletas
145	Penicilina G.-Procaína	Ampolletas 400 000 U		Ampolletas
146	Penicilina sódica	Frasco ámpula 1 000 000 U		Fco. ámpula
147	Piperazina	Jarabe 100 ml, 250 mg/5 ml		Miligramos
148	Polivitaminas y minerales	Tabletas		Tabletas
149	Prednisona	Tabletas de 5 mg caja c/20	GI, ENDOCRINOLOGIA	Miligramos
150	Preservativos	Caja de 3 piezas		Pieza
151	Primaquina	Tabletas de 5 mg caja c/20		Miligramos
152	Probenecida	Frasco con 10 tabletas de 500 mg		Miligramos
153	Propanolol	Tabletas 40 mg envase c/20		Miligramos
154	Ranitidina, inyectable	Ampolleta 50 mg, 5 ml, c/5	GI, GASTROENTERO-LOGIA	Ampolletas
155	Ranitidina, tabletas	Tabletas 150 mg, c/100	GI, GASTROENTERO-LOGIA	Miligramos
156	Rifampicina	Cápsulas 300 mg, c/1000		Miligramos
157	Roziglitazona	Grageas 8 mg, c/14		Miligramos
158	Salbutamol aerosol	20 mg envase c/200 disparos	GI, NEUMOLOGIA	Disparos
159	Salbutamol jarabe	Jarabe 2 mg/5 ml, frasco 60 ml	GI, NEUMOLOGIA	Mililitros
160	Salbutamol, Sol. para nebulizadores	Frasco 5 mg/10 ml		Miligramos
161	Sertralina			Miligramos
162	Sodio intravenoso	Cloruro de sodio al 9% envase c/500 ml	GI, SOL. ELECTROLITICAS	Mililitros
163	Subsalicilato de bismuto	PEPTO-BISMOL Susp. 120 ml, 17.5 g/ml		Miligramos
164	Sucralfato	Tabletas 20 mg, c/20		Miligramos
165	Suero Antialacrán	Frasco ámpula 5 ml 1 dosis		Frasco
166	Suero antiofídico			Ampolleta
167	Suero Antiviperino frasco ámpula 10 ml 1 dosis			Ampolleta
168	Sulfato ferroso	Tabletas de 200 mg, c/50	GI, HEMATOLOGIA	Miligramos
169	Sulfato magnesio	Ampolleta 10 ml, c/100		Mililitros
170	Talidomida	Tabletas 100 mg, caja c/50		Miligramos
171	Teofilina, jarabe	Frasco 160 ml		Mililitros

172	Teofilina, tabletas	Tabletas de 200 mg		Miligramos
173	Tetraciclina	Tabletas 500 mg		Miligramos
174	Tolbutamida	Tabletas 500 mg, envase c/50	GI, ENDOCRINOLOGIA	Miligramos
175	Toxoide tetánico	Frasco ámpula con 10 dosis		Dosis
176	Trimetroprim c/sulfametoxazol, susp.	Suspensión 120 ml (40 mg/5 ml)	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
177	Trimetroprim c/sulfametoxazol, tab.	Tabletas 80 mg caja c/20	GI, ENF. INFECC.	Miligramos
178	Vacuna antirrábica humana de células Diploides			Dosis
179	Vacuna BCG	Ampolleta 10 dosis y solución salina como diluyente		Dosis
180	Vacuna DPT	Frasco ámpula con 10 dosis		Dosis
181	Vacuna influenza	Ampolleta con 5 ml, envase c/10		Dosis
182	Vacuna Neumocóxica	Vial de 5 ml		Dosis
183	Vacuna pentavalente	Frasco ámpula de DPT-HB 0.5 ml y frasco ámpula con vacuna liofilizada (unidosis)		Pieza
184	Vacuna Sabin	Frasco gotero con 20 dosis		Dosis
185	Vacuna Td, tétanos y difteria	Frasco 5 ml, 10 dosis		Dosis
186	Vacuna Triple Viral SRP	Frasco de vacuna liofilizada unidosis		Dosis
187	Valproato	Tabletas 200 mg	GI, NEUROLOGIA	Miligramos
188	Vibramicina	Tabletas 100 mg		Miligramos
189	Vitamina A	Cápsulas 50,000 U, c/40		Gragea
190	Vitaminas A, C y D solución oral frasco de 15 ml c/gotero	Frasco de 25 dosis	GI, NUTRIOLOGIA	Dosis
191	Vitamina K	Ampolleta 2 mg, 0.2 ml, c/3		Ampolleta
	Total Suma de COSTO TOTAL			

ANEXO 3

DEFINICIONES

Programa Salud para Todos: Denominación adoptada en el artículo 63 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2001 para identificar un programa de subsidio federal para brindar protección financiera en salud a la población no asegurada.

Seguro Popular de Salud: Esquema de aseguramiento público y voluntario que brinda protección financiera en materia de salud a las familias que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social.

Gasto de bolsillo: Pago directo que se realiza en el momento de requerir atención médica y que pone en riesgo de empobrecimiento a las familias de bajos ingresos.

Gasto catastrófico en salud: Gasto que constituye más del 30 por ciento del ingreso anual disponible (ingreso total menos el gasto en alimentación) del hogar y que pone en riesgo de empobrecimiento a los hogares de menores ingresos.

Pago anticipado en salud: Pago por adelantado que se realiza para cubrir el costo de la atención en salud en caso de requerirla con el fin de proteger el ingreso de las familias y fomentar la atención oportuna
y preventiva.

Cuotas de afiliación: Monto de recursos que aportarán las familias que se afilien al programa del seguro popular de salud.

Cultura del aseguramiento: Conocimiento de la población de que es mejor realizar pagos anticipados que pagos directos de bolsillo para evitar el riesgo de incurrir en gastos que pueden llegar a ser catastróficos.

Medicina preventiva: Intervenciones que fomentan conductas que mantienen la salud de las personas y que reducen el riesgo de padecer algún problema de salud.

Familia beneficiaria: Miembros de la familia nuclear que por su condición socioeconómica y laboral no sean derechohabientes de la seguridad social y elijan afiliarse al Seguro Popular de Salud.

Seguridad social: Instituciones públicas de salud y prestaciones sociales que cubren a los trabajadores del sector formal de la economía.

Población no asegurada: Personas que no son beneficiarias de alguna institución de seguridad social.

Población objetivo: Grupo de población que cumple con las condiciones necesarias para ser beneficiaria de algún programa público.

Población beneficiaria: Grupo de personas que recibe los beneficios que se incluyen en algún programa público.

Promotor de salud: Personal encargado de organizar y promover las actividades de registro y afiliación del Programa del Seguro Popular a la población objetivo.

OPD: Organismo Público Descentralizado. Figura en la que se incluyen todas las modalidades de prestación de Servicios Estatales de Salud.

ESTOS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SALUD PARA TODOS "SEGURO POPULAR DE SALUD", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD (SSA) Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-24-82 hectárea de temporal de uso común, de terrenos del ejido Cihuatlán, Municipio de Cihuatlán, Jal. (Reg.- 267)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo de la propia Constitución; 93, fracción I, 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria; en relación con los artículos 59, 60, 64, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 88 y 90 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, y

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio número 0431 de fecha 15 de diciembre de 1999, la Comisión Federal de Electricidad solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 0-24-82.30 Ha., de terrenos del ejido denominado "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán del Estado de Jalisco, para destinarlos a la construcción de la subestación eléctrica denominada Cihuatlán, conforme a lo establecido en los artículos 93, fracción I y 94 de la Ley Agraria, y se comprometió a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. Iniciado el procedimiento relativo, de los trabajos técnicos e informativos se comprobó que existe una superficie real por expropiar de 0-24-82 Ha., de temporal de uso común.

RESULTANDO SEGUNDO.- Que la superficie que se expropia se encuentra ocupada con la obra realizada por la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de la autorización otorgada mediante Acta

de Asamblea de Ejidatarios de fecha 16 de octubre de 1998, por el núcleo agrario "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco.

RESULTANDO TERCERO.- Que terminados los trabajos técnicos mencionados en el resultando primero y analizadas las constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial de fecha 21 de abril de 1937, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 28 de junio de 1937 y ejecutada el 1o. de mayo de 1937, se concedió por concepto de dotación de tierras para constituir el ejido "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, una superficie de 1,728-00-00 Has., para beneficiar a 82 capacitados en materia agraria, más la parcela escolar; por Resolución Presidencial de fecha 18 de octubre de 1939, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 26 de febrero de 1940 y ejecutada el 30 de julio de 1941, se concedió por concepto de primera ampliación de ejido al núcleo ejidal "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, una superficie de 927-00-00 Has., para beneficiar a 33 capacitados en materia agraria; por Resolución Presidencial de fecha 30 de agosto de 1973, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 26 de noviembre de 1973 y ejecutada el 24 de octubre de 1976, se concedió por concepto de segunda ampliación de ejido al núcleo ejidal "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, una superficie de 1,400-00-00 Has., para beneficiar a 84 capacitados en materia agraria; por Resolución Presidencial de fecha 2 de julio de 1986, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 28 de julio de 1986 y ejecutada el 20 de mayo de 1988, se concedió por concepto de tercera ampliación de ejido al núcleo ejidal "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, una superficie de 718-19-88 Has., para beneficiar a 119 capacitados en materia agraria; y por Decreto Presidencial de fecha 22 de septiembre de 1989, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 28 de septiembre de 1989, se expropió al ejido "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, una superficie de 0-36-23.60 Ha., a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, para destinarse a la construcción de una unidad de medicina familiar.

RESULTANDO CUARTO.- Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización, mediante avalúo No. 02 0885 GDL de fecha 12 de agosto del 2002, con vigencia de seis meses contados a partir de la fecha de su emisión, habiendo considerado el valor comercial que prescribe el artículo 94 de la Ley Agraria, asignando como valor unitario el de $400,000.00 por hectárea, por lo que el monto de la indemnización a cubrir por la 0-24-82 Ha., de terrenos de temporal a expropiar es de $99,280.00.

Que existe en las constancias el dictamen de la Secretaría de la Reforma Agraria, emitido a través de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, relativo a la legal integración del expediente sobre la solicitud de expropiación; y

CONSIDERANDO:

ÚNICO.- Que de las constancias existentes en el expediente integrado con motivo de la solicitud de expropiación se ha podido observar que se cumple con la causa de utilidad pública, consistente en el establecimiento de un servicio público, por lo que es procedente se decrete la expropiación solicitada por apegarse a lo que establecen los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, fracción I y 94 de la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Esta expropiación que comprende la superficie de 0-24-82 Ha., de temporal de uso común, de terrenos del ejido "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, será a favor de la Comisión Federal de Electricidad para destinarlos a la construcción de la subestación eléctrica denominada Cihuatlán. Debiéndose cubrir por la citada Comisión

la cantidad de $99,280.00 por concepto de indemnización en favor del ejido de referencia o de las personas que acrediten tener derecho a ésta.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, he tenido
a bien dictar el siguiente

DECRETO:

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-24-82 Ha., (VEINTICUATRO ÁREAS, OCHENTA Y DOS CENTIÁREAS) de temporal de uso común, de terrenos del ejido "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán del Estado de Jalisco, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, quien las destinará a la construcción de la subestación eléctrica denominada Cihuatlán.

La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma Agraria, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en el Registro Agrario Nacional en su carácter de órgano administrativo desconcentrado de esa dependencia.

SEGUNDO.- Queda a cargo de la Comisión Federal de Electricidad pagar por concepto de indemnización por la superficie que se expropia, la cantidad de $99,280.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), suma que pagará en términos de los artículos 94 y 96 de la Ley Agraria
y 80 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en la inteligencia de que los bienes objeto de la expropiación, sólo podrán ser ocupados de manera definitiva mediante el pago que efectúe al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a éste, o depósito que hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, establezca garantía suficiente. Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el exacto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Agraria y en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin distinto o no sea aplicada en un término de cinco años al objeto de la expropiación, demandará la reversión de la totalidad o de la parte de los terrenos expropiados que no se destine o no se aplique conforme a lo previsto por el precepto legal antes referido. Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones legales necesarias para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio.

TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 94, último párrafo, de la Ley Agraria y 88 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, una vez publicado el presente Decreto en el **Diario Oficial de la Federación**, sólo procederá a su ejecución cuando la Comisión Federal de Electricidad, haya acreditado el pago o depósito de la indemnización señalada en el resolutivo que antecede; la inobservancia de esta disposición será motivo de sujeción a lo establecido en el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CUARTO.- Publíquese en el **Diario Oficial de la Federación** e inscríbase el presente Decreto por el que se expropian terrenos del ejido "CIHUATLÁN", Municipio de Cihuatlán del Estado de Jalisco, en el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de diciembre de dos mil dos.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- CÚMPLASE: La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera**
Tello.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-88-15 hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Loreto, Municipio de Loreto, B.C.S. (Reg.- 268)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo de la propia Constitución; 93, fracción VII, 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria; en relación con los artículos 59, 60, 64, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 88 y 90 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, y

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio número M2. 00123 de fecha 12 de junio del 2000, el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 2-88-14.74 Has., de terrenos del ejido denominado "LORETO", Municipio de Loreto del Estado de Baja California Sur, para destinarlos a incrementar la superficie delimitadora de obstáculos que permita garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas, en el aeropuerto internacional de Loreto, conforme a lo establecido en los artículos 93, fracción VII y 94 de la Ley Agraria, y se comprometió a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. Iniciado el procedimiento relativo, de los trabajos técnicos e informativos se comprobó que existe una superficie real por expropiar de 2-88-15 Has., de agostadero de uso común.

RESULTANDO SEGUNDO.- Que la superficie que se expropia se encuentra ocupada con la instalación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por lo que mediante Acta de Asamblea de Ejidatarios de fecha 9 de mayo de 1998, el núcleo ejidal afectado solicita regularizar la situación jurídica imperante y en consecuencia, obtener para dicho ejido el pago de la indemnización correspondiente.

RESULTANDO TERCERO.- Que terminados los trabajos técnicos mencionados en el resultando primero y analizadas las constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial de fecha 21 de octubre de 1920, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 20 de diciembre de 1920 y ejecutada el 16 de septiembre de 1925, se concedió por concepto de dotación de tierras para constituir el ejido "LORETO", Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, una superficie de 1,755-60-00 Has., para beneficiar a 990 capacitados en materia agraria; por Resolución Presidencial de fecha 19 de febrero de 1974, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 14 de marzo de 1974 y ejecutada el 20 de noviembre de 1979, se concedió por concepto de ampliación de ejido al núcleo ejidal "LORETO", Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, una superficie de 42,000-00-00 Has., para los usos colectivos de 72 capacitados en materia agraria, más la parcela escolar; por Decreto Presidencial de fecha 30 de agosto de 1976, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de agosto de 1976, se expropió al ejido "LORETO", Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, una superficie de 683-58-74 Has., a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para destinarse a su lotificación
y titulación legal a favor de sus ocupantes mediante su venta y la constitución de una superficie de reserva territorial que sirva en el futuro para satisfacer las necesidades del crecimiento regular y planeado de la ciudad de Loreto del Estado de Baja California Sur; y por Decreto Presidencial de fecha 29 de agosto de 1994, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 6 de septiembre de 1994, se expropió al ejido "LORETO", Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, una superficie de 61-10-88 Has., a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para destinarse a la construcción del aeropuerto de Loreto.

RESULTANDO CUARTO.- Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización, mediante avalúo No. 02 0510 HMO de fecha 16 de julio del 2002, con vigencia de seis meses contados a partir de la fecha de su emisión, habiendo considerado el valor comercial que prescribe el artículo 94 de la Ley Agraria, asignando como valor unitario el de $175,000.00 por hectárea, por lo que el monto de la indemnización a cubrir por las 2-88-15 Has., de terrenos de agostadero a expropiar es de $504,262.50.

Que existe en las constancias el dictamen de la Secretaría de la Reforma Agraria, emitido a través de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, relativo a la legal integración del expediente

sobre
la solicitud de expropiación; y

CONSIDERANDO:

ÚNICO.- Que de las constancias existentes en el expediente integrado con motivo de la solicitud de expropiación se ha podido observar que se cumple con la causa de utilidad pública, consistente en la construcción de campos de aterrizaje y demás obras relacionadas para el buen funcionamiento del aeropuerto internacional de la ciudad de Loreto, a fin de que las operaciones de aproximación y despegue de las aeronaves de las diferentes líneas aéreas, se realicen bajo condiciones óptimas de seguridad, por lo que es procedente se decrete la expropiación solicitada por apegarse a lo que establecen los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, fracción VII y 94 de la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Esta expropiación que comprende la superficie de 2-88-15 Has., de agostadero de uso común, de terrenos del ejido "LORETO", Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, será a favor del organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para destinarlos a incrementar la superficie delimitadora de obstáculos que permita garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas, en el aeropuerto internacional de Loreto. Debiéndose cubrir por el citado organismo la cantidad de $504,262.50 por concepto de indemnización a favor del ejido de referencia o de las personas que acrediten tener derecho a ésta.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, he tenido
a bien dictar el siguiente

DECRETO:

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-88-15 Has., (DOS HECTÁREAS, OCHENTA Y OCHO ÁREAS, QUINCE CENTIÁREAS) de agostadero de uso común, de terrenos del ejido "LORETO", Municipio de Loreto del Estado de Baja California Sur, a favor del organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, quien las destinará a incrementar la superficie delimitadora de obstáculos que permita garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas, en el aeropuerto internacional de Loreto.

La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma Agraria, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en el Registro Agrario Nacional en su carácter de órgano administrativo desconcentrado de esa dependencia.

SEGUNDO.- Queda a cargo del organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares pagar por concepto de indemnización por la superficie que se expropia, la cantidad de $504,262.50 (QUINIENTOS CUATRO MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), suma que pagará en términos de los artículos 94 y 96 de la Ley Agraria y 80 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en la inteligencia de que los bienes objeto de la expropiación, sólo podrán ser ocupados de manera definitiva mediante el pago que efectúe al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a éste,
o depósito que hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, establezca garantía suficiente. Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el exacto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Agraria y en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin distinto o no sea aplicada en un término de cinco años al objeto de la expropiación, demandará la reversión de la totalidad o de la parte de los terrenos expropiados que no se destine o no se aplique conforme a lo previsto por el precepto legal antes referido. Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones legales necesarias para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio.

TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 94, último párrafo, de la Ley Agraria y 88 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, una vez publicado el presente Decreto en el **Diario Oficial de la Federación**, sólo procederá a su ejecución cuando el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, haya acreditado el pago o depósito de

la indemnización señalada en el resolutivo que antecede; la inobservancia de esta disposición será motivo de sujeción a lo establecido en el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CUARTO.- Publíquese en el **Diario Oficial de la Federación** e inscríbase el presente Decreto por el que se expropian terrenos del ejido "LORETO", Municipio de Loreto del Estado de Baja California Sur, en el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de diciembre de dos mil dos.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- CÚMPLASE: La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-37-04 hectárea de temporal de uso común, de terrenos del ejido Santo Tomás, Municipio de Zempoala, Hgo. (Reg.- 269)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo de la propia Constitución; 93, fracción VII, 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria; en relación con los artículos 59, 60, 64, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 88 y 90 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, y

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio número 102.301.- A 0955 de fecha 28 de enero de 1998, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 1-39-33.70 Ha., de terrenos del ejido denominado "SANTO TOMÁS", Municipio de Zempoala del Estado de Hidalgo, para destinarlos a la construcción de la carretera México-Tuxpan, tramo Pirámides-Tulancingo, conforme a lo establecido en los artículos 93, fracción VII y 94 de la Ley Agraria, y se comprometió a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. Iniciado el procedimiento relativo, de los trabajos técnicos e informativos se comprobó que existe una superficie real por expropiar de 1-37-04 Ha., de temporal de uso común.

RESULTANDO SEGUNDO.- Que la superficie que se expropia se encuentra ocupada con la obra realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud de la autorización otorgada mediante convenio de fecha 3 de octubre de 1997, suscrito con el Comisariado Ejidal del núcleo agrario "SANTO TOMÁS", Municipio de Zempoala, Estado de Hidalgo.

RESULTANDO TERCERO.- Que terminados los trabajos técnicos mencionados en el resultando primero y analizadas las constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial de fecha 7 de junio de 1928, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 28 de julio de 1928 y ejecutada el 6 de julio de 1928, se concedió por concepto de dotación de tierras para constituir el ejido "SANTO TOMÁS", Municipio de Zempoala, Estado de Hidalgo, una superficie de 782-00-00 Has., para beneficiar a 212 capacitados en materia agraria; por Resolución Presidencial de fecha 6 de mayo de 1936, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 24 de junio de 1936 y ejecutada el 18 de agosto de 1936, se concedió por concepto de primera ampliación de ejido al núcleo ejidal "SANTO TOMÁS", Municipio de Zempoala, Estado de Hidalgo, una superficie de 1,568-69-68 Has., para beneficiar a 64 capacitados en materia agraria, más la parcela escolar; por Resolución Presidencial de fecha 26 de octubre de 1938, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de agosto de 1939 y ejecutada el 29 de enero de 1939, se concedió por concepto de segunda ampliación de ejido al núcleo ejidal "SANTO TOMÁS", Municipio de Zempoala, Estado de Hidalgo, una superficie de 416-80-00 Has., para

beneficiar a 15 capacitados en materia agraria, aprobándose en una fracción de los terrenos concedidos el parcelamiento legal mediante Acta de Asamblea de Ejidatarios de fecha 17 de noviembre de 1996, en la que se determinó la Delimitación, Destino y Asignación de las Tierras Ejidales; y por Decreto Presidencial de fecha 4 de junio de 1998, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 9 de junio de 1998, se expropió al ejido "SANTO TOMÁS", Municipio de Zempoala, Estado de Hidalgo, una superficie de 5-59-13 Has., a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para destinarse al derecho de vía necesario para la construcción de la carretera México-Tuxpan, tramo Pirámides-Tulancingo.

RESULTANDO CUARTO.- Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización, mediante avalúo No. 02 1086 DF de fecha 29 de agosto del 2002, con vigencia de seis meses contados a partir de la fecha de su emisión, habiendo considerado el valor comercial que prescribe el artículo 94 de la Ley Agraria, asignando como valor unitario el de $40,500.00 por hectárea, por lo que el monto de la indemnización a cubrir por la 1-37-04 Ha., de terrenos de temporal a expropiar es de $55,501.20.

Que existe en las constancias el dictamen de la Secretaría de la Reforma Agraria, emitido a través de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, relativo a la legal integración del expediente sobre
la solicitud de expropiación; y

CONSIDERANDO:

ÚNICO.- Que de las constancias existentes en el expediente integrado con motivo de la solicitud de expropiación se ha podido observar que se cumple con la causa de utilidad pública, consistente en la construcción de carreteras y demás obras que faciliten el transporte, por lo que es procedente se decrete
la expropiación solicitada por apegarse a lo que establecen los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, fracción VII y 94 de la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Esta expropiación que comprende la superficie de 1-37-04 Ha., de temporal de uso común, de terrenos del ejido "SANTO TOMÁS", Municipio de Zempoala, Estado de Hidalgo, será a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para destinarlos a la construcción de la carretera México-Tuxpan, tramo Pirámides-Tulancingo. Debiéndose cubrir por la citada dependencia la cantidad de $55,501.20 por concepto de indemnización en favor del ejido de referencia o de las personas que acrediten tener derecho a ésta.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, he tenido
a bien dictar el siguiente

DECRETO:

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-37-04 Ha., (UNA HECTÁREA, TREINTA Y SIETE ÁREAS, CUATRO CENTIÁREAS) de temporal de uso común, de terrenos del ejido "SANTO TOMÁS", Municipio de Zempoala del Estado de Hidalgo, a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien las destinará a la construcción de la carretera México-Tuxpan, tramo Pirámides-Tulancingo.

La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma Agraria, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en el Registro Agrario Nacional en su carácter de órgano administrativo desconcentrado de esa dependencia.

SEGUNDO.- Queda a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagar por concepto de indemnización por la superficie que se expropia, la cantidad de $55,501.20 (CINCUENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS UN PESOS 20/100 M.N.), suma que pagará en términos de los artículos 94 y 96 de

la Ley Agraria y 80 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en la inteligencia de que los bienes objeto de la expropiación, sólo podrán ser ocupados de manera definitiva mediante el pago que efectúe al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a éste, o depósito que hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, establezca garantía suficiente. Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el exacto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Agraria y en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin distinto o no sea aplicada en un término de cinco años al objeto de la expropiación, demandará la reversión de la totalidad o de la parte de los terrenos expropiados que no se destine o no se aplique conforme a lo previsto por el precepto legal antes referido. Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones legales necesarias para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio.

TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 94, último párrafo, de la Ley Agraria y 88 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, una vez publicado el presente Decreto en el **Diario Oficial de la Federación**, sólo procederá a su ejecución cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, haya acreditado el pago o depósito de la indemnización señalada en el resolutivo que antecede; la inobservancia de esta disposición será motivo de sujeción a lo establecido en el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CUARTO.- Publíquese en el **Diario Oficial de la Federación** e inscríbase el presente Decreto por el que se expropian terrenos del ejido "SANTO TOMÁS", Municipio de Zempoala del Estado de Hidalgo, en el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de diciembre de dos mil dos.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- CÚMPLASE: La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, **Pedro Cerisola y Weber**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-09-00 hectárea de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Nexpa, Municipio de Lázaro Cárdenas, Mich. (Reg.- 270)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo de la propia Constitución; 93, fracción VII, 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria; en relación con los artículos 59, 60, 64, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 88 y 90 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, y

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio número CAJ/SA/315/00 de fecha 8 de agosto del 2000, la Comisión Federal de Electricidad solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 0-09-00 Ha., de terrenos del ejido denominado "NEXPA", Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán, para destinarlos a la construcción de la caseta para equipo repetidor de comunicación denominada Nexpa, conforme a lo establecido en los artículos 93, fracción VII y 94 de la Ley Agraria, y se comprometió a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. Iniciado el procedimiento relativo, de los trabajos técnicos e informativos se comprobó que existe una superficie real por expropiar de 0-09-00 Ha., de agostadero de uso común.

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados los trabajos técnicos mencionados en el resultando anterior y analizadas las constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial de fecha 10 de agosto de 1983, publicada en el **Diario Oficial de la**

Federación el 16 de agosto de 1983 y ejecutada el 6 de octubre de 1991, se concedió por concepto de dotación de tierras para constituir el ejido "NEXPA", Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Michoacán, una superficie de 5,994-00-00 Has., para los usos colectivos de 82 capacitados en materia agraria, más la parcela escolar; y por Decreto Presidencial de fecha 24 de noviembre de 1993, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 7 de enero de 1994, se expropió al ejido "NEXPA", Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Michoacán, una superficie de 1-00-00 Ha., a favor de la Secretaría de Marina, para destinarse a establecer una base de operaciones de infantería de marina.

RESULTANDO TERCERO.- Que la superficie por expropiar se encuentra ocupada por la Comisión Federal de Electricidad, con la construcción de la caseta para equipo repetidor de comunicación denominada Nexpa, y por tanto la citada superficie no es susceptible de labores agrícolas, por lo que procede tramitar el presente instrumento, a fin de regularizar la situación jurídica imperante, y en consecuencia, obtener para el núcleo agrario el pago de la indemnización correspondiente.

RESULTANDO CUARTO.- Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización, mediante avalúo No. LEN 02 0806 de fecha 9 de septiembre del 2002, con vigencia de seis meses contados a partir de la fecha de su emisión, habiendo considerado el valor comercial que prescribe el artículo 94 de la Ley Agraria, asignando como valor unitario el de $119,448.00 por hectárea, por lo que el monto de la indemnización a cubrir por la 0-09-00 Ha., de terrenos de agostadero a expropiar es de $10,750.32.

Que existe en las constancias el dictamen de la Secretaría de la Reforma Agraria, emitido a través de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, relativo a la legal integración del expediente sobre la solicitud de expropiación; y

CONSIDERANDO:

ÚNICO.- Que de las constancias existentes en el expediente integrado con motivo de la solicitud de expropiación se ha podido observar que se cumple con la causa de utilidad pública, consistente en la construcción de obras sujetas a las vías generales de comunicación, por lo que es procedente se decrete la expropiación solicitada por apegarse a lo que establecen los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, fracción VII y 94 de la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Esta expropiación que comprende la superficie de 0-09-00 Ha., de agostadero de uso común, de terrenos del ejido "NEXPA", Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Michoacán, será a favor de la Comisión Federal de Electricidad para destinarlos a la construcción de la caseta para equipo repetidor de comunicación denominada Nexpa. Debiéndose cubrir por la citada Comisión la cantidad de $10,750.32 por concepto de indemnización en favor del ejido de referencia o de las personas que acrediten tener derecho a ésta.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, he tenido a bien dictar el siguiente

DECRETO:

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-09-00 Ha., (NUEVE ÁREAS) de agostadero de uso común, de terrenos del ejido "NEXPA", Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Michoacán, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, quien las destinará a la construcción de la caseta para equipo repetidor de comunicación denominada Nexpa.

La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma Agraria, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en el Registro Agrario Nacional en su carácter de órgano administrativo desconcentrado de esa dependencia.

SEGUNDO.- Queda a cargo de la Comisión Federal de Electricidad pagar por concepto de indemnización por la superficie que se expropia, la cantidad de $10,750.32 (DIEZ MIL, SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 32/100 M.N.), suma que pagará en términos de los artículos 94 y 96 de la Ley Agraria y 80 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en la inteligencia de que los bienes objeto de la expropiación, sólo podrán ser ocupados de manera definitiva mediante el pago que efectúe al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a éste, o depósito que hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, establezca garantía suficiente. Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el exacto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Agraria y en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin distinto o no sea aplicada en un término de cinco años al objeto de la expropiación, demandará la reversión de la totalidad o de la parte de los terrenos expropiados que no se destine o no se aplique conforme a lo previsto por el precepto legal antes referido. Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones legales necesarias para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio.

TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 94, último párrafo, de la Ley Agraria y 88 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, una vez publicado el presente Decreto en el **Diario Oficial de la Federación**, sólo procederá a su ejecución cuando la Comisión Federal de Electricidad, haya acreditado el pago o depósito de la indemnización señalada en el resolutivo que antecede; la inobservancia de esta disposición será motivo de sujeción a lo establecido en el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CUARTO.- Publíquese en el **Diario Oficial de la Federación** e inscríbase el presente Decreto por el que se expropian terrenos del ejido "NEXPA", Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán, en el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de diciembre de dos mil dos.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- CÚMPLASE: La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Mayte, expediente número 734611, Municipio de Calakmul, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734611, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734611, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Mayte", con una superficie de 19-64-99 (diecinueve hectáreas, sesenta y cuatro áreas, noventa y nueve centiáreas), localizado en el Municipio de Calakmul del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 2 de noviembre de 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 711269, de fecha 26 de marzo de 2001 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 57 minutos, 59 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 22 minutos, 35 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunto terreno nacional

AL SUR: Juan Ramírez Hernández

AL ESTE: Presunto terreno nacional

AL OESTE: Predio "La Subidita" de Estela Pérez Velasco

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 26 de marzo de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 711269, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 19-64-99 (diecinueve hectáreas, sesenta y cuatro áreas, noventa y nueve centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 57 minutos, 59 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 22 minutos, 35 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunto terreno nacional

AL SUR: Juan Ramírez Hernández

AL ESTE: Presunto terreno nacional

AL OESTE: Predio "La Subidita" de Estela Pérez Velasco

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 19-64-99 (diecinueve hectáreas, sesenta y cuatro áreas, noventa y nueve centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio El Yanete, expediente número 734612, Municipio de Calakmul, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734612, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734612, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "El Yanete", con una superficie de 23-54-39 (veintitrés hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, treinta y nueve centiáreas), localizado en el Municipio de Calakmul del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 2 de noviembre de 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712796, de fecha 7 de noviembre de 2001 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 00 minutos, 24 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 23 minutos, 36 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunto terreno nacional Nuevo San José

AL SUR: Predio "La Escondida" de Eustorgio Salvatierra Pelayo

AL ESTE: Predio "Buenos Aires" de Aurora Gómez Arcos

AL OESTE: Ejido "Ley de Fomento Agropecuario"

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 7 de noviembre de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712796, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 23-54-39 (veintitrés hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, treinta y nueve centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 00 minutos, 24 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 23 minutos, 36 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunto terreno nacional Nuevo San José

AL SUR: Predio "La Escondida" de Eustorgio Salvatierra Pelayo

AL ESTE: Predio "Buenos Aires" de Aurora Gómez Arcos

AL OESTE: Ejido "Ley de Fomento Agropecuario"

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 23-54-39 (veintitrés hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, treinta y nueve centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Buenos Aires, expediente número 734613, Municipio de Calakmul, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734613, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734613, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Buenos Aires", con una superficie de 16-84-69 (dieciséis hectáreas, ochenta y cuatro áreas, sesenta y nueve centiáreas), localizado en el Municipio de Calakmul del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 2 de noviembre de 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712797, de fecha 7 de noviembre de 2001 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 00 minutos, 26 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 23 minutos, 26 segundos, y colindancias:

AL NORTE:	Presunto terreno nacional Nuevo San José
AL SUR:	Predio "La Escondida" de Eustorgio Salvatierra Pelayo
AL ESTE:	Predios "Camino de Luz" y "San José" de José Narváez Flores y José Santo Vázquez González
AL OESTE:	Predio "El Yanete" de Alberto Gómez Flores

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y

115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 7 de noviembre de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712797, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 16-84-69 (dieciséis hectáreas, ochenta y cuatro áreas, sesenta y nueve centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 00 minutos, 26 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 23 minutos, 26 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunto terreno nacional Nuevo San José

AL SUR: Predio "La Escondida" de Eustorgio Salvatierra Pelayo

AL ESTE: Predios "Camino de Luz" y "San José" de José Narváez Flores y José Santo Vázquez González

AL OESTE: Predio "El Yanete" de Alberto Gómez Flores

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 16-84-69 (dieciséis hectáreas, ochenta y cuatro áreas, sesenta y nueve centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Camino de Luz, expediente número 734614, Municipio de Calakmul, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734614, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734614, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Camino de Luz", con una superficie de 18-39-42 (dieciocho hectáreas, treinta y nueve áreas, cuarenta y dos centiáreas), localizado en el Municipio de Calakmul del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 2 de noviembre de 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712798, de fecha 7 de noviembre de 2001 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 00 minutos, 30 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 23 minutos, 08 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunto terreno nacional Nuevo San José

AL SUR: Predio "San José" de José Santo Vázquez González

AL ESTE: Predio "La Esperanza" de Pedro López Trinidad

AL OESTE: Predio "Buenos Aires" de Aurora Gómez Arcos

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 7 de noviembre de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712798, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 18-39-42 (dieciocho hectáreas, treinta y nueve áreas, cuarenta y dos centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 00 minutos, 30 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 23 minutos, 08 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunto terreno nacional Nuevo San José

AL SUR: Predio "San José" de José Santo Vázquez González

AL ESTE: Predio "La Esperanza" de Pedro López Trinidad

AL OESTE: Predio "Buenos Aires" de Aurora Gómez Arcos

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 18-39-42 (dieciocho hectáreas, treinta y nueve áreas, cuarenta y dos centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio La Esperanza, expediente número 734615, Municipio de Calakmul, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734615, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734615, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "La Esperanza", con una superficie de 19-26-96 (diecinueve hectáreas, veintiséis áreas, noventa y seis centiáreas), localizado en el Municipio de Calakmul del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 2 de noviembre de 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712898, de fecha 30 de enero de 2002 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 00 minutos, 29 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 22 minutos, 50 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunto terreno nacional Nuevo San José

AL SUR: Predio "El Porvenir" de Encarnación Trinidad Hernández

AL ESTE: Predio "Las Ilusiones" de Alfredo Narváez Pérez

AL OESTE: Predio "Camino de Luz" de José Narváez Flores

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 30 de enero de 2002 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712898, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 19-26-96 (diecinueve hectáreas, veintiséis áreas, noventa y seis centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 00 minutos, 29 segundos; y de longitud Oeste 89 grados, 22 minutos, 50 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunto terreno nacional Nuevo San José

AL SUR: Predio "El Porvenir" de Encarnación Trinidad Hernández

AL ESTE: Predio "Las Ilusiones" de Alfredo Narváez Pérez

AL OESTE: Predio "Camino de Luz" de José Narváez Flores

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 19-26-96 (diecinueve hectáreas, veintiséis áreas, noventa y seis centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 30 de mayo de 2002.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Gilberto José Hershberger Reyes**.- Rúbrica.- La Directora General de Ordenamiento y Regularización, **María del Rosario Garza Alejandro**.- Rúbrica.

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido

el día de hoy conforme al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de $10.2724 M.N.

(DIEZ PESOS CON DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente

México, D.F., a 6 de diciembre de 2002.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Operaciones Nacionales
Fernando Corvera Caraza	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

	TASA BRUTA		**TASA BRUTA**
I. DEPOSITOS A PLAZO FIJO		II. PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
A 60 días		A 28 días	
Personas físicas	3.65	Personas físicas	3.04
Personas morales	3.65	Personas morales	3.04
A 90 días		A 91 días	
Personas físicas	3.70	Personas físicas	3.35
Personas morales	3.70	Personas morales	3.35
A 180 días		A 182 días	
Personas físicas	3.88	Personas físicas	3.75
Personas morales	3.88	Personas morales	3.75

Las tasas a que se refiere esta publicación, corresponden al promedio de las determinadas por las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general a la apertura del día 6 de diciembre de 2002. Se expresan en por ciento anual y se dan a conocer para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989.

México, D.F., a 6 de diciembre de 2002.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Director de Información del Sistema Financiero
Fernando Corvera Caraza	**Cuauhtémoc Montes Campos**
Rúbrica.	Rúbrica.

(R.- 171973)

TASA de interés interbancaria de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple, se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, obtenida el día de hoy, fue de 8.2900 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: BBVA Bancomer, S.A., Banca Serfin S.A., Banco Internacional S.A., Banco Nacional de México S.A., Banco Interacciones S.A., Banco J.P.Morgan S.A., ING Bank México S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil Del Norte S.A.

México, D.F., a 6 de diciembre de 2002.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Operaciones Nacionales
Fernando Corvera Caraza	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

PROVEEDORA PARA SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Activo	53,735.32
Pasivo	640,813.77
Capital social	350,000.00
Otras cuentas de capital	(937,078.65)
Total capital contable	(587,078.65)
Suma pasivo y capital contable	53,735.12

México, D.F., a 23 de octubre de 2002.
Liquidador
Carlos Castro Fernández Guerra
Rúbrica.
(R.- 170376)

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Primero de Distrito
Puebla, Pue.

EDICTO

Disposición Juez Primero de Distrito Estado, Puebla, amparo 1336/2002, quejosa: Irma Bello Ortega, por propio derecho. Autoridad responsable: Juez Civil Teziutlán, Puebla y otras. Acto reclamado: irregular procedimiento y sentencia 397/996. Emplácese mediante edictos a Rafael Delgado Pérez y Angel Carmona Arellano, que en término de treinta días, contados a partir del día siguiente a la última publicación, comparezca ante este juzgador federal deducir sus derechos. Edictos será publicado por tres veces consecutivas de siete en siete días en el **Diario Oficial Federación** y Excélsior. Copia demanda disposición en Secretaría.

Puebla, Pue., a 4 de noviembre de 2002.

El Actuaria

Lic. Alejandra Siliceo Rodríguez

Rúbrica.

(R.- 170495)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Séptima Sala Civil

EDICTO

En el cuaderno de amparo deducido del toca número 2472/2002, sustanciado ante la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Montoya Miranda Víctor en contra de Francisca Medina Palomino y otro, se ordenó emplazar por medio de edictos a la tercera perjudicada Francisca Medina Palomino, para que comparezca a esta Sala dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente de la última publicación de los presentes edictos que se hará de siete en siete por tres veces en el **Diario Oficial de la Federación** y en periódico El Sol de México, y en caso de no hacerlo se seguirá el juicio de garantías en rebeldía por lo que la tercera perjudicada, deberá señalar domicilio dentro de la jurisdicción de esta Sala. Quedando a su disposición en esta Sala copia de traslado de la demanda de amparo interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia de fecha cuatro de septiembre del año en curso, apercibido que de no hacerlo se seguirá el juicio de amparo en su rebeldía.

México, D.F., a 18 de noviembre de 2002.

El C. Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Civil
Lic. Ricardo Iñigo López
Rúbrica.
(R.- 171037)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
EDICTO
Dirigido a Enterprise Electronics Corporation

En los autos del Juicio Ordinario Civil 139/2001, promovido por La Federación, Comisión Nacional del Agua, se admitió la demanda mediante proveído de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil uno, por medio de la cual la parte actora demanda en vía ordinaria civil federal a Enterprise Electronics Corporation las siguientes prestaciones:

a) El pago de la cantidad de USD 17,409.37 (diecisiete mil cuatrocientos nueve dólares 37/100 U.S.C.Y.), por concepto de sanción por desfasamiento en la entrega de los bienes materia del contrato base de la acción, prevista en la cláusula segunda del contrato pedido número 094/94, formalizado el21 de julio de 1994.

b) El pago de los correspondientes intereses moratorios al tipo legal, generados a partir de la fecha en que se hizo exigible la suerte principal y hasta el momento en que se cubran en su totalidad, los cuales serán cuantificados en ejecución de sentencia.

c) Como consecuencia de lo anterior, la declaración en el sentido de que deberá realizarse la afectación de la fianza número III-241827-DI, de fecha 5 de julio de 1994, por la cantidad de USD 17,409.37 (diecisiete mil cuatrocientos nueve dólares 37/100 U.S.C.Y.), expedida por Fianzas Atlas, S.A. en la que estableció que ésta encontraría vigente durante la substanciación de todos los recursos o juicios legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

d) El pago de gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.

Demanda que fue admitida por este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal mediante proveído de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil uno, y mediante proveído de fecha veintidós de octubre del presente año, se ordenó emplazar por medio de edictos publicados por tres veces, de siete en siete días, a Enterprise Electronics Corporation, haciéndole saber que cuenta con el término de treinta días, siguientes a la última publicación para contestar la demanda interpuesta en su contra, quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaría de este Juzgado, con el apercibimiento que en caso de no comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones incluso las personales se harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado.

México, D.F, .a 22 de octubre de 2002.

La Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
Ana Lilia Olvera Arizmendi
Rúbrica.
(R.- 171047)

AVISO NOTARIAL

TOMAS LOZANO MOLINA; Notario Número Diez del Distrito Federal, hago saber para los efectos del artículo 873 del Código de Procedimientos Civiles que en escritura número 284,691 de fecha 5 de noviembre de 2002 ante mí, se inició la tramitación notarial de la sucesión testamentaria a bienes de doña Josefina Delgadillo Martín.

Don Elías Cuéllar Delgadillo, don Javier Humberto Cuéllar Delgadillo, quien también acostumbra usar el nombre de Javier Cuéllar Delgadillo y doña Guadalupe Guillermina Cuéllar Delgadillo, quien también acostumbra usar el nombre de Guadalupe Cuéllar Delgadillo, reconocieron la validez del testamento, otorgado por la autora de la sucesión así como sus derechos, aceptaron el legado y la herencia dejada a su favor y la primera aceptó el cargo de albacea que le fue conferido, y manifestó que en su oportunidad formulará el inventario correspondiente.

Atentamente

México, D.F., a 13 de noviembre de 2002.

Notario No. 10

Lic. Tomás Lozano Molina

Rúbrica.

(R.- 171131)

INMOBILIARIA SOFIMEX MEXICO, S.A. DE C.V.

(EN LIQUIDACION)

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2002

El siguiente balance se publica para cumplir con lo dispuesto por la fracción II del artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De acuerdo con dicho balance, existe un reembolso de $697.6915 M.N. por acción.

Activo

Efectivo e inversiones	$ 20,930,747.00
Capital contable	
Capital social pagado	$30,000.00
Otras cuentas de capital	$ 20,900,747.00
Suma el capital contable	$ 20,930,747.00

México, D.F., 26 de noviembre de 2002.

Liquidador

C.P. Manuel Torres Salas

Rúbrica.

(R.- 171351)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero
Coordinación de Investigación y Seguimiento

EDICTO

Ciudad de México, Distrito Federal a once de noviembre de dos mil dos.

Se notifica a la C. Mercedes Amira Albert Curi, o a su representante legal, o a quien resulte legalmente con derecho, el acuerdo de aseguramiento provisional de fecha cinco de julio del año dos mil dos, dictado en actuaciones de la indagatoria PGR/017/LD/2002, por el cual se decretó el aseguramiento provisional de mil trescientos cincuenta billetes de dinares iraquíes, cada uno de ellos con denominación de doscientos cincuenta; lo anterior a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero, ubicadas en avenida Plaza de la República, número 35, 2o. piso, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal, lugar en donde se ponen a su disposición las constancias conducentes al citado aseguramiento; asimismo, se le apercibe que en caso de no manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo de seis meses que señala el artículo 44 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, a partir de la presente notificación, dicho numerario causara abandono a favor de la Federación.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El C. Agente del Ministerio Público de la Federación,
adscrito a la Unidad Especializada Contra
El Lavado de Dinero
Lic. Jesús Castro Jácome
Rúbrica.

(R.- 171579)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Octava Sala Civil
EDICTO
Juan Crisóstomo Bonilla.
En los autos del Toca 641/2002, relativo al juicio ordinario civil seguido por Novelo Galindo Sergio en contra de Juan Luis Bonilla Castellanos y otro. Se ha interpuesto juicio de amparo en contra de la resolución dictada por esta Sala con fecha veintisiete de agosto del año dos mil dos, por lo que se ordenó emplazarlo por edictos, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de treinta días, ante la autoridad que por turno le corresponda conocer del juicio de amparo, contados del día siguiente al de la última publicación.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación** y el periódico El Heraldo de México así como en los estrados de esta Sala.
Atentamente
México, D.F., a 13 de noviembre de 2002.
C. Secretario de Acuerdos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Lic. Rogelio Bravo Acosta
Rúbrica.
(R.- 171602)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito
Sección Amparos Mesa VI
Ciudad Juárez, Chih.

EDICTO

C. Agustín Dupón Jiménez.

Por medio del presente le hago saber que Gudelia Velazco Sánchez, promovieron ante este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, el juicio de amparo VI-540/01, contra actos del Juez Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, los cuales hizo consistir en: todo lo actuado en el expediente 1319/01, radicado en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos a partir del día veinte de julio de mil novecientos noventa y seis, pero específica y concretamente señala como acto reclamado el auto de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, en el cual se tiene por presentado a Agustín Dupón exhibiendo el billete de depósito número 566396 valioso por la cantidad de $194,764.80 (ciento ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos), el cual hace el pago total del inmueble que fue rematado en su favor, por lo que se declara fincado y adjudicado el remate celebrado el diez de marzo de dos mil uno, a favor de usted libre de todo gravamen.

En razón de que se ignora su domicilio, por auto de fecha cinco de noviembre del año en curso, se le manda emplazar por medio de este edicto que se publicará por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en un periódico de mayor circulación en la República y en uno de esta ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, una copia del presente, por todo el tiempo del emplazamiento.

Asimismo se le hace saber que deberá presentarse en este Juzgado a hacer valer sus derechos, dentro del término de treinta días, iniciado a contar a partir del siguiente al de la última publicación respectiva en el **Diario Oficial de la Federación,** en el concepto de que si no lo hace así, las ulteriores notificaciones se le harán por lista que se fijará en los estrados de este Juzgado.

Lo anterior con fundamento en los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Ciudad Juárez, Chih., a 19 de noviembre de 2002.

La Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado

Lic. María Guadalupe Ruiz Flores

Rúbrica.

(R.- 171629)

Comisión Nacional del Agua
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Gerencia Estatal en San Luis Potosí
LICITACION PUBLICA
CNA-SLP-01/2002
CONVOCATORIA

La Comisión Nacional del Agua, Organo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Gerencia Estatal en San Luis Potosí, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley General de Bienes Nacionales y las Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal, invita a las personas físicas y morales a participar en la enajenación mediante licitación pública de bienes muebles número CNA-SLP-01/2002, que se describen a continuación:

Lote No.	Descripción de los bienes	Precio mínimo de avalúo
Unico	Bienes diversos instrumentales inutilizables (equipo de oficina, maquinaria, aparatos e instrumentos, etc.) y 10 vehículos inutilizables.	$288,506.15

Las bases de esta enajenación estarán a su disposición para su consulta en la página de Internet de esta Comisión Nacional del Agua y colocadas en lugares visibles en la Gerencia Estatal en San Luis Potosí. La entrega de las bases, especificaciones y cédula de ofertas será en el Almacén General de la Gerencia Estatal en San Luis Potosí, ubicado en avenida Sindicatos número 100, esquina con Eje 118, código postal 78395, teléfono 01-444-8-24-63-45 en San Luis Potosí, S.L.P.y en la Subgerencia de Almacenes, ubicada en Privada de Relox número 16-A, colonia Copilco El Bajo, código postal 04340 México, Distrito Federal en días hábiles del 9 al 19 de diciembre de 2002, de 10:00 a 14:00 horas con un costo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), en cheque de caja o certificado a favor de la Tesorería de la Federación.

Los bienes podrán inspeccionarse los días del 9 al 19 de diciembre de 2002, de 10:00 a 14:00 horas en el Almacén General de la Gerencia Estatal en San Luis Potosí, ubicado en avenida Sindicatos número 100 esquina con Eje 118,código postal 78395 y teléfono 01-444-824-63-45, San Luis Potosí, S.L.P.; Distrito 005 en Ciudad Valles, S.L.P., bulevar México-Laredo Sur número 66, Altos, código postal 79000 y teléfono 01-481-3-82-27-36 y en Distrito 092 en Ebano S.L.P., carretera Valles-Tampico kilómetro 80, código postal 79295 y teléfono 01-845-2-63-23-90, previa presentación del recibo original de pago de bases.

El registro de inscripción de los interesados se llevará a cabo en el domicilio donde se celebrará la licitación, el día 20 de diciembre de 2002, de 10:00 a 11:00 horas, debiendo garantizar su oferta mediante cheque de caja o certificado, expedido a favor de la Tesorería de la Federación por el importe de10% exacto del precio mínimo de venta de los bienes, materia de la presente licitación.

El acto de apertura de ofertas de la enajenación se llevará a cabo en el Almacén General de la Gerencia Estatal en San Luis Potosí, ubicada en avenida Sindicatos número 100, esquina con Eje 118 y teléfono 01-444-8-24-63-45 San Luis Potosí, S.L.P., el día 20 de diciembre de 2002 a las 12:00 horas.

El participante adjudicado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la orden de entrega, para el retiro de los bienes.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Luis Potosí, S.L.P., a 9 de diciembre de 2002.
El Gerente Estatal
Ing. Ricardo Eugenio Garza Blanc
Rúbrica.
(R.- 171759)

HARNEY LLC

GRUPO ESRU, S. DE R.L. DE C.V.

AVISO DE FUSION

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se informa que por resolución de la asamblea general extraordinaria de socios de Grupo Esru, S. de R.L. de C.V., celebrada el día 19 de noviembre de 2002, y conforme a la resolución unánime de los socios de Harney LLC, adoptada el día 18 del mismo mes y año, se acordó la fusión de ambas sociedades, subsistiendo Harney LLC, como sociedad fusionante y desapareciendo Grupo Esru, S. de R.L. de C.V., en su carácter de sociedad fusionada, de conformidad con los siguientes:

ACUERDOS DE FUSION

A).- Grupo Esru, S. de R.L. de C.V., una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable constituida de conformidad con lo dispuesto por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de sociedad fusionada, se fusiona en y con Harney LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en su carácter de sociedad fusionante.

B).- La denominación de la sociedad fusionante continuará siendo Harney LLC.

C).- Que según se expresa en el convenio de fusión debidamente suscrito por los delegados especiales de las respectivas asambleas de socios, con fecha 2 de diciembre de 2002, la fusión surtirá plenos efectos entre las partes en la fecha en que se presente el certificado de fusión ante el secretario de Estado del Estado de Delaware, en la forma prevista por las leyes del mencionado Estado.

D).- Las sociedades fusionante y fusionada manifiestan que a la fecha de celebración del convenio de fusión, no tienen registrado pasivo alguno. No obstante, para los efectos que señala el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cualquier deuda que llegare a surgir a cargo de la sociedad fusionada o de la sociedad fusionante, será inmediatamente pagada por la sociedad fusionante, independientemente de que dicha deuda se encuentre o no vencida.

E).- En virtud de la fusión, y al surtir ésta sus efectos según se señala en el punto que antecede, todos los bienes, derechos, privilegios, franquicias, licencias, registros y todos los activos, pasivos y responsabilidades de cualquier clase o naturaleza que fuere que hubieren correspondido a Grupo Esru, S. de R.L. de C.V., pasarán sin reserva ni limitación alguna a Harney LLC.

F).- El Certificado de Constitución y el convenio de sociedad de Responsabilidad Limitada y estatutos de Harney LLC, vigentes inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor, continuarán con plena validez y efecto como el Certificado de Constitución y convenio de sociedad de Responsabilidad Limitada y estatutos de la sociedad fusionante, hasta que sean reformados con posterioridad, conforme a las leyes aplicables y a los términos respectivos de los mismos.

G).- En la fecha de entrada en vigor, por virtud de la fusión y sin necesidad de acción alguna por parte de los titulares de los mismos, las partes sociales que los socios de la sociedad fusionada tengan antes de la fecha en que la fusión surta efectos, se convertirán automáticamente en partes sociales o unidades de la sociedad fusionante.

H).- Durante un período de diez (10) años siguientes a la fecha de entrada en vigor, tanto el señor Víctor M. Herrera García como el señor Alfonso Ferreira León, con domicilio en Rubén Darío 281, despacho 1701, México Distrito Federal, 11580, actuarán indistintamente como los agentes de la sociedad fusionante, para recibir toda clase de notificaciones y otros documentos en su representación y para actuar como custodios de los libros y registros de la sociedad fusionada, Grupo Esru, S. de R.L. de C.V., durante todo el tiempo anterior a la fecha de entrada en vigor, cuyos originales permanecerán en México durante dicho período, así como para cubrir cualesquier deuda o responsabilidad que deba ser pagada por la sociedad fusionante.

Se extiende esta certificación, para todos los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 3 días del mes de diciembre de 2002.

El Delegado Especial de las Asambleas

Alfonso Ferreira León

Rúbrica.

GRUPO ESRU, S. DE R.L. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2002

miles de pesos

Activo

Efectivo		9,599
Inversión en subsidiaria		3,136,557
		3,146,156
Pasivo y capital contable		
Cuenta por pagar ya liquidada a la fecha de formulación de este estado		397
Capital social	3,309,419	
Actualización del capital social	2,050,731	
		5,360,150
Déficit acumulado		(2,214,391)
		3,145,759
		3,146,156

México, D.F., a 3 de diciembre de 2002.

Delegado Especial de la Asamblea
Alfonso Ferreira León
Rúbrica.

(R.- 171763)

HUSSMANN-AMERICAN, S. DE R.L. DE C.V.

HUSSMANN-INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

AVISO DE FUSION

Mediante Resoluciones de los socios de Hussmann-American, S. de R.L. de C.V. y de los accionistas de Hussmann-Inmobiliaria, S.A. de C.V., ambas adoptadas fuera de asamblea con fecha 4 de noviembre de 2002, dichas sociedades acordaron fusionarse de conformidad con el siguiente:

CONVENIO DE FUSION

Convenio de fusión que celebran, por una parte, Hussmann-American, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo American) y, por la otra parte Hussmann-Inmobiliaria, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Inmobiliaria), de conformidad con las siguientes:

Cláusulas:

Primera. American e Inmobiliaria convienen en fusionarse conforme a los términos y condiciones que se estipulan en las siguientes Cláusulas, subsistiendo American como sociedad fusionante y desapareciendo Inmobiliaria, como sociedad fusionada.

Segunda. American e Inmobiliaria convienen en que la fusión se lleve a cabo con base en las cifras que aparecen en sus respectivos balances al 31 de octubre de 2002, con los ajustes que procedan, derivados de las operaciones realizadas por cada una de ellas hasta el 31 de diciembre de 2002.

Tercera. En virtud de lo estipulado en las cláusulas precedentes, al consumarse la fusión, American se convertirá en propietaria, a título universal, del patrimonio de Inmobiliaria, comprendiendo todo el activo y todo el pasivo, sin reserva ni limitación alguna. En consecuencia, American se subrogará en todos los derechos, obligaciones, acciones y garantías que puedan corresponder a Inmobiliaria, por virtud de contratos, convenios, licencias, permisos, concesiones y, en general, por cualesquiera actos y operaciones realizadas por u otorgados a esta última sociedad, con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda.

Cuarta. Al consumarse la fusión, se cancelarán las 5,000 (cinco mil) acciones que actualmente representan el capital social suscrito y pagado de Inmobiliaria.

La fusión implicará un aumento en la parte variable del capital social de American por monto de $49,990.00 (cuarenta y nueve mil novecientos noventa pesos 00/100) M.N., equivalente a la participación de la accionista mayoritaria en el capital social de Inmobiliaria, mismo aumento que será representado mediante el incremento del valor de la parte social de la Clase II, representativa de la parte variable del capital social de American, propiedad de dicha accionista, en la suma de $49,990.00 (cuarenta y nueve mil novecientos noventa pesos 00/100) M.N.

A cambio de sus 4,999 (cuatro mil novecientos noventa y nueve) acciones, la accionista mayoritaria de Inmobiliaria incrementará en la suma antes indicada el valor de la parte social de la clase II, representativa de la parte variable del capital social de American de que hoy es propietaria. Por su parte y a cambio de la acción de su propiedad, el accionista minoritario de Inmobiliaria recibirá en efectivo el valor nominal de la misma.

Quinta. Al consumarse la fusión, todos y cada uno de los poderes, facultades y autorizaciones conferidos con anterioridad por Inmobiliaria y que se encuentren en vigor a dicha fecha, quedarán cancelados y sin efecto legal alguno.

Sexta. La fusión surtirá plenos efectos entre las partes, precisamente el 1 de enero de 2003 y, frente a terceros, en la misma fecha, siempre y cuando para entonces, los acuerdos contenidos en el presente Convenio hayan sido debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal y se haya obtenido el consentimiento de la totalidad de los respectivos acreedores de American e Inmobiliaria o, en su defecto, se cumplan los requisitos legales correspondientes en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Séptima. En todo lo no previsto, este Convenio queda sujeto a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás leyes aplicables, sometiéndose las partes, para la interpretación y cumplimiento del mismo, a los tribunales competentes de México, Distrito Federal.

El presente convenio se otorga por duplicado en México, Distrito Federal, el 4 de noviembre de 2002.

American

Hussmann-American, S. de R.L. de C.V.

Por: Raúl Federico Tejada Román

Rúbrica.

Inmobiliaria

Hussmann-Inmobiliaria, S.A. de C.V.
Por: David Allen Baumheckel
Rúbrica.

Para los efectos del artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a continuación se publican los últimos balances generales de Hussmann-American, S. de R.L. de C.V. y de Hussmann-Inmobiliaria, S.A. de C.V.:

HUSSMANN-AMERICAN, S. DE R.L. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2002
(pesos)

Activo		
Activo circulante		
Caja y bancos		14,470,879
Clientes		182,073,510
Otras cuentas por cobrar		51,994,909
Total cuentas por cobrar		234,068,419
Total inventarios	130,960,477	
Activo fijo		
Terreno, edificio, maquinaria	173,488,381	
Depreciación		-45,151,557
Total activo fijo	128,336,824	
Activo diferido		
Gastos pagados por adelantado	11,254,386	
Total activo		519,090,985
Pasivo y capital		
Pasivo circulante		
Préstamos bancarios		131,000,000
Proveedores	81,556,217	
Intercompañías		363,809,120
Acreedores diversos		-33,416,413
Impuestos por pagar		-13,423,522
Total cuentas por pagar	529,525,402	
Pasivo diferido		
Impuesto diferido	-38,299,985	
Capital		
Capital social y reservas		18,782,943
Utilidades (pérdidas) acumuladas		55,944,170
Utilidad (pérdida) del ejercicio		-46,861,545
Capital neto		27,865,568
Total pasivo y capital	519,090,985	

HUSSMANN-INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2002
(pesos)

Activo		
Activo circulante		
Caja y bancos		6,082
Total activo		6,082
Pasivo circulante		
Intercompañías		-683,665
Acreedores diversos		197,214
Impuestos por pagar		940,386
Total de cuentas por pagar		453,935
Pasivo diferido		
Impuesto diferido	-709,130	
Total pasivo diferido		-709,130
Capital		
Capital social y reservas		50,000

Utilidades (pérdidas) acumuladas	-3,646,692	
Utilidad (pérdida) del ejercicio	3,857,969	
Capital neto		261,277
Total pasivo y capital	6,082	

La presente publicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto por el capítulo IX de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

México, D.F., a 15 de noviembre de 2002.

Delegado Especial de los Socios y de los Accionistas de las sociedades que se fusionan

David A. Rangel Ortiz

Rúbrica.

(R.- 171766)

SOLUZIONA TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.
SOLUZIONA OPERACION Y MANTENIMIENTO MEXICO, S.A. DE C.V.
AVISO DE FUSION

Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V. y Soluziona Operación y Mantenimiento México, S.A. de C.V., celebradas con fecha 2 de diciembre de 2002, se acordó la fusión de dichas empresas, subsistiendo la primera de ellas y extinguiéndose la segunda por absorción.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publican los acuerdos tomados en las asambleas indicadas y adoptadas en las asambleas de accionistas de dichas empresas y pactados en el convenio de fusión celebrado con fecha 2 de diciembre de 2002, al tenor de lo siguiente:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Soluziona Operación y Mantenimiento México, S.A. de C.V., como sociedad fusionada transmite su patrimonio a título universal, sin reserva ni limitación alguna, en favor de Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V., como sociedad fusionante, quien subsiste y lo adquiere comprendiendo la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y responsabilidades de cualquier índole.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la fusión, Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V., asume y cubrirá todas las obligaciones patrimoniales a cargo de Soluziona Operación y Mantenimiento México, S.A. de C.V.; por tal motivo, la sociedad fusionada establece como sistema de extinción de pasivos el pago de los mismos de acuerdo a su exigibilidad por parte de la sociedad fusionante, en el entendido de que aquellos pasivos y derechos que existiesen entre dichas sociedades quedarán extinguidos al consolidarse estos en Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V.

TERCERA.- En los términos del artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en virtud de que los acreedores de las sociedades fusionada y fusionante han expresado su consentimiento para la fusión, Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V. y Soluziona Operación y Mantenimiento México, S.A. de C.V., han convenido que la fusión surtirá efectos a partir del día 31 de diciembre de 2002, debiéndose proceder a las inscripciones de la asamblea de accionistas de Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V. en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, mismo que corresponde al domicilio social de la sociedad fusionante y de la asamblea de accionistas de Soluziona Operación y Mantenimiento México, S.A. de C.V en el Registro Público de Comercio de Hermosillo, Sonora, mismo que corresponde al domicilio social de la sociedad fusionada.

CUARTA.- En virtud de la fusión acordada por Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V., como sociedad fusionante y Soluziona Operación y Mantenimiento México, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, los accionistas de dichas sociedades acordaron que el capital social de la sociedad fusionada se incorpore al capital social de la sociedad fusionante, el cual se incrementará proporcionalmente, conforme al monto del capital social de la sociedad fusionada, afectando la parte variable del capital social de la sociedad fusionante.

QUINTA.- En virtud de la fusión y la incorporación del capital social de la sociedad fusionada al capital social de la sociedad fusionante, los accionistas de la sociedad fusionada recibirán una acción representativa del capital social de la sociedad fusionante, por cada $1.00 (un peso 00/100 M.N.) de su participación en el capital social de la sociedad fusionada.

Asimismo, Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V. y Soluziona Operacion y Mantenimiento, S.A. de C.V., acordaron que en virtud de que la sociedad denominada Soluziona, S.A. de C.V., también será fusionada con Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V., las acciones representativas del capital social de Soluziona Operacion y Mantenimiento, S.A. de C.V. que son propiedad de Soluziona, S.A. de C.V., serán repartidas entre los accionistas de Soluziona, S.A. de C.V., en proporción a su participación en el capital social de esta sociedad.

SEXTA.- Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V., como sociedad fusionante y Soluziona Operación y Mantenimiento México, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, acuerdan que para efectos de la fusión, se tomarán como base los balances de dichas sociedades formulados por sus respectivos órganos de administración al día 31 y al 30 de octubre de 2002, respectivamente, los cuales se anexan al presente aviso de fusión.

México, Distrito Federal y Hermosillo, Sonora, a 3 de diciembre de 2002.

Delegada Especial de la Asamblea General Extraordinaria de

Soluziona Tecnologías de Información, S.A. de C.V. (sociedad fusionante), y de Soluziona Operación y Mantenimiento, S.A. de C.V. (sociedad fusionada)

Zaida Magdalena de Anda Alvarez

Rúbrica.

SOLUZIONA OPERACION Y MANTENIENTO MEXICO S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL

AL 30 DE OCTUBRE DEL 2002

Activo				
Circulante				
Fondo fijo de caja	59,219.47			
Bancos	27´595,518.30			
I.V.A. acreditable	324,891.97			
Crédito al salario	3,339.74			
Deudores diversos	1´030,773.38			
Funcionarios y empleados	595,460.21			
Anticipo a proveedores	91,879.75			
Ingresos por realizar	1´733,653.79			
Clientes	42´432,362.50			
Total circulante			73´867,099.11	
Fijo				
Mobiliario y Eq. de oficina	1,364.35			
Dep. de Mob. y Eq. de oficina		1,364.35		
Maquinaria y Eq. de trabajo	73,970.19			
Dep. de Maq. y Eq. de trabajo	33,639.31	40,330.88		
Equipo de transporte	2´398,788.13			
Dep. de Eq. de transporte	599,407.72	1´799,380.41		
Equipo de cómputo	175,263.65			
Dep. Eq. de cómputo	73,807.82	101,455.83		
Actualización de Eq. de transporte	44,408.00			
Act. de Depn. Acum. Eq. de transporte	12,265.00	32,143.00		
Actualización Eq. cómputo	4,005.00			
Dep. de Act. Eq. de Cómputo	1,252.00	2,753.00		
Actualización Maq. y Eq.	2,050.00			
Dep. Act. de Maq. y Eq.	205.00	1,845.00		
Total fijo			1´979,272.47	
Diferido				
Pago anticipado	241,217.15			
Pago provisional del I.S.R.	4´154,145.09			
Gastos del periodo preoperativo	323. 91			
Total diferido			4´395,686.15	
Total activo				80´242,057.73
Pasivo				
Corto plazo				
Proveedores				
Acreedores diversos	66´756,061.56			
I.V.A. por pagar	6´249,686.28			
Impuestos por pagar	807,256.17			
Cuentas por pagar	307.09			
Nominas por pagar	235,968.32			
Anticipos de clientes	4´818,656.66			
Total pasivo			78´867,936.08	
Capital contable				
Capital social	50,000.00			
Reserva legal				
Resultado de Ej. anteriores	-5´568,878.35			
Resultado de ejercicio en curso	6´893,000.00			

Actualización de capital contable		
Total capital	1´374,121.65	
Pasivo más capital		80´242,057.73

SOLUZIONA TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 2002

Activo	
Activos disponibles	
Caja	20,994
Bancos	1,447,560
Total activos disponibles	1,468,554
Activos circulantes	
Inversiones en valores (participaciones en empresas)	
Clientes	13,845,240
Clientes por facturar	
Deudores diversos	29,203,325
Prestamos de nominas	45,521
Anticipos a proveedores	
Estimación de obsolescencia	
I.V.A. por acreditar	
I.E.P.S. por acreditar	
Impuestos por recuperar	5,737,072
Total activos circulantes	48,831,158
Activos fijos	
Edificios	1,903,447
Mobiliario	4,209,564
Maquinaria	0
Equipos de transporte	307,773
Equipos de cómputo	1,723,369
Equipo periférico	0
Herramientas	0
Depreciación acumulada	-3,683,777
Total activos fijos	4,460,376
Activos diferidos	
Pagos anticipados	112,088
Depósitos en garantía	6,447,231
Gastos de organización	8,530
Gastos de instalación	
Amortización acumulada	-85,762
Otras cuentas por amortizar	
Total activos diferidos	6,482,087
Total activo	61,242,175
Pasivo y capital contable	
Pasivo a corto plazo	
Proveedores	5,194,071
Proveedores por facturar	
Acreedores diversos	5,450,421
Provisiones	
Anticipos de clientes	
Empresas afiliadas	35,169,958
Impuestos por pagar	3,648,544
I.V.A. retenido	
I.V.A. trasladado por cobrar	
I.V.A. trasladado	
I.S.R. y/o I.A. por pagar	
Sueldos por pagar	1,090,955
Total pasivo a corto plazo	50,553,949

Pasivo a largo plazo	
Obligaciones laborales	
Total pasivo a largo plazo	0
Pasivo diferido	
I.S.R. diferido	
Total pasivo diferido	0
Total pasivo	50,553,949
Capital contable	
Capital social	250,000
Capital social variable	21,133,651
Superávit por actualizaciones de activo	
Actualización de capital social	1,373,784
Resultados de ejercicios anteriores	-9,144,462
Pérdidas del ejercicio	-2,918,142
Exceso/insuficiencia en el capital	-6,605
Actualización de resultados acumulable	
I.S.R. diferido inicial	
Repomo (resultado por posición monetaria)	
Total capital contable	10,688,226
Total del pasivo y capital	61,242,175

(R.- 171768)

AGROINDUSTRIAS COVADONGA, S.A. DE C.V.

COVA DOMINICA, S.A. DE C.V.

AVISO DE FUSION

En asambleas generales extraordinarias de accionistas de estas sociedades , celebradas el dia 22 de noviembre de 2002, se acordo fusionar a dichas sociedades, subsistiendo como sociedad fusionante Agroindustrias Covadonga, S.A. de C.V. y como sociedad fusionada Cova Dominica, S.A. de C.V., la cual dejará de existir a partir del 1 de enero de 2003.

En dichas asambleas de las sociedades antes señaladas se acordó que la fusión se lleve a cabo, conforme a lo siguiente:

BASES DE FUSION

1. La fusión surtirá efectos a partir del 31 de diciembre de 2002.

2. Como consecuencia de la fusión, y al surtir efectos entre las partes, todos los derechos, obligaciones, activos, pasivos, capital y, en general, todo el patrimonio de Cova Dominica, S.A. de C.V., sin reserva ni limitación alguna, pasarán a título universal a Agroindustrias Covadonga, S.A. de C.V., al valor que tengan en libros al 31 de diciembre de 2002, y por lo mismo, ésta se subroga a título universal en todos los derechos y pasivos, y asume todas las obligaciones y responsabilidades que Cova Dominica, S.A. de C.V., tenga a la fecha antes indicada, quedando obligada expresamente al pago de los pasivos.

3. Con objeto de que la fusión surta efectos ante terceros, las sociedades fusionadas han obtenido de la mayoria de sus acreedores su consentimineto para llevar a cabo la fusión y por aquellos que no lo han hecho las sociedades a través de sus representantes legales se obligaron al pago inmediato de los creditos a su cargo y a favor de aquellos acreedores que a partir del primero de enero de 2003 manifiesten expresamente su deseo de cobrar sus creditos anticipadamente; por lo que no es necesario publicar el sistema para la extinción de pasivos.

4. Derivado de la fusión, el capital social de la fusionada se cancelará en la fecha en que la misma surta efectos entre las partes. El capital variable de la fusionante será incrementado en la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). En virtud de dicho aumento, el capital social de la fusionante llegará a la cantidad de $77,713,200.00 (setenta y siete millones setecientos trece mil doscientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales $1,000,000.00 (un millon de pesos 00/100 M.N.), corresponderán al capital mínimo fijo y los restantes $76,713,200.00 (setenta y seis millones setecientos trece mil doscientos pesos 00/100 M.N.), al capital variable.

5. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publicarán en el **Diario Oficial de la Federación**, los acuerdos de fusión conjuntamente con los balances generales de fecha 31 de octubre de 2002 de la fusionante y la fusionada, señalando el sistema establecido para la extinción de pasivos de la fusionada.

Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a 3 de diciembre de 2002.

Delegado Especial de las Asambleas de Accionistas

Ing. José Antonio González Gutiérrez

Rúbrica.

AGROINDUSTRIAS COVADONGA S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2002

Activo	
Circulante	
Bancos	934,614.13
Inversión en acciones	143,331,200.00
Suma el activo	144,265,814.13
Pasivo	
A corto plazo	
Acreedores diversos	69,679,732.58
Impuestos por pagar	664,815.00
Suma el pasivo	70,344,547.58
Capital contable	
Capital social fijo	1,000,000.00
Capital social variable	76,713,100.00
Capital social no exhibido	(6,500,000.00)
Capital social exhibido	71,213,100.00

Resultado del ejercicio	2,708,166.55
Suma el capital	73,921,266.55
Suma pasivo y capital	144,265,814.13

Ing. José Antonio González Gutiérrez
Representante Legal
Rúbrica.

COVA DOMINICA, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2002

Activo	
Circulante	
Caja y bancos	24,994.14
Impuesto a favor	5,325.00
Inversion en acciones	67,158,700.00
Suma el activo circulante	67,189,019.14
Gastos de organización	50,909.20
Suma el activo	67,239,928.34
Pasivo	
A corto plazo	
Acreedores diversos	56,234.20
Suma el pasivo	56,234.20
Capital contable	
Capital social fijo	1,000,000.00
Capital social variable	63,713,700.00
Actualización del capital contable	2,818,304.00
Insuficiencia en actualización de capital	(2,818,304.00)
Resultado del ejercicio	2,469,994.14
Suma el capital	67,183,694.14
Suma pasivo y capital	67,239,928.34

Representante Legal
Ing. José Antonio González Gutiérrez
Rúbrica.

(R.- 00000000000000000000000000000)

McCORD PAYEN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

MANUFACTURAS METALICAS LINAN, S.A.

FUSION

McCord Payen de México, S. de R.L. de C.V., (McCORD) y Manufacturas Metalicas Linan, S.A. (LINAN), resolvieron fusionarse mediante acuerdos adoptados en asambleas generales extraordinarias de accionistas celebradas el día 25 de noviembre de 2002, subsistiendo la primera de ellas y extinguiéndose la segunda por absorción.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica un extracto de los acuerdos de fusión adoptados en las Asambleas indicadas e incorporadas en el Convenio de Fusión celebrado con fecha 25 de noviembre de 2002, en los siguientes términos:

"**1.-** Las partes convienen en fusionar las sociedades subsistiendo McCORD (fusionante) y desapareciendo LINAN (fusionada), implicando una modificación en el capital social de McCORD, en su parte variable.

La fusión se conviene en base a los acuerdos que se contienen en las actas de asambleas extraordinarias a que se hace referencia en el inciso III del capítulo de declaraciones, y en base a los balances de fusión al 31 de octubre de 2002 que en este acto se aceptan por las partes, los cuales forman parte integrante del mismo convenio.

2.- Como consecuencia de la fusión acordada, y para cuando ésta surta efectos, LINAN cederá y transferirá a McCORD íntegramente su patrimonio, comprendiendo la totalidad de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones sin reserva ni limitación alguna.

3.- Como consecuencia de la fusión, se habrá de aumentar la porción variable del capital social de McCORD en la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), importe del capital social de LINAN, correspondiendo a los accionistas de la fusionada las partes sociales de la porción variable del capital social de la fusionante que les corresponda, mismas que se entregarán a sus titulares contra entrega de los certificados que obren en su poder los cuales serán cancelados.

Una vez que surta sus efectos la fusión, el capital social de McCORD quedará integrado de la siguiente manera:

Socios	**Partes sociales serie "B"**	**Capital fijo clase I**	**Capital variable clase II**	**Total**
Servicio de Componentes Automotrices, S.A. de C.V.	1	$145´402,406.00	$145´402,406.00	
T&N de México, S. de R.L. de C.V.	1	$ 15'889,662.00	$ 15'889,662.00	
Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V.	2	$50,000.00	$ 6'093,000.00	$ 6'143,000.00
Charles B. Grant	1	_____	$ 1.00	$ 1.00
Total	5	$50,000.00	$167'385,069.00	$167'435,069.00

4.- La fusión surtirá efectos en la fecha en que quede realizada la inscripción en el Registro Público de Comercio de México, Distrito Federal y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México de los acuerdos relativos o el 31 de diciembre de 2002, lo que suceda con posterioridad, toda vez que se obtendrá el consentimiento de los acreedores más importantes de la fusionante y, respecto de los que no se obtenga su consentimiento, se acuerda pagar sus respectivos créditos. Asimismo, la fusionada acuerda pagar sus respectivos créditos, en los términos de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Además, por virtud de la fusión los créditos entre McCORD y LINAN quedarán extinguidos."

México, D.F., a 29 de noviembre de 2002.

Delegado Especial

Lic. Ricardo Arturo Pons Mestre

Rúbrica.

MANUFACTURAS METALICAS LINAN, S.A.

BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 2002

Activo

Circulante

Caja y bancos	13,127,068.00

Clientes	10,184,145.00	
Inventarios	4,108,310.00	
Otras cuentas por cobrar	4,879,979.00	
	32,299,502.00	
Fijo		
Terreno	490,882.00	
Edificio	1,986,647.00	
Maquinaria y equipo	68,690,950.00	
Construcciones en proceso	2,134,806.00	
Depreciación acumulada	(39,813,532.00)	
	33,489,753.00	
Diferido		
Intercompañías (neto)	82,718,426.00	
Impuestos diferidos	6,627,250.00	
	89,345,676.00	
Total activo	155,134,931.00	
Pasivo		
Circulante		
Cuentas por pagar		6,829,106.00
Acreedores		28,345,257.00
Impuestos por pagar (neto)		1,915,116.00
Otras cuentas por pagar		17,899,411.00
Total pasivo circulante		54,988,890.00
Capital		
Capital social		9,481,248.00
Resultados de ejercicios anteriores		55,126,861.00
Resultado del ejercicio		33,218,179.00
Otras cuentas de capital		2,319,753.00
Total capital contable		100,146,041.00
Total pasivo y capital		155,134,931.00

MCCORD PAYEN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 2002

Activo		
Circulante		
Caja y bancos	3,364,181.00	
Cuentas por cobrar	28,832,573.00	
Inventarios	48,534,548.00	
Otras cuentas por cobrar	4,495,927.00	
	85,227,229.00	
Fijo		
Edificio	2,582,944.00	
Maquinaria y equipo	90,217,319.00	
Construcciones en proceso	136,952,754.00	
Depreciación acumulada	(33,991,806.00)	
	195,761,211.00	
Diferido		
Crédito mercantil	15,077,248.00	
Impuestos diferidos	23,612,953.00	
	38,690,201.00	
Total activo	319,678,641.00	
Pasivo		
Circulante		
Cuentas por pagar		13,625,988.00
Acreedores		1,868,280.00
Impuestos por pagar (Neto)		(1,457,794.00)
Otras Cuentas por pagar		5,178,156.00

Intercompañías (Neto)	99,959,987.00
Total pasivos	119,174,617.00
Capital	
Capital social	142,958,503.00
Resultados de ejercicios anteriores	47,593,498.00
Resultado del ejercicio	6,965,284.00
Otras cuentas de capital	2,986,739.00
Total capital contable	200,504,024.00
Total pasivo y capital	319,678,641.00

Contralor

C.P. Rafael Gil Fernández

Rúbrica.

Contralor

C.P. José Pineda Jiménez

Rúbrica.

(R.- 171775)

PANAMERICAN BEVERAGES, S.A. DE C.V.

ACUERDO DE FUSION

Para efectos de lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica que las asambleas generales extraordinarias de accionistas de Panamerican Beverages, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Administración de Marcas Panamco, Sociedad Anónima de Capital Variable, acordaron fusionarlas por absorción o integración, que subsista la primera como fusionante y se extinga la segunda como fusionada, publicar sus respectivos balances y que el sistema de extinción del pasivo de la fusionada sea que se pague por la fusionante como su causahabiente.

PANAMERICAN BEVERAGES, S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

(cifras en pesos)

Activo	
Activo circulante	
Caja	47,975
Bancos	2,025
Cuentas por cobrar	966,350
Total activo circulante	968,375
Total activo	1,016,350
Pasivo	
Pasivo a corto plazo	
Total pasivo a corto plazo	0
Capital	
Capital social	50,000
Capital suscrito	966,350
Total capital	1,016,350
Total pasivo y capital	1,016,350

ADMINISTRACION DE MARCAS PANAMCO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

(cifras en pesos)

Activo	
Activo circulante	
I.V.A. acreditable	18,937
Panamco México (préstamos)	7,407,391
Marcas	1
Total activo circulante	7,426,328
Total activo	7,426,328
Pasivo	
Pasivo a corto plazo	
Reserva de I.S.R.	2,581,715
Total pasivo a corto plazo	2,581,715
Capital	
Capital social	50,000
Utilidad del ejercicio	4,794,614
Total capital	4,844,614
Total pasivo y capital	7,426,329

México, D.F., a 2 de diciembre de 2002.

Delegado de las Asambleas

Lic. Alejandro Sánchez Bustos

Rúbrica.

(R.- 171776)

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

AVISO A LOS TENEDORES DE

BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO DENOMINADOS EN UNIDADES DE INVERSION DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

NAFUDI 50707

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula décima primera del Acta de Emisión de los Bonos Bancarios de Desarrollo denominados en Unidades de Inversión de Nacional Financiera, S.N.C. NAFUDI 50707, hacemos de su conocimiento que:

El día 9 de enero de 2003, se llevará a cabo la amortización anticipada total de los títulos en circulación de la emisión NAFUDI 50707 que asciende a 1'536,210 con valor nominal de 100 UDIS cada uno. El pago correspondiente se realizará a través de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores.

México, D.F., a 9 de diciembre de 2002.

(R.- 171777)

COLEGIO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS Y LICENCIADOS EN CONTADURÍA, A.C.

CONVOCATORIA

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2002

EL Colegio Mexicano de Contadores Públicos y Licenciados en Contaduría, A.C., de conformidad con sus estatutos convoca a todos los asociados a su Asamblea General Ordinaria del ejercicio social 2002, la que se realizará el día 18 de diciembre del presente año, en el Hotel Imperial Reforma, salón emperadores, ubicado en avenida Paseo de la Reforma número 64, colonia Juárez, código postal 06600, México, Distrito Federal, siendo la primera convocatoria a las 19:00 horas y segunda y última convocatoria a las 20:00 horas del mismo día bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Contenido del Informe del Consejo Directivo Bienio 2001-2002.

1. Palabras de apertura del presidente de la Junta de Honor y Justicia.
2. Informe del presidente del Consejo Directivo.
3. Informe del tesorero del Consejo Directivo.
4. Informe del comisario.
5. Aceptación de nuevos asociados.
6. Asignación del comisario para el Bienio 2003-2004.
7. Asuntos generales.
8. Entrega de reconocimientos a expositores y a integrantes activos del Consejo Directivo Bienio 2001-2002.
9. Toma de protesta del nuevo Consejo Directivo Bienio 2003-2004.
10. Palabras de bienvenida.

Atentamente

México, D.F., a 2 de diciembre de 2002.

Presidente del Consejo Directivo
C.P.C. Héctor Ferral García
Rúbrica.

(R.- 171783)

HEWLETT-PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPAQ COMPUTER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
FUSION

Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V., (HP México) y Compaq Computer de México, S. de R.L. de C.V. (COMPAQ), resolvieron fusionarse mediante acuerdos adoptados en asambleas generales extraordinarias de socios celebradas el día 3 de diciembre de 2002, subsistiendo la primera de ellas y extinguiéndose la segunda por absorción.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica un extracto de los acuerdos de fusión adoptados en las asambleas indicadas e incorporadas en el convenio de fusión celebrado con fecha 3 de diciembre de 2002, así como en los balances de ambas sociedades al 30 de septiembre de 2002, en los siguientes términos:

"**1.** Como consecuencia de la fusión, se habrá de aumentar el capital social de HP México por la cantidad de $1´800,000.00 M.N., equivalente al valor nominal o histórico de COMPAQ.

2. Se acuerda por las partes aumentar la parte social de los socios en HP MEXICO como consecuencia de la fusión de COMPAQ, por un valor de $1´799,999.00 M.N. en el caso de Compaq Computer (The Hague) B.V., y $1.00 M.N. en el caso de Hewlett-Packard Haarlem B.V.

3. En consecuencia, una vez que surta efectos la fusión, el capital social de HP México ascenderá a la cantidad de $646´690,812.00 M.N. y quedará integrado como sigue:

Socios	Capital fijo	Capital variable	Valor total
Compaq Computer (The Hague) B.V.	$49,959.00	$646´146,415.00	$646´196,374.00
Hewlett-Packard Haarlem B.V.	$ 41.00	494,397.00	494,438.00
Total	$50,000.00	$646´640,812.00	$646´690,812.00

4. Como consecuencia de la fusión acordada, una vez que ésta surta efectos, COMPAQ cederá y transferirá íntegramente a HP México su patrimonio a título universal, comprendiendo la totalidad de sus derechos y obligaciones sin reserva ni limitación alguna, comprendiendo las cuentas de capital, activos y pasivos con base en los estados financieros y las cifras que arrojen los balances al 31 de diciembre de 2002 de ambas sociedades.

5. Como consecuencia de la fusión, HP México adquiere todos los bienes y derechos de la fusionada y se subroga en todos los derechos, garantías y privilegios derivados de los contratos, negociaciones y operaciones en los que COMPAQ figure como parte, con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda, y asume todas y cada una de las obligaciones que resultaren a cargo de COMPAQ.

6. La fusión por absorción surtirá efectos el 1 de enero de 2003 o en la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, lo que resulte posterior, ya que han obtenido a esta fecha el consentimiento de sus acreedores más importantes, y respecto de los que no se obtenga su consentimiento se acuerda cubrir sus respectivos créditos en los términos de lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."

México, D.F., a 3 de diciembre de 2002.
Delegado Especial
Lic. Eduardo Siqueiros T.
Rúbrica.

HEWLETT PACKARD DE MEXICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

No auditados	cantidades en pesos
Activo	
Activo circulante	
Efectivo e inversiones temporales	166,649,754
Cuentas por cobrar	
Clientes	1,323,351,703
Otras cuentas por cobrar	1,204,580,667
Total de cuentas por cobrar	2,527,932,370
Inventarios	1,345,561,342
Total del activo circulante	4,040,143,466
Cuentas por cobrar a largo plazo	236,561,169
Activo fijo	1,600,925,907

Total del activo	5,877,630,542
Pasivo	
Pasivo a corto plazo	
Provedores	459,318,112
Anticipos a clientes	
Compañías afiliadas	3,434,971,383
Otras cuentas por pagar	618,733,940
Ingresos no devengados provenientes	183,728,161
de contratos de servicios	
Total de pasivo a corto plazo	4,696,751,596
Cuentas por pagar a largo plazo	328,646,067
Total del pasivo	5,025,397,664
Capital contable	
Capital social	1,566,238,769
Utilidades acumuladas	292,528,941
Resultado del ejercicio	(379,826,008)
Efecto inicial del impuesto diferido	11,918,101
Insuficiencia en la actualización	638,626,925
del capital contable	
Total del capital contable	852,232,878
Total de pasivo y el capital contable	5,877,630,542

Gerente de Contabilidad Financiera
C.P. Enrique Peña Nuñez
Rúbrica.

COMPAQ COMPUTER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

	30 de septiembre de 2002
Activo	
Activo circulante	
Efectivo e inversiones temporales	(1,067,104)
Cuentas por cobrar a	
Clientes y otros	14,437,946
Compañías relacionadas	136,916
Impuestos por recuperar (I.V.A.)	-
Total de cuentas por cobrar	14,574,861
Inventarios	42,929,531
Pagos anticipados	28,504,089
Total del activo circulante	84,941,377
Mobiliario y equipo y mejoras	
a locales arrendados, neto	76,088,964
Documentos por cobrar clientes a largo plazo	16,865,936
Otros activos	
Impuesto diferido	-
Total del activo	$177,896,277

C.P. Juan Carlos Patiño Cortes
Rúbrica.

COMPAQ COMPUTER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

	30 de septiembre de 2002
Pasivo y capital contable	
Pasivo circulante	
Compañías relacionadas	446,506,031
Pasivos acumulados y otras cuentas por pagar	99,731,014
Impuestos por pagar (I.S.R.)	0
Total del pasivo circulante	546,237,045

Ingresos diferidos	0
Impuesto Sobre la Renta diferido	
Total del pasivo	546,237,045
Capital contable	
Capital social	1,800,000
Reserva legal	162,950
Pérdidas acumuladas	-298,983,765
(Pérdida) utilidad neta	-73,191,742
Insuficiencia en la actualización del capital	1,871,790
Efecto acumulado del Impuesto Sobre la Renta diferido	
Total del capital contable	**-368,340,767**
Total del pasivo y capital contable	**$117,896,277**

C.P. Juan Carlos Patiño Cortes

Rúbrica.

(R.- 171785)

ISPAT MOLINOS, S.A. DE C.V.
(FUSIONANTE)
ISPAT MOLINOS II, S.A. DE C.V.
(FUSIONADA)
AVISO DE FUSION

Ispat Molinos, S.A. de C.V. (Ispat Molinos) e Ispat Molinos II, S.A. de C.V. (Molinos II) en asambleas generales extraordinarias de accionistas celebradas el 25 de noviembre de 2002, resolvieron fusionarse, subsistiendo Ispat Molinos en su carácter de sociedad fusionante y extinguiéndose Molinos II como sociedad fusionada.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publican los acuerdos de fusión tomados en las asambleas indicadas y pactados en el convenio de fusión celebrado el 25 de noviembre de 2002, de acuerdo con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Por virtud del presente convenio y de las asambleas generales extraordinarias de accionistas de Ispat Molinos y Molinos II de esta misma fecha, éstas convienen en fusionarse, en la inteligencia de que Ispat Molinos subsistirá como sociedad fusionante y Molinos II se extinguirá como sociedad fusionada.

SEGUNDA.- La fusión se realizará con base en los respectivos balances generales de Ispat Molinos y Molinos II con cifras al 31 de octubre de 2002 y en los términos de lo dispuesto en los artículos 223 y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás leyes aplicables a la materia.

TERCERA.- En virtud de que Ispat Molinos subsistirá como sociedad fusionante, dicha sociedad se convertirá en titular del patrimonio de Molinos II, por lo que adquirirá todos los activos y asumirá todos los pasivos de Molinos II, sin reserva ni limitación alguna.

En consecuencia, Ispat Molinos se subrogará en todos los derechos y acciones que corresponden a Molinos II hasta esta fecha y se sustituirá en todas las garantías otorgadas y en todas las obligaciones contraídas por la misma, que deriven de contratos, licencias, permisos, concesiones y, en general, de actos u operaciones realizados por Molinos II, o en los que dicha sociedad haya intervenido, con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda, y dará cumplimiento a todos los compromisos y obligaciones a cargo de Molinos II en los términos y condiciones originalmente contraídos y que se encuentren en vigor a la fecha de la fusión, extinguiéndose por confusión cualesquier derechos y obligaciones que pudieran existir entre Ispat Molinos y Molinos II.

CUARTA.- Entre las sociedades que se fusionan y sus accionistas, la fusión surtirá efectos a partir del 25 de noviembre de 2002 y se realizará con cifras al 31 de octubre de 2002, con base en los balances generales debidamente aprobados.

QUINTA.- Las partes convienen en que como consecuencia de la fusión, Ispat Molinos aumentará su capital en la cantidad de $4,807'550,000.00 (cuatro mil ochocientos siete millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), emitiéndose al efecto 671'183,063 (seiscientas setenta y un millones ciento ochenta y tres mil sesenta y tres) acciones serie B, comunes, sin expresión de valor nominal.

En consecuencia de lo anterior, los accionistas de Molinos II, recibirán acciones de Ispat Molinos en una proporción de una de 1 (una) acción de Ispat Molinos por cada 7.1628 (siete punto un mil seiscientos veintiocho) acciones de Molinos II.

SEXTA.- La fusión surtirá efectos ante terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el momento de la inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio de las sociedades, toda vez que consta el consentimiento de todos los acreedores.

SEPTIMA.- Las partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, D.F., respecto de todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este convenio y renuncian expresamente a cualquier fuero distinto que por cualquier razón presente o futura pudiera corresponderles.

Balances

ISPAT MOLINOS, S.A. DE C.V.
(FUSIONANTE)
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2002

Activo	2,433,688,418

	2,433,688,418
Pasivo	99,810,702
Capital contable	2,333,877,716
	2,433,688,418

ISPAT MOLINOS II, S.A. DE C.V.
(FUSIONADA)
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2002

Activo	5,077,650,285
	5,077,650,285
Pasivo	2,185
Capital contable	5,077,648,100
	5,077,650,285

México, D.F., a 25 de noviembre de 2002.
Delegado Especial
Lic. José Estandía Fernández
Rúbrica.
(R.- 171786)

TRACTEBEL GNP, S.A. DE C.V.

LISTA DE TARIFAS MAXIMAS

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL Y A LOS CLIENTES

En cumplimiento con la Resolución RES/204/2002 expedida por la Comisión Reguladora de Energía, Tractebel GNP, S.A. de C.V. hace del conocimiento del público en general y de sus usuarios las tarifas máximas para el servicio de distribución de gas natural.

LISTA DE TARIFAS ACTUALIZADAS

TRACTEBEL GNP, S.A. DE C.V.

Cargo por:	Unidades	Periodicidad	Residencial	Comercial	Indus
Servicio	Pesos	Mensual	17.49	42.55	3,642
Distribución con comercialización	Pesos/Gcal	Mensual	170.71	54.10	25
Distribución simple					
Capacidad	Pesos/Gcal	Mensual	85.35	27.06	12
Uso	Pesos/Gcal	Mensual	85.35	27.06	12
Conexión no-estándar	Pesos/m		333.06	478.38	1,042
Pena por exceder capacidad reservada	Pesos/Gcal		-	-	76
Cheque devuelto (2)	Pesos		134.62	134.62	134
Servicio de cobranza	Pesos		134.62	134.62	134
Depósito por probar el medidor	Pesos		201.92	201.92	201
Desconexión	Pesos		134.62	134.62	134
Reconexión	Pesos		134.62	134.62	134

1) Aplica sólo para el servicio industrial de distribución con comercialización.

2) Se cobra sobre el monto total del cheque.

De acuerdo con lo establecido en la resolución referida anteriormente, estas tarifas entrarán en vigor diez días después de su publicación. Los metros cúbicos serán convertidos a Gigacalorías (Gcal) tomando en cuenta el poder calorífico del gas en cuestión.

Las condiciones generales para la prestación del servicio podrán ser consultadas en las oficinas de Tractebel GNP, S.A. de C.V., y en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía.

Tampico, Tamps., a 2 de diciembre de 2002.

Tractebel GNP, S.A. de C.V.

Director General

Rafael Rubín de Celis A.

Rúbrica.

(R.- 171787)

SEGUNDA SECCION

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

RESOLUCION del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2000.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG98/2001.

RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS AGRUPACIONES POLITICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000.

Visto el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los Informes Anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2000, y

RESULTANDO:

I.- Que mediante Decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de noviembre de 1996, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros ordenamientos legales, se estableció en el artículo 33 que las Agrupaciones Políticas Nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, objetivos para los cuales se les otorga financiamiento público, en términos de lo establecido en el párrafo 7 del artículo 35 del mismo ordenamiento.

II.- Que, conforme al párrafo 10 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las agrupaciones políticas deben presentar los comprobantes de los gastos realizados en los rubros señalados como sujetos al financiamiento público; y que, de conformidad con los párrafos 11 y 12 de la misma disposición, deben presentar informes anuales sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad, ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, organismo permanente inserto en la estructura del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para lo cual resulta aplicable el procedimiento establecido en el artículo 49-A del mismo ordenamiento legal.

III.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 6 de diciembre de 1999, aprobó el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, y acordó someterlo a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, órgano que a su vez aprobó dicho reglamento por acuerdo tomado en sesión celebrada el 17 de diciembre de 1999, ordenando su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, lo que aconteció el día 7 de enero de 2000; reglamento que abrogó, según el artículo 1.T.2 transitorio, los "Lineamientos, formatos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales", emitidos por el Consejo General del Instituto el 21 de febrero de 1997.

IV.- Que por conducto de su secretario técnico, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas recibió los informes anuales presentados por las agrupaciones políticas nacionales respecto de sus ingresos y egresos correspondientes al ejercicio de 2000, procediendo a su análisis y revisión, conforme al artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

V.- Que, conforme a lo establecido por el artículo 49-A, párrafo 2, inciso a) del mismo ordenamiento, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ejerció en diversas ocasiones su facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de las agrupaciones políticas la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b), del Código Electoral, la Comisión de Fiscalización notificó a las agrupaciones políticas los errores y omisiones

técnicas que advirtió durante la revisión de los informes, para que presentaran las aclaraciones o rectificaciones pertinentes.

VI.- Que una vez agotado el procedimiento descrito en los resultandos IV y V de esta resolución, y cumpliendo con lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 2, incisos c) y d), y 80, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en esta misma sesión la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas presentó ante este Consejo General el Dictamen Consolidado respecto de los Informes Anuales presentados por las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2000.

VII.- Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49-A, párrafo 2, inciso d), y 49-B, párrafo 2, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en dicho Dictamen Consolidado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas determinó que se encontraron diversas irregularidades derivadas de la revisión de los Informes Anuales presentados por las agrupaciones políticas nacionales que, a juicio de dicha Comisión, constituyen infracciones a las disposiciones en la materia, de acuerdo con las consideraciones expresadas en el apartado de conclusiones del dictamen mencionado, por lo que, con fundamento en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso e) del Código Electoral, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas propone al Consejo General del Instituto Federal Electoral que emita la presente Resolución con base en los siguientes

CONSIDERANDOS:

1.- De conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., párrafo 1; 34, párrafo 4; 39; 73, párrafo 1; 49-A, párrafo 2, inciso e); 49-B, párrafo 2, inciso i); y 82, párrafo 1, incisos h) y w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes a las violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes Anuales de las agrupaciones políticas nacionales, según lo que al efecto haya dictaminado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

2.- Como este Consejo General, aplicando lo que establece el artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberá aplicar las sanciones correspondientes tomando en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, independientemente de las consideraciones particulares que se hacen en cada caso concreto en el considerando 5 de la presente resolución, debe señalarse que por “circunstancias” se entiende el tiempo, modo y lugar en que se dieron las faltas, así como, en su caso, las condiciones individuales del sujeto infractor; y en cuanto a la “gravedad” de la falta, se debe analizar la trascendencia de la norma transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-B, párrafo 2, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a este Consejo General pronunciarse exclusivamente sobre las irregularidades detectadas con motivo de la presentación de los Informes Anuales de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2000, que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ha determinado hacer del conocimiento de este órgano superior de dirección para efectos de proceder conforme a lo que establece el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; calificar dichas irregularidades y determinar si es procedente imponer una sanción.

4.- Con base en lo señalado en el considerando anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a analizar, con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado presentado ante este Consejo General por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, si es el caso de imponer una sanción a las agrupaciones políticas nacionales Frente Liberal Mexicano Siglo XXI, Coordinadora Ciudadana, Diana Laura, Causa Ciudadana, Convergencia Socialista, Acción Republicana, Agrupación Política Campesina, Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, Campesinos de México por la Democracia, Centro Político Mexicano, Expresión Ciudadana, Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Iniciativa XXI

Asociación Civil, Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático, Movimiento de Acción Republicana, Movimiento Mexicano El Barzón, Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, Movimiento Social de los Trabajadores, Mujeres en Lucha por la Democracia, A.C., Mujeres y Punto Asociación Civil, Organización México Nuevo, Plataforma Cuatro, Praxis Democrática, Red de Acción Democrática, Sentimientos de la Nación, Unidad Nacional Lombardista, Unión de la Clase Trabajadora, Unión Nacional Sinarquista.

5.- En este apartado se analizarán las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado respecto de cada una de las agrupaciones políticas nacionales.

5.1. Agrupación Política Nacional Frente Liberal Mexicano Siglo XXI

Frente Liberal Mexicano Siglo XXI

En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

La agrupación Política incumplió con sus obligaciones, de manera particularmente grave, al incurrir en las siguientes irregularidades:

a) No depositó en cuentas bancarias ingresos por concepto de aportaciones de asociados y simpatizantes por un monto total de $1,371,645.00

b) La agrupación política no comprobó ingresos por concepto de aportaciones de simpatizantes por un monto total de $687,075.00.

c) La agrupación no expidió de forma consecutiva los recibos que amparan las aportaciones recibidas de asociados y simpatizantes.

d) La agrupación no registró en la cuenta de servicios personales, subcuenta reconocimientos por actividades políticas, erogaciones por este concepto por un monto total de $177,384.82.

e) La agrupación política no comprobó egresos por concepto de gastos por traslado, estancia y/o viáticos, por un monto total de $497,200.00.

f) La agrupación no expidió de forma consecutiva los recibos que amparan las erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades políticas.

g) La agrupación política no llevó un adecuado control de folios de recibos "REPAPS".

h) La agrupación no comprobó, de acuerdo con los lineamientos establecidos, un monto total de $17,480.86, por concepto de Reconocimientos por Actividades Políticas, correspondientes al monto excedente de recibos "REPAP" que superaron el límite de 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por pagos hechos a una misma persona en el transcurso de un mes, permitido por los mismos lineamientos para ser comprobados mediante tal clase de recibos.

i) La agrupación política no comprobó egresos por concepto de tareas editoriales, subcuenta honorarios asimilados a sueldos, por un monto total de $35,500.00.

j) La agrupación no comprobó egresos correspondientes a las cuentas de Educación y Capacitación Política, por un monto total de $27,530.00, con documentación comprobatoria que reuniera los requisitos exigidos por los lineamientos aplicables.

k) La agrupación política no comprobó egresos correspondientes a la subcuenta Viáticos por bitácoras en capacitación, por un monto total de $499,980.00.

l) La agrupación no realizó mediante cheque pagos superiores a los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, correspondiente al rubro de Educación y Capacitación Política, por un monto total de $31,100.00.

m) La agrupación política no presentó copia de las pólizas de cheques y estados de cuenta requeridos por esta autoridad, con respecto a una operación de compraventa realizada con un proveedor, por un importe $821,261.50.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, 1.1, 1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.3, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 14.2 y 19.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso d) y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante oficio número STCFRPAP/645/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Frente Liberal Mexicano que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto de las diversas irregularidades derivadas de la revisión de su informe anual y de la verificación a la documentación soporte, mismas que se encuentran referidas en el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización.

Véase la forma en la que la agrupación política pretendió comprobar sus ingresos. En primer lugar, la Comisión de Fiscalización detectó que el monto reportado por la agrupación en su informe anual en los rubros de financiamiento por aportaciones de asociados y simpatizantes y de rendimientos financieros, no coincidía con los datos reflejados en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2000. En efecto, el formato "IA-APN" reflejaba que la agrupación había recibido ingresos por aportaciones de asociados y simpatizantes por un monto de $2,442,956.00, mientras que la balanza de comprobación mostraba un monto de $1,371,645.00, implicando una diferencia de $1,071,311.00. Asimismo, en el rubro de financiamiento por rendimientos financieros, la agrupación reportó un monto de $2,347.00, en tanto que la balanza reflejaba la cantidad de $2,396.97. En ese sentido, la agrupación política presentó una diferencia agregada de $1,071,261.03 entre su informe anual y su balanza de comprobación en el capítulo de ingresos. Una vez comunicada la irregularidad observada, la agrupación procedió a corregir su contabilidad y mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2001, de forma extemporánea, presentó una nueva versión de su Informe Anual "IA-APN" y sus anexos, así como la Balanza de Comprobación y Auxiliares Contables, cuyas cifras coincidían entre sí. Es importante señalar que la agrupación, derivado de la observación antes referida, reportó en su informe anual un monto menor de ingresos al que reflejaba la primera versión de su informe, pues en un primer momento había reportado un monto total de $2,820,978.00, mientras que en el informe presentado el 22 de agosto apareció como monto total de ingresos recibidos la cantidad de $1,403,780.00.

De la verificación documental al rubro de ingresos, se determinó que de la cantidad total de ingresos reportados en el informe anual, es decir, del monto de $1,403,780.00, la agrupación no comprobó con recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes ingresos por $687,075.00, y no depositó en cuentas bancarias un monto de $1,371,645.00. Es decir, la agrupación política no comprobó con los recibos correspondientes el origen del 49% de sus ingresos y no depositó en cuentas bancarias prácticamente el 98% de éstos. Es decir, esta autoridad no tiene certeza sobre el origen de la mitad de sus ingresos y, además, no puede verificar la aplicación del 98% de dichos recursos, en tanto que la agrupación, al no depositar en cuentas bancarias todos sus ingresos, impidió que los recursos (entradas y salidas) dejaran una huella clara en el sistema bancario mexicano. La norma es clara al establecer la obligación de las agrupaciones de comprobar y depositar en cuentas bancarias todos y cada uno de sus ingresos. Sin embargo, lejos de ello, la agrupación realizó precisamente la conducta contraria.

Ahora bien, la agrupación política no formuló alegato o explicación alguna en relación con la falta de comprobación y depósito de sus ingresos, sino que simplemente se limitó a cancelar los registros contables de los ingresos, así como los recibos que amparaban la recepción de éstos. En efecto, la agrupación política en lugar de explicar las razones que subyacieron a la irregularidad u ofrecer la documentación solicitada por la autoridad, procedió sin más a cancelar los casos observados. Al no existir evidencia de que tales ingresos existieron y tomando en consideración que la agrupación política canceló los casos observados, se actualiza la razonable presunción de su virtualidad, pues la agrupación incumplió precisamente con las disposiciones que permiten a esta autoridad verificar su

existencia, esto es, la presentación de documentación comprobatoria y su ingreso al sistema bancario mexicano.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización detectó que la agrupación política no expidió de forma consecutiva los recibos destinados a amparar los ingresos recibidos, pues observó casos en los cuales el folio era una etiqueta que se encontraba encima del folio original. Más grave aún, la agrupación presentaba folios que anteriormente ella misma había cancelado. En efecto, como respuesta a una observación formulada por la Comisión de Fiscalización la agrupación política procedió a cancelar diversos recibos y, posteriormente, presentó otros cuyo folio correspondía a aquellos recibos que había cancelado previamente. Lo anterior es prueba indubitable de que la agrupación política produce la documentación comprobatoria conforme a las circunstancias le dictan.

Ahora bien, el registro y comprobación de los egresos sigue la misma suerte. La agrupación política actualizó 10 irregularidades vinculadas con sus gastos. Merece especial atención la proporción de los egresos no comprobados con respecto al total de los egresos realizados por la agrupación. Prácticamente el 73% del total de los egresos reportados no fue comprobado, toda vez que la agrupación política pretendió, en franca contravención al Reglamento aplicable, amparar erogaciones por concepto de traslado, estancia y/o viáticos a través de recibos "Repaps", y mediante bitácora de gastos menores, un monto mayor al 20% del gasto total efectuado por la agrupación por concepto de viáticos y pasajes, límite previsto en el artículo 7.2 del Reglamento aplicable. En efecto, la agrupación política reportó egresos por un monto total de $1,431,587.00, mientras que los egresos por los conceptos señalados que de ninguna manera pueden considerase comprobados ascienden a $1,050,160.86, pues el Reglamento es claro al establecer que los recibos "Repaps" sólo pueden amparar erogaciones por concepto de reconocimiento por actividades políticas, no así "traslado, estancia y/o viáticos", y mediante bitácora de gastos menores sólo es posible comprobar el 20% de los egresos que la agrupación efectúe por concepto de viáticos y pasajes en un ejercicio anual.

Véase la gravedad de lo acontecido. El monto mínimo de ingresos cuya virtualidad puede razonablemente presumirse, es cercano al monto de los egresos cuya comprobación se pretendió hacer a través de mecanismos no fiscales, y en contravención, en este rubro, a lo establecido en el Reglamento aplicable. En otras palabras, a ingresos cuya existencia no puede acreditarse fehacientemente, prácticamente le correspondieron egresos cuya realización no es posible verificar.

Del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización, se desprende con toda claridad que un sólo proveedor concentró el 57% de los egresos totales realizados por la agrupación política ($821,260.50 en relación con el monto total de egresos reportados que asciende a $1,431,587.00). Este Consejo General juzga especialmente relevante la circularización que se hizo del mismo, para confirmar las operaciones realizadas con la agrupación política. En el Dictamen Consolidado puede verse, en el capítulo correspondiente a la agrupación política nacional Frente Liberal Mexicano Siglo XXI, que la Comisión no pudo entregar el oficio de solicitud de confirmación al C. José Omar Mendiburu Cruz, en virtud de que éste tenía más de dos meses de no vivir en la dirección señalada en las facturas. Se pidió, por tanto, aclaraciones a la agrupación política, mediante oficio no. STCFRPAP/311/01, de fecha 31 de mayo de 2001, recibido el 6 de junio del mismo año. La agrupación contestó mediante escrito de fecha 15 de junio de 2001 alegando que el responsable de finanzas de la agrupación no había entregado la documentación contable correspondiente. En otras palabras, la agrupación política fue incapaz de poner en contacto con esta autoridad electoral federal a su principal proveedor. Por lo tanto, el otro medio con el que cuenta la autoridad electoral para confirmar que las operaciones de las agrupaciones son reales y no virtuales, resultó del todo ineficaz debido a que la agrupación política no ofreció a esta autoridad la información precisa que resultaba imprescindible para realizar exitosamente el ejercicio de compulsa y verificación referido.

La lista de las irregularidades en las que ha incurrido la agrupación es, de suyo, más larga que la ya de por sí grave falta de comprobación de gran parte de sus egresos. En efecto, la agrupación política no expidió de forma consecutiva los recibos que amparan los pagos por concepto de reconocimientos por actividades políticas. Incluso, existe evidencia de que la agrupación sobrepuso o duplicó folios. Tal conducta muestra una ánimo doloso de obscurecer los hechos y de ocultar información. Sin embargo, la lista es todavía más larga. Para corroborarlo basta con observar los incisos d), g), i), k) y m) de la conclusión correspondiente al apartado relativo a las irregularidades en

las que incurrió la Agrupación Política Nacional Frente Liberal Mexicano Siglo XXI del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización.

Este Consejo General concluye que debe sancionar con la máxima pena aplicable según el artículo 269, párrafo 1 del Código Electoral, a una agrupación política que incurre en un número importante de irregularidades que, además, involucran un monto sustancial de recursos. Tan particularmente graves son las conductas antijurídicas actualizadas por la agrupación política que por esta vía se sanciona, que involucran, incluso, un monto mayor a los ingresos y egresos que reportó en su informe anual. En efecto, la agrupación reporta en su informe anual ingresos por un monto de $1,403,780.00, mientras que los ingresos observados en la documentación ascienden a $2,058,720.00. Misma suerte corren los egresos, pues la agrupación reporta en su informe anual un monto de $1,431,587.00, mientras que los egresos que presentan alguna irregularidad implican un monto de $2,107,437.18. Es evidente, en consecuencia, que la agrupación política incumplió con la mayor de sus obligaciones, es decir, la de reportar y documentar todos y cada uno de sus ingresos y egresos. Nada más grave para un régimen electoral que exige a la permanente y escrupulosa rendición de cuentas sobre los recursos con los que cuentan los partidos y agrupaciones políticas.

De ninguna manera puede aceptarse que una proporción tan alta de recursos no tengan un respaldo documental adecuado que genere, además, certeza de que los recursos han sido destinados a la consecución de los fines que la ley prevé para las agrupaciones políticas. Los recursos que el Estado asigna a las agrupaciones políticas tienen claro destino. El hecho de que una agrupación política no pruebe fehacientemente la forma en la que dispuso de éstos, implica que la autoridad no pueda determinar si la agrupación política ha utilizado los recursos con los que cuenta para cumplir con sus finalidades y objetivos. En ese sentido, esta autoridad debe sancionar con severidad a una agrupación política que ha incumplido tan gravemente con sus obligaciones legales y reglamentarias, pues sólo la mayor de las sanciones es proporcional a la particular gravedad de las faltas ya analizadas.

Además, una agrupación política que es capaz de presentar documentación cuyo folio había sido cancelado en el pasado, o bien, que mostraba señales de alteración, con el objeto de evadir su responsabilidad de acreditar ante la autoridad el origen y destino de sus ingresos y egresos, no merece, de ninguna manera, continuar recibiendo recursos públicos ni beneficiarse del resto de las prerrogativas que la ley les otorga a las agrupaciones políticas.

El Instituto Federal Electoral, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, debe permitir que una asociación de ciudadanos que ha violado sistemáticamente la normatividad aplicable, que ha dejado de observar sus obligaciones legales y reglamentarias, se beneficie de los derechos y prerrogativas que la ley electoral otorga a las agrupaciones políticas. Esa es, en última instancia, la finalidad del sistema sancionatorio establecido en el Código Electoral: impedir que conductas antijurídicas graves se actualicen a perpetuidad.

El artículo 269, párrafo 3 del Código Electoral establece con toda claridad que las sanciones previstas en los incisos c) al e) del párrafo 1 del propio artículo, sólo pueden imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático. A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Frente Liberal Mexicano incumplió de manera particularmente grave sus obligaciones legales y reglamentarias en materia del registro y comprobación del origen y destino de los recursos con los que cuentan las agrupaciones políticas, al actualizar 13 irregularidades que implican, en cuanto a los ingresos, un monto total cercano a $2,058,720, y en lo que respecta a su egresos, un importe agregado de $2,107,437.18. No está de más señalar que existen irregularidades que por su propia naturaleza, no son susceptibles de determinar su monto implicado.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

En vista de lo anterior, la falta se califica como particularmente grave, pues las faltas cometidas por la agrupación política Frente Liberal Mexicano implican serias violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias.

Este Consejo General llega a la conclusión de que con la irregularidad en estudio, no le ha sido posible a esta autoridad comprobar la veracidad de lo reportado en el Informe Anual de la agrupación política nacional denominada Frente Liberal Mexicano Siglo XXI.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro que otras agrupaciones políticas incumplan de forma igualmente grave con sus obligaciones.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que debe imponer a la Agrupación Política Nacional Frente Liberal Mexicano la máxima sanción de la que puede ser objeto dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la cancelación de su registro como agrupación política nacional.

5.2. Agrupación Política Nacional Coordinadora Ciudadana

a) En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

La agrupación política presentó documentación comprobatoria sin requisitos fiscales, por un importe de $46,262.14, integrados de la siguiente manera:

CUENTA	***MONTO***
Gastos de Educación y Capacitación Política	*$14,619.42*
Gastos de Educación y Capacitación Política	*31,642.72*
TOTAL	***$46,262.14***

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/655/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Coordinadora Ciudadana que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental del rubro Gastos de Educación y Capacitación Política, se localizó documentación sin requisitos fiscales, como se muestra en el siguiente cuadro:

REFERENCIA	RECIBO	CONCEPTO	IMPORTE
PE-28/14-07-00	31393	Boleto de Avión Hernández Carmen	$4,027.36
PE-34/23-08-00	3831	Boleto de Avión Morales Blanca y Chávez Eduardo	5,534.08
PE-34/23-08-00	3833	Boleto de Avión Zafra Alejandra	2,288.64
PE-34/23-08-00	3834	Boleto de Avión Silvia Enrique	2,769.34
Total			**$14,619.42**

Asimismo, se localizó documentación que carecía de la cédula fiscal, como se señala a continuación:

REFERENCIA	RECIBO	CONCEPTO	IMPORTE
PE-14/09-06-00	1543	Material de Publicidad Agenda de Publicidad Crea-Arte	$29,900.00
PE-46/22-06-00	7674	Hospedaje Marriot Aeropuerto	1,742.72
Total			**$31,642.72**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

> *Se solicitaron los talonarios de boletos de avión y las facturas a los beneficiarios quienes en un plazo no mayor a 15 días nos será entregado.*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *La respuesta de la agrupación no satisfizo a la Comisión de Fiscalización, al no presentar la documentación solicitada, incumpliendo así con lo estipulado en los artículos 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Coordinadora Ciudadana incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al presentar documentación comprobatoria de egresos que carece de los requisitos exigidos por la normativa fiscal.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos.

El artículo 7.1 del Reglamento aplicable dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, así como que dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

Por su parte, el artículo 14.2 prevé que durante el periodo de revisión de los informes, las agrupaciones políticas tienen la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien, que se justifique según las circunstancias particulares.

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación original que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa fiscal, pues la agrupación conocía de antemano su obligación de comprobar sus egresos con documentación que reuniera requisitos fiscales. Además, esta autoridad considera que la agrupación pudo haber tomado todas las providencias necesarias para obtener tal documentación y, en todo caso, si la falta de expedición de comprobantes con requisitos fiscales es atribuible al proveedor, pudo abstenerse de contratar con éste. No está de más señalar que el cumplimiento de la normativa que rige el registro y comprobación del origen de los ingresos y del destino de los egresos, de ninguna manera puede estar sujeto o condicionado a actos imputables a terceros.

Debe además decirse que la agrupación omitió presentar los cupones de viajero de los boletos de avión utilizados que, según las disposiciones de carácter fiscal para agencias de viajes dentro de las resoluciones que establecen las reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal, regla 25-B, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de octubre de 1992, vigente hasta la fecha, resultan necesarias para la comprobación del gasto.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad, pues con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 7.1 del Reglamento aplicable para acreditar los egresos que se efectúen la agrupación política, y la documentación presentada no se encuentra incluida en los casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

También se tiene en cuenta que: a) no se puede presumir desviación de recursos; b) la agrupación, en algunos casos, presentó algún documento como soporte, aunque no reúna los requisitos exigidos; c) no puede concluirse que hubiere tenido intención de ocultar información, y d) el monto implicado asciende a $46,262.14.

Por otra parte, esta autoridad toma en cuenta que es la primera vez que la agrupación política incurre en este tipo de faltas.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Coordinadora Ciudadana una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de trescientos cuarenta y cuatro días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política presentó documentación comprobatoria de egresos a nombre de terceras personas, por un monto total de $5,515.00, en el rubro de Materiales y Suministros, subcuenta Luz.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el STCFRPAP/655/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó la Agrupación Política Asamblea Nacional Coordinadora Ciudadana que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que, al efectuar la revisión de la cuenta Materiales y Suministros, subcuenta Luz se localizó documentación comprobatoria a nombre de terceras personas por un monto de $5,515.00.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 20 de agosto de 2001, lo siguiente:

> *"Se solicitó el cambio de nombre ante la compañía de luz y fuerza el cual estamos en espera de que se haga, ya que en tres ocasiones no encontró a nadie el inspector de la compañía".*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

> *La respuesta de la agrupación no fue satisfactoria para la Comisión de Fiscalización. Por lo tanto, la observación no fue subsanada, al incumplir la agrupación con lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Coordinadora Ciudadana incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las

agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos, por su parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, así como que dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien que se justifique según las circunstancias particulares.

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación a nombre de la agrupación política.

La agrupación expresamente reconoce que el documento comprobatorio del egreso se encuentra a nombre de un tercera persona, al afirmar que debe señalarse que *"se solicitó el cambio de nombre ante la compañía de luz".* Un gasto soportado con documentación a nombre de terceras personas constituye una erogación que no puede tenerse como efectivamente comprobada. Es obligación de la agrupación contar con la documentación soporte de cada uno de sus gastos a su nombre, desde el momento en que realiza cualquier operación, pago, contratación o servicio, tal y como lo establece el Reglamento de la materia que era del conocimiento de la agrupación.

Los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos. En este caso, la documentación requerida debía estar a nombre de la agrupación política, pues en las disposiciones aplicables no se admiten documentos a nombre de terceros como probatorios de los egresos de las agrupaciones políticas.

Por todo lo anterior, los documentos presentados son ineficaces para comprobar el egreso realizado por la agrupación política.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues al presentarse documentación que no está a nombre de la agrupación política, no se puede tener certeza de que los egresos reportados se hayan efectivamente verificado en la forma y términos contenidos en la misma contabilidad del partido y, en última instancia, en el informe presentado. Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Sin embargo, se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: que no se puede presumir desviación de recursos; que la agrupación no ocultó información; y que la irregularidad sólo involucra recursos
por $5,515.00.

Se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Coordinadora Ciudadana una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La Agrupación Política Nacional Coordinadora Ciudadana no presentó en tiempo su Informe Anual.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 35, párrafo 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consta en el Dictamen Consolidado que la Agrupación Política Nacional Coordinadora Ciudadana hizo entrega el día 17 de mayo del año en curso, ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, de su Informe Anual de Ingresos Totales y Gastos Ordinarios correspondiente al ejercicio de 2000, en forma extemporánea.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Coordinadora Ciudadana incumplió con lo establecido en los artículos 35, párrafo 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, que establecen que los Informes Anuales de las agrupaciones políticas nacionales deberán ser presentados a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año de ejercicio que se reporta.

Como correctamente razonó la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, la agrupación política incumplió con lo establecido en las disposiciones aludidas, con la mera entrega tardía de su informe anual; pues su entrega, dentro de los términos y plazos establecidos por la propia ley, era una obligación que, al estar contenida en una disposición legal, debió haber cumplido sin ninguna excusa ni dilación.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues entregar fuera de término dicho informe retrasa su revisión, y violenta directamente lo establecido en la legislación electoral, en lo relativo a la rendición de cuentas de las agrupaciones políticas nacionales. En vista de lo anterior, la falta se califica como grave.

Además, se tiene en cuenta que el Informe fue presentado con tres días de retraso. Asimismo, se tiene en cuenta que el cumplimiento a su obligación, en el término legal establecido, no era de suyo complicado.

Se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Coordinadora Ciudadana una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

5.3. Agrupación Política Nacional Diana Laura

a) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La Agrupación Política Nacional Diana Laura no presentó en tiempo su Informe Anual.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 35, párrafo 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del

conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consta en el Dictamen Consolidado que la Agrupación Política Nacional Diana Laura hizo entrega el día 16 de mayo del año en curso, ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, de su Informe Anual de Ingresos Totales y Gastos Ordinarios correspondiente al ejercicio de 2000, en forma extemporánea.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Diana Laura incumplió con lo establecido en los artículos 35, párrafo 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, que establecen que los Informes Anuales de las agrupaciones políticas nacionales deberán ser presentados a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año de ejercicio que se reporta.

Como correctamente razonó la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, la agrupación política incumplió con lo establecido en las disposiciones aludidas, con la mera entrega tardía de su informe anual; pues su entrega, dentro de los términos y plazos establecidos por la propia ley, era una obligación que, al estar contenida en una disposición legal, debió haber cumplido sin ninguna excusa ni dilación.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues entregar fuera de término dicho informe retrasa su revisión, y violenta directamente lo establecido en la legislación electoral, en lo relativo a la rendición de cuentas de las agrupaciones políticas nacionales. En vista de lo anterior, la falta se califica como grave.

Además, se tiene en cuenta que el Informe fue presentado con dos días de retraso. Asimismo, se tiene en cuenta que el cumplimiento a su obligación, en el término legal establecido, no era de suyo complicado.

Adicionalmente se tiene en cuenta que la agrupación presenta antecedentes de haber sido sancionada por este mismo hecho en la Resolución del Consejo General respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 1999.

Se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Diana Laura una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

b) En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

La agrupación política realizó con recursos provenientes del financiamiento público, pagos por concepto de reconocimientos por actividades políticas a favor de la campaña del candidato presidencial de la coalición Alianza por el Cambio.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafos 1 y 2, y 35, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 8.1 y 8.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se

hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/626/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Diana Laura que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental de los gastos de operación ordinaria, cuenta Servicios Personales, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, se observó que los recibos "REPAP-APN" expedidos por parte de la agrupación, contenían como domicilio particular de la persona a quien se le otorgó el apoyo, el de la agrupación política. Asimismo, en el concepto de actividad realizada no se señaló en qué consistieron las actividades por las cuales se otorgaron los reconocimientos.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

Referente a la observación en la cuenta de servicios personales, subcuenta reconocimientos por actividades políticas, se les agregó en los recibos 'REPAP-APN' el concepto y tipo de servicio prestado de la actividad realizada por las cuales se le otorgaron los reconocimientos. En relación al domicilio de estas personas se quedó en acuerdo que fuera el de nuestra agrupación ya que las actividades realizadas por estas personas fue en apoyo a la campaña presidencial del candidato Vicente Fox Quezada, en la organización política, y debido a que ellos estuvieron en giras por el interior de la república, ya que así podían referenciarlo para que no tuvieran problema al ser requeridos por alguna autoridad. Por otro lado una vez que nos fue observada esta situación, nos vimos en la imposibilidad de requerirles sus domicilios ya que estas personas ya no están en nuestra organización. Sin que ello se nos consideren como una falta grave, nos comprometemos que para este nuevo ejercicio nos apegaremos a las disposiciones de los lineamientos aplicables.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

De la revisión a la documentación presentada, así como de la respuesta rendida por la agrupación, se determinó que se trata de gastos por concepto de reconocimientos por apoyo político a favor de la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada, erogaciones que no pueden realizar las agrupaciones políticas a favor de una coalición, de conformidad con lo que dispone el artículo 34, párrafo 1 del Código Electoral. En consecuencia, la observación no se consideró subsanada.

Procede aclarar que de acuerdo al análisis de la contabilidad, es posible considerar que del importe de $180,000.00, un monto de $136,184.87 fue solventado con el financiamiento privado y la diferencia de $43,815.13, fue pagada con recursos del financiamiento público, por lo que respecto a este último importe la agrupación incumplió con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento (...)

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Diana Laura incumplió con lo establecido en los artículos 34, párrafos 1 y 2, y 35, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 8.1 y 8.3 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al realizar erogaciones con recursos provenientes del financiamiento público, a favor del candidato a la presidencia de la República registrado por la coalición Alianza por el Cambio.

El artículo 34, párrafo 1 del Código Electoral establece que las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político, no así con coalición alguna. Por su parte, el párrafo 2 del citado numeral prevé que el acuerdo de participación a que se refiere el párrafo primero referido, debe presentarse para su registro ante el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los plazos previstos en el artículo 64, párrafos 1 y 5 del propio Código.

El artículo 35, párrafo 7 del Código Electoral prescribe, de forma limitativa, que las agrupaciones políticas con registro, tienen derecho a percibir recursos provenientes del financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política.

Ahora bien, el artículo 8.1 del Reglamento aplicable establece que todas las erogaciones que se realicen con recursos provenientes del financiamiento público otorgados a las agrupaciones políticas deberán estar debidamente vinculadas a alguno de los rubros que establece el párrafo 7 del artículo 35 del Código Electoral, y ajustarse a lo dispuesto por el Reglamento para el financiamiento público de las agrupaciones políticas nacionales, para sus actividades editoriales, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política.

Por su parte, el artículo 8.3 del Reglamento aplicable prevé que las aportaciones a las campañas políticas de los partidos políticos con los que las agrupaciones hayan suscrito convenios de participación, se registrarán como egresos en la contabilidad de la agrupación y se comprueban a través de un recibo extendido por el partido beneficiario.

De las normas citadas se desprende con claridad lo siguiente:

1. Fuera de los convenios de participación en campañas electorales, las agrupaciones políticas no pueden destinar recursos provenientes del financiamiento público a actividades diversas a las de naturaleza editorial, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica
y política.
2. Las agrupaciones políticas no están facultadas para suscribir convenios de participación con coaliciones, sino única y exclusivamente con partidos políticos.
3. Las agrupaciones políticas, bajo ninguna circunstancia, pueden realizar con recursos públicos, erogaciones directa o indirectas a favor de una coalición o de cualquiera de sus candidatos.

En la especie, la Agrupación Política Nacional Diana Laura destinó, cuando menos, $43,815.13 provenientes del financiamiento público para sufragar gastos de campaña a favor del candidato presidencial de la coalición Alianza por el Cambio. Esta autoridad arriba a esta conclusión tomando en consideración que la agrupación política destinó $180,000.00 para sufragar gastos por concepto de reconocimientos por actividades políticas a favor de la referida campaña, cuando sólo percibió ingresos que no provienen del erario público por un monto total de $136,815.51. Aun suponiendo que todos los recursos de origen privado se hubiesen destinado a sufragar gastos de campaña de un candidato registrado por la coalición Alianza por el Cambio, éstos hubiesen resultado insuficientes para cubrir la suma total de los pagos de campaña efectuados, por lo que esta autoridad puede válidamente presumir que la agrupación política utilizó al menos parte del financiamiento público para realizar erogaciones no permitidas por la ley.

El Código Electoral autoriza a las agrupaciones políticas a participar en campañas electorales, siempre y cuando éstas suscriban un convenio con algún partido político y lo registren ante esta autoridad. Por participación debe entenderse todo acto tendiente a la inducción del voto a favor del partido político y de sus candidatos. En consecuencia, resulta claro que una de las formas en la que una agrupación política puede participar en una campaña electoral, es mediante la aportación de una parte de sus recursos para sufragar gastos de campaña. Sin embargo, la ley limita con toda claridad la posibilidad de que las agrupaciones políticas convengan con coaliciones esta participación, limitación que lleva inexorablemente aparejada la prohibición de que aporten recursos a las coaliciones, o bien, que realicen pagos directos de campaña.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, tomando en cuenta que no es posible arribar con absoluta certeza a conclusiones con respecto al monto real de recursos provenientes del financiamiento público que fueron destinados a la campaña presidencial de la coalición Alianza por el Cambio.

Además, este tipo de faltas pueden tener una incidencia directa en la fiscalización de los informes de campaña presentados por partidos y coaliciones, y eventualmente pueden implicar que la autoridad no sancione violaciones a los topes de gasto, en tanto que se trata de erogaciones de campaña de las cuales la autoridad no tiene conocimiento y que, por tanto, no pueden ser revisados y compulsados en el momento procesal correspondiente. El registro de un convenio de participación tiene precisamente como finalidad que la autoridad tome las providencias necesarias para evaluar de forma integral el origen y destino de los recursos utilizados en una campaña electoral, pues implica conocer de antemano una de las fuentes de las cuales pueden estos recursos provenir.

Ahora bien, no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo o de intención premeditada y expresa de ocultar información, en tanto que en su respuesta la Agrupación Política acepta expresamente haber destinado recursos a la campaña referida.

Se tiene en cuenta, además, que es la primera vez que se sanciona a la Agrupación Política Diana Laura por faltas de esta naturaleza.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Diana Laura una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.4. Agrupación Política Nacional Causa Ciudadana

En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

La agrupación no realizó mediante cheque, pagos superiores a los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por un monto total de $59,658.84, integrados de la siguiente manera:

CUENTA	***SUBCUENTA***	***MONTO***
Activo Fijo	*Equipo de Cómputo*	*$25,840.50*
Activo Fijo	*Equipo de Sonido y Video*	*28,643.34*
Activo Fijo	*Mobiliario y Equipo*	*5,175.00*
TOTAL		***$59,658.84***

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 7.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/558/01, de fecha 24 de julio de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Causa Ciudadana que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar sus egresos, en particular, la adquisición de activo fijo, se determinó que la agrupación política no realizó con cheque pagos que exceden los 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, como se señala a continuación:

SUBCUENTA	REFERENCIA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Equipo de Cómputo	PEg-16/05-00	54192	Múltiple Zones de México, S.A. de C.V.	Stylus Color Presario 7469	$25,840.50
Equipo de Sonido y Video	PEg-15/05-00	80922	Audio Mundo de México, S.A. de C.V.	Sony Videograbadora Sony T.V. color	6,716.64
Equipo de Sonido y Video	PEg-15/05-00	15737	Manuela Esperanza María Pérez Vasconcelos y Ezquerro	Grabadora y Micrófonos	11,970.00
Equipo de Sonido y Video	PEg-15/05-00	D 1925	Fuente de Instrumentos Musicales, S.A. de C.V.	Mezcladora y Amplificador	9,956.70

Mobiliario y Equipo	PEg-15/05-00	5002	Galán Hermanos, S.A. de C.V.	Escritorio Secretarial Sillón Ejecutivo	5,175.00
Total					**$59,658.84**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 7 de agosto de 2001, lo siguiente:

> *Estamos muy conscientes del contenido que establece el articulo 7.3 del Reglamento, en el sentido de que todo pago mayor a cien veces al S.M.G. Vigente en su momento en el D.F. (excepto nóminas) debe realizarse mediante cheque.*
>
> *No con el propósito de justificar esta acción, sino más bien con el fin de explicar la falta, por este conducto me permito exponer a su consideración lo siguiente:*
>
> *Previo a la compra se buscaron los precios más bajos y los mejores Proveedores del mercado que tuvieran los productos de calidad que requiriéramos.*
>
> *Una vez hecha la selección y conseguido la autorización correspondiente, se efectuaron los pedidos de las mercancías de referencia.*
>
> *En su momento, recibimos los productos de los proveedores, pero resulta que no teníamos suficientes cheques para pagar, se nos habían agotado y el Banco nos tardaba mínimo una semana para darnos una nueva dotación. Ante esta situación, juzgamos conveniente hacer 2 cheques a favor de Subadministradora de la Agrupación C. Guadalupe Morales Niño; Concretamente el cheque 1189 Póliza EG-15 del 10 de mayo de 2000 por $40,000.00 y el cheque 1190 Póliza Eg-16 de la misma fecha por $46,500.00 y de esta manera cubrirles sus facturas a los proveedores. Por otra parte, cabe destacar que algunos proveedores no quisieron esperar unos días y diferirles su pago con cheque. Otros de plano decidieron no aceptar cheques.*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *La respuesta de la agrupación se consideró insatisfactoria, al haber incumplido el citado artículo 7.3 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en el artículo 7.3 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al realizar erogaciones que al exceder de 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, debieron realizarse mediante cheque.

En efecto, el artículo 7.3 del Reglamento en comento establece con toda precisión que todo pago que efectúen las agrupaciones políticas que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque. Asimismo, establece las únicas excepciones aplicables a esta regla general, las cuales consisten en pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas.

Esta autoridad electoral no considera suficiente lo argumentado por la agrupación política en el sentido de que no contaban con suficientes cheques para pagar y que la institución bancaria tardaría mínimo una semana para darnos una nueva dotación. Es evidente que el cumplimiento de la normatividad aplicable no puede estar condicionada a que la agrupación política cuente o no con cheques suficientes para realizar las erogaciones que correspondan, pues de antemano conocía su obligación de expedir cheques nominativos para cubrir pagos que excedan del límite señalado y, en consecuencia, debió tomar todas la providencias necesarias para cumplirla a cabalidad.

Ahora bien, la agrupación política que por esta vía se sanciona, acepta expresamente haber incurrido en la falta observada cuando afirma lo siguiente:

> *No con el propósito de justificar esta acción, sino más bien con el fin de explicar la falta, por este conducto me permito exponer a su consideración lo siguiente:*

El hecho de que la agrupación política pretenda "explicar la falta" en la que incurrió, implica la aceptación expresa de su realización.

No está de más señalar que lo establecido en el artículo 7.3 antes referido, es aplicable respecto de los pagos finales que se realicen a nombre y/o por cuenta de la agrupación política. No se cumple con la normatividad si solamente se extiende un cheque a nombre de una persona comisionada por el ésta para que realice, a su vez, pagos en efectivo a otras personas, sino que el pago final debe en todo caso realizarse mediante cheque nominativo, cuando rebase la cantidad indicada. Por lo hasta aquí dicho, lo argumentado por la agrupación no justifica su incumplimiento a lo establecido en el artículo 7.3 del multicitado Reglamento.

Por otro lado, resulta evidente que las irregularidades observadas a la Agrupación Política Nacional Causa Ciudadana no se encuentran dentro de los casos de excepción sino que, como se desprende del Dictamen Consolidado, los pagos se refieren a la adquisición de activos fijos, por lo que es claro su incumplimiento a la normatividad de la materia.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como leve, en tanto que no tiene un efecto inmediato sobre la comprobación de los gastos. Sin embargo, sí puede tener efectos sobre la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos, pues la realización de pagos mediante cheque hace que la identidad de quien los realiza y los recibe estén claramente determinados, mientras que la realización de pagos en efectivo, sobre todo si se trata de sumas importantes, puede originar poca claridad, e incluso hacer que se confundan con recursos que no hubieren estado debidamente registrados en la contabilidad de una agrupación política. La norma transgredida pretende evitar precisamente que el efectivo circule profusamente en las operaciones de las agrupaciones y que dichas operaciones dejen huellas verificables e incontrovertibles que ofrezcan certeza del origen de los recursos, así como de la veracidad de lo informado.

Asimismo, se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: que no se puede presumir desviación de recursos; que la agrupación llevó un adecuado control de sus operaciones, en términos generales, que no ocultó información y es la primera vez que incurre en una irregularidad de estas características.

Por otra parte, en la determinación de la gravedad de la falta, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas y que, aun tratándose de una norma de carácter excepcional, la agrupación no fue capaz de cumplirla a cabalidad.

Adicionalmente ha de considerarse, para fijar la sanción, que el monto que rebasaba el límite de 100 días de salario mínimo y no fue pagado mediante cheque suma un total de $59,658.84.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Causa Ciudadana una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de ciento cuarenta y ocho días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.5. Agrupación Política Nacional Convergencia Socialista

En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La agrupación política no depositó en la cuenta bancaria "CB-APN" de la agrupación, recursos por un monto de $13,000.00, provenientes de la venta de un activo fijo.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/647/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Convergencia Socialista que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta de Autofinanciamiento, se localizó el registro de la venta de un Activo Fijo cuyo producto no se depositó en la cuenta bancaria "CB-APN" de la agrupación. A continuación se detalla el ingreso observado:

REFERENCIA	**IMPORTE**
PI-03/06-00	$13,000.00

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

> *En cuanto a un ingreso por autofinanciamiento de $ 13,000.00 que se encuentra en la referencia*
> *PI-03/06-00 se trata de lo siguiente: invitados como A.P.N. a participar enviando un integrante de nuestra agrupación a un seminario internacional fuera del país decidimos aprovechar la venta*
> *de una máquina que era parte de nuestro activo fijo para poder financiar el mencionado viaje que, por tratarse de un viaje al extranjero, no podía ser pagado con el financiamiento público. Para cubrir el costo del pasaje en forma rápida, sin embargo, omitimos, efectivamente, ingresar el producto de la venta de la máquina a la cuenta de cheques de Convergencia Socialista, y en vez de eso usamos el dinero en efectivo que recibimos por la venta para de inmediato comprar el boleto de avión desde la caja chica de la agrupación. Ambas operaciones están acreditadas con el soporte correspondiente, tanto la venta de la máquina como, por medio de ese autofinanciamiento, la compra del boleto de avión. Por facilidad y premura, cometimos el error administrativo de no depositar el ingreso producto de la venta a la cuenta bancaria de Convergencia Socialista antes de utilizar el dinero, como lo hicimos por medio de la caja chica. Obviamente a posteriori no podemos ya enmendar esta omisión, sino solamente aclarar lo ocurrido y reconocer un error sobre el que, por otro lado, no hubo mala fe.*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *La respuesta de la agrupación no satisfizo a la Comisión de Fiscalización, en virtud de que el instituto político no se apegó a lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Convergencia Socialista incumplió con lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al no depositar en una cuenta "CB-APN" el producto de la venta de un activo fijo.

El artículo 1.2 del Reglamento aplicable establece que todos los ingresos en efectivo que reciban las agrupaciones políticas deben depositarse en cuentas bancarias a nombre de la agrupación política. La finalidad de esta norma es ofrecer a la autoridad electoral un mecanismo efectivo de seguimiento y compulsa de los ingresos que reciban y los egresos que realicen, toda vez que las agrupaciones políticas no sólo se encuentran obligadas a controlar sus ingresos y egresos en cuentas bancarias, sino que también deben entregar a esta autoridad los estados de cuentas respectivos, los cuales permiten verificar la veracidad de lo reportado por las agrupaciones en sus informes anuales.

Como se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización, la agrupación política no depositó en alguna cuenta bancaria el producto de la venta de un activo fijo, incumpliendo, por tanto, lo dispuesto en el artículo 1.2 en comento. Incluso, la propia agrupación, en su

escrito de respuesta, acepta expresamente haber actualizado la irregularidad que por esta vía se sanciona, cuando afirma: "para cubrir el costo del pasaje en forma rápida, sin embargo, omitimos, efectivamente, ingresar el producto de la venta de la máquina a la cuenta de cheques de Convergencia Socialista (...) Por facilidad y premura, cometimos el error administrativo de no depositar el ingreso producto de la venta a la cuenta bancaria de Convergencia Socialista antes de utilizar el dinero".

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues la utilización de cuentas bancarias resulta indispensable para poder emprender una labor de verificación de las cifras contenidas en dicho informe, proceder a su compulsa con la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos y con los movimientos bancarias relacionados.

En vista de lo anterior, la falta se califica como leve, tomando en cuenta que el monto implicado asciende a la cantidad de $13,000 y el hecho de que la agrupación política aceptó expresamente haber cometido
la irregularidad.

Asimismo, esta autoridad toma en cuenta que no es posible presumir dolo en la realización de la conducta antijurídica ni la intención de ocultar información, y que es la primera vez que esta agrupación es sancionada por no depositar en cuentas bancarias todos sus ingresos.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de ciento sesenta y un días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.6. Agrupación Política Nacional Acción Republicana

En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La agrupación política no depositó en la cuenta bancaria "CB-APN" de la agrupación, recursos por un monto de $55,571.09, provenientes de aportaciones de asociados y simpatizantes.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/646/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la agrupación política nacional acción republicana que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión documental al rubro de aportaciones en efectivo de asociados y simpatizantes, se localizaron aportaciones en efectivo que no fueron depositados en la cuenta bancaria "CB-APN" de la agrupación, como se señala a continuación:

RECIBO	NOMBRE	IMPORTE
1	Gloria Cortés Santiago	$5,571.09
2	Magdalena Rodríguez Romero	15,000.00
3	Eduardo Barranco Tenorio	35,000.00
Total		**$55,571.09**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

La observación de Aportaciones en Efectivo de Asociados y Simpatizantes se hace la aclaración, que debido a la operatividad y a las necesidades de recursos para los diferentes cursos de capacitación que se realizaron en los estados, sé tubo (sic) que disponer de dichas aportaciones que se encontraban en caja por lo que no fueron depositados al banco.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta de la agrupación política no satisfizo a la Comisión de Fiscalización ya que la norma es clara al estipular que todos los recursos en efectivo deben depositarse en la cuenta bancaria de la agrupación, por lo que incumplió lo señalado en el artículo 1.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Acción Republicana incumplió con lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al no depositar en una cuenta "CB-APN" diversas aportaciones en efectivo.

El artículo 1.2 del Reglamento aplicable establece que **todos los ingresos** en efectivo que reciban las agrupaciones políticas deben depositarse en cuentas bancarias a nombre de la agrupación política. La finalidad de esta norma es ofrecer a la autoridad electoral un mecanismo efectivo de seguimiento y compulsa de los ingresos que reciban y los egresos que realicen, toda vez que las agrupaciones políticas no sólo se encuentran obligadas a controlar sus ingresos y egresos en cuentas bancarias, sino que también deben entregar a esta autoridad los estados de cuentas respectivos, los cuales permiten verificar la veracidad de lo reportado por las agrupaciones en sus respectivos informes anuales.

Como se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización, la agrupación política no depositó en alguna cuenta bancaria diversas aportaciones en efectivo incumpliendo, por tanto, lo dispuesto en el artículo 1.2 en comento. Incluso, la propia agrupación, en su escrito de respuesta, acepta expresamente haber actualizado la irregularidad que por esta vía se sanciona, cuando afirma que "debido a la operatividad y a las necesidades de recursos para los diferentes cursos de capacitación que se realizaron en los estados, **se tubo** (sic) **que disponer de dichas aportaciones que se encontraban en caja por lo que no fueron depositados al banco**".

Lo alegado por la agrupación no resulta suficiente para considerar subsanada la irregularidad, pues es claro que el cumplimiento de la normativa aplicable de ninguna manera se encuentra condicionado a circunstancias particulares de hecho, como eventualmente puede ser la urgencia de contar con recursos para realizar una determinada erogación. En todo caso, la agrupación debió tomar todas las providencias necesarias para que ese caso de urgencia no se verificara y, en consecuencia, evitar la actualización de la irregularidad que por esta vía se sanciona.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues la utilización de cuentas bancarias resulta indispensable para poder emprender una labor de verificación de las cifras contenidas en dicho informe, proceder a su compulsa con la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos y con los movimientos bancarios relacionados.

En vista de lo anterior, la falta se califica como de mediana gravedad, tomando en cuenta que el monto implicado asciende a la cantidad de $55,571.09 y el hecho de que la agrupación política aceptó expresamente haber cometido la irregularidad.

Asimismo, Esta Autoridad Toma En Cuenta Que No Es Posible Presumir Dolo En La Realización De La Conducta Antijurídica Ni La Intención De Ocultar Información, Y Que Es La Primera Vez Que Esta Agrupación Es Sancionada Por No Depositar En Cuentas Bancarias Todos Sus Ingresos.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Acción Republicana una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de seiscientos ochenta y nueve días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.7. Agrupación Política Nacional Agrupación Política Campesina

En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

La agrupación política presentó documentación comprobatoria sin requisitos fiscales, por un importe de $5,588.68, en la cuenta Educación y Capacitación Política, subcuenta de Viáticos.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/653/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Agrupación Política Campesina que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta Educación y Capacitación Política, subcuenta Viáticos, se localizó documentación sin requisitos fiscales, como a continuación se detalla:

REF. CONTABLE	PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	OBSERVACION
PD-3/oct-00	Colegio de Abogados	S/N	$1,300.00	Recibo en hoja membreteada, sin cédula fiscal.
PD-3/nov-00	Cam- Audi	S/N	2,400.00	Comprobante sin cédula fiscal.
PD-10/dic-00	S/N	S/N	1,888.68	Comprobante de gastos sin cédula fiscal.
TOTAL			**$5,588.68**	

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante número 005/08/2001, de fecha 20 de agosto del año 2001, manifestó lo que a la letra dice:

- *La cantidad de $1,300.00 se consideró con solo hoja membreteada, por no contar el colegio en su momento con recibos fiscales y por el tipo de concepto del evento (Servicios de Limpieza, Café y realización del foro).*
- *La cantidad de $2,400.00 se justifica con la compra de cámara de video y fotográfica, no se solicitó factura por tratar de bajar el costo y cuando se notifica al compañero que no procede acudió a la tienda donde la compró y no quisieron ya facturar, por lo que se solicita sea considerado el gasto correspondiente como tal.*
- *En lo que respecta al importe de $1,888.68, se anexa bitácora de gastos del evento realizado en Tijuana y no se cuenta con comprobantes correspondientes a este gasto solo la relación de actividades.*

Se anexa bitácora de eventos Tijuana, misma que consta en la contabilidad correspondiente".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La contestación de la agrupación se considera insatisfactoria, al incumplir lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
y 7.1 del Reglamento. Adicionalmente, no proporcionó la bitácora a que hace referencia.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Agrupación Política Campesina incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al presentar documentación comprobatoria de egresos que carece de los requisitos exigidos por la normativa fiscal.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos. por su parte, el artículo 7.1 del reglamento aplicable dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, así como que dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien, que se justifique según las circunstancias particulares.

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación original que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa fiscal, pues no se trata de erogaciones susceptibles de considerarse como excepcionales.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad en tanto que con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 7.1 del Reglamento aplicable para acreditar los egresos que se efectúen la agrupación política, y la documentación presentada no se encuentra incluida en los casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

También se tiene en cuenta que: a) no se puede presumir desviación de recursos; b) la agrupación presentó algún documento de soporte, aunque no reúna los requisitos exigidos; c) no puede concluirse que hubiere tenido intención de ocultar información, y d) el monto implicado asciende a $5,588.68.

Por otra parte, esta autoridad toma en cuenta que es la primera vez que la agrupación política incurre en este tipo de faltas.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Agrupación Política Campesina una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.8. Agrupación Política Nacional Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía

a) En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La agrupación política presentó documentación soporte en copia fotostática y a nombre de terceros por un monto de $1,957.68, en la cuenta Gastos en Educación y Capacitación Política.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos*

Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a), y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/616/01, de fecha 24 de julio de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental, se localizó el registro de varias pólizas que carecían de la documentación soporte correspondiente, como se señala a continuación:

REFERENCIA	CHEQUE	CONCEPTO		IMPORTE
PE-10/07-00	**903424**	**Gastos a Comprobar Carlos Monroy**	**Viáticos**	**$1,265.00**
PE-2/11-00	**903466**	**Gastos a Comprobar Patricia Peña**	**Teléfono**	**1,957.68**
TOTAL				$3,222.68

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

"Las pólizas que se nos señalan que carecen de documentación soporte (PE-10/07-00 CH-903424, por $1,265.00 y PE-2/11-00, CH-903466, por $1,957.68), anexamos correctamente a sus pólizas correspondientes".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

De la revisión a la documentación presentada por la agrupación, se determinó que respecto al importe de $1,265.00, proporcionó la documentación original con requisitos fiscales, razón por la cual la observación quedó subsanada. En relación al monto de $1,957.68, entregó documentación en copia simple a nombre de un tercero, por lo que la observación no se consideró subsanada, al incumplir lo estipulado en los artículos 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al presentar documentación comprobatoria de egresos en copia fotostática y a nombre de terceros.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos.

El artículo 7.1 del Reglamento aplicable dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, así como que dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

Por su parte, el artículo 14.2 prevé que durante el periodo de revisión de los informes, las agrupaciones políticas tienen la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier

clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien que se justifique según las circunstancias particulares, y menos aún copia fotostática de la documentación comprobatoria requerida.

Tal y como lo señala la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, en el caso de la documentación en copia por un monto de $1,957.68, la agrupación sólo presentó copia fotostática de documentación a nombre de un tercero. Tal situación no subsana el hecho de no haber presentado la documentación comprobatoria original, ya que el artículo 14.2 exige que se presente la documentación original, sin que en el propio Reglamento se establezca la alternativa de presentar copias fotostáticas como documentación comprobatoria de egresos.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos
se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos
previamente establecidos.

Así, el egreso no se considera debidamente comprobado en tanto que la agrupación política debía presentar la documentación comprobatoria en original y expedida a su nombre, lo cual, en los hechos, nunca aconteció.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual y, en particular, al presentarse documentación que no está a nombre de la agrupación política, no se puede tener certeza de que los egresos reportados se hayan efectivamente verificado en la forma y términos contenidos en su contabilidad y, en última instancia, en el informe presentado. Por su parte, no puede otorgarse valor probatorio a la documentación en copia fotostática, en tanto que esta autoridad no tiene certeza de ésta que coincida con la que efectivamente le fue extendida a la agrupación por la persona a quien se efectuó el pago, en virtud de la relativa facilidad con la que puede ser alterada.

Esta autoridad no tiene elementos para presumir una intención premeditada y expresa de ocultar información. Además, se tiene en cuenta que la Agrupación Política Nacional nunca ha sido sancionada por una falta similar y que el monto implicado en la irregularidad asciende a $1,957.68.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

b) En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La agrupación política no utilizó la cuenta 105 Gastos por Amortizar por concepto de Gastos en Tareas Editoriales.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 9.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el STCFRPAP/616/01 del 24 de julio de 2001, se solicitó la Agrupación Política Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía que presentara las aclaraciones o rectificaciones que

considerara pertinentes respecto del hecho de que, al efectuar la revisión de las cuentas Gastos en Tareas Editoriales, se había observado que la agrupación no utilizó la cuenta 105, Gastos por Amortizar y ni había presentado el kárdex con sus notas de entrada y de salida correspondientes.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 10 de agosto de 2001, lo siguiente:

> *"En este rubro se nos hace la observación de no haberse controlado las publicaciones a través de la cuenta 105 'Gastos por Amortizar', como lo establece el artículo 9.2 del Reglamento que establece los Lineamientos a las Agrupaciones Políticas; situación que corregimos, modificando nuestra Balanza de Comprobación al 31 de diciembre del 2000, así como auxiliares de la cuenta citada, mismas que anexamos al presente. En este mismo rubro se nos señala que no habíamos presentado Kárdex y Notas de Entradas y Salidas".*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

> *Aun cuando la agrupación indica que registró la cuenta 105 "Gastos por Amortizar", de la verificación a la balanza de comprobación se determinó que no se registró dicha cuenta. Adicionalmente, en el kárdex indica lo siguiente:*
>
> *"Nota: no se utilizó la cuenta 105 'Gastos por Amortizar' debido a que en el mismo mes que se registraron las entradas, también se registraron las salidas".*
>
> *Por lo anterior, se considera no subsanada la observación, al incumplir lo estipulado en el artículo 9.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía incumplió con lo establecido en el artículo 9.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, al no haber utilizado la cuenta 105, Gastos por Amortizar.

El artículo 9.2 del Reglamento aplicable dispone textualmente lo siguiente:

"Para efectos de las tareas editoriales, se utilizará la cuenta 'gastos por amortizar' como cuenta de almacén, abriendo las subcuentas que requieran. Tanto en estas cuentas, como en las correspondientes a materiales y suministros, en caso de que los bienes sean adquiridos anticipadamente y sean susceptibles de inventariarse, deberá llevarse un control de notas de entradas y salidas de almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y destino, así como quien entrega o recibe. Se debe llevar un control físico adecuado a través de kárdex de almacén y hacer cuando menos un levantamiento de inventario una vez al año, que podría ser al mes más próximo al cierre del ejercicio".

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la irregularidad consistente en no utilizar la cuenta 105 Gastos por Amortizar, tal y como lo establece el Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que no permite conocer la utilización de los productos que han de controlarse, con lo que podría generarse incertidumbre en cuanto al destino final de las erogaciones realizadas por la agrupación política.

La omisión en la entrega de documentación solicitada se tradujo en la imposibilidad material de la comisión de verificar la veracidad de lo reportado en el rubro "gastos por Amortizar" por concepto de Gastos en Tareas Editoriales.

Sin embargo, se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: que no se puede presumir la existencia de dolo, intención de ocultar información y que es posible que la irregularidad detectada se deba a una interpretación errónea de la normatividad.

Por otro lado, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la agrupación política Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

5.9. Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia

En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política presentó su informe anual fuera del plazo legal para la revisión de los mismos.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafo 4, 35, párrafos 11 y 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante oficio STCFRPAP/930/00 de fecha 21 de noviembre de 2000, se hizo de conocimiento de la agrupación el plazo para la presentación de su Informe Anual, que concluía el 14 de mayo de 2001.

Fuera del plazo señalado, el 22 de agosto de 2001 presentó su Informe Anual.

Cabe señalar que la agrupación política no sólo entregó su Informe Anual fuera del plazo establecido para hacerlo, sino incluso fuera del plazo de revisión de los informes de las agrupaciones políticas nacionales, pues éste venció el 6 de agosto de 2001. Ese día, el 6 de agosto de 2001, era el último para que la Comisión de Fiscalización enviara los últimos oficios de garantía de audiencia a las agrupaciones políticas nacionales, una vez que de la revisión de los Informes presentados en tiempo y forma se llega a la conclusión de que ha lugar a que el partido aclare errores y omisiones técnicas. Por lo tanto, aun cuando la agrupación política hizo entrega de su Informe, la fecha en que lo hizo produjo como consecuencia inevitable que la Comisión de Fiscalización estuviese en imposibilidad material de realizar una revisión profunda y dar, una vez concluida, audiencia a la agrupación para que alegara lo que a su derecho conviniese.

Así pues, se insiste, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas de someter a la agrupación Campesinos de México por la Democracia al ejercicio de rendición de cuentas prescrito en el Código electoral federal. En vista de ello, la falta se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en los artículos 269, párrafo 2, incisos a), b) y e), y párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales amerita la máxima sanción.

Efectivamente, el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) del mismo ordenamiento establecen que se sancionará a los partidos y agrupaciones cuando incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables del Código electoral federal, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General, y cuando no presenten los informes anuales en los términos y plazos previstos en la misma ley. Ciertamente, no estamos en la situación en la que la agrupación política no hace entrega de su informe. Sin embargo, la entrega es tan extraordinariamente tardía que deja a la autoridad en incapacidad total para realizar un ejercicio completo de revisión y de comunicación con la agrupación respecto de sus errores y omisiones técnicas.

En vista de ello, la falta se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en los artículos 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso c) de su primer párrafo, es decir, la sanción consistente en la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda como agrupación política nacional, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática, y en la especie esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

Es evidente que la agrupación no ha querido, de ninguna manera, someterse al ejercicio de rendición de cuentas que establece la ley, y tal irresponsabilidad no puede, en modo alguno, y bajo ninguna circunstancia, ser tolerado por la autoridad electoral federal. Es posible, ciertamente, que una agrupación sea sancionada por errores u omisiones que se deriven de la revisión de su Informe Anual. Pero en ese caso, aun cuando se sancionen errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que la agrupación da muestras de una voluntad, imprescindible en un estado democrático de derecho, de someterse a un ejercicio de rendición de cuentas, de someterse al escrutinio de la autoridad pública, máxime si la agrupación recibe recursos públicos que no pueden otorgarse sin que exista la correlativa obligación por parte del beneficiario de dar a conocer claramente, y con prueba documental, de modo público y transparente, del uso que hizo de dichos recursos. En la especie, sin embargo, eso no sucedió, y la agrupación simple y llanamente, al omitir la entrega de su Informe en los plazos en que legal y razonablemente podía realizarse una revisión, se negó a someterse a dicho ejercicio, con lo cual de modo plástico se puso al margen del sistema normativo que regula la vida de las agrupaciones políticas nacionales, al ostentar una conducta clara e inequívocamente irresponsable.

En el pasado, la agrupación Campesinos de México por la Democracia se sometió al ejercicio referido. Tanto en 1999 respecto del año fiscal 1998, como en 2000 respecto del año fiscal 1999, la agrupación entregó su informe en tiempo. Por lo tanto, es obvio que la agrupación conocía perfectamente de su obligación de presentar en tiempo y forma su Informe Anual, junto con toda la documentación requerida clara e inequívocamente por los artículos 11 y 12 del Reglamento aplicable. De modo pues que esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del conocimiento claro, preciso y exacto que tenía la agrupación en relación a su obligación de presentar su Informe Anual en el plazo correspondiente, pues en el pasado cumplió con dicha obligación.

Es cierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en el pasado que aun cuando una agrupación entregue tarde su Informe Anual, la autoridad tiene la obligación de revisarlo y entrar al fondo del análisis y la auditoría. Eso precisamente hizo la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Eso queda de manifiesto en el Dictamen Consolidado, en el capítulo correspondiente. Sin embargo, a la Comisión de Fiscalización le fue imposible hacer un ejercicio completo de revisión, pues para realizarlo es imprescindible entrar en contacto con la agrupación y llevar a cabo un intercambio de oficios que, en términos de ley, permite a la autoridad dar a conocer sus observaciones a la agrupación política nacional respecto de errores u omisiones técnicas, y a ésta presentar las pruebas que considere pertinentes y alegar todo lo que a su derecho convenga. La norma es muy clara en este sentido. El inciso a) del párrafo 2 del artículo 49-A del Código electoral federal establece con toda claridad que la Comisión de Fiscalización contará con 60 días para revisar los informes anuales. Este Consejo General interpreta que es en esos 60 días cuando la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas está obligada a revisar los Informes de las agrupaciones, aun cuando dichos informes le hayan sido entregados fuera del plazo para su recepción. La autoridad electoral federal puede sancionar el arribo tardío del Informe, pero ello no significa que no esté obligada a auditar su contenido y a entrar en contacto con la agrupación para darle a conocer los errores u omisiones técnicas en que incurrió, de modo que esté en posibilidad de completar el ejercicio fiscalizador y de dar cuenta en el dictamen correspondiente del resultado de la revisión, de hacer mención de los errores o irregularidades encontradas en los informes, y de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron las agrupaciones después de haberles notificado con ese fin, tal como literalmente establece el artículo 49-A, párrafo 2, inciso d), numeral III. Es pues en el marco de esos 60 días cuando la Comisión de Fiscalización está obligada a realizar su revisión y sus tareas auditoras, independientemente del día, dentro de ese plazo de 60 días, en que la agrupación hizo entrega de su Informe. En el marco pues de esos 60 días, a la agrupación que entrega tardíamente su Informe se le sanciona, pero también se la audita porque se está en los plazos en que la autoridad se encuentra realizando sus auditorías.

Sin embargo, esta autoridad electoral entiende también que el artículo 49-A, párrafo 2, inciso c), establece que concluido el plazo de 60 días en que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas revisa los informes anuales, dicha "Comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión". Por lo tanto, en el plazo señalado por el artículo 49-A, párrafo 2, inciso c), no pueden llevarse a cabo actividades propias del plazo señalado en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso a). En ese sentido el inciso c) es muy claro cuando inicia su redacción estableciendo: "Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo, o en su caso, al concedido para rectificaciones de errores u omisiones, la comisión dispondrá de un plazo de veinte días...". Debe tenerse presente que la comisión concluyó el plazo señalado en el inciso a) el 6 de agosto de 2001. El mismo 6 de agosto de 2001 se enviaron los últimos oficios que advertían errores u omisiones técnicas. Por lo tanto el plazo "concedido para rectificaciones de errores u omisiones técnicas" concluyó, en términos del inciso b) del multicitado párrafo, 10 días hábiles después del 6 de agosto, es decir, el lunes 20 de agosto. Por lo tanto, en el momento en que el día 22 de agosto la agrupación presenta su Informe Anual, ya es jurídicamente imposible iniciar y completar el ejercicio fiscalizador, ya que la Comisión estaba ya en el plazo señalado en el inciso c), y en ese plazo resultaba claramente desapegado a derecho regresar a realizar actividades propias del plazo señalado en el inciso a). Es así, pues, que la falta se acredita. Al respecto es importante tener presente el siguiente criterio establecido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-026/2000 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

> *"El procedimiento de revisión de los informes anuales del origen y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, se encuentra detallado con precisión, de tal forma que, como ha quedado señalado,* ***los plazos establecidos son ciertos y determinados, sin que puedan ser modificados a voluntad de la autoridad o de los partidos políticos.***
>
> *Así pues, el periodo de revisión del informe, a cargo de la Comisión de Fiscalización, es de sesenta días, lapso en el cual dicha Comisión puede hacer del conocimiento de los partidos políticos la existencia de errores u omisiones técnicas, y realizar la notificación correspondiente a los mismos, es decir,* ***puede ser desde el primer día hasta el último de los que comprende dicho plazo...***
>
> *En efecto... el Consejo General del Instituto Federal Electoral no estaba obligado a tener en cuenta los estados de cuenta bancarios presentados el treinta de mayo de dos mil, es decir, un día antes de la realización de la sesión en que se puso a su consideración el dictamen consolidado y aprobación de la resolución correspondiente,* ***toda vez que la sanción deriva directamente de la omisión de haber presentado la documentación requerida en los plazos legalmente previstos*** *y no tanto del análisis de la misma, pues evidentemente éste no pudo realizarse".*

Ciertamente, la agrupación entregó un Informe, pero también es claro que resultó imposible que pudieran actualizarse las consecuencias jurídicas de la entrega, en términos de una efectiva, real y profunda revisión y auditoría, de la que se derivara el intercambio de oficios que supone el ejercicio del derecho de audiencia, y de ahí se pudiera derivar, a su vez, la emisión de un dictamen que diera cuenta de un ejercicio completo, exhaustivo y cabalmente eficaz de rendición de cuentas.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso e) de su primer párrafo, es decir, la sanción consistente en la supresión total de la entrega de ministraciones del financiamiento que les corresponda a las Agrupaciones Políticas Nacionales por el periodo que determine la autoridad electoral, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática, y en la especie esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

El párrafo 3 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la sanción consistente en la supresión total de la entrega de ministraciones sólo puede imponerse cuando la irregularidad sea grave o sistemática. En el presente caso, la entrega del informe fuera de los plazos legales para su revisión, imposibilitó que la Comisión de Fiscalización verificara la veracidad de lo reportado por la citada agrupación en su informe.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que debe imponer a la Agrupación Campesinos de México por la Democracia la sanción establecida en el artículo 269, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda por el periodo de un año.

5.10. Agrupación Política Nacional Centro Político Mexicano

a) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La agrupación política no presentó documentación comprobatoria de egresos por un monto total de $3,248.00, integrado de la siguiente manera:

CUENTA	***CONCEPTO***	***MONTO***
Gastos de Operación Ordinaria	*Teléfonos de México, S.A. de C.V.*	*$1,903.00*
Gastos de Operación Ordinaria	*Teléfonos de México, S.A. de C.V.*	*1,345.00*
TOTAL		***$3,248.00***

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/656/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Centro Político Mexicano que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar el rubro de Gastos de Operación Ordinaria Permanente se localizó el registro de varias pólizas que carecían de documentación soporte, por un monto total de $9,998.00.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 20 de agosto de 2001, lo siguiente:

"Se efectuó la aplicación contable referente a estos gastos, haciéndose las respectivas correcciones."

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

De la revisión efectuada a la documentación presentada, se determinó lo siguiente. En relación a la póliza CH/203-NOV, por un importe de $657.00, proporciona la documentación soporte con requisitos fiscales, razón por la cual se considera subsanada la observación.

Referente a las pólizas CH/166-OCT Y CH/166-OCT por un monto de $1,903.00 y $1,345.00, respectivamente, no proporcionó la documentación soporte solicitada, incumpliendo lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso K) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

Respecto a la diferencia de $6,092.98, la agrupación proporciona recibos de papelería denominadas comprobantes de gastos sin requisitos fiscales por lo que incumplió lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso K) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas, razón por la cual no se considera subsanada la observación.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal De Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 y 14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos,

Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral establece que los partidos políticos nacionales y las coaliciones políticas están obligados a entregar a la Comisión de Fiscalización la documentación que le solicite respecto de sus ingresos y egresos.

Por otra parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas señala que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables. Adicionalmente, el artículo 14.2 del citado Reglamento establece que las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Debe decirse que es obligación de la agrupación, al momento de efectuar un gasto, solicitar al proveedor toda la documentación comprobatoria exigida por la normatividad y que contenga requisitos fiscales. La labor de la agrupación no consistía en realizar erogaciones a diestra y siniestra para posteriormente iniciar la recolección de toda la documentación sustento de los gastos que había realizado, por lo que, desde luego, esta autoridad considera que la agrupación incurrió en la irregularidad consistente en no presentar documentación comprobatoria soporte del gasto realizado.

La normatividad aplicable es clara al establecer que es obligación de las agrupaciones políticas, contar en todo momento con la documentación que compruebe de manera adecuada los gastos en que incurrió, por lo que nada le exime a la agrupación de la presentación de la citada documentación al momento de la presentación de su informe anual, o bien, cuando la Comisión de Fiscalización se los solicitara.

La autoridad electoral considera trascendente que una agrupación, por las razones que sean, no le presente la documentación comprobatoria del gasto o del ingreso que ésta solicite, en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta puede tener efectos sobre la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

Así pues, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su informe anual. En vista de ello, la falta se califica como grave y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Al respecto, se ha de tener en cuenta que la no entrega de la documentación comprobatoria se debe a una mala administración, y no a una intención dolosa por parte de la agrupación.

También debe tenerse en cuenta que el monto total que la coalición no comprobó es de $3,248.00.

Además, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Centro Político Mexicano una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

b) En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La agrupación política presentó documentación comprobatoria sin requisitos fiscales, por un importe total de $25,872.75, integrados de la siguiente manera:*

CUENTA	***MONTO***
Gastos de Operación Ordinaria Permanente	*$18,779.77*

CUENTA	***MONTO***
Educación y Capacitación Política	*1,000.00*
Gastos de Operación Ordinaria Permanente	*6,092.98*

TOTAL	***$25,872.75***

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/656/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Centro Político Mexicano que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental de los Gastos de Operación Ordinaria Permanente, se localizó documentación sin requisitos fiscales, como se detalla a continuación:

REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
CH/132-Ago	Al Portador	$2,750.00
CH/154-Sep	Luis Moreno de la Torre	3,000.00
CH/166-Oct	Teléfonos de México, S.A. DE C.V.	1,903.00
REFERENCIA	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
CH/167-Oct	Teléfonos de México, S.A. DE C.V.	1,345.00
CH/203-Nov	Al Portador	1,000.00
Total		**$9,998.00**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

Se efectuó la aplicación contable referente a estos gastos, haciéndose las respectivas correcciones.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

Respecto a la diferencia de $6,092.98, la agrupación proporciona recibos de papelería denominadas comprobantes de gastos sin requisitos fiscales por lo que incumplió lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso K) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas, razón por la cual no se considera subsanada la observación.

Mediante el oficio STCFRPAP/656/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Centro Político Mexicano que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental de los Gastos de Operación Ordinaria Permanente, se localizó documentación sin requisitos fiscales, como se detalla a continuación:

REFERENCIA	BENEFICIARIO CHEQUE	IMPORTE
CH/091-May	Al Portador	$1,167.10
CH/092-May	Al Portador	2,800.00
CH/109-Jun	Al Portador	350.00
CH/128-Jul	Al Portador	2,750.00

CH/138-Ago	Al Portador	230.37
CH/142-Ago	Al Portador	2,000.00
CH/143-Ago	Al Portador	2,634.00
CH/145-Sep	Al Portador	1,000.00
CH/153-Sep	Al Portador	2,750.00
CH/159-Sep	Al Portador	200.00
CH/169-Oct	Al Portador	1,167.10
CH/174-Oct	Al Portador	2,700.00
CH/187-Nov	Al Portador	2,000.00
T O T A L		**$21,748.57**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

Se soportaron con la documentación requerida, las pólizas respectivas.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

Respecto a la diferencia de $18,779.77, la agrupación entregó recibos de papelería denominados comprobantes de gastos sin requisitos fiscales por lo que incumplió lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso K) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas, razón por la cual no se considera subsanada la observación.

Mediante el oficio STCFRPAP/656/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Centro Político Mexicano que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental del rubro de educación y capacitación política, se localizó el registro contable de una póliza que carecía de documentación soporte, como se detalla a continuación:

REFERENCIA CONTABLE	BENEFICIARIO	IMPORTE
CH/123-07-00	Al Portador	$1,000.00

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

Referente al registro del cheque 123 se realizó la comprobación correspondiente asignándosele a cuenta de servicios generales.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

De la revisión efectuada a la documentación, se determinó que la agrupación presentó recibos de papelería denominados comprobantes de gastos sin requisitos fiscales, por lo que incumplió lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso K) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas, razón por la cual no se considera subsanada la observación.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Campesina incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos

de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al presentar documentación comprobatoria de egresos que carece de los requisitos exigidos por la normativa fiscal.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos. Por su parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, así como que dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien, que se justifique según las circunstancias particulares.

Si bien en sus escritos de respuesta la agrupación política afirma remitir la documentación solicitada por esta autoridad, de la revisión efectuada a la misma, se determinó que no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa fiscal aplicable.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 7.1 del Reglamento aplicable para acreditar los egresos que se efectúen la agrupación política, y la documentación presentada no se encuentra incluida en los casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

También se tiene en cuenta que: a) no se puede presumir desviación de recursos; b) la agrupación, en algunos casos, presentó algún documento como soporte, aunque no reúna los requisitos exigidos; c) no puede concluirse que hubiere tenido intención de ocultar información, y d) el monto implicado asciende a $25,872.75.

Por otra parte, esta autoridad toma en cuenta que es la primera vez que la agrupación política incurre en este tipo de faltas.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

En vista de lo anterior, la falta se califica como de mediana gravedad.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Centro Político Mexicano una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de ciento noventa y dos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.11. Agrupación Política Nacional Expresión Ciudadana, A.C.

En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política incumplió con sus obligaciones, de manera particularmente grave, al incurrir en las siguientes irregularidades:*

- *La Agrupación Política Nacional Expresión Ciudadana no presentó en tiempo su Informe Anual.*
- *La agrupación política no presentó recibos de aportaciones RAF-APN de asociados y simpatizantes en efectivo, por un importe total de $1'559,825.00.*
- *Adicionalmente, la agrupación política omitió depositar en la cuenta CB-APN aportaciones de asociados y simpatizantes en efectivo por un monto de $1'506,000.00.*
- *La agrupación política presentó documentación comprobatoria de gasto que no reúne los requisitos establecidos en el Reglamento aplicable consistente en pólizas cheque que no contenían fecha de expedición, lugar, nombre del beneficiario, importe del cheque y firma de cheque recibido.*

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34 párrafo 4, 35 párrafo 11 y 12, 38 párrafo 1, inciso k) y 49-A párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 1.2, 3.2, 14.2 y 19.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso d) y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Primeramente, es importante subrayar el hecho de que, aún cuando por oficio de fecha 21 de noviembre de 2000, identificado con el no. STCFRPAP/934/00, se dio aviso a la agrupación de que el plazo para la presentación de su Informe Anual vencía el 14 de mayo de 2001, la agrupación no hizo entrega del informe aludido sino hasta el 21 de julio de 2001. Grave falta la cometida por la agrupación, pues supuso que la autoridad electoral, en vez de contar con 60 días para la revisión del informe correspondiente, contaría en los hechos con solamente 11 días. Esta conducta supone sin lugar a dudas un obstáculo interpuesto a la autoridad para desarrollar plenamente sus tareas fiscalizadoras.

Con todo, la autoridad se dio a la tarea de revisar con diligencia, pero también con profundidad, los contenidos del Informe Anual. Algo que llamó la atención de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas fue que la agrupación no depositara en las cuentas bancarias correspondientes aportaciones de asociados y simpatizantes en efectivo por un monto de 1,506,000.00, y que respecto de esos ingresos tampoco presentara recibos de aportaciones RAF-APN de asociados y simpatizantes en efectivo, y aún por un monto adicional, para llegar por ese concepto a la cantidad de 1,559,825.00. Ello suponía de entrada que del Financiamiento por los Asociados y Simpatizantes la agrupación no ofrecía evidencia alguna, ni de la identidad de los aportantes, ni de las fechas y montos de las aportaciones, ni del ingreso de dichos recursos al sistema bancario nacional. Ambas irregularidades, cuando se adminiculan una con otra, configuran una falta especialmente grave, pues obligan a la autoridad a pensar que hay una intención deliberada de ocultar, de evitar la transparencia que debe caracterizar el origen de los recursos por parte de una agrupación política nacional con registro.

Las observaciones señaladas fueron comunicadas a la agrupación mediante oficio no. STCFRPAP/651/01 de fecha 6 de agosto del año en curso, y la agrupación, de modo extemporáneo, contestó mediante oficio No. Ref. E:C:/399/2001, de fecha 27 de agosto, lo siguiente:

"El problema que la agrupación ha tenido, el cual nos retraso en la entrega del informe anual, es el ocasionado por el C.P. Carlos Morales, quien fue contratado para que se hiciera cargo de la contabilidad de la agrupación, así como de la entrega de informes y pago a los proveedores.

El nos informó en el mes de Diciembre de 2000 que el informe había sido entregado en tiempo y forma en las oficinas del IFE, pero tiempo después por los oficios y llamadas telefónicas que recibimos donde se nos solicitaba la información, fue que nos dimos cuenta que el C.P. Morales no había entregado la información.

Por medio de un tercero el C.P. Morales se comunicó con nosotros y se comprometió a entregar la información supuestamente extraviada durante los últimos meses hemos recibido información que él nos envía siempre por medio de terceros, pero no de una forma completa, es decir nos entrega pólizas pero no de una manera soportada como ustedes requieren, o nos entrega facturas sin requisitos fiscales, pólizas de ingresos sin fichas de deposito y sin comprobantes de ingresos, pago hecho a la imprenta donde se elaboran las revistas pero sin registrar entradas y salidas".

Es importante subrayar que la agrupación parece alegar ignorancia respecto de sus obligaciones. Supuestamente, sólo a través de "los oficios y las llamadas telefónicas" de la autoridad, la agrupación tuvo conciencia de la situación en que se encontraba respecto del cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y forma. La Comisión de Fiscalización juzgó del todo inoperante la respuesta de la agrupación, pues hay por lo menos dos elementos que permiten concluir que la agrupación conocía perfectamente la situación en la que se encontraba. En primer lugar, la agrupación Expresión Ciudadana fue sancionada en el año 2000, respecto del Informe Anual de 1999, por haber entregado de forma extemporánea su Informe Anual, que fue entregado el 5 de abril de 2000 cuando el plazo para la entrega se venció el 30 de marzo de 2000. De modo pues que la sanción que entonces se le impuso la hacía conciente, perfectamente, de las normas aplicables y de las sanciones que se imponen frente a su incumplimiento. En segundo lugar, la agrupación fue notificada por oficio fechado el 21 de noviembre de 2000, del vencimiento del plazo en que debía hacer entrega de su Informe Anual correspondiente al año fiscal 2000. Así pues, es inaceptable el alegato de la agrupación orientado a hacer creer a la autoridad electoral federal que una comprensión inadecuada de la normatividad motivó el incumplimiento referido.

Por otro lado, la agrupación acepta sin más no cumplir con sus obligaciones. Reconoce abiertamente que su conducta violenta de modo sistemático el ordenamiento jurídico, legal y reglamentario, relativo al manejo de sus recursos, y culpa de su incumplimiento a un Contador Público llamado Carlos Morales, con quien la agrupación no tiene una relación directa sino a través, se insiste en su respuesta, de terceras personas no identificadas. La agrupación utiliza las expresiones "Por medio de un tercero", y "por medio de terceros". Queda por lo tanto acreditado fehacientemente que la agrupación no depositó sus recursos privados en las cuentas bancarias correspondientes, y que tampoco expidió como estaba obligado a hacerlo los recibos correspondientes a asociados y simpatizantes, con lo cual abiertamente evitó que dichos movimientos relacionados con sus ingresos privados se transparentaran. No está de más señalar que de ninguna manera el cumplimiento de la normatividad por parte de las agrupaciones políticas nacionales puede estar condicionada por actos de terceros.

Sin embargo, la gravedad de la falta aludida se acentúa cuando se observan otras irregularidades en que incurrió la agrupación política Expresión Ciudadana. Efectivamente, la Comisión de Fiscalización detalla en el Dictamen Consolidado el modo en que los recursos privados aludidos sirvieron, según los registros contables de la agrupación, para pagar los servicios de un solo proveedor (Josué Morales) que impartió cursos a lo largo y ancho de la República y que expidió 6 facturas por un monto agregado de 1,506,000.00, monto equivalente al 78.7% del total de gastos relacionados con las actividades sustantivas que, en términos de ley, debe realizar la agrupación política nacional. A lo largo del año, un solo proveedor impartió, según esas 6 facturas, un total de 3,060 cursos en 11 estados de la República. Este Consejo General juzga de la mayor relevancia la circularización que la Comisión de Fiscalización hizo respecto del proveedor Josué Morales, pues ello permitiría eventualmente a la autoridad electoral confirmar las operaciones millonarias que, en efectivo, realizó la agrupación con un proveedor que concentró la mayoría aplastante de su gasto-financiamiento total. Ahora bien, puesto que la dirección señalada en las facturas no pudo ser localizada, se le pidió a la agrupación política que presentara aclaraciones, a través del oficio no. STCFRPAP/640/01, de fecha 6 de agosto de 2001. La agrupación, de forma extemporánea, contestó mediante escrito No. Ref. E.C./400/2001, de fecha 27 de agosto del año en curso, lo siguiente:

> *"En cuanto a las facturas a las cuales hacen referencia, del proveedor CECADEP (...) El proveedor fue contratado con el fin de impartir los cursos fuera de la capital, con material y recursos de la agrupación.*

El proveedor es el mismo C.P. Morales, quien viajaba junto con los capacitadores a los lugares donde se llevaban a cabo los eventos.

La forma de pago era de la siguiente manera: los invitados al curso colaboraban con una parte del costo del mismo, ya que estos duraban en promedio diez días. El restante del costo total del curso era liquidado por la agrupación en pagos según fueran solicitados por el Sr. Jesús Morales con quien se trató siempre en las oficinas de la agrupación, además de los cheques eran expedidos a su nombre.

En lo que respecta al registro de los ingresos de los invitados a los eventos, el C.P. Morales lo registraba en el formato indicado para eso, mismo que nos presentaba así como el pago hecho a CECADEP. Por lo que suponemos que estos recibos fueron extraviados juntamente con la demás información".

Amén de que el orden lógico con que la agrupación alega lo que a su derecho conviene es especialmente oscuro, es importante subrayar que en distintos documentos, y en las respuestas de la agrupación, parecen distinguirse tres personas de apellido Morales: en primer término, se identifica al "C.P. Carlos Morales" (también llamado por la propia agrupación "C.P. Morales"), quien fue contratado según la agrupación para que "se hiciera cargo de la contabilidad de la agrupación, así como de la entrega de informes y pago a los proveedores"; en segundo término, se identifica el nombre de "Josué Morales Cruces", proveedor de los servicios de impartición de 2,970 cursos; finalmente, en la respuesta de la agrupación respecto de la identificación del proveedor, la agrupación se refiere a un "Sr. Jesús Morales", a quien se refiere también como "C. P. Morales". Incluso la agrupación llega a afirmar que "el proveedor es el mismo C.P. Morales, quien viajaba junto con los capacitadores a los lugares donde se llevaban a cabo los eventos".

Este Consejo General llega a la convicción de que la agrupación se ha negado a informar a la autoridad respecto de la ubicación de su principal y prácticamente único "proveedor", dato imprescindible para realizar la compulsa que corresponde a un ejercicio de circularización. Amén de la deliberada confusión con que la agrupación se refiere aparentemente a tres personas distintas de apellido "Morales", lo cierto es que de diversas afirmaciones y del contenido de las facturas (la persona empresarial es "Jesús Morales" y el Registro Federal de Causantes en la factura dice "Josué Morales"), se puede deducir que eventualmente son la misma persona, pues la agrupación declara con todas sus letras que el C. P. Morales fue contratado para llevar su contabilidad, pagar a los proveedores y presentar los informes, y que la misma persona tenía en su poder facturas, pólizas, fichas de depósito, etc., mientras que "el mismo C. P. Morales", según su otra respuesta, era quien viajaba junto con los capacitadores para impartir los cursos fuera de la capital, recibía los ingresos por parte de los invitados a los cursos y registraba dichos ingresos en los formatos indicados. Posteriormente, los documentos "fueron extraviados". No sobra señalar que la agrupación subraya que los cursos duraban en promedio diez días, y que de las facturas puede concluirse que se impartieron 3,060 cursos a lo largo del año. Ambos datos llevan a este Consejo General a concluir que el proveedor de la agrupación requirió de 30,600 días aproximadamente para impartir 3,060 cursos durante el año 2000. Conclusión evidentemente absurda.

No escapa a la atención de este Consejo General que la agrupación fue incapaz de identificar al proveedor beneficiario de pagos por un monto considerable de su financiamiento total, y que respecto de su identidad no hizo sino comunicar datos contradictorios e inconsistentes.

Llama la atención, por otro lado, que la agrupación declare que los cheques en pago a CECADEP se expidieran a nombre del "Sr. Jesús Morales", cuando en los hechos no ha podido probarlo. Efectivamente, otra de las faltas mencionadas en el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado establece que la agrupación expidió, ciertamente, cheques, cuyas pólizas, sin embargo, carecen del lugar y la fecha de expedición, del nombre del beneficiario, del importe del cheque, y de la firma de cheque recibido, en clara contravención a lo establecido en el artículo 19.3 del Reglamento aplicable.

Es así que la agrupación no sólo ocultó en los hechos la identidad de los simpatizantes que le donaron recursos; no sólo impidió que en el sistema bancario nacional quedaran huellas de sus ingresos al no depositar en las cuentas bancarias los donativos de sus simpatizantes, sino que también ocultó el destino final de sus recursos y obstaculizó los esfuerzos de la autoridad por conocer el paradero de su principal proveedor.

En vista de ello, la falta se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso c), y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con

el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales amerita la máxima sanción.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso e) de su primer párrafo, es decir, la sanción consistente en la cancelación del registro como agrupación política nacional, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática, y en la especie esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

Los párrafos 3 y 4 del artículo 269, en relación con el párrafo 2 del artículo 67 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la sanción consistente en la pérdida de registro sólo puede imponerse cuando la irregularidad sea grave o sistemática, mientras que el párrafo 4 del citado artículo y el párrafo 2 del artículo 67 expresamente regulan lo concerniente a la pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales.

Esta autoridad electoral ha de conocer, por mandato constitucional, el origen y destino de los recursos de las agrupaciones políticas nacionales. Respecto de la Agrupación Política Nacional denominada Expresión Ciudadana, esta autoridad desconoce el origen y el destino de la mayoría de los sus recursos. La agrupación no ha rendido cuentas claras ni del origen ni del destino de sus recursos. Esta autoridad, adicionalmente, puede presumir dolo, mala fe y la intención deliberada de ocultar.

El Consejo General llega a la conclusión de que con la irregularidad en estudio, no le ha sido posible a esta autoridad comprobar la veracidad de lo reportado en el Informe Anual de la agrupación política nacional denominada Expresión Ciudadana, A.C.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que debe imponer a la Agrupación Política Nacional denominada Expresión Ciudadana la máxima sanción de que puede ser objeto dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la cancelación de su registro como agrupación política nacional.

Adicionalmente, este Consejo General ordena al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral que dé cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del asunto que se resuelve por esta vía, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente.

5.12. Agrupación Política Nacional Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas

En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La Agrupación Política Nacional Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas presentó documentación comprobatoria de egresos cuya fecha y monto no coinciden con la factura original.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 34, párrafo 4, 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/620/01 de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión a proveedores, y una vez recibida la respuesta de uno de éstos, se determinó que la agrupación política presentó documentación comprobatoria de egresos que no coincide con el original que en su momento expidió el proveedor.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

> *Esta agrupación expidió con fecha 22 de septiembre del 2000, con póliza de egresos No. 192 el cheque No. 303 por la cantidad de $6000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) y cheque No. 325 de fecha 12 de octubre del 2000 con póliza de egresos 211 por la cantidad de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) a nombre del Prof. Andrés Valerio Troncoso honorable miembro dirigente de esta agrupación quien gestionó la impresión de pósters y publicidad para los foros y seminarios Nacionales de Capacitación Política del FRENPICMA, entregando el SR. Valerio en nuestras oficinas dichos impresos con su respectiva factura (se anexa copia fotostática) misma que esta agrupación procedió a registrarla contablemente".*
>
> *Hacemos hincapié que esta Agrupación ha querido pagar con cheque a nombre de cada contribuyente por las adquisiciones o servicios que presten indicando ellos, que se reciben cheques, sólo efectivo y que para otorgar el proveedor factura requiere de una copia fotostática de la cédula de identificación fiscal, por lo que la agrupación expide los cheques a nombre de diversos compañeros dirigentes anexando copia de dicha cédula fiscal, quienes nos brindan su apoyo voluntario y gratuito.*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *La respuesta de la agrupación no satisfizo a la Comisión de Fiscalización al incumplir lo estipulado en los artículos 34 párrafo 4 y artículo 49-A, párrafo I, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los numerales 7.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones Políticas.*
>
> *(...)*
>
> *La agrupación presentó una factura de fecha 31 de diciembre de 2000, para amparar operaciones de compraventa con un proveedor por un monto de $12,000.00. Sin embargo, el proveedor, en respuesta a un oficio de circularización de la Comisión de Fiscalización, manifestó que la factura había sido alterada, ya que la fecha original en la que fue expedida la factura es el 21 de junio de 1999, y las operaciones que ampara la misma fueron por un importe total de $977.50. Al respecto el proveedor presentó copia de la factura en la que aparece el importe desglosado. Por lo anterior, la agrupación incumplió con lo establecido en los artículos 34, párrafo 4 y 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los numerales 7.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.*
>
> *Adicionalmente, se dará aviso de este hecho a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio Público.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 34, párrafo 4, 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al presentar documentación comprobatoria de egresos en copia fotostática y a nombre de terceros.

El artículo 34, párrafo 4 del Código Electoral establece que a las agrupaciones políticas le será aplicado, en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 38, 49, párrafos 2 y 3, 49-a y 49-b.

Por su parte, el artículo 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II establece que en los informes anuales, los partidos y agrupaciones políticas deberán reportar los ingresos totales y gastos ordinarios que hubieren realizado durante el ejercicio objeto del informe.

El artículo 7.1 del Reglamento aplicable dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, así como que dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

Esta autoridad arriba a la conclusión de que la documentación aportada por la agrupación política no coincidía con el original expedido en su momento por el proveedor, a partir de la respuesta que rindió a la Comisión de Fiscalización el proveedor Agustín Castañeda Jiménez, quien mediante escrito de fecha 22 de mayo, manifestó lo que a continuación se señala:

Que habiendo recibido de ustedes el No. de oficio STCFRPAP/250/01 de fecha 9 de mayo del presente año en el que se me pregunta respecto a una factura que supuestamente yo expedí, me permito aclarar lo siguiente.

Dicha factura es apócrifa por las siguientes razones:

A) En la que se menciona le falta el No. antes del correspondiente a la factura.

B) Fue escrita con máquina eléctrica y la que se usa en nuestro negocio es máquina manual de
otro tipo.

C) La fecha supuesta, no se expidió la antes mencionada fue el 31 de diciembre del año 2000 y cuando yo expedí la verdadera fue el 21 de junio de 1999.

D) En cuanto al formato que presenta es falso ya que a partir del mes de marzo del año 2000 cambio el formato con el logotipo, por lo anterior.

Queda debidamente demostrado la falsedad de dicho documento adjuntando al presente copia fotostática simple de la factura expedida No. 2558 de fecha 21 de junio de 1999 así mismo copia de la factura 3001 fecha 23 de marzo del año 2000 en las que compruebo lo dicho por mi en el presente oficio con la petición siguiente.

Se dé aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público., solicitando su intervención para la detección del delincuente o delincuentes que hayan incurrido en esta falsificación dando vista al Ministerio Público Federal que corresponda.

De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización, y a partir de lo manifestado por el proveedor circularizado, esta autoridad llega a la conclusión de que la agrupación política presentó documentación comprobatoria alterada en cuanto a su fecha de expedición y monto total, pues en realidad el proveedor expidió, en el ejercicio de 1999, una factura por un monto total de $977.50, mientras que la agrupación política la presentó fechada el 31 de diciembre de 2000 y por un monto de $12,000.00.

En consecuencia, esta autoridad considera que la agrupación política no comprobó el egreso, incumpliendo, por tanto, lo dispuesto en el artículo 7.1 del Reglamento aplicable, en tanto que la documentación comprobatoria presentada no coincide con la factura originalmente expedida.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, en tanto que es evidente el ánimo doloso de engañar a la autoridad, al presentar una factura apócrifa como documentación comprobatoria de egresos. El Instituto Federal Electoral debe sancionar con toda severidad este tipo de conductas, pues implica que la autoridad no tenga certeza sobre el destino de los recursos con los que cuentan las agrupaciones políticas.

Para esta autoridad, el monto implicado en la irregularidad no resulta relevante, pues lo que debe sancionarse con toda severidad es el hecho de alterar una factura con el objeto de comprobar una erogación.

Por otro lado, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de un mil ochocientos cincuenta días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.13. Agrupación Política Nacional Iniciativa XXI, Asociación Civil

En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La agrupación política no presentó documentación comprobatoria de egresos por un monto total de $5,487.34, en la cuenta de Educación y Capacitación Política, subcuenta Viáticos, por concepto
de Boletos de Avión.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante oficio No. STCFRPAP/658/01 de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Iniciativa XXI, Asociación Civil, que presentara las aclaraciones o rectificaciones pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta Educación y Capacitación Política, subcuenta Viáticos, se encontró una póliza que carecía de documentación soporte. A continuación se detalla la póliza observada:

REFERENCIA	SUBCUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
PE-48/06-00	Viáticos	Mexicana de aviación	Boletos de avión	$5,487.34

Al respecto, la agrupación contestó a los señalamientos con escrito del día 17 de agosto de 2001, lo que a la letra dice:

En el caso de los boletos de avión, en efecto la documentación comprobatoria fue extraviada por los conferencistas CC. Jesús Silva Herzog Márquez y Ricardo Becerra Laguna que asistieron al evento de capacitación, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se anexa propaganda alusiva al
evento donde se avala la participación de los conferencistas.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta de la agrupación se consideró no satisfactoria al incumplir lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas, razón por lo cual la observación no quedó subsanada.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Iniciativa XXI, Asociación Civil, incumplió lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, al no presentar documentación comprobatoria de egresos por un monto total de $5,487.34 en la cuenta de Educación y Capacitación Política, subcuenta Viáticos, por concepto de Boletos de Avión.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos. Por su parte, el artículo 7.1 establece que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, cumpliendo dicha documentación con las disposiciones fiscales aplicables. A su vez, el artículo 14.2 del Reglamento aplicable dispone que, durante el periodo de revisión de informes, las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

La normatividad aplicable es clara al establecer que es obligación de las agrupaciones políticas, contar en todo momento con la documentación que compruebe de manera adecuada los gastos en que incurrió, por lo que nada le exime a la agrupación de la presentación de la citada documentación al momento de la presentación de su informe anual, o bien, cuando la Comisión de Fiscalización se los solicitara.

Adicionalmente, resulta claro que la agrupación reconoce expresamente la irregularidad en la que incurrió, al manifestar claramente en su escrito de respuesta que *"la documentación comprobatoria fue extraviada".*

Debe además decirse que la agrupación omitió presentar los cupones de viajero de los boletos de avión utilizados que, según las disposiciones de carácter fiscal para agencias de viajes dentro de las resoluciones que establecen las reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal, regla 25-B, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de octubre de 1992, vigente hasta la fecha, resultan necesarias para la comprobación del gasto.

La autoridad electoral considera trascendente que una agrupación, por las razones que sean, no le presente la documentación comprobatoria del gasto o del ingreso que ésta solicite, en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta puede tener efectos sobre la verificación del origen y destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

Así pues, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su informe anual. En vista de ello, la falta se califica como grave y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de cincuenta y cuatro días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.14. Agrupación Política Nacional Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático

a) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política no presentó documentación comprobatoria de egresos por un monto total de $15,210.00, en la cuenta de Tareas Editoriales.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/660/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta de Tareas Editoriales, se localizó el registro de varias pólizas que carecía de documentación soporte, por un monto de $15,210.00, como a continuación se describe:

REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
PE-3/08-00	Gastos de Actividades Editoriales	$3,105.00
PE-3/09-00	Impresión de folleto "Equidad"	3,105.00

PE-5/10-00	Pago de Impresión revista “Ideando”	4,500.00
PE-1/11-00	Pago de impresión revista trimestral	4,500.00
TOTAL		**$15,210.00**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 21 de agosto de 2001, lo siguiente:

> *“El Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático, elabora un boletín informativo mensual denominado Equidad y Democracia, mismo que a partir del mes de abril imprimió en Gamma Sucesores con un costo de $3,105.00 cada número, integrado por un tiraje de 3 mil ejemplares, como lo demuestran las facturas correspondientes. Anexo al presente remito a usted los 12 ejemplares correspondientes al año 2000.*
>
> *De igual manera, se imprimió la revista IDEANDO en edición trimestral, con un tiraje de 1000 ejemplares, con un costo de $10,925.00 cada número, como lo demuestran las facturas correspondientes. Anexo al presente los números editados durante el año 2000”.*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *La respuesta de la agrupación se juzgó no satisfactoria ya que solamente entregó muestras de las publicaciones. Por ello, se determinó que la observación no fue subsanada al no presentar la documentación soporte, incumpliendo lo establecido en los artículos 7.1 y 14.2 del Reglamento antes citado.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 y 14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral establece que los partidos políticos nacionales y las coaliciones políticas están obligados a entregar a la Comisión de Fiscalización la documentación que le solicite respecto de sus ingresos y egresos.

Por otra parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas señala que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables. Adicionalmente, el artículo 14.2 del citado Reglamento establece que las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Debe decirse que es obligación de la agrupación, al momento de efectuar un gasto, solicitar al proveedor toda la documentación comprobatoria exigida por la normatividad y que contenga requisitos fiscales. La labor de la agrupación no consistía en realizar erogaciones a diestra y siniestra para posteriormente iniciar la recolección de toda la documentación sustento de los gastos que había realizado, por lo que, desde luego, esta autoridad considera que la agrupación incurrió en la irregularidad consistente en no presentar documentación comprobatoria soporte del gasto realizado.

La normatividad aplicable es clara al establecer que es obligación de las agrupaciones políticas, contar en todo momento con la documentación que compruebe de manera adecuada los gastos en que incurrió, por lo que nada le exime a la agrupación de la presentación de la citada documentación al momento de la presentación de su informe anual, o bien, cuando la Comisión de Fiscalización se los solicitara.

Lo argumentado por la agrupación no es suficiente para subsanar la irregularidad en la que incurrió, toda vez que es su obligación conservar la documentación comprobatoria original de los gastos en que incurra y presentarlos ante la autoridad electoral al momento de presentar su Informe

Anual o bien, cuando ésta se lo solicite.

La autoridad electoral considera trascendente que una agrupación, por las razones que sean, no le presente la documentación comprobatoria del gasto o del ingreso que ésta solicite, en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta puede tener efectos sobre la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

Así pues, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su informe anual. En vista de ello, la falta se califica como grave y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Al respecto, se ha de tener en cuenta que la no entrega de la documentación comprobatoria se debe a una mala administración, y no a una intención dolosa por parte de la agrupación.

También debe tenerse en cuenta que el monto total que la coalición no comprobó es de $15,210.00.

Además, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de ciento cincuenta y un días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política no utilizó la cuenta 105 Gastos por Amortizar por concepto de Gastos en Tareas Editoriales, para controlar sus publicaciones.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 9.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el STCFRPAP/660/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó la Agrupación Política Nacional Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que, al efectuar la revisión de las cuentas Gastos en Tareas Editoriales, se había observado que la agrupación no utilizó la cuenta 105, Gastos por Amortizar, para controlar sus publicaciones, como a continuación se describe:

REFERENCIA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
PE-5/11-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2760	3,000 folletos "Equidad y Democracia"	$3,105.00
PE-6/11-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2762	3,000 folletos "Equidad y Democracia"	3,105.00
PE-10/11-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2763	3,000 folletos "Equidad y Democracia"	3,500.00
PE-14/11-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2772	3,000 folletos "Equidad y Democracia"	3,105.00
PE-02/11-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2771	3,000 folletos "Equidad y Democracia"	3,105.00
PE-27/11-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2780	3,000 folletos "Equidad y Democracia"	3,105.00
PE-25/12-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2791	3,000 folletos "Equidad y Democracia"	3,105.00
PE-26/12-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2790	3,000 folletos "Equidad y Democracia"	3,105.00
PE-08/11-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2761	3,000 folletos "Equidad y Democracia"	3,105.00

PE-06/12-00	Gama Sucesores, S.A. de C.V.	2788	1,000 ejemplares "Revista Ideando"	10,925.00
TOTAL				**$39,265.00**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 21 de agosto de 2001, lo siguiente:

> *"Las publicaciones no fueron controladas por la cuenta 105 gastos por amortizar. No obstante se elaboró el kárdex correspondiente a entradas y salidas, así como su distribución por todo el país, mismo que se anexa al presente documento. Se ha dado la instrucción para que en este ejercicio el procedimiento se ajuste a la normatividad. Se procede a registrar las entradas y salidas en la cuenta 105".*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

> *De la revisión a la documentación presentada por la agrupación, se determinó que la observación no quedó subsanada, al no haber registrado los movimientos contables en la cuenta 105 "Gastos por Amortizar", incumpliendo lo establecido en el artículo 9.2 antes citado*.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático incumplió con lo establecido en el artículo 9.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, al no haber utilizado la cuenta 105, Gastos por Amortizar, para controlar sus publicaciones.

El artículo 9.2 del Reglamento aplicable dispone textualmente lo siguiente:

"Para efectos de las tareas editoriales, se utilizará la cuenta 'gastos por amortizar' como cuenta de almacén, abriendo las subcuentas que requieran. Tanto en estas cuentas, como en las correspondientes a materiales y suministros, en caso de que los bienes sean adquiridos anticipadamente y sean susceptibles de inventariarse, deberá llevarse un control de notas de entradas y salidas de almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y destino, así como quien entrega o recibe. Se debe llevar un control físico adecuado a través de kárdex de almacén y hacer cuando menos un levantamiento de inventario una vez al año, que podría ser al mes más próximo al cierre del ejercicio".

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la irregularidad consistente en no utilizar la cuenta 105 Gastos por Amortizar, tal y como lo establece el Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas. Adicionalmente, la agrupación expresamente reconoce que no utilizó la cuenta 105 Gastos por Amortizar para controlar sus publicaciones, como consta en la parte conducente del escrito de respuesta que a la letra dice: *"Las publicaciones no fueron controladas por la cuenta 105 gastos por amortizar..."*

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que no permite conocer la utilización de los productos que han de controlarse, con lo que podría generarse incertidumbre en cuanto al destino final de las erogaciones realizadas por la agrupación política.

La omisión en la entrega de documentación solicitada se tradujo en la imposibilidad material de la comisión de verificar la veracidad de lo reportado en el rubro “gastos por Amortizar” por concepto de Gastos en Tareas Editoriales.

Sin embargo, se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: que no se puede presumir la existencia de dolo, intención de ocultar información y que es posible que la irregularidad detectada se deba a una interpretación errónea de la normatividad.

Por otro lado, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la agrupación política Asamblea Nacional Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de cuatrocientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

5.15. Agrupación Política Nacional Movimiento de Acción Republicana

En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La agrupación política no depositó en la cuenta bancaria “CB-APN” de la agrupación, recursos por un monto de $2,500.00, provenientes de una aportación en efectivo.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/634/01 de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Movimiento de Acción Republicana que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión documental al rubro de ingresos, se localizó el registro de una aportación en efectivo que no fue depositada en la cuenta bancaria “CB-APN” de la agrupación. La póliza observada se detalla a continuación:

REFERENCIA	RECIBO	NOMBRE	IMPORTE
PD-03/11-00	6	Alfredo Suárez Ruiz	$2,500.00

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

> *Con respecto al punto 2 no se depositó en la cuenta ya que el pago fue realizado directamente por el Dr. Alfredo Suárez informando posteriormente de dicho pago realizado a Gabriel ediciones como pago a cuenta de la factura 644.*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *La respuesta de la agrupación se juzgó no satisfactoria, ya que la norma es clara al indicar que todos los ingresos deben depositarse en la cuenta CB-APN. Por ello, la observación no quedó subsanada al incumplir lo estipulado en el artículo 1.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Movimiento de Acción Republicana incumplió con lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a

las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al no depositar en una cuenta "CB-APN" diversas aportaciones en efectivo.

El artículo 1.2 del Reglamento aplicable establece que **todos los ingresos** en efectivo que reciban las agrupaciones políticas deben depositarse en cuentas bancarias a nombre de la agrupación política. La finalidad de esta norma es ofrecer a la autoridad electoral un mecanismo efectivo de seguimiento y compulsa de los ingresos que reciban y los egresos que realicen, toda vez que las agrupaciones políticas no sólo se encuentran obligadas a controlar sus ingresos y egresos en cuentas bancarias, sino que también deben entregar a esta autoridad los estados de cuentas respectivos, los cuales permiten verificar la veracidad de lo reportado por las agrupaciones en sus respectivos informes anuales.

Como se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización, la agrupación política no depositó en alguna cuenta bancaria diversas aportaciones en efectivo incumpliendo, por tanto, lo dispuesto en el artículo 1.2 en comento. Incluso, la propia agrupación, en su escrito de respuesta, acepta expresamente haber actualizado la irregularidad que por esta vía se sanciona, cuando afirma: "no se depositó en la cuenta ya que el pago fue realizado directamente por el Dr. Alfredo Suárez Informando posteriormente de dicho pago (...)".

Lo alegado por la agrupación no resulta suficiente para considerar subsanada la irregularidad, pues es claro que el cumplimiento de la normativa aplicable de ninguna manera se encuentra condicionado a circunstancias particulares de hecho, como eventualmente puede ser la urgencia de contar con recursos para realizar una determinada erogación. En todo caso, la agrupación debió tomar todas las providencias necesarias para que ese caso de urgencia no se verificara y, en consecuencia, evitar la actualización de la irregularidad que por esta vía se sanciona.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues la utilización de cuentas bancarias resulta indispensable para poder emprender una labor de verificación de las cifras contenidas en dicho informe, proceder a su compulsa con la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos y con los movimientos bancarios relacionados.

En vista de lo anterior, la falta se califica como de leve, tomando en cuenta que el monto implicado asciende a la cantidad de $2,500.00 y el hecho de que la agrupación política aceptó expresamente haber cometido la irregularidad.

Asimismo, esta autoridad toma en cuenta que no es posible presumir dolo en la realización de la conducta antijurídica ni la intención de ocultar información, y que es la primera vez que esta agrupación es sancionada por no depositar en cuentas bancarias todos sus ingresos.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Movimiento de Acción Republicana una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.16. Agrupación Política Nacional Movimiento Mexicano el Barzón

a) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política presentó documentación comprobatoria sin requisitos fiscales, por un importe total de $15,925.54, integrados de la siguiente manera:*

RUBRO	***MONTO***
Gastos de Investigación Socioeconómica y Política	*$7,928.94*

Gastos de Investigación Socioeconómica y Política	*7,996.60*
TOTAL	***$15,925.54***

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/654/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Movimiento Mexicano el Barzón que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental de los gastos de investigación socioeconómica y política, se localizó documentación sin requisitos fiscales, como se detalla a continuación:

REFERENCIA	CHEQUE	PROVEEDOR	OBSERVACION	IMPORTE
PE-219/05-00	78	Agencia de Viajes sagitario, S.A. de C.V.	2 Comprobantes de Agencia de Viaje sin Cédula Fiscal	$5,719.81
PE-220/06-00	86	José Gil Camacho Cortés	El comprobante es un recibo membreteado de la agrupación	6,095.00
Total				**$11,814.81**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

Para comprobar el gasto que ampara el cheque No. 78 se acompaña comprobante por $2,037.21 correspondiente al boleto de una línea aérea; la diferencia corresponde a una factura que fue extraviada y no es posible su recuperación.

El comprobante que reúne requisitos fiscales cheque 86 se extravió y no es posible su recuperación.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

Por la diferencia de $7,928.94, la respuesta de la agrupación se juzgó insatisfactoria, en virtud de que no proporcionó la documentación solicitada incumpliendo con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento, por lo que se considera no subsanada la observación por dicho monto.

Mediante el oficio STCFRPAP/654/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Movimiento Mexicano el Barzón que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental de los gastos de investigación socioeconómica y política, se localizó el registro de varias pólizas que carecían de documentación soporte, como a continuación se detalla:

SUBCUENTAS	REFERENCIA	CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE

Invest. Espec. de Campo	PE-231/12-00	151	Viaje a Chihuahua (boleto)	$3,073.22
Invest. Espec. de Campo	PE-231/12-00	152	Viaje a la paz Baja California (boleto)	4,923.38
Invest. Espec. de Campo	PE-231/12-00	159	Martha Alvarez	5,000.00
Total				**$12,996.60**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

> *Respecto al registro de pólizas que carecen de documentación soporte aclaro que los comprobantes que deben acompañar a los cheques 151 y 152 se extraviaron y solamente se anexa el comprobante del cheque 159 por 5,000.00 que cubre las gratificaciones a la Srita. Martha Alvarez.*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *Por la diferencia de $7,996.60, la respuesta de la agrupación se juzgo insatisfactoria, en virtud de que no proporciono la documentación solicitada incumpliendo lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento, por lo que se considera no subsanada la observación por dicho monto.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Movimiento Mexicano el Barzón incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al presentar documentación comprobatoria de egresos que carece de los requisitos exigidos por la normativa fiscal.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos. Por su parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, así como que dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan
sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien, que se justifique según las circunstancias particulares.

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación original que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa fiscal, pues su extravío o pérdida no es razón suficiente para eximirla del cumplimiento de esa obligación.

Debe además decirse que la agrupación omitió presentar los cupones de viajero de los boletos de avión utilizados que, según las disposiciones de carácter fiscal para agencias de viajes dentro de las resoluciones que establecen las reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal, regla 25-B,

publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de octubre de 1992, vigente hasta la fecha, resultan necesarias para la comprobación del gasto.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 7.1 del Reglamento aplicable para acreditar los egresos que se efectúen la agrupación política, y la documentación presentada no se encuentra incluida en los casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

También se tiene en cuenta que: a) no se puede presumir desviación de recursos; b) la agrupación, en algunos casos, presentó algún documento como soporte, aunque no reúna los requisitos exigidos; c) no puede concluirse que hubiere tenido intención de ocultar información, y d) el monto implicado asciende a $15,925.54.

Por otra parte, esta autoridad toma en cuenta que es la primera vez que la agrupación política incurre en este tipo de faltas.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

En vista de lo anterior, la falta se califica como de mediana gravedad.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Movimiento Mexicano el Barzón una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de ciento dieciocho días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política no presentó documentación comprobatoria de egresos por un monto total de $2,300.00, en el rubro de Gastos Indirectos, subcuenta Servicios de Oficina.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/654/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Movimiento Mexicano el Barzón que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar el rubro de Gastos Indirectos, subcuenta de Servicios de Oficina, se localizó el registro de una póliza que carecía de documentación soporte, por un monto de $2,300.00.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 20 de agosto de 2001, lo siguiente:

"Repecto a la póliza referencia pe-221/01 importe de $2,300.00 aclaro que no es posible recuperar la documentación comprobatoria".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta no satisfizo a la Comisión de Fiscalización en virtud de que la agrupación incumplió lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas, por lo que no se considera subsanada la observación.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 y 14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral establece que los partidos políticos nacionales y las coaliciones políticas están obligados a entregar a la Comisión de Fiscalización la documentación que le solicite respecto de sus ingresos y egresos.

Por otra parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas señala que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables. Adicionalmente, el artículo 14.2 del citado Reglamento establece que las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

La agrupación política expresamente reconoce que no le es posible recuperar la documentación comprobatoria y, por ende, presentarla ante la autoridad electoral, por lo que a confesión de parte, relevo
de prueba.

Adicionalmente debe decirse que es obligación de la agrupación, al momento de efectuar un gasto, solicitar al proveedor toda la documentación comprobatoria exigida por la normatividad y que contenga requisitos fiscales. La labor de la agrupación no consistía en realizar erogaciones a diestra y siniestra para posteriormente iniciar la recolección de toda la documentación sustento de los gastos que había realizado, por lo que, desde luego, esta autoridad considera que la agrupación incurrió en la irregularidad consistente en no presentar documentación comprobatoria soporte del gasto realizado.

La normatividad aplicable es clara al establecer que es obligación de las agrupaciones políticas, contar en todo momento con la documentación que compruebe de manera adecuada los gastos en que incurrió, por lo que nada le exime a la agrupación de la presentación de la citada documentación al momento de
la presentación de su informe anual, o bien, cuando la Comisión de Fiscalización se los solicitara.

La autoridad electoral considera trascendente que una agrupación, por las razones que sean, no le presente la documentación comprobatoria del gasto o del ingreso que ésta solicite, en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta puede tener efectos sobre
la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

Así pues, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su informe anual. En vista de ello, la falta se califica como grave y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Al respecto, se ha de tener en cuenta que la no entrega de la documentación comprobatoria se debe a una mala administración, y no a una intención dolosa por parte de la agrupación.

También debe tenerse en cuenta que el monto total que la coalición no comprobó es de $2,300.00.

Además, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Movimiento Mexicano el Barzón una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

5.17. Agrupación Política Nacional Movimiento Nacional de Organización Ciudadana

En las Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se establece lo siguiente:

> *La agrupación política no comprobó el origen de sus ingresos y el destino de sus egresos fundamentalmente, por las siguientes razones:*
>
> - *La agrupación política omitió depositar en la cuenta CB-APN aportaciones en efectivo por un monto de $1'251,176.00. Adicionalmente, no presentó los recibos RAF-APN para amparar las aportaciones en efectivo que recibió.*
> - *Por otra parte, la agrupación política no realizó mediante cheque, pagos superiores a los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por un monto total de $1'633.370.50, en la cuenta de Educación y Capacitación Política.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 34 párrafo 4, 35 párrafo 11 y 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.2, 3.1, 3.3, 4.1, 7.3, 11.1 y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso d) y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

En la página 6 del Dictamen Consolidado se señala que se localizaron recibos de aportaciones en efectivo por un monto de $1,251,176.00 pesos, los cuales no fueron depositados en las cuentas bancarias de la agrupación, amén de que los recibos carecían del domicilio, el teléfono y la firma del aportante, el nombre y su Registro Federal de Contribuyentes. Dicha situación le fue comunicada al partido por oficio no. STCFRPAP/631/01, el 6 de agosto de 2001. Mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2001, la agrupación contestó en los siguientes términos:

> *"... Efectivamente los ingresos aportados por los diversos comités estatales de nuestra agrupación fueron manejados internamente por cada uno de ellos. Ante la imposibilidad material por la lejanía con las oficinas centrales de la agrupación, no fue posible coordinarse y operar con esos recursos en la forma en que señala el artículo 1.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas".*

La respuesta de la agrupación no satisfizo a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. En primer lugar, la razón por la que la agrupación decide no depositar en cuentas bancarias las aportaciones es verdaderamente aberrante. El artículo 1.2 del Reglamento aplicable no establece que sólo pueda existir UNA cuenta bancaria para cada agrupación política. Una agrupación política puede tener tantas cuentas CBAPN como juzgue conveniente y funcional. Dice el citado artículo que las cuentas bancarias, en plural, "se identificarán como CBAPN-(agrupación)-(número)". Incluso, aún si sólo existiese UNA cuenta bancaria, es obvio que en Sonora, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Yucatán, Tamaulipas y Puebla, que son los estados en donde la agrupación política captó recursos privados, es posible hacer depósitos a una cuenta bancaria registrada en el Distrito Federal. En cualquier caso, por lo tanto, la respuesta de la agrupación es del todo inaceptable. La razón aludida no puede tomarse como atenuante de la falta, sino como un intento totalmente inoperante y doloso de evadir la normatividad, máxime si se analiza con cuidado el

otro elemento de la respuesta de la agrupación. Efectivamente, la agrupación alega que los ingresos fueron aportados "por los diversos comités estatales de nuestra agrupación", y que fueron "manejados internamente por cada uno de ellos". Esto es en realidad absurdo. Una agrupación no puede darse a sí misma recursos, para después ella misma erogarlos. Como después se verá, a través de movimientos contables de cuya precaria evidencia documental puede deducirse que se trata de movimientos virtuales, la agrupación intenta hacer valer esta serie de absurdos alegatos. Pero volviendo al centro del argumento que la agrupación presenta en su defensa, es un hecho irrefutable que la agrupación intenta ocultar el origen de sus recursos, ya que son personas físicas (asociados y militantes) o morales legitimadas para ello, las que pueden realizar aportaciones a las agrupaciones políticas nacionales. Las agrupaciones no se pueden dar a sí mismas recursos, pues ello es una aberración jurídica y contable. O la agrupación intenta ocultar el origen de sus recursos o bien intenta hacerle creer a la autoridad que dichos recursos existieron, cuando en realidad no ofrece ninguna prueba, ninguna, de ello.

A continuación se reproduce la defensa que, por otro lado y en abierta contradicción, hiciera la agrupación en relación al hecho de que, fácticamente, hubiese recibido aportaciones anónimas:

> *"...las aportaciones fueron hechas por cientos de simpatizantes en cantidades generalmente pequeñas, de campesinos, trabajadores, estudiantes, empleados, etc., que dificultan en grado superlativo la información sobre nombre, domicilio, teléfono, etc., por lo cual con la anuencia de los dirigentes de la agrupación se decidió manejar dichos recursos en la forma de aportaciones de los comités estatales en forma general y no individual".*

Evidentemente, la respuesta no satisfizo a la Comisión de Fiscalización, pues la normatividad es muy clara en relación al modo en que han de registrarse las aportaciones de los simpatizantes (artículos 3.1, 3.3 y 4.1 del Reglamento aplicable).

Esta irregularidad se agrava cuando se analiza la segunda irregularidad a la que aluden las Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado en el capítulo correspondiente a la agrupación política Movimiento Nacional de Organización Ciudadana: la agrupación política no realizó mediante cheque pagos superiores a los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por un monto total de $1,633,370.50, en la cuenta de Educación y Capacitación Política. Este Consejo General advierte que un solo proveedor, llamado Jesús Morales, que ofreció cursos en todo el país a la agrupación política, expidió 6 facturas por el monto aludido, que representa el 92% de todos los gastos realizados por la agrupación política durante el año 2000. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas le dio audiencia a la agrupación, para que alegara lo que a su derecho conviniese en relación con la falta de pago a través de cheque. Esto sucedió, según consta en el Dictamen Consolidado, el 6 de agosto de 2001, vía oficio no. STCFRPAP/631/01, a lo que la agrupación contestó lo siguiente:

> *"... los pagos que se efectuaron por este concepto, se hicieron en efectivo".*

Es decir, la agrupación reconoce que por el 92% de sus egresos violentó el Reglamento aplicable, concretamente el artículo 7.3, que tiene por objeto precisamente que los pagos a partir de cierto monto dejen una huella indeleble en el sistema bancario nacional, de modo que esta autoridad esté en la posibilidad de verificar los movimientos de las agrupaciones políticas nacionales. Si a esta situación se añade la irregularidad anteriormente analizada, este Consejo General llega a la conclusión de la agrupación política nacional no ha rendido cuentas, a cabalidad, ni del origen de sus ingresos ni del destino de sus egresos, lo cual constituye, a juicio de esta autoridad, una falta particularmente grave. Con la limitada información aportada por la propia agrupación, y adminiculados todos los elementos que obran en el expediente, la Comisión no pudo contar con los mínimos y razonables elementos de juicio y tener en consecuencia certeza del estado que guardan las finanzas de la agrupación. En modo alguno, la autoridad electoral pudo tener certeza de que no se está ante movimientos contables meramente virtuales. No pierde de vista esta autoridad electoral que el Reglamento para el Financiamiento de las Agrupaciones Políticas Nacionales establece que cuanto mayor sea el monto de financiamiento privado que después se destine a las actividades señaladas en la ley, mayor será el monto de financiamiento público al que puedan acceder las agrupaciones políticas nacionales. De modo que un conjunto de entradas y salidas virtuales podrían repercutir en el intento de maximizar el monto de financiamiento público para la agrupación política.

Otros elementos del Dictamen Consolidado apuntan claramente a la conclusión aludida. El hecho de que la agrupación se sirva de los servicios de un proveedor, es decir, el hecho de que no lo haga por sus propios medios sino a través de otro, para ofrecer sus Cursos Educación y Capacitación Política, que concentran el 92% de sus gastos totales, hacía especialmente relevante la circularización que se hizo a ese proveedor único. En el Dictamen Consolidado también puede verse que el restante 8% de los gastos totales realizados por la agrupación en actividades sustantivas, que supone un monto de $134,377.50, fue realizada en Actividades Editoriales, también se realizó a través del proveedor único, el C. Jesús Morales. Por todo ello, dado que **un solo proveedor** resultó beneficiario **de todos** los gastos realizados por la agrupación política durante el año 2000, este Consejo General juzga especialmente relevante la circularización que se hizo del mismo, para confirmar las operaciones realizadas con la agrupación política. En el Dictamen Consolidado puede verse, en el capítulo correspondiente a la agrupación política nacional Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, que la Comisión no pudo entregar el oficio de solicitud de confirmación al C. Jesús Morales, en virtud de que en la dirección señalada en las facturas no se tiene conocimiento de la existencia del C. Jesús Morales. Se pidió por lo tanto aclaraciones a la agrupación política, mediante oficio no. STCFRPAP/615/01, de fecha 6 de agosto de 2001. La agrupación contestó mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2001 que su representante había realizado una llamada telefónica al número señalado en la factura, que le había contestado, y que le habían proporcionado nuevamente la dirección en donde se encontraba el proveedor, distinta a la señalada en las facturas. Consta en el Dictamen Consolidado, que personal de la Dirección de Análisis de Informes Anuales y de Campaña de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión acudió al nuevo domicilio señalado por la agrupación en su oficio de respuesta, sin poder localizar, nuevamente, al proveedor único de la agrupación política. En una palabra, la agrupación política fue incapaz de poner en contacto a su proveedor único con esta autoridad electoral federal. Por lo tanto, el otro medio con el que cuenta la autoridad electoral para confirmar que las operaciones de las agrupaciones son reales y no virtuales, resultó del todo ineficaz debido a que la agrupación política no ofreció a esta autoridad la información precisa que resultaba imprescindible para realizar exitosamente el ejercicio de compulsa y verificación referido.

Finalmente, dos elementos que se derivan del Dictamen Consolidado permiten a este Consejo General arribar a las conclusiones ya enunciadas. En primer lugar, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas determina que la agrupación omitió controlar en la cuenta 105 “Gastos por Amortizar” las publicaciones que pagó al C. Jesús Morales por una cantidad de $134,377.50, y tampoco presentó las notas de entradas y salidas del kárdex con el que la autoridad electoral puede comprobar la existencia de las publicaciones pagadas, concretamente de los movimientos que en almacén se realizan respecto de dichas publicaciones pagadas. Por lo tanto, en este otro rubro también se observó una actitud por parte de la agrupación política tendiente a obstaculizar la labor fiscalizadora de esta autoridad, que tiene por objeto tener certeza sobre la veracidad de lo informado por las agrupaciones políticas nacionales.

Adicionalmente, llama la atención que respecto de los gastos en actividades ordinarias permanentes, la agrupación registre un monto de $12,695.75 pesos, y que de dicho monto los gastos telefónicos concentren $11,887.10 pesos, es decir, el 94% de esos gastos, y que respecto de esos gastos la agrupación no haya aportado a la Comisión de Fiscalización documentación comprobatoria alguna, según consta en el Dictamen Consolidado. Con esto, nuevamente es notorio para este Consejo General la actitud de la agrupación, tendiente clara e inequívocamente a ocultar y no a transparentar el manejo de sus recursos.

Ciertamente, llamó la atención de la Comisión de Fiscalización, desde un principio, el hecho de que el Informe relativo a todo el año fiscal 2000, balanzas, estados de cuenta, facturas, pólizas, kárdex, etc., etc., estuviese contenido en un fólder de no más de 80 documentos, cosa a todas luces inusual entre las agrupaciones políticas nacionales. Pero más llamativo aún resultó el conjunto de elementos que ya han sido ponderados por este Consejo General, elementos que, vistos en su integridad, generan la convicción de que no existe certeza respecto de la veracidad de lo reportado en el Informe Anual rendido por la agrupación. Este Consejo General llega a la conclusión, inequívoca, de que la agrupación política nacional efectivamente no ha podido dar cuentas claras ni del origen de sus recursos ni del destino de los mismos; de que se puede presumir dolo, mala fe y la intención de ocultar. Por lo anterior, la falta queda acreditada, se califica como particularmente grave, y En vista de

ello, la falta se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso d), y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales amerita la máxima sanción.

Este Consejo General llega a la conclusión de que con las irregularidades en estudio, no le ha sido posible a esta autoridad comprobar la veracidad de lo reportado en el Informe Anual de la agrupación política nacional denominada Movimiento Nacional de Organización Ciudadana.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que debe imponer a la agrupación política nacional denominada Movimiento Nacional de Organización Ciudadana la máxima sanción de que puede ser objeto dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la cancelación de su registro como agrupación política nacional.

5.18. Agrupación Política Nacional Movimiento Social de los Trabajadores.

En las Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se establece lo siguiente:

> *La agrupación política no presentó el informe anual sobre el origen y destino de sus recursos correspondiente al ejercicio del año 2000, ni los anexos correspondientes a los formatos IA-APN, IA-1-APN, IA-2-APN y IA-3APN.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 35, párrafos 11 y 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 y 12 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso c) y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante oficio STCFRPAP/944/00 de fecha 21 de noviembre de 2000, se hizo de conocimiento de la agrupación el plazo para la presentación de su Informe Anual, que concluía el 14 de mayo de 2001.

Fuera del plazo señalado, el 31 de mayo de 2001 la agrupación anunció el envío de "documentación contable", entre la cual no se encontraba el Informe Anual, sino un conjunto de balanzas, de estados de cuenta bancarios y de conciliaciones bancarias relativas a algunos meses del año 2000.

Posteriormente, el 4 de julio de 2001, el C. Marco Antonio Torres se presentó en las oficinas de la Dirección de Análisis de Informes Anuales y de Campaña, en donde se le dijo que la agrupación no había entregado su Informe Anual con toda la documentación soporte. El C. Marco Antonio Torres se comprometió a enviarla con posterioridad.

No fue sino hasta el 6 de agosto, el día en que concluía el plazo para la revisión de los informes, cuando la agrupación envió un oficio anunciando "el reenvío" de la documentación entregada el 31 de mayo, y el envío, también, de diversa documentación, entre la que no se encontraba el Informe Anual con todos y cada uno de los documentos que deben acompañarlo, de acuerdo con la normatividad.

Por lo tanto, el mismo 6 de agosto de 2001, y dado que ese mismo día era el último para enviar oficios a las agrupaciones con el fin de hacerles observaciones sobre errores u omisiones técnicas, la autoridad electoral requirió a la agrupación política a que entregara su Informe Anual, todos los formatos que deben acompañarlo, y toda la documentación comprobatoria de ingresos y egresos correspondientes al año 2000. Dicha solicitud fue comunicada a la agrupación por la vía del oficio no. STCFRPAP/637/01, de fecha 6 de agosto de 2001, y se dio a la agrupación 10 días para que alegara lo que a su derecho conviniere. Al término del plazo otorgado, la agrupación omitió dar respuesta al requerimiento formulado. Incluso al momento de la elaboración de este Proyecto de Resolución, la Secretaría Técnica no ha recibido el Informe Anual de la agrupación, ni el resto de la documentación que se le solicitó por oficio fechado el 6 de agosto de 2001.

Así pues, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas de someter a la agrupación Movimiento Social de los Trabajadores al ejercicio de rendición de cuentas prescrito en el Código Electoral Federal. En vista de ello, la falta se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en los artículos 35,

párrafo 13, inciso c), y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales amerita la máxima sanción.

Efectivamente, el inciso c), del párrafo 13 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las agrupaciones políticas nacionales perderán su registro cuando omitan rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos. Asimismo, el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) del mismo ordenamiento establecen que se sancionará a los partidos y agrupaciones cuando incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables del Código Electoral Federal, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General, y cuando no presenten los informes anuales en los términos y plazos previstos en la misma ley.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso e) de su primer párrafo, es decir, la sanción consistente en la cancelación del registro como agrupación política nacional, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática, y en la especie esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

Los párrafos 3 y 4 del artículo 269, en relación con el párrafo 2 del artículo 67 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la sanción consistente en la pérdida de registro sólo puede imponerse cuando la irregularidad sea grave o sistemática, mientras que el párrafo 4 del citado artículo y el párrafo 2 del artículo 67 expresamente regulan lo concerniente a la pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales.

Es evidente que la agrupación no ha querido, de ninguna manera, someterse al ejercicio de rendición de cuentas que establece la ley, y tal irresponsabilidad no puede, en modo alguno, y bajo ninguna circunstancia, ser tolerado por la autoridad electoral federal. Así lo establece precisamente el artículo 35, párrafo 13, inciso c), es decir, la ley mandata a la autoridad para que cancele el registro de una agrupación cuando ésta omita presentar su Informe Anual, esto eso, cuando simple y llanamente se niegue a someterse al ejercicio de rendición de cuentas a que debe invariablemente sujetarse. Es posible, ciertamente, que una agrupación sea sancionada por errores u omisiones que se deriven de la revisión de su Informe Anual. Pero en ese caso, aun cuando se sancionen errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que la agrupación da muestras de su voluntad, imprescindible en un estado democrático de derecho, de someterse a un ejercicio de rendición de cuentas, y al escrutinio de la autoridad pública, máxime si la agrupación recibe recursos públicos que no pueden otorgarse sin que exista la correlativa obligación por parte del beneficiario de dar a conocer claramente, y con prueba documental, de modo público y transparente, del uso que hizo de dichos recursos. En la especie, sin embargo, eso no sucedió. La agrupación simple y llanamente, al omitir la entrega de su Informe, se negó a someterse a dicho ejercicio, con lo cual de modo plástico se puso al margen del sistema normativo que regula la vida de las agrupaciones políticas nacionales, al ostentar una conducta clara e inequívocamente irresponsable, negándose simple y llanamente a dar cuenta de su conducta en relación con el uso de los recursos públicos que recibió durante el año 2000.

En el pasado, la agrupación Movimiento Social de los Trabajadores se sometió al ejercicio referido. Ciertamente, en el año 2000 fue sancionado por haber entregado su Informe Anual fuera de plazo. Efectivamente, el plazo para la presentación del Informe Anual de 1999 vencía el 30 de marzo de 2000, y la referida agrupación lo entregó el 31 de marzo de 2000, es decir, un día después de que se le venció el plazo. Aún haciéndolo fuera de plazo, lo cierto es que la agrupación cumplió entonces con su obligación de presentar el Informe correspondiente, instrumento *sine qua non* para que esta autoridad esté en aptitud de someter a la agrupación a una revisión de la legalidad del origen y destino de los recursos con que cuenta. Con todo, es obvio que la agrupación conocía perfectamente de su obligación de presentar en tiempo y forma su Informe Anual, junto con toda la documentación requerida clara e inequívocamente por los artículos 11 y 12 del Reglamento aplicable. Más aún, en 1999, la agrupación entregó en tiempo y forma su Informe Anual respecto del año fiscal 1998, primero respecto del cual rindió cuentas sobre el origen y destino de sus recursos. De modo pues que esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del conocimiento claro, preciso y exacto que tenía la agrupación en relación con la obligación de presentar su Informe Anual, pues en el pasado cumplió con dicha obligación.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que debe imponer a la Agrupación Movimiento Social de los Trabajadores la máxima sanción de que puede ser objeto dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la cancelación de su registro como agrupación política nacional.

5.19. Agrupación Política Nacional Mujeres en Lucha por la Democracia

a) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La agrupación política presentó documentación soporte en copia fotostática por un monto de $7,194.00, integrados de la siguiente manera:

CUENTA	***SUBCUENTA***	***MONTO***
Tareas Editoriales	*Gacetas*	*$5,497.00*
Servicios Generales	*Servicio Telefónico*	*1,697.00*
TOTAL		***$7,194.00***

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante oficio No. STCFRPAP/627/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Mujeres en Lucha por la Democracia que presentara las aclaraciones o rectificaciones pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta Tareas Editoriales, subcuenta Gacetas, se localizó un registro de pólizas que tenían como soporte documental copias fotostáticas. A continuación se detallan las pólizas observadas:

SUBCUENTA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
Gacetas	PE-2/04-00	Factura 0007 Grupo Manuscrito, S.A. de C.V. 1000 gacetas de 4 páginas	$2,748.50
Gacetas	PE-1/04-00	Factura 0691 Grupo XG Manuscrito, S.A. de C.V. 1000 Gacetas de 4 páginas	2,748.50
Total			**$5,497.00**

Al respecto, la agrupación política, con escrito de fecha 20 de agosto de 2001, manifestó lo que a la letra dice:

Las facturas originales números 007 y 691 del Grupo Manuscrito S.A. de C.V., por $2,748.50 C/U y registradas en P. E. 1 y 2 de abril/2000 para el pago de gacetas, también se extraviaron y nos fue imposible localizarlas.

Asimismo, mediante oficio No. STCFRPAP/627/01 de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Mujeres en Lucha por la Democracia que presentara las aclaraciones o rectificaciones pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta Servicios Generales, subcuenta Servicio Telefónico, se localizó un comprobante en copia fotostática por $1,697.00, como se señala a continuación:

SUBCUENTA	**REFERENCIA**	**PROVEEDOR**	**FECHA**	**CONCEPTO**	**COPIA**	**IMPORTE**
Servicio Telefónico	PE-10/08-00	Teléfonos de México, S.A. de C.V.	Julio-2000	Pago del servicio telefónico de julio	X	1,697.00

Al respecto, la agrupación, con escrito de fecha 20 de agosto de 2001, manifestó lo que a la letra dice:

El recibo telefónico registrado en P. E. 10 de agosto por $1,697.00, no se pudo localizar en recibo original, por lo que ustedes dirán qué procede en este caso.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanadas las observaciones realizadas, con base en las siguientes consideraciones:

La agrupación presentó documentación soporte en copia fotostática por un monto de $7,194.00, que se compone a su vez de 2 montos parciales de $1,697.00 y de $5,497.00, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 14.2 del Reglamento aplicable a las agrupaciones políticas.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Mujeres en Lucha por la Democracia incumplió lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, al presentar documentación comprobatoria de egresos en copia fotostática.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos. Por su parte, el artículo 14.2 del Reglamento aplicable dispone que, durante el periodo de revisión de informes, las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

En ningún proceso de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien que se justifique según las circunstancias particulares, y menos aún copia fotostática de la documentación comprobatoria requerida.

Tal y como lo señala la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, la agrupación sólo presentó copia fotostática de la documentación solicitada. Tal situación no subsana el hecho de no haber presentado la documentación comprobatoria original, ya que el artículo 14.2 exige que se presente la documentación original, sin que en el propio Reglamento se establezca la alternativa de presentar copias fotostáticas como documentación comprobatoria de egresos.

La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual y, en particular, al presentarse documentación en copia fotostática, no se puede tener certeza de que los egresos reportados se hayan efectivamente verificado en la forma y términos contenidos en su contabilidad y, en última instancia, en el informe presentado.

Esta autoridad no tiene elementos para presumir una intención premeditada y expresa de ocultar información. Además, se tiene en cuenta que la Agrupación Política Nacional nunca ha sido sancionada por una falta similar y que el monto implicado en la irregularidad asciende a $7,194.00.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de cincuenta y tres días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La agrupación política no presentó documentación comprobatoria de egresos por un monto total de $4,197.50, en el rubro de Servicios Generales, subcuenta Eventos Promocionales.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/627/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Mujeres en Lucha por la Democracia que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta de Servicios Generales, subcuenta Eventos Promocionales, se localizó el registro de una póliza que carecía de documentación soporte, por un monto de $4,197.50.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 20 de agosto de 2001, lo siguiente:

"El comprobante de la Póliza de Egreso No. 3 del 4/feb/2000 por un importe de $4,197.50 y que corresponde a Don Pollo, S.A. de C.V., por concepto de un desayuno de la agrupación como Evento Promocional, se extravió y fue imposible recuperarlo."

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

En consecuencia se determinó que la observación no quedó subsanada. Al incumplir lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal De Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 y 14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral establece que los partidos políticos nacionales y las coaliciones políticas están obligados a entregar a la Comisión de Fiscalización la documentación que le solicite respecto de sus ingresos y egresos.

Por otra parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas señala que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables. Adicionalmente, el artículo 14.2 del citado Reglamento establece que las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Debe decirse que es obligación de la agrupación, al momento de efectuar un gasto, solicitar al proveedor toda la documentación comprobatoria exigida por la normatividad y que contenga requisitos fiscales. La labor de la agrupación no consistía en realizar erogaciones a diestra y siniestra para posteriormente iniciar la recolección de toda la documentación sustento de los gastos que había realizado, por lo que, desde luego, esta autoridad considera que la agrupación incurrió en la irregularidad consistente en no presentar documentación comprobatoria soporte del gasto realizado.

La normatividad aplicable es clara al establecer que es obligación de las agrupaciones políticas, contar en todo momento con la documentación que compruebe de manera adecuada los gastos en que incurrió, por lo que nada le exime a la agrupación de la presentación de la citada documentación al momento de la presentación de su informe anual, o bien, cuando la Comisión de Fiscalización se los solicitara.

Lo argumentado por la agrupación no es suficiente para subsanar la irregularidad en la que incurrió, toda vez que es su obligación conservar la documentación comprobatoria original de los gastos en que incurra y presentarlos ante la autoridad electoral, sin que valga como excusa el argüir que el comprobante del egreso fue extraviado.

La autoridad electoral considera trascendente que una agrupación, por las razones que sean, no le presente la documentación comprobatoria del gasto o del ingreso que ésta solicite, en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta puede tener efectos sobre la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

Así pues, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su informe anual. En vista de ello, la falta se califica como grave y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Al respecto, se ha de tener en cuenta que la no entrega de la documentación comprobatoria se debe a una mala administración, y no a una intención dolosa por parte de la agrupación.

También debe tenerse en cuenta que el monto total que la coalición no comprobó es de $4,197.50.

Además, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Mujeres en Lucha por la Democracia una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política presentó comprobantes fechados en 1999 para acreditar egresos reportados en su informe anual, sin haber creado en su momento los pasivos correspondientes, por un monto de $1,390.00, en la cuenta de Educación y Capacitación Política, por concepto de Viáticos.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/627/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Mujeres en Lucha por la Democracia que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta de Educación y Capacitación Política, se localizó documentación comprobatoria de egresos fechada en 1999, por un monto total de $12,020.00, como a continuación se describe:

SUBCUENTA	REFERENCIA	RECIBO	FECHA DE EXPEDICION	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Honorarios Realización de Evento	PE-4/01-00	S/N	15-01-99	Bertha Rodríguez Báez	Honorarios Asimilados	$2,000.00
Honorarios Realización de Evento	PE-14/01-00	S/N	31-01-99	Bertha Rodríguez Báez	Honorarios Asimilados	2,060.00
Honorarios Realización de Evento	PE-11/02-00	S/N	15-02-99	Bertha Rodríguez Báez	Honorarios Asimilados	2,570.00

Honorarios Realización de Evento	PE-22/08-00	S/N	18-08-99	Blanca R. Añorve Peláez	Honorarios Asimilados	4,000.00
Viáticos Personal Organización de Evento	PE-7/01-00	Varias	De Julio a Noviembre de 1999	Varios	Pago de Viáticos	1,390.00
Total						**$12,020.00**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 20 de agosto de 2001, lo siguiente:

"Los 4 recibos de Honorarios Asimilados a Salarios registrados en enero, febrero y agosto de 2001 de la C. Berta Rodríguez Báez (3) y de la C. Blanca R Añorve Peláez (1) por $2,000.00, $2,060.00, $2,570.00 y $4,000.00 respectivamente, se están sustituyendo por los correctos ya que erróneamente al llenarlos se puso año 1999 debiendo ser 2000, se anexan los originales de
dichos recibos."

"También dentro de este punto en la Póliza de Egresos del mes de enero de 2000 tenemos gastos por pago de viáticos al personal con fecha de 1999, desafortunadamente por un error estos gastos no fueron provisionados en 1999 ustedes nos dirán qué procede en este caso ya que no pudo hacer nada para subsanarlo".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

De la revisión efectuada a la documentación presentada por la agrupación se determinó que por lo que respecta a los recibos de honorarios estos cumplen con lo establecido en el Reglamento.

Referente al monto de $1,390.00, de viáticos, correspondiente al ejercicio de 1999, la agrupación incumplió con lo establecido en el artículo 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 12.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas nacionales.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la agrupación política incumplió con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, que establecen que en el Informe Anual deberán reportarse los ingresos totales y gastos ordinarios que el partido político haya realizado durante el ejercicio objeto del informe.

En este caso, se registraron en la contabilidad correspondiente al ejercicio de 2000, sustento del Informe Anual del mismo ejercicio, gastos generados en el ejercicio de 1999, presentando documentación comprobatoria fechada en este último año, sin que en su momento se hubiere creado el pasivo correspondiente, con lo que el gasto no se puede considerar adecuadamente documentado, además de que los registros contables de la agrupación política, en ambos ejercicios, no reflejaron debidamente el estado real de sus finanzas, al omitir realizar los registros apropiados.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas juzgó insatisfactorias las respuestas ofrecidas por la agrupación política, por las razones que expuso en el Dictamen Consolidado.

Adicionalmente, con la comisión de esta irregularidad los registros contables de la agrupación política, en ambos ejercicios, no reflejaron debidamente el estado real de sus finanzas, al omitir realizar los registros apropiados.

Dado que las agrupaciones políticas pueden entregar a la autoridad electoral su Informe Anual hasta noventa días después del fin del año del ejercicio que se reporta, es perfectamente posible que

en ese mismo espacio de tiempo, los pagos realizados en las primeras semanas del año sobre notas o facturas fechadas en las últimas semanas del año anterior, puedan ser debidamente contabilizadas como pasivo del año que concluye, de modo que el "IA" refleje con precisión los pagos que han quedado pendientes de exhibirse en el pasivo correspondiente.

En este sentido, la interpretación sistemática de las normas aplicables a las agrupaciones políticas respecto del registro y la comprobación de sus ingresos y egresos resulta también consistente con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas y procedimientos de auditoría comúnmente aplicables, que establecen lo siguiente:

> *"Periodo contable.- La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales. Las operaciones y eventos así como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren; por tanto cualquier información contable debe indicar claramente el periodo a que se refiere. En términos generales, los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que originaron, independientemente de la fecha en que se paguen".*
>
> *(Boletín A-1 de la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, página 9, párrafo 41)*

De este modo, la documentación que sustente los ingresos y egresos que han de registrarse en un informe anual de una agrupación política, debe corresponder al mismo ejercicio que se reporta en el informe.

Así pues, la falta se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como leve, pues se debe a un problema de carácter fundamentalmente contable; sin embargo, esta autoridad tiene en cuenta que la irregularidad en estudio implica que el Informe Anual presentado por la agrupación no reflejó el estado real de sus finanzas. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la agrupación informó de la situación, que nunca hubo la intención de ocultar información, y que no hubo nunca dolo o mala fe. Se estima necesario, sin embargo, disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Se tiene en cuenta además que la agrupación llevó un adecuado control de sus operaciones en términos generales y que es la primera vez en que incurre en este tipo de irregularidad.

Adicionalmente, se tiene en cuenta que el monto involucrado en la irregularidad en estudio es de $1,390.00.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Mujeres en Lucha por la Democracia, una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

5.20. Agrupación Política Nacional Mujeres y Punto

a) En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La agrupación política presentó documentación comprobatoria sin requisitos fiscales, por un importe de $8,195.00, en la cuenta de Gastos de Operación Ordinaria, subcuenta Mantenimiento de Oficinas, por concepto de Servicio de Limpieza.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/643/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Mujeres y Punto que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental de los gastos de operación ordinaria, se localizaron gastos comprobados con bitácoras de gastos menores que no correspondían a viáticos y pasajes, como se detalla en el siguiente cuadro:

SUBCUENTA	REFERENCIA	FACTURAS	CONCEPTO	IMPORTE
Mantenimiento de Oficinas	Varias	Varias	Servicio de Limpieza	$8,195.00

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

> *En efecto el pago de los servicios de limpieza solamente se encuentran sustentados con vales de caja de la propia agrupación, ya que la persona que hace la limpieza no cuenta con comprobantes fiscales, por lo tanto estos gastos fueron cubiertos con financiamiento privado y por ello se encuentran contabilizados en Gastos de Operación Ordinaria. En consecuencia, en ningún momento se incluyeron en bitácora alguna.*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *La respuesta se consideró insatisfactoria, al incumplir lo establecido en el artículo 7.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Mujeres y Punto incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al presentar documentación comprobatoria de egresos que carece de los requisitos exigidos por la normativa fiscal.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos. Por su parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, así como que dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien, que se justifique según las circunstancias particulares.

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación original que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa fiscal, pues se trata de un monto importante de recursos involucrados.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 7.1 del Reglamento aplicable para acreditar los egresos que se efectúen la agrupación política, y la documentación presentada no se encuentra incluida en los casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

También se tiene en cuenta que: a) no se puede presumir desviación de recursos; b) la agrupación presentó algún documento como soporte, aunque no reúna los requisitos exigidos; c) no puede concluirse que hubiere tenido intención de ocultar información, y d) el monto implicado asciende a $8,195.00.

Por otra parte, esta autoridad toma en cuenta que es la primera vez que la agrupación política incurre en este tipo de faltas.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

En vista de lo anterior, la falta se califica como de mediana gravedad.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Mujeres y Punto una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de sesenta y un días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La agrupación política presentó comprobantes fechados en 1999 para acreditar egresos reportados en su informe anual, sin haber creado en su momento los pasivos correspondientes, por un monto de $3,744.17, integrado de la siguiente forma:

CUENTA	***MONTO***
Gastos de Operación Ordinaria	*$931.50*
Tareas Editoriales	*$322.65*
Educación y Capacitación Política	*$2,490.02*
TOTAL	***$3,744.17***

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/643/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Mujeres y Punto que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta de Gastos de Operación Ordinaria, subcuenta Diversos, se localizó documentación comprobatoria de egresos fechada en 1999, por un monto de $931.50, por concepto de Servicios de Mensajería.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 17 de agosto de 2001, lo siguiente:

"Efectivamente por ser un gasto de Noviembre y Diciembre de 1999, ya había sido reclasificado a los Gastos de Operación Ordinaria que cubre la agrupación vía Recursos Privados".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta se consideró insatisfactoria, ya que no presentó evidencia de su dicho, por lo que incumplió lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 12.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

Mediante el oficio STCFRPAP/643/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Mujeres y Punto que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta de Tareas Editoriales, subcuenta Boletín Informativo Mensual, se localizó documentación comprobatoria de egresos fechada en 1999, por un monto de $322.65, por concepto de Fólderes, Grapas y Formas.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 17 de agosto de 2001, lo siguiente:

"Durante los primeros meses del ejercicio de 2000, la agrupación cambió de domicilio, lo cual propicio que varios documentos fueran traspapelados, tal es este caso; sin embargo este egreso fue reclasificado a gastos de operación ordinaria y se aplicó la corrección en el FUC-APN'S y en los registros contables".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta se consideró insatisfactoria, al incumplir lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 12.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

Mediante el oficio STCFRPAP/643/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Mujeres y Punto que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta de Educación y Capacitación Política, subcuenta Programa de Radio: Si la Mujer no Está, se localizó documentación comprobatoria de egresos fechada en 1999, por un monto de $2,490.02, integrados de la siguiente manera:

SUBCUENTA	REFERENCIA	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Programa de Radio: Si la Mujer no Está	PE-1/01-00	D15437200	24-12-99	Avantel, S.A.	Pago de servicio telefónico	$346.02
Programa de Radio: Si la Mujer no Está	PE-3/01-00	Tel. 5662-4593	12-99	Teléfonos de México, S.A.	Pago de servicio telefónico	2,144.00
Total						**$2,490.02**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 17 de agosto de 2001, lo siguiente:

"Durante los primeros meses del ejercicio 2000, la Agrupación cambio de domicilio, lo cual propició que varios documentos fueran traspapelados, tal es este caso; sin embargo este egreso fue reclasificado a Gastos de Operación Ordinaria y se aplicó la corrección en el FUC-APN'S y en los registros contables".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta se consideró insatisfactoria, al incumplir lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales y 12.1 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la agrupación política incumplió con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, que establecen que en el Informe Anual deberán reportarse los ingresos totales y gastos ordinarios que el partido político haya realizado durante el ejercicio objeto del informe.

En este caso, se registraron en la contabilidad correspondiente al ejercicio de 2000, sustento del Informe Anual del mismo ejercicio, gastos generados en el ejercicio de 1999, presentando documentación comprobatoria fechada en este último año, sin que en su momento se hubiere creado el pasivo correspondiente, con lo que el gasto no se puede considerar adecuadamente documentado, además de que los registros contables de la agrupación política, en ambos ejercicios, no reflejaron debidamente el estado real de sus finanzas, al omitir realizar los registros apropiados.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas juzgó insatisfactorias las respuestas ofrecidas por la agrupación política, por las razones que expuso en el Dictamen Consolidado.

Adicionalmente, con la comisión de esta irregularidad los registros contables de la agrupación política, en ambos ejercicios, no reflejaron debidamente el estado real de sus finanzas, al omitir realizar los registros apropiados.

Dado que las agrupaciones políticas pueden entregar a la autoridad electoral su Informe Anual hasta noventa días después del fin del año del ejercicio que se reporta, es perfectamente posible que en ese mismo espacio de tiempo, los pagos realizados en las primeras semanas del año sobre notas o facturas fechadas en las últimas semanas del año anterior, puedan ser debidamente contabilizadas como pasivo del año que concluye, de modo que el "IA" refleje con precisión los pagos que han quedado pendientes de exhibirse en el pasivo correspondiente.

En este sentido, la interpretación sistemática de las normas aplicables a las agrupaciones políticas respecto del registro y la comprobación de sus ingresos y egresos resulta también consistente con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas y procedimientos de auditoría comúnmente aplicables, que establecen lo siguiente:

"Periodo contable.- La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales. Las operaciones y eventos así como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren; por tanto cualquier información contable debe indicar claramente el periodo a que se refiere. En términos generales, los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que originaron, independientemente de la fecha en que se paguen".

(Boletín A-1 de la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, página 9, párrafo 41)

De este modo, la documentación que sustente los ingresos y egresos que han de registrarse en un informe anual de una agrupación política, debe corresponder al mismo ejercicio que se reporta en el informe.

Así pues, la falta se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como leve, pues se debe a un problema de carácter fundamentalmente contable, sin embargo, esta autoridad tiene en cuenta que la irregularidad en estudio implica que el Informe Anual presentado por la agrupación no reflejó el estado real de sus finanzas. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la agrupación informó de la situación, que nunca hubo la intención de ocultar

información, y que no hubo nunca dolo o mala fe. Se estima necesario, sin embargo, disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Se tiene en cuenta además que la agrupación llevó un adecuado control de sus operaciones en términos generales y que es la primera vez en que incurre en este tipo de irregularidad.

Adicionalmente, se tiene en cuenta que el monto involucrado en la irregularidad en estudio es de $3,744.17.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Mujeres y Punto, una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la multa de cincuenta salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

5.21. Agrupación Política Nacional Organización México Nuevo

En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política presentó documentación comprobatoria sin requisitos fiscales, por un importe total de $2,001.28, correspondiente al rubro de Educación y Capacitación Política.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/636/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Movimiento Organización México Nuevo que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta Educación y Capacitación Política, se localizó documentación sin requisitos fiscales, como a continuación se detalla:

SUBCUENTA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Gastos en Educación y Capacitación Política	PE-21/06-00	Estado de Cuenta del Hotel Emporio, S.A. de C.V.	$1,299.28
Gastos en Educación y Capacitación Política	PE-21/06-00	Estado de Cuenta del Hotel Emporio, S.A. de C.V.	702.00
Total			**$2,001.28**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 20 de agosto de 2001, lo siguiente:

> *"en este punto señalamos que no fue posible conseguir las facturas originales relativas a los gastos de educación política efectuados en el hotel Emporio, S.A. de C.V., ya que la administración de este establecimiento señala como cumplida su labor con los estados de cuenta entregados anteriormente".*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *La respuesta de la agrupación se consideró insatisfactoria, en virtud de que la norma es clara al establecer en el citado artículo 7.1 del Reglamento que los egresos deberán estar soportados con documentación que reúna requisitos fiscales, razón por lo cual la observación no fue subsanada.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral establece que los partidos políticos nacionales y las coaliciones políticas están obligados a entregar a la Comisión de Fiscalización la documentación que le solicite respecto de sus ingresos y egresos.

Por otra parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas señala que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

La agrupación política expresamente reconoce que no le es posible obtener la documentación comprobatoria correspondiente con requisitos fiscales y, por ende, presentarla ante la autoridad electoral, por lo que a confesión de parte, relevo de prueba.

Adicionalmente debe decirse que es obligación de la agrupación, al momento de efectuar un gasto, solicitar al proveedor toda la documentación comprobatoria exigida por la normatividad y que contenga requisitos fiscales. La labor de la agrupación no consistía en realizar erogaciones a diestra y siniestra para posteriormente iniciar la recolección de toda la documentación con requisitos fiscales sustento de los gastos que había realizado, por lo que, desde luego, esta autoridad considera que la agrupación incurrió en la irregularidad consistente en no presentar documentación comprobatoria con requisitos fiscales como soporte del gasto realizado.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien, que se justifique según las circunstancias particulares.

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa fiscal, pues no se trata de erogaciones susceptibles de considerarse como excepcionales.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica de mediana gravedad en tanto que este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 7.1 del Reglamento aplicable para acreditar los egresos que se efectúen la agrupación política, y la documentación presentada no se encuentra incluida en los casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

También se tiene en cuenta que: a) no se puede presumir desviación de recursos; b) la agrupación presentó algún documento de soporte, aunque no reúna los requisitos exigidos; c) no puede concluirse que hubiere tenido intención de ocultar información, y d) el monto implicado asciende a $2,001.28.

Por otra parte, esta autoridad toma en cuenta que es la primera vez que la agrupación política incurre en este tipo de faltas.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Movimiento Organización México Nuevo una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

5.22. Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, A.C.

a) En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La agrupación política no depositó en la cuenta bancaria "CB-APN" de la agrupación, recursos por un monto de $60,000.00, provenientes de una aportación en efectivo.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/607/01, de fecha 24 de julio de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión documental, se localizó el registro contable de una aportación en efectivo que no fue depositada en la cuenta bancaria "CB-APN", como se señala a continuación:

REFERENCIA	RECIBO	NOMBRE	IMPORTE
PI-1/02-00	01	Marco Tulio Zárate Luna	$60,000.00

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

> *En referencia a este capítulo en su apartado de aportaciones de asociados en donde se hizo una donación en efectivo por un importe de $60,000.00 mil pesos, de la cual no fue depositada en la cuenta bancaria "CBAPN" queremos manifestar que tal omisión nunca fue deliberada ni con el afán de pasar por alto el reglamento, sino debida en primer lugar a causa de inmediatez ya que tuvimos que hacer frente a compromisos de pago, previamente contraídos con diferentes proveedores, los cuales requerían solventarse para no suspender las actividades que la agrupación lleva a cabo en sus distintos rubros. Es por ello, que ese ingreso en efectivo, no se deposito inmediatamente en cuenta bancaria. Por lo que le reiteramos, no haber actuado de mala fe y que ésta ha sido la única ocasión en que se operó de esta forma por la urgencia de cumplir con los distintos pagos durante ese periodo, por lo que también ya hemos tomado providencias, para que no se repita esta omisión.*
>
> *Así mismo cabe señalar que aunque en el estado bancario en ese momento, aparecía un saldo a favor de $27,892.11 mil pesos como se demuestra con el estado de cuenta, este fondo para entonces no sólo era insuficiente para el pago a proveedores sino también como se desprende del propio estado de cuenta, éstos iban a ser utilizados para el pago por concepto de retenciones a la Secretaria de Hacienda.*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

> *La respuesta de la agrupación, se juzgó insatisfactoria, en virtud de que no se dio cumplimiento a la normatividad establecida en la materia al incumplir lo estipulado en el artículo 1.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las agrupaciones políticas.*

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro incumplió con lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al no depositar en una cuenta "CB-APN" una aportación en efectivo.

El artículo 1.2 del Reglamento aplicable establece que **todos los ingresos** en efectivo que reciban las agrupaciones políticas deben depositarse en cuentas bancarias a nombre de la agrupación política.

La finalidad de esta norma es ofrecer a la autoridad electoral un mecanismo efectivo de seguimiento y compulsa de los ingresos que reciban y los egresos que realicen, toda vez que las agrupaciones políticas no sólo se encuentran obligadas a controlar sus ingresos y egresos en cuentas bancarias, sino que también deben entregar a esta autoridad los estados de cuentas respectivos, los cuales permiten verificar la veracidad de los reportado por las agrupaciones en sus respectivos informes anuales.

Como se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización, la agrupación política no depositó en alguna cuenta bancaria una aportación en efectivo incumpliendo, por tanto, lo dispuesto en el artículo 1.2 en comento. Incluso, la propia agrupación, en su escrito de respuesta, acepta expresamente haber actualizado la irregularidad que por esta vía se sanciona, cuando afirma: "Es por ello, que ese ingreso en efectivo, **no se depositó inmediatamente en cuenta bancaria**. Por lo que le reiteramos, **no haber actuado de mala fe** y que ésta ha sido la única ocasión en que se operó de esta forma por la urgencia de cumplir con los distintos pagos durante ese periodo, por lo que **también ya hemos tomado providencias, para que no se repita esta omisión**".

Lo alegado por la agrupación no resulta suficiente para considerar subsanada la irregularidad, pues es claro que el cumplimiento de la normativa aplicable de ninguna manera se encuentra condicionado a circunstancias particulares de hecho, como eventualmente puede ser la urgencia de contar con recursos para realizar una determinada erogación. En todo caso, la agrupación debió tomar todas las providencias necesarias para que ese caso de urgencia no se verificara y, en consecuencia, evitar la actualización de la irregularidad que por esta vía se sanciona.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues la utilización de cuentas bancarias resulta indispensable para poder emprender una labor de verificación de las cifras contenidas en dicho informe, proceder a su compulsa con la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos y con los movimientos bancarios relacionados.

En vista de lo anterior, la falta se califica como de mediana gravedad, tomando en cuenta que el monto implicado asciende a la cantidad de $60,000 y el hecho de que la agrupación política aceptó expresamente haber cometido la irregularidad.

Asimismo, esta autoridad toma en cuenta que no es posible presumir dolo en la realización de la conducta antijurídica ni la intención de ocultar información, y que es la primera vez que esta agrupación es sancionada por no depositar en cuentas bancarias todos sus ingresos.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro una sanción económica que, dentro de los límites

establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de setecientos cuarenta y tres días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La agrupación no realizó mediante cheque, pagos superiores a los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por un monto total de $35,775.00, en el rubro de Tareas Editoriales.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 7.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/607/01, de fecha 24 de julio de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, A.C. que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta de Tareas Editoriales, se determinó que la agrupación política no realizó con cheque pagos que exceden los 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, como se señala a continuación:

REFERENCIA	FACTURA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
PE-6/03-00	12	Pérez Guevara Armando Federico	2 mil Revistas	$11,925.00
PE-3/02-00	09	Pérez Guevara Armando Federico	2 mil Revistas	11,925.00
PE-1/02-00	05	Pérez Guevara Armando Federico	2 mil Revistas	11,925.00
TOTAL				**$35,775.00**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 10 de agosto de 2001, lo siguiente:

"En referencia a las observaciones de este capítulo, queremos aclarar que los gastos generados por este rubro fueron pagados de la caja chica, en virtud de que en ese momento como ya mencionamos en el punto anterior, no hicimos movimientos en la cuenta bancaria, para no comprometer el pago de retenciones a la Secretaría de Hacienda, y en segundo término porque a nuestro proveedor en este caso las revistas le era necesario y mas práctico en ese periodo recibir de forma inmediata el pago en efectivo que en cheque. Aún así, en nuestro informe anual, nunca omitimos presentar en tiempo y forma los recibos originales de nuestro proveedor, en donde se acienta (sic), que el pago se efectuó de riguroso contado por así convenir en ese periodo, a los intereses de la propia empresa."

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta se juzgó insatisfactoria, ya que en caso de que lo citado por el partido sea cierto, este bien podía haber optado por expedir el cheque a nombre de un tercero por el monto exacto de la compra, como lo señala el artículo 15, último párrafo del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que a la letra dice:

*"Cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un **tercero** excepto tratándose de contribuciones, deberá expedir cheques nominativos **a favor de éste** y cuando dicho tercero realice **pagos por cuenta del contribuyente** éstos deberán reunir los requisitos del artículo 24 fracción III de la Ley".*

Al no haber realizado el pago con cheque, ni utilizar esta modalidad la agrupación incumplió en el artículo 7.3.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en el artículo 7.3 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,

Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al realizar erogaciones que al exceder de 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, debieron realizarse mediante cheque.

En efecto, el artículo 7.3 del Reglamento en comento establece con toda precisión que todo pago que efectúen las agrupaciones políticas que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque. Asimismo, establece las únicas excepciones aplicables a esta regla general, las cuales consisten en pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas.

Esta autoridad electoral no considera suficiente lo argumentado por la agrupación política en el sentido de que no quería *"comprometer el pago de retenciones a la Secretaria de Hacienda",* ni que al proveedor *"le era necesario y mas práctico en ese periodo recibir de forma inmediata el pago en efectivo"*. Es evidente que el cumplimiento de la normatividad aplicable no puede estar condicionada a un proveedor prefiera recibir el monto de la operación en efectivo y no en cheque. Asimismo, esta autoridad no alcanza percibe la razón por la cual la agrupación en cuestión tuvo que recurrir al pago de los montos erogados con recursos provenientes de la caja chica, para no comprometer el pago de retenciones, ya que ambas obligaciones están claramente establecidas en el Reglamento aplicable a las agrupaciones políticas y en las leyes fiscales, así que desde un primer momento la agrupación tenía conocimiento de las normas a las que se encontraba sujeta y debió haber tomado las provisiones necesarias para cumplir con todas sus obligaciones. En el caso que nos ocupa, la agrupación política de antemano conocía su obligación de expedir cheques nominativos para cubrir pagos que excedan del límite señalado y, en consecuencia, debió tomar todas la medidas necesarias para cumplirla a cabalidad.

No está de más señalar que lo establecido en el artículo 7.3 antes referido, es aplicable respecto de los pagos finales que se realicen a nombre y/o por cuenta de la agrupación política. No se cumple con la normatividad si solamente se extiende un cheque a nombre de una persona comisionada por el ésta para que realice, a su vez, pagos en efectivo a otras personas, sino que el pago final debe en todo caso realizarse mediante cheque nominativo, cuando rebase la cantidad indicada. Por lo hasta aquí dicho, lo argumentado por la agrupación no justifica su incumplimiento a lo establecido en el artículo 7.3 del multicitado Reglamento.

Por otro lado, resulta evidente que las irregularidades observadas a la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, A.C. no se encuentran dentro de los casos de excepción sino que, como se desprende del Dictamen Consolidado, los pagos se refieren a gastos en el rubro de Tareas Editoriales, por lo que es claro su incumplimiento a la normatividad de la materia.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como leve, en tanto que no tiene un efecto inmediato sobre la comprobación de los gastos. Sin embargo, sí puede tener efectos sobre la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos, pues la realización de pagos mediante cheque hace que la identidad de quien los realiza y los recibe estén claramente determinados, mientras que la realización de pagos en efectivo, sobre todo si se trata de sumas importantes, puede originar poca claridad, e incluso hacer que se confundan con recursos que no hubieren estado debidamente registrados en la contabilidad de una agrupación política. La norma transgredida pretende evitar precisamente que el efectivo circule profusamente en las operaciones de las agrupaciones y que dichas operaciones dejen huellas verificables e incontrovertibles que ofrezcan certeza del origen de los recursos, así como de la veracidad de lo informado.

Asimismo, se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: que no se puede presumir desviación de recursos; que la agrupación llevó un adecuado control de sus operaciones, en términos generales, que no ocultó información y es la primera vez que incurre en una irregularidad de estas características.

Por otra parte, en la determinación de la gravedad de la falta, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas y que, aún tratándose de una norma de carácter excepcional, la agrupación no fue capaz de cumplirla a cabalidad.

Adicionalmente ha de considerarse, para fijar la sanción, que el monto que rebasaba el límite de 100 días de salario mínimo y no fue pagado mediante cheque suma un total de $35,775.00.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, A.C. una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de ochenta y nueve días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.23. Agrupación Política Nacional Praxis Democrática, A.C.

En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

La agrupación política presentó documentación comprobatoria sin requisitos fiscales, por un importe total de $4,330.12, integrados de la siguiente manera:

SUBCUENTA	***CONCEPTO***	***MONTO***
Reparación y Mantenimiento de Oficinas	*Alfombra y Bajo alfombra*	*$2,090.42*
Reparación y Mantenimiento de Oficinas	*Persianas*	*2,239.70*
TOTAL		***$4,330.12***

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/635/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Praxis Democrática que presentará las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental de la subcuenta Reparación y Mantenimiento de Oficinas, se localizaron comprobantes con la leyenda “este documento no es válido para efectos fiscales”, como se señala a continuación:

REFERENCIA	TICKET DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
PE-94/05-00	S/N	07-05-00	Home Mart de México, S.A. de C.V.	Alfombra y Bajo Alfombra	$2,090.42
PE-105/05-00	S/N	06-05-00	Home Mart de México, S.A. de C.V.	Persianas	2,239.70
Total					**$4,330.12**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

Como ya se los habíamos informado con anterioridad, no fue posible conseguir la factura relativa a los tickets registrados en la subcuenta REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS,
por $4,330.12.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta de la agrupación se considera insatisfactoria, razón por lo cual la observación quedó no subsanada, al incumplir lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento antes citado.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Praxis Democrática incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones

y Procedimientos Electorales y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al presentar documentación comprobatoria de egresos que carece de los requisitos exigidos por la normativa fiscal.

El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos. Por su parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago, así como que dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien, que se justifique según las circunstancias particulares.

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación original que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa fiscal, pues la agrupación conocía de antemano su obligación de comprobar sus egresos con documentación que reuniera requisitos fiscales. Además, esta autoridad considera que la agrupación pudo haber tomado todas las providencias necesarias para obtener tal documentación y, en todo caso, si la falta de expedición de comprobantes con requisitos fiscales es atribuible al proveedor, pudo abstenerse de contratar con éste. No está de más señalar que el cumplimiento de la normativa que rige el registro y comprobación del origen de los ingresos y del destino de los egresos, de ninguna manera puede estar sujeto o condicionado a actos imputables a terceros.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 7.1 del Reglamento aplicable para acreditar los egresos que se efectúen la agrupación política, y la documentación presentada no se encuentra incluida en los casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

También se tiene en cuenta que: a) no se puede presumir desviación de recursos; b) la agrupación, en algunos casos, presentó algún documento como soporte, aunque no reúna los requisitos exigidos; c) no puede concluirse que hubiere tenido intención de ocultar información, y d) el monto implicado asciende a $4,330.12.

Por otra parte, esta autoridad toma en cuenta que es la primera vez que la agrupación política incurre en este tipo de faltas.

Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

En vista de lo anterior, la falta se califica como de mediana gravedad.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Praxis Democrática una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.24. Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática

En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

La agrupación no realizó mediante cheque, pagos superiores a los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por un monto total de $129,404.61, en el rubro de Educación y Capacitación Política.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 7.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante oficio No. STCFRPAP/657/01 de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Red de Acción Democrática que presentara las aclaraciones o rectificaciones pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta Educación y Capacitación Política, se encontraron comprobantes de gastos en efectivo superiores a los cien días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal, siendo los siguientes:

REFERENCIA	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
PD-1/11-00	5786	06-11-00	Santos Rodríguez Vite	Papelería	$8,600.00
PD-1/11-00	4610	06-11-00	Francisco Gandy Galván	Hospedaje	7,999.40

REFERENCIA	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
PD-1/11-00	0026	06-11-00	Manuel Vera Serna	240 Desayunos	6,624.00
PD-1/11-00	0037	06-11-00	Manuel Vera Serna	240 Comidas	7,452.00
PD-1/11-00	0044	06-11-00	Manuel Vera Serna	240 Cenas	6,624.00
PD-1/11-00	0052	07-11-00	Manuel Vera Serna	240 Desayunos	6,624.00
PD-1/11-00	0061	07-11-00	Manuel Vera Serna	240 Comidas	7,452.00
PD-1/11-00	0070	07-11-00	Manuel Vera Serna	240 Cenas	6,624.00
PD-1/11-00	0079	08-11-00	Manuel Vera Serna	240 desayunos	6,624.00
PD-1/11-00	0091	08-11-00	Manuel Vera Serna	240 Comidas	7,452.00
PD-1/11-00	0100	08-11-00	Manuel Vera Serna	240 Cenas	6,624.00
PD-1/06-00	391	16-06-00	Transportes el Tigre Huasteco, S.A. de C.V	15 Viajes	10,785.00
PD-1/06-00	19700	16-06-00	Servicio Platón Sánchez, S.A.	Gasolina y Diesel	7,400.51
PD-1/06-00	0004	16-06-00	Manuel Vera Serna	377 Desayunos	6,503.94
PD-1/06-00	0010	16-06-00	Manuel Vera Serna	377 Comidas	6,503.94
PD-1/06-00	0014	16-06-00	Manuel Vera Serna	377 Cenas	6,503.94

REFERENCIA	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
PD-1/06-00	0019	17-06-00	Manuel Vera Serna	377 Desayunos	6,503.94
PD-1/06-00	0021	17-06-00	Manuel Vera Serna	377 Comidas	6,503.94
TOTAL					**$129,404.61**

Al respecto, mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2001, la agrupación manifestó lo que a la letra dice:

Es nuestra preocupación el que la capacitación llegue a los diferentes puntos de la república y que no se concentre en esta ciudad por lo que en la mayoría de los casos se entrega dinero a

la persona que se hará responsable de la capacitación quien a su vez contrata los diferentes servicios, hemos intentado realizar los pagos directamente pero como las ciudades en las que se llevan a cabo los eventos no todos los comercios tienen cuentas de cheques en las que se les podría depositar y además el realizar órdenes de pago tiene un costo adicional, considerando también que algunas personas han 'extraviado' su credencial y no pueden cobrar los cheques o las órdenes de pago, como ya nos hemos encontrado con estos problemas lo más sencillo es concentrar la responsabilidad en una sola persona quien responde cabalmente a la comprobación de los gastos.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanadas las observaciones realizadas, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta de la agrupación se consideró insatisfactoria, en virtud de que la norma es clara al establecer en el artículo 7.3 del reglamento que establece los lineamientos, aplicables a las agrupaciones políticas, que todo pago que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque (...)

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Red de Acción Democrática incumplió lo establecido en el artículo 7.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, al no realizar mediante cheque gastos que exceden el límite de cien días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal.

El artículo 7.3 del Reglamento establece que todo pago que efectúen las agrupaciones políticas que rebase la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque, con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas.

A este respecto, la agrupación política pudo haber optado por expedir el cheque a nombre de un tercero por el monto exacto de la compra, como lo señala el artículo 15, último párrafo del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que a la letra dice:

Cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un tercero, excepto tratándose de contribuciones, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste y cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del contribuyente, éstos deberán reunir los requisitos del artículo 24 fracción III de la Ley.

Al no haber realizado el pago con cheque, ni utilizar la modalidad descrita, la Agrupación Política Red de Acción Democrática incumplió con el artículo 7.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.

No está de más señalar que lo establecido en el artículo 7.3 antes referido, es aplicable respecto de los pagos finales que se realicen a nombre y/o por cuenta de la agrupación política. No se cumple con la normatividad si solamente se extiende un cheque a nombre de una persona comisionada por el ésta para que realice, a su vez, pagos en efectivo a otras personas, sino que el pago final debe en todo caso realizarse mediante cheque nominativo, cuando rebase la cantidad indicada. Por lo hasta aquí dicho, lo argumentado por la agrupación no justifica su incumplimiento a lo establecido en el artículo 7.3 del multicitado Reglamento.

Por otro lado, resulta evidente que las irregularidades observadas a la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática no se encuentran dentro de los casos de excepción sino que, como se desprende del Dictamen Consolidado, los pagos se refieren a gastos en Educación y Capacitación Política, por lo que es claro su incumplimiento a la normatividad de la materia.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como leve, en tanto que no tiene un efecto inmediato sobre la comprobación de los gastos. Sin embargo, sí puede tener efectos sobre la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos, pues la realización de pagos mediante cheque hace que la identidad de quien los realiza y los recibe estén claramente determinados, mientras que la realización de pagos en efectivo, sobre todo si se trata de sumas importantes, puede originar poca claridad, e incluso hacer que se confundan con recursos que no hubieren estado debidamente registrados en la contabilidad de una agrupación política. La norma transgredida pretende evitar precisamente que el efectivo circule profusamente en las operaciones de las agrupaciones y que dichas operaciones dejen huellas verificables e incontrovertibles que ofrezcan certeza del origen de los recursos, así como de la veracidad de lo informado.

Asimismo, se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: que no se puede presumir desviación de recursos; que la agrupación llevó un adecuado control de sus operaciones, en términos generales, que no ocultó información y es la primera vez que incurre en una irregularidad de estas características.

Por otra parte, en la determinación de la gravedad de la falta, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas y que, aun tratándose de una norma de carácter excepcional, la agrupación no fue capaz de cumplirla a cabalidad.

Adicionalmente ha de considerarse, para fijar la sanción, que el monto que rebasaba el límite de 100 días de salario mínimo y no fue pagado mediante cheque suma un total de $129,404.61.

Por otra parte, se tiene en cuenta que la Agrupación Política Red de Acción Democrática nunca ha sido sancionada por una falta similar. No obstante, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de irregularidades.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de trescientos veintiún días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

5.25. Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación

En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación no presentó en tiempo su Informe Anual.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 35, párrafo 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Consta en el Dictamen Consolidado que la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación hizo entrega el día 31 de mayo del año en curso, ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, de su Informe Anual de Ingresos Totales y Gastos Ordinarios correspondiente al ejercicio de 2000, en forma extemporánea.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación incumplió con lo establecido en los artículos 35, párrafo 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, que establecen que los Informes Anuales de las agrupaciones políticas nacionales

deberán ser presentados a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año de ejercicio que se reporta.

Como correctamente razonó la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, la agrupación política incumplió con lo establecido en las disposiciones aludidas, con la mera entrega tardía de su informe anual; pues su entrega, dentro de los términos y plazos establecidos por la propia ley, era una obligación que, al estar contenida en una disposición legal, debió haber cumplido sin ninguna excusa ni dilación.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues entregar fuera de término dicho informe retrasa su revisión, y violenta directamente lo establecido en la legislación electoral, en lo relativo a la rendición de cuentas de las agrupaciones políticas nacionales. En vista de lo anterior, la falta se califica como grave.

Además, se tiene en cuenta que el Informe fue presentado con diecisiete días de retraso. Asimismo, se tiene en cuenta que el cumplimiento a su obligación, en el término legal establecido, no era de suyo complicado.

Se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de ochocientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

5.26. Agrupación Política Nacional Unidad Nacional Lombardista

En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política no comprobó el origen de sus ingresos y el destino de sus egresos cada uno por un importe de $4'000,000.00.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafo 4, en relación con el 49, párrafo 2, 35, párrafo 11, 38, párrafo 1, inciso k) y 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 3.1, 7.1, 11.1, 12.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso d) y 269, párrafo 2, incisos a), b), c) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Durante la revisión del Informe Anual, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas localizó depósitos bancarios por un monto de 4,000,000.00 de pesos; dicho importe fue depositado y retirado el mismo día.

Según consta en el Dictamen Consolidado, el 21 de diciembre de 2000, en una cuenta bancaria de la agrupación se registraron 12 depósitos de dinero **en efectivo** por un total de 4,000,000.00 de pesos. Cinco de los depósitos sumaron, cada uno, 200,000.00 pesos; dos de los depósitos sumaron, cada uno, 300,000.00 pesos; uno fue de 400,000.00 pesos; uno fue de 450,000.00 pesos; dos de los depósitos sumaron, cada uno, 500,000.00 pesos; y finalmente, uno de los depósitos fue de 550,000.00 pesos. El mismo día, sin embargo, la agrupación retiró el total del dinero depositado, a través de la emisión de 4 cheques, cada uno por 1,000,000.00 de pesos (cheques 3301, 3303, 3304, 3305). Todos los cheques se expidieron a nombre de American Consulting Enterprises, S.A., de C.V.

Llamó la atención de la Comisión que montos tan importantes fuesen depositados **en efectivo**, amén de que de los movimientos aludidos no se desprendía en modo alguno cuál era el origen de los recursos obtenidos. Por oficio fechado el 6 de agosto de 2001, de número STCFRPAP/662/01, la Comisión de Fiscalización solicitó a la agrupación que aclarara el origen de los recursos aludidos. Posteriormente, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, la agrupación contestó lo siguiente:

> *"Con relación a los depósitos, nosotros tuvimos la necesidad de recurrir con gente que nos prestara, ya que teníamos gastos muy fuertes por concepto de proveedores, por tal motivo le solicitamos al Sr. Humberto Robledo Alvistegui que nos tramitara un crédito para poder comenzar a cubrir nuestros pasivos. Y así poder cubrir los trabajos que elaboraría American Consulting Enterprises, S.A. de C.V.,*
> *Pero en esos días nosotros consultamos con ustedes qué podíamos hacer con esos pasivos, ya que habíamos acordado con nuestros proveedores liquidarlos a más tardar el 30 de abril de 2001, y creíamos que en nuestros informes al 31 de diciembre de 2000 no debíamos traer pasivos, a lo cual nos contestaron que los pasivos los podíamos cubrir al siguiente ejercicio, por eso depositamos el préstamo, volviéndose una confusión ya que ya que dimos instrucciones de cancelar la operación por ese motivo se retiró y se volvió a depositar varias veces el mismo día.*
>
> *Ya solicitamos copia de los contratos cancelados*
>
> *Anexo:*
>
> *Copia del estado de cuenta donde aparecen los movimientos*
>
> *Copia de los cheques".*

Llama la atención de este Consejo General varios elementos de la respuesta de la agrupación. En primer lugar, está claro que el Sr. Humberto Robledo Alvistegui no sería quien prestaría dinero a la agrupación, sino que coadyuvaría con la agrupación en la tramitación de un crédito. Sin embargo, la agrupación no aclara –ni ofrece documentación al respecto- qué persona física o moral ofrecería el crédito a la agrupación, de modo que la autoridad tuviese certeza del origen de los recursos depositados en sus cuentas. Tampoco aclara la agrupación qué tipo de "trabajos" "elaboraría" en su beneficio American Consulting Enterprises. La agrupación no ofrece evidencia alguna del contrato mediante el cual obtiene en los hechos el préstamo aludido, ya que a juzgar por el conjunto de depósitos realizados, es obvio que el préstamo se concretó. Tampoco aclara la agrupación por qué, si canceló el préstamo que le había tramitado el Sr. Humberto Robledo Alvistegui, no devolvió el dinero al prestamista original (de identidad desconocida), sino que emitió los cheques a favor de la empresa proveedora de "trabajos" (American Consulting Enterprises) para cuyo financiamiento la agrupación decidió contratar una deuda. Es decir, según la agrupación canceló el préstamo que le fue concedido, pero en los hechos no devolvió el dinero a quien se lo prestó sino a una empresa que le proveería de determinados servicios. Por otro lado, la agrupación no aclara el monto por el cual se contrató el préstamo, y se limita a alegar que el dinero "se volvió a depositar varias veces el mismo día".

Ahora bien, a decir de los auditores de la Dirección de Análisis de Informes Anuales y de Campaña de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, a la agrupación efectivamente se le dijo, como resultado de una consulta verbal, que en cualquier momento podía contratar pasivos, y que podía liquidarlos en cualquier momento, de cualquier ejercicio, como es de toda obviedad. La agrupación sin embargo alega, en un lenguaje especialmente impreciso y vago: "creíamos que en nuestros informes al 31 de diciembre de 2000 no debíamos tener pasivos...", creencia a todas luces equivocada. Después, la agrupación dice: "...a lo cual nos contestaron que los pasivos los podíamos cubrir al siguiente ejercicio..." cosa a todas luces correcta. Sin embargo, la agrupación dice a continuación: "...por eso depositamos el préstamo, volviéndose una confusión ya que dimos instrucciones de cancelar la operación por ese motivo se retiró y se volvió a depositar varias veces el mismo día". Es llamativo que repentinamente surja en la agrupación una "confusión", sin que, por otro lado, tal "confusión" se explique. La agrupación no aclara cuál fue la fuente de la confusión, ni por qué se dio la instrucción de cancelar la operación. Ciertamente, de la instrucción de cancelar la operación, puede derivarse, lógicamente, el retiro del dinero de la cuenta bancaria. Pero, la agrupación no explica por qué "se volvió a depositar varias veces el mismo día" ni cuál fue el monto que se

depositó “varias veces el mismo día”. La agrupación tampoco explica por qué salieron los cheques a nombre de un proveedor de servicios y no de quien ofreció en su momento el préstamo.

Es en verdad difícil pensar que la respuesta de la agrupación pudo ser más confusa. La agrupación no lograba ofrecer evidencia plena ni del origen ni del destino de recursos por un monto de 4,000,000.00 millones de pesos.

Con todo, y sorprendentemente, la agrupación, de modo totalmente extemporáneo, concretamente el día 22 de agosto de 2001, presenta un nuevo oficio en alcance al de fecha 20 de agosto de 2001. Ahí alega
lo siguiente:

> *“... como complemento del oficio 662 donde me solicita demuestre la procedencia de los ingresos, manifesté que solicitamos un crédito para poder cubrir nuestros compromisos, pero cancelamos la operación. Ya que al consultar a este honorable instituto que tenía muchos pasivos, me dijo que si los podía traer siempre y cuando se cubrieran en el siguiente ejercicio. Ese dinero lo necesitábamos para cubrir una parte del contrato con un proveedor, contrato que todavía no se firmaba, por tal motivo teníamos listos los cheques en garantía, y el cheque con que le íbamos a cubrir el anticipo, pero dicha operación no se llevó a cabo, y al cancelar las operaciones cometimos el error de depositar el préstamos y sacarlo.*
>
> *Anexo*
>
> *Contrato de mutuo por el préstamo obtenido el cual se canceló”.*

Este Consejo General tiene la convicción de que con esta respuesta, que se agrega al galimatías de la primera, la agrupación no produce sino más confusión y oscuridad. En primer lugar, no existe ninguna conexión lógica entre la decisión por parte de la agrupación de cancelar un pasivo contratado y el hecho de que verbalmente se le dijera, correctamente, que el pasivo podría ser contratado en un ejercicio, siempre y cuando se liquidara en el siguiente. Es decir, del hecho de que un pasivo pueda ser contratado en un ejercicio para ser pagado en el siguiente ejercicio no se deriva que el pasivo deba ser cancelado. No tiene ningún sentido lógico alegar semejante disparate. Tal pareciera, posteriormente, que –consciente de que se ha contradicho en su primera respuesta al alegar que canceló un pasivo pagándole al proveedor, lo cual es otro absurdo- la agrupación decide argumentar ahora que los cheques expedidos estaban “en garantía”. Alega después la agrupación que con “...el cheque [en realidad no era uno sino cuatro cheques] con que le íbamos a cubrir el anticipo, pero dicha operación no se llevó a cabo...”. Nuevamente, la agrupación alega sin sentido lógico alguno y, peor aún, lo hace a contrapelo de la evidencia proveída por ella misma: los cuatro cheques expedidos a nombre de American Consulting Enterprises fueron cobrados, según puede verse con toda nitidez en el estado de cuenta ofrecido como prueba por la agrupación. Peor aún: del análisis de las pólizas respectivas se desprende con toda nitidez que la agrupación no registró un cargo a acreedores con abono a bancos, para después cancelar el préstamo con un cargo a bancos con abono a proveedores; por el contrario, la agrupación cargó y abonó a la misma cuenta de bancos, con lo que no dejó huella en los registros contables de que un pasivo efectivamente adquirido (y tan fue adquirido como que la agrupación depositó el monto del hipotético préstamos en su cuenta bancaria) fue después cancelado. Todo el movimiento bancario no se tradujo efectivamente en registros contables que cabalmente se hicieran cargo de las circunstancias de modo en que, según se alega, se dieron los hechos.

Por otro lado, alega la agrupación que “al cancelar las operaciones cometimos el error de depositar el préstamo y sacarlo”. ¿Cuál fue exactamente el “error” al que alude la agrupación? ¿Cuál fue el monto del error? Del análisis del estado de cuenta bancario presentado por la agrupación, se desprende con toda nitidez que el banco revierte un depósito por 1,000,000.00 de pesos, lo cual efectivamente pudo deberse a un error (“REV DEPOSITO / REV CHEQUE DEPOSITADO”). Pero ese alegato y su correspondiente prueba no tienen nada que ver con los hechos que motivaron la observación que originalmente se le hizo a la agrupación, ya que en el mismo estado de cuenta puede verse que, por otro lado, hay depósitos por 4,000,000.00 de pesos y retiros por 4,000,000.00 de pesos. Son esos 4,000,000.00 de pesos que entran y salen el mismo día los que motivaron la observación original de la Comisión de Fiscalización, y no el millón de pesos cuyo cargo y abono revirtió el propio banco como resultado, puede entenderse así, de un error.

Finalmente, el Dictamen Consolidado establece que efectivamente la agrupación ofreció junto con su escrito del 22 de agosto de 2001, un contrato de mutuo firmado por el "Sr. Humberto Robledo Albiztegui" y "el Ing. David Sides Fuentes en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Nacional Unidad Nacional Lombardista". Efectivamente, en el contrato puede verse que mutuante y mutuario acuerdan celebrar un contrato por 1,000,000.00 de pesos, precisamente el 21 de diciembre de 2000. Del análisis efectuado por la Comisión de Fiscalización se desprende que:

a) El contrato ampara un monto de 1,000,000.00 de pesos, y el problema observado a la agrupación fue de 4,000,000.00 de pesos.

b) Ahora el Sr. Robledo no es quien tramita un crédito para la agrupación, sino el prestamista de la agrupación.

c) El contrato presentado en modo alguno explica por qué la agrupación expidió cheques a nombre de American Consulting Enterprise.

El artículo 269, párrafo 2, incisos a), b), c) y e) del mismo ordenamiento establecen que se sancionará a los partidos y agrupaciones cuando incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables del Código electoral federal, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General, así como cuando no presenten los informes anuales en los términos y plazos previstos en la misma ley y cuando acepten aportaciones y donativos en contravención a lo establecido en el artículo 49, párrafos 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso e) de su primer párrafo, es decir, la sanción consistente en la cancelación del registro como agrupación política nacional, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática, y en la especie esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

Los párrafos 3 y 4 del artículo 269, en relación con el párrafo 2 del artículo 67 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la sanción consistente en la pérdida de registro sólo puede imponerse cuando la irregularidad sea grave o sistemática, mientras que el párrafo 4 del citado artículo y el párrafo 2 del artículo 67 expresamente regula lo concerniente a la pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales.

Este Consejo General llega a la conclusión, inequívoca, de que la agrupación política nacional efectivamente no ha podido dar cuentas claras ni del origen de recursos por 4,000,000.00 de pesos, ni del destino de los mismos; y de que se puede presumir dolo, mala fe y la intención de ocultar. Por lo anterior, la falta queda acreditada, se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, amerita una sanción.

El Consejo General llega a la conclusión de que con la irregularidad en estudio, no le ha sido posible a esta autoridad comprobar la veracidad de lo reportado en el Informe Anual de la agrupación política nacional denominada Unidad Nacional Lombardista.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que debe imponer a la agrupación política nacional denominada Unidad Nacional Lombardista la máxima sanción de que puede ser objeto de conformidad con el artículo 269, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la cancelación de su registro como agrupación política nacional.

Adicionalmente, este Consejo General ordena al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral que dé cuenta a la Procuraduría General de la República del asunto que por esta vía se ha resuelto, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente.

5.27. Agrupación Política Nacional Unión de la Clase Trabajadora

En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *El partido político no presentó documentación comprobatoria de egresos en las cuenta de Tareas Editoriales por un monto total de $303,000.00.*

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7.1, y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/644/01 de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Unión de la Clase Trabajadora que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al revisar la cuenta de Tareas Editoriales se localizaron pagos a diversos proveedores, que se efectuaron mediante cheques a nombre de terceras personas, por un monto total de $303,000.00.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 20 de agosto de 2001, lo siguiente:

"Me permito indicarle el procedimiento que se siguió para el pago de los acreedores en cuestión.

A) Se provisiona el gasto incurrido en póliza de diario, cargando el gasto respectivo y abonándole a acreedores.

B) Se expide un solo cheque para varios de los acreedores cargando a caja general y abonando a bancos.

C) Posteriormente se les paga a los acreedores a cuenta de los saldos más antiguos, haciéndoles firmar un recibo por la cantidad que cobraban, su aplicación contable es, cargo al acreedor correspondiente con abono a caja general.

Esta práctica se realizaba con el propósito de no distraer las actividades de tareas editoriales, investigación y capacitación que en gran parte están en el interior del país, así las entregas del efectivo se les hacía al momento de que los acreedores llegaban al CEN de la agrupación".

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

De la verificación a la documentación proporcionada por la agrupación y derivado de su respuesta, se determinó que los cheques expedidos corresponden al manejo de un fondo fijo de caja, y que los cheques no fueron emitidos a favor de quien expidió el comprobante, incumpliendo con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a las Agrupaciones Políticas.

Por lo antes expuesto, la observación se considera no subsanada, debido a que incumplió lo establecido en los mencionados artículos del Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas Nacionales.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7.1 y 14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral establece que los partidos políticos nacionales y las coaliciones políticas están obligados a entregar a la Comisión de Fiscalización la documentación que le solicite respecto de sus ingresos y egresos.

Por otra parte, el artículo 7.1 del Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas señala que los egresos deberán registrarse contablemente **y estar soportados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago**. Dicha documentación

deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables. Adicionalmente, el artículo 14.2 del citado Reglamento establece que las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

En el caso particular, la agrupación no presentó la documentación comprobatoria que le fue solicitada expresamente por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en ejercicio de sus facultades. Así pues, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en sus informes de campaña. En vista de ello, la falta se acredita, se califica como grave y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Lo argumentado por la agrupación no puede considerarse suficiente para subsanar la irregularidad detectada, toda vez que el nombre consignado en el cheque y el consignado la documentación comprobatoria del gasto, no coincide, por lo que el egreso no puede tenerse como comprobado, puesto que el cheque fue expedido a nombre de una tercera persona que no es el proveedor que expidió la documentación que ampara la erogación.

Para la autoridad electoral la documentación comprobatoria de un egreso debe corresponder precisamente al gasto en que incurrió la agrupación y debe ser pagado a la persona que expidió el comprobante respectivo. Esto es, esta autoridad no puede tener como comprobado un egreso cuando el nombre consignado en el cheque y en la documentación comprobatoria del gasto no coinciden, por lo que los gastos en los que incurrió la agrupación por un monto total de $303,000.00 no fueron comprobados ante esta autoridad.

La normatividad aplicable es clara al establecer que es obligación de las agrupaciones políticas, contar en todo momento con la documentación que compruebe de manera adecuada los gastos en que incurrió, por lo que nada le exime a la agrupación de la presentación de la citada documentación al momento de la presentación de su informe anual, o bien, cuando la Comisión de Fiscalización se los solicitara.

La autoridad electoral considera trascendente que una agrupación, por las razones que sean, no le presente la documentación comprobatoria del gasto o del ingreso que ésta solicite, en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta puede tener efectos sobre la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

Así pues, la omisión se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su informe anual. En vista de ello, la falta se califica como grave y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Al respecto, se ha de tener en cuenta que la no entrega de la documentación comprobatoria se debe a una mala administración, y no a una intención dolosa por parte de la agrupación.

También debe tenerse en cuenta que el monto total que la coalición no comprobó es de $303,000.00.

Además, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Unión de la Clase Trabajadora una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de tres mil cuatro días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

5.28. Agrupación Política Nacional Unión Nacional Sinarquista

a) En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

> *La agrupación política no depositó en la cuenta bancaria "CB-APN" de la agrupación, recursos por un monto total de $68,779.24, provenientes de aportaciones en efectivo, colectas y ventas editoriales.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de*

cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/661/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional Unión Nacional Sinarquista que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión documental al rubro de ingresos, se localizaron ingresos por diversos conceptos, que no fueron depositados en la cuenta bancaria "CB-APN" de la agrupación, por un monto total de $68,779.24.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

De los ingresos obtenidos por el financiamiento público, a través del Instituto Federal Electoral, estos si cumplen con la normatividad del reglamento, no así los del privado, consistente en colectas, aguinaldos, venta de editoriales y rentas, cantidades que no permiten llevar un control de depósitos y retiros bancarios por lo raquítico del recurso; cuando se vive al día, es difícil llevar este tipo de control, uno busca la manera del cómo salir adelante, esto sin contravenir el espíritu de nuestros estatutos como tampoco el del reglamento de fiscalización, toda vez que se informa el monto de los ingresos de quien proviene, como de los egresos y hacia donde se destinan...

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

La respuesta de la agrupación se considera insatisfactoria, en virtud de que la norma es clara al establecer en el artículo 1.2 del Reglamento, que todos los ingresos en efectivo que reciban las agrupaciones deberán depositarse en cuentas bancarias. En consecuencia la observación no quedó subsanada al incumplir lo establecido en el citado artículo.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Unión Nacional Sinarquista incumplió con lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al no depositar en una cuenta "CB-APN" todos los ingresos recibidos de aportaciones en efectivo, colectas y ventas editoriales.

El artículo 1.2 del Reglamento aplicable establece que **todos los ingresos** en efectivo que reciban las agrupaciones políticas deben depositarse en cuentas bancarias a nombre de la agrupación política. La finalidad de esta norma es ofrecer a la autoridad electoral un mecanismo efectivo de seguimiento y compulsa de los ingresos que reciban y los egresos que realicen, toda vez que las agrupaciones políticas no sólo se encuentran obligadas a controlar sus ingresos y egresos en cuentas bancarias, sino que también deben entregar a esta autoridad los estados de cuentas respectivos, los cuales permiten verificar la veracidad de lo reportado por las agrupaciones en sus respectivos informes anuales.

Como se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización, la agrupación política no depositó en alguna cuenta bancaria una aportación en efectivo incumpliendo, por tanto, lo dispuesto en el artículo 1.2 en comento. Incluso, la propia agrupación, en su escrito de respuesta, acepta expresamente haber actualizado la irregularidad que por esta vía se sanciona, cuando afirma: "de **los ingresos obtenidos por el financiamiento público, a través del Instituto Federal Electoral, éstos si cumplen con la normatividad del reglamento, no así los del privado**, consistente en colectas, aguinaldos, venta de editoriales y rentas, cantidades que no permiten llevar un control de depósitos y retiros bancarios por lo raquítico del recurso; cuando se vive al día, es difícil llevar este tipo de control, uno busca la manera del cómo salir adelante".

Lo alegado por la agrupación no resulta suficiente para considerar subsanada la irregularidad, pues es claro que el cumplimiento de la normativa aplicable de ninguna manera se encuentra condicionado a circunstancias particulares de hecho, como eventualmente puede ser la dificultad para

controlar recursos de una cuantía menor a través de cuentas bancarias. La agrupación política conocía de antemano las obligaciones a las que se encuentra sujeta, obligaciones que, se insiste, no dependen del monto de los recursos involucrados. No está de más señalar que el artículo 1.2 en comento establece que todos los ingresos deben ser depositados en cuentas bancarias, lo cual, por obvias razones, no admite excepción alguna.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues la utilización de cuentas bancarias resulta indispensable para poder emprender una labor de verificación de las cifras contenidas en dicho informe, proceder a su compulsa con la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos y con los movimientos bancarias relacionados.

En vista de lo anterior, la falta se califica como de mediana gravedad, tomando en cuenta que el monto implicado asciende a la cantidad de $68,779.24 y el hecho de que la agrupación política aceptó expresamente haber cometido la irregularidad.

Asimismo, esta autoridad toma en cuenta que no es posible presumir dolo en la realización de la conducta antijurídica ni la intención de ocultar información, y que es la primera vez que esta agrupación es sancionada por no depositar en cuentas bancarias todos sus ingresos.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Unión Nacional Sinarquista una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de ochocientos cincuenta y dos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

> *La agrupación política presentó documentación comprobatoria de egresos a nombre de terceras personas, por un monto total de $14,383.74, en el rubro de Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes, subcuenta Envíos por Correo.*
>
> *Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el STCFRPAP/661/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó la Agrupación Política Asamblea Nacional Unión Nacional Sinarquista que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que, al efectuar la revisión de los Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes, subcuentas Envíos por Correo, Teléfonos de México y Luz y Fuerza del Centro se localizó documentación comprobatoria a nombre de terceras personas por un monto total de $52,763.74, como se describe a continuación:

SUBCUENTA	REFERENCIA	A NOMBRE DE	IMPORTE
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PE-52481/01-00	Bernabé Herrera Sotero	$1,986.00
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PE-52504-04/00	Bernabé Herrera Sotero	1,364.00
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PE-52573/07-00	Bernabé Herrera Sotero	1,453.00
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PE-52612/08-00	Bernabé Herrera Sotero	1,575.00
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PE-52649/09-00	Bernabé Herrera Sotero	1,634.00

Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PE-52690/10-00	Bernabé Herrera Sotero	1,447.00
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PE-52710/11-00	Bernabé Herrera Sotero	1,281.00
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PI-01/02-00	Bernabé Herrera Sotero	707.00
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PI-01/03-00	Bernabé Herrera Sotero	1,420.00
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PI-01/05-00	Bernabé Herrera Sotero	1,496.00
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	PI-01/06-00	Bernabé Herrera Sotero	1,637.00
Luz y Fuerza del Centro	PE-52498/04-00	Ramón Soto F.	2,534.00
Luz y Fuerza del Centro	PE-52599/08-00	Ramón Soto F.	1,256.00
Luz y Fuerza del Centro	PE-52654/10-00	Ramón Soto F.	2,199.00
Luz y Fuerza del Centro	PE-65278/12-00	Ramón Soto F.	1,602.00
Envíos por Correo	PE-498/04-00	Centro de Información Social	1,874.97
Envíos por Correo	PE-52552/06-00	Centro de Información Social	2,862.83
Envíos por Correo	PE-52871/12-00	Centro de Información Social	1,844.68
Envíos por Correo	PI-01/05-00	Centro de Información Social	1,652.47
Envíos por Correo	PI-01/07-00	Centro de Información Social	2,128.70
Envíos por Correo	PI-01/09-00	Centro de Información Social	1,812.69
Envíos por Correo	PI-01/11-00	Centro de Información Social	2,207.40
Impuesto Predial	PE-10336/06-00	Centro de Información Social	14,789.00
Total			**$52,763.74**

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 20 de agosto de 2001, lo siguiente:

> "...al tener nosotros el inmueble en comodato documento que presentamos ante el IFE, el día en que solicitamos nuestro registro como Agrupación Política, nos permite señalar que los CC. Bernabé Herrera Sotero y Ramón Soto F., ya estaban dados de alta ante Teléfonos de México, S.A. de C.V., así como la comisión de Luz y Fuerza del Centro por las administraciones anteriores del Centro de Información Social, A.C., y que todavía siguen dados de alta en la actualidad...
>
> *En lo que se refiere al impuesto predial; al no pagarle una renta Al Centro de Información Social, A.C., existe el requisito de por lo menos pagar el impuesto predial entre otros gastos a nombre del centro, acto que nos parece justo dentro de esa compensación...".*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

> *La Comisión de Fiscalización considera aceptables las aclaraciones presentadas por la agrupación, quedando subsanada la observación por un importe de $38,380.00.*

Adicionalmente, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha de 20 de agosto de 2001, lo siguiente:

> *"La Unión Nacional Sinarquista(...)al no contar con reconocimiento jurídico, ésta, en común acuerdo ha utilizado el registro Del Centro de Información Social, A.C., y es el hecho que hoy se relaciona con nuestros envíos de nuestras revistas Orden, y la Teórica Trimestral, a los diferentes comités regionales y municipales para su divulgación, a través del Servicio Postal Mexicano..."*

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:

La respuesta de la agrupación no se considera satisfactoria, en virtud de que la norma es clara al establecer en el artículo 7.1 que los egresos deberán estar soportados con documentación a nombre de la agrupación política. En consecuencia la observación no quedó subsanada por un importe de $14,383.74, como se detalla a continuación:

SUBCUENTA	***REFERENCIA***	***A NOMBRE DE***	***IMPORTE***
Envíos por Correo	*PE-498/04-00*	*Centro de Información Social*	*$1,874.97*
Envíos por Correo	*PE-52552/06-00*	*Centro de Información Social*	*2,862.83*
Envíos por Correo	*PE-52871/12-00*	*Centro de Información Social*	*1,844.68*
Envíos por Correo	*PI-01/05-00*	*Centro de Información Social*	*1,652.47*
Envíos por Correo	*PI-01/07-00*	*Centro de información Social*	*2,128.70*
Envíos por Correo	*PI-01/09-00*	*Centro de Información Social*	*1,812.69*
Envíos por Correo	*PI-01/11-00*	*Centro de Información Social*	*2,207.40*
Total			***$14,383.74***

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional Unión Nacional Sinarquista incumplió con lo establecido en el artículo 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.

El artículo 7.1 del Reglamento aplicable dispone que los egresos deberán estar comprobados con la documentación que expida a nombre de la agrupación política la persona a quien se efectuó el pago.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido establecidos por las normas aplicables, o bien que se justifique por las circunstancias particulares.

En el caso, la agrupación presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación que cumpla con los requisitos exigidos.

En cuanto a lo alegado por la agrupación, debe señalarse que la documentación comprobatoria de sus egresos debe de, en todos los casos, ser expedida a nombre de la agrupación política y no de un tercero, tal y como lo establece el Reglamento aplicable a las agrupaciones políticas. Un gasto soportado con documentación a nombre de terceras personas no puede tenerse como efectivamente comprobado.

Los documentos que exhiba una agrupación política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos establecidos. En este caso, la documentación requerida debía estar a nombre de la agrupación política, pues en las disposiciones aplicables no se admiten la presentación de documentos a nombre de terceros como probatorios de los egresos de las agrupaciones políticas.

Por todo lo anterior, los documentos presentados son ineficaces para comprobar el egreso realizado por la agrupación política.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues al presentarse documentación que no está a nombre de la agrupación política, no se puede tener certeza de que los egresos reportados se hayan efectivamente verificado en la forma y términos contenidos en la misma contabilidad de la agrupación y, en última instancia, en el informe presentado. Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Sin embargo, se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: que la agrupación presentó algún documento de soporte, aunque éste no reúna los requisitos exigidos; que no se puede presumir desviación de recursos; que la agrupación no ocultó información; y que la irregularidad involucra recursos
por $14,383.74.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional Unión Nacional Sinarquista, una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de ciento siete de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción II, último párrafo y III, segundo y octavo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., 34 párrafo 4, 35 párrafos 10, 11, 12 y 13, 38 párrafo 1, inciso k), 39, 49 párrafo 2, 49-A, 49-B párrafo 2, inciso i), 67 párrafo 2, 73, 82 párrafo 1, incisos h) y w), 269 párrafo 1, párrafo 2, incisos a), b) c) y e), y párrafos 3 y 4 y 270 párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.1 de la presente resolución, se imponen a la Agrupación Política Frente Liberal Mexicano, la sanción consistente en la **cancelación de su registro** como Agrupación Política Nacional**.**

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.2 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Coordinadora Ciudadana**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de **trescientos cuarenta y cuatro días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $13,879.00 (trece mil ochocientos setenta y nueve pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **cincuenta días de salario mínimo general vigente** para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

c) Una multa de **trescientos días de salario mínimo general vigente** para el Distrito Federal, equivalente a $12,105.00 (doce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.3 de la presente resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Diana Laura**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de **quinientos días de salario mínimo general** vigente para el Distrito Federal, equivalente a $20,175.00 (veinte mil ciento setenta y cinco pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **cinco mil días de salario mínimo general** vigente para el Distrito Federal, equivalente a $201,750.00 (doscientos un mil setecientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.4 de la presente resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Causa Ciudadana**, una sanción consistente en una multa de ciento cuarenta y ocho días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $5,966.00 (cinco mil novecientos sesenta y seis pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.5 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Convergencia Socialista**, una sanción consistente en una multa de **ciento sesenta y un días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $6,500.00 (seis mil quinientos pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

SEXTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.6 de la presente resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Acción Republicana**, una sanción consistente en una multa de **seiscientos ochenta y nueve días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $27,785.00 (veintisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

SEPTIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.7 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Agrupación Política Campesina**, una sanción consistente en una multa de **cincuenta días de salario mínimo** vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

OCTAVO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.8 de la presente Resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de **cincuenta días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que

se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **trescientos cincuenta días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $14,122.00 (catorce mil ciento veintidós pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

NOVENO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.9 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Campesinos de México por la Democracia**, la sanción consistente en la **supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda por el periodo de un año**, que deberá ser aplicada en la asignación inmediata posterior a partir que esta Resolución haya quedado firme.

DECIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.10 de la presente Resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Centro Político Mexicano**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de **cincuenta días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **ciento noventa y dos días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $7,762.00 (siete mil setecientos sesenta y dos pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

DECIMOPRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.11 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Expresión Ciudadana**, la sanción consistente en la **cancelación de su registro** como Agrupación Política Nacional.

DECIMOSEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.12 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas**, una sanción consistente en una multa de **un mil ochocientos cincuenta días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $74,647.00 (setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

DECIMOTERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.13 de la presente Resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Iniciativa XXI, Asociación Civil**, una sanción consistente en una multa de **cincuenta y cuatro días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,195.00 (dos mil ciento noventa y cinco pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

DECIMOCUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.14 de la presente Resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de ciento **cincuenta y un días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $6,084.00 (seis mil ochenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **cuatrocientos días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $16,140.00 (dieciséis mil ciento cuarenta pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

DECIMOQUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.15 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Movimiento de Acción Republicana** una sanción consistente en una multa de **cincuenta días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

DECIMOSEXTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.16 de la presente Resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Movimiento Mexicano El Barzón**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de **ciento dieciocho días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $4,778.00 (cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **cincuenta días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

DECIMOSEPTIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.17 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Movimiento Nacional de Organización Ciudadana** la sanción consistente en la **cancelación de su registro** como Agrupación Política Nacional.

DECIMOCTAVO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.18 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Movimiento Social de los Trabajadores** la sanción consistente en la **cancelación de su registro** como Agrupación Política Nacional.

DECIMONOVENO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.19 de la presente Resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Mujeres en Lucha por la Democracia**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de **cincuenta y tres días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,158.00 (dos mil ciento cincuenta y ocho pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **cincuenta días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

c) Una multa de **cincuenta días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

VIGESIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.20 de la presente Resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Mujeres y Punto**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de **sesenta y un días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,458.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **cincuenta días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

VIGESIMOPRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.21 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Organización México Nuevo** una sanción consistente en una multa de **cincuenta días de salario mínimo** vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

VIGESIMOSEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.22 de la presente Resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Plataforma Cuatro, Asociación Civil**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de setecientos **cuarenta y tres días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $30,000.00 (treinta mil pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **ochenta y nueve días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $3,577.00 (tres mil quinientos setenta y siete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

VIGESIMOTERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.23 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Praxis Democrática, Asociación Civil**, una sanción consistente en una multa de **cincuenta días de salario mínimo** vigente para el Distrito Federal, equivalente a $2,017.00 (dos mil diecisiete pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser

pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

VIGESIMOCUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.24 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Red de Acción Democrática**, una sanción consistente en una multa de **trescientos veintiún días de salario** mínimo vigente para el Distrito Federal, equivalente a $12,940.00 (doce mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

VIGESIMOQUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.25 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Sentimientos de la Nación**, una sanción consistente en una multa de **ochocientos días de salario mínimo** vigente para el Distrito Federal, equivalente a $32,280.00 (treinta y dos mil doscientos ochenta pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

VIGESIMOSEXTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.26 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Unidad Nacional Lombardista** la sanción consistente en la **cancelación de su registro** como Agrupación Política Nacional.

VIGESIMOSEPTIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.27 de la presente Resolución, se impone a la Agrupación Política Nacional **Unión de la Clase Trabajadora**, una sanción consistente en una multa de **tres mil cuatro días de salario mínimo** vigente para el Distrito Federal, equivalente a $121,200.00 (ciento veintiún mil doscientos pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

VIGESIMOCTAVO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.27 de la presente Resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional **Unión Nacional Sinarquista**, las siguientes sanciones:

a) Una multa de **ochocientos cincuenta y dos días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $34,390.00 (treinta y cuatro mil trescientos noventa pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

b) Una multa de **ciento siete días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $4,315.00 (cuatro mil trescientos quince pesos, 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

VIGESIMONOVENO.- En razón de lo establecido en el considerando 5.3, inciso b) de la presente resolución, se instruye a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas para que realice las verificaciones adicionales que determine, en ejercicio de sus atribuciones, respecto de los pagos por concepto de reconocimientos por actividades políticas a favor de la campaña del candidato presidencial de la coalición Alianza por el Cambio, durante el proceso electoral federal del año 2000, realizadas por la Agrupación Política Nacional Diana Laura.

TRIGESIMO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución a las Agrupaciones Políticas Nacionales Coordinadora Ciudadana, Diana Laura, Causa Ciudadana, Convergencia Socialista, Acción Republicana, Agrupación Política Campesina, Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, Campesinos de México por la Democracia, Centro Político Mexicano, Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Iniciativa XXI Asociación Civil, Instituto para el

Desarrollo Equitativo y Democrático, Movimiento de Acción Republicana, Movimiento Mexicano El Barzón, Mujeres en Lucha por la Democracia A.C., Mujeres y Punto Asociación Civil, Organización México Nuevo, Plataforma Cuatro, Praxis Democrática, Red de Acción Democrática, Sentimientos de la Nación, Unión de la Clase Trabajadora, Unión Nacional Sinarquista, así como a las asociaciones de ciudadanos Frente Liberal Mexicano Siglo XXI, Expresión Ciudadana, Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, Movimiento Social de los Trabajadores y Unidad Nacional Lombardista.

TRIGESIMOPRIMERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral para que dentro de los quince días siguientes a aquel en el que concluya el plazo para la interposición de los recursos correspondientes en contra del Dictamen Consolidado relativo a los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes a 2000, y de esta resolución, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o en caso de que se presenten dichos recursos, dentro de los quince días siguientes a aquel en el que sean notificadas las sentencias que los resolvieren, remita dicho Dictamen y la presente Resolución para su publicación al **Diario Oficial de la Federación**, junto con las sentencias recaídas a dichos recursos, y establezca los mecanismos para la difusión pública del Dictamen y de la presente Resolución.

La presente resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 20 de septiembre de 2001.- El Consejero Presidente del Consejo General, **José Woldenberg Karakowsky**.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, **Fernando Zertuche Muñoz**.- Rúbrica.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

ESTATUTO Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos.

ESTATUTO ORGANICO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.

La H. Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 15 y 58, fracción I y VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1, 2, 6, fracciones XV y XVIII y 9, fracciones I, XIII y XVII, así como el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y considerando:

Que el H. Congreso de la Unión mediante Decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 5 de junio de 2002, expidió la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mismas que entraron en vigor a partir del 6 de junio del mismo año, de igual forma publicó en el mismo medio, con fecha 2 de julio del mismo año, una fe de erratas respecto del citado Decreto;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece que México requiere formar profesionistas, especialistas e investigadores capaces de crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos que beneficien a la sociedad en su conjunto;

Que la Ciencia y la Tecnología son herramientas indispensables en la construcción de sociedades modernas e incluyentes. El fortalecimiento de la investigación científica y la innovación tecnológica son tareas imprescindibles para apoyar el desarrollo del país y para competir en un entorno cada vez más dominado por el conocimiento y la información, siendo necesario utilizar el acervo de conocimientos y personal altamente calificado, para orientarlo a la solución de los problemas que nuestra población enfrenta;

Que es propósito del Ejecutivo Federal impulsar el campo de la ciencia aplicada y del desarrollo tecnológico para asociarlo cada vez más a las necesidades de la empresa, de la sociedad mexicana y de la vida diaria del país;

Que el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (PECYT), presentado por el Ejecutivo Federal el 30 de octubre de 2001 y refrendado por el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en su Sesión celebrada el 6 de agosto de 2002, tiene como propósitos fundamentales, el establecimiento de una política de estado en materia de ciencia y tecnología, que permita incrementar la capacidad científica y tecnológica del país, así como elevar la competitividad y la innovación de las empresas;

Que las líneas de acción determinadas en el Marco Jurídico y Normativo, otorgan elementos de solidez al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, generando un proyecto sustentable en las Areas de Desarrollo Científico y Tecnológico, impulsando la descentralización, ampliando la infraestructura

científica y tecnológica nacional, fortaleciendo la cooperación internacional en ciencia y tecnología y fomentando la formación de recursos humanos de alto nivel, todo ello encaminado al desarrollo integral del país y al manejo eficiente de los recursos destinados a esa función;

Que la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, establecen un esquema que ubica al (CONACYT) en la realización de actividades en su carácter de entidad no sectorizada, al igual que le otorgan facultades de Coordinación Sectorial respecto de los Centros Públicos de Investigación, bajo el sustento de un Ramo Presupuestal en Ciencia y Tecnología;

Que la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Ingresos de la Federación, confiere al CONACYT atribuciones en materia de Estímulos Fiscales relacionados con la investigación y el desarrollo tecnológico;

Por lo antes expuesto y con la fundamentación y motivación presentada, la H. Junta de Gobierno del CONACYT ha tenido a bien, expedir el:

ESTATUTO ORGANICO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es un Organismo Descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Artículo 2.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene por objeto, ser la Entidad Asesora del Ejecutivo Federal y Especializada, para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, lo cual realizará a través de los Organos Regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el presente Estatuto.

Artículo 3.- Para llevar a cabo su objeto, el CONACYT contará con las siguientes atribuciones y facultades:

I. Coordinar la formulación y propuesta de políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología;

II. Coordinar la formulación e integración del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, con base en las propuestas que presenten las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal y las Instituciones integrantes del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, al igual que coordinar su ejecución y la evaluación de los resultados de su instrumentación;

III. Asesorar en materia de ciencia y tecnología al Ejecutivo Federal, y a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal, así como a los Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios y Organismos de los Sectores Social y Privado que lo soliciten;

IV. Coordinar el proceso de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto en ciencia y tecnología y emitir los lineamientos para el ejercicio adecuado del mismo en estas materias;

V. Promover y fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, apoyando con los instrumentos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la investigación científica de calidad, la innovación y el desarrollo tecnológico de las Empresas e Instituciones y el impulso para la formación de recursos humanos de alto nivel;

VI. En cuanto a los programas institucionales, definir conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los lineamientos para Unidades de Medida y definición de metas que se utilizarán en la elaboración de éstos, además de fijar las políticas de acción, cuidando que los programas institucionales guarden congruencia intrasectorial e intersectorial conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al PECYT;

VII. Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a los Centros agrupados en su Sector, así como establecer lineamientos para formular

anteproyectos de presupuesto, vigilando que las Entidades sujetas a su coordinación, se ajusten a sus calendarios financieros y a los convenios de desempeño que para el efecto se hayan suscrito;

VIII. Validar y aprobar los Programas Institucionales de las Entidades Paraestatales de su Sector y someter a consideración del Presidente de la República, a través del Director General los Programas Sectoriales;

IX. Establecer políticas de desarrollo para las Entidades de su Sector, así como emitir las Reglas de Operación para la aplicación de los recursos públicos de los programas establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios correspondientes;

X. Aprobar a través de la Junta de Gobierno y remitir por conducto del área presupuestal la información para la formulación de la Cuenta Pública, vigilando que las transferencias no devengadas se reintegren a la Tesorería de la Federación;

XI. Proponer por conducto del Director General al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico las prioridades, los lineamientos programáticos y los criterios de asignación del gasto para ciencia y tecnología que deberán tomar en cuenta las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal, en sus anteproyectos de programación y presupuesto, realizando conjuntamente con la SHCP la revisión y análisis integral de los anteproyectos;

XII. Conducirá y operará a través de la Dirección Adjunta de Ciencia, el Sistema Nacional de Investigadores, estableciendo sus objetivos, funciones y forma de organización dentro de las Reglas de Operación y la reglamentación correspondiente;

XIII. Proponer mediante instrumentos o definición de políticas ante las autoridades competentes las medidas de apoyo necesarias a la ciencia y a la tecnología por parte de la Administración Pública Federal, relacionadas con estímulos fiscales, financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior y de propiedad intelectual, entre otros;

XIV. Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno la creación, transformación, disolución o extinción de los Centros Públicos de Investigación, con base en criterios de oportunidad de desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades, en un Sistema de Evaluación de Calidad y Productividad Institucional, contando para ello con la opinión que al efecto proporcione el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la SHCP para efectos presupuestales, así como emitir a través del Director General las resoluciones que determinen a una Entidad Paraestatal, su calidad de Centro Público de Investigación;

XV. Conducir y operar el Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica;

XVI. Proporcionar los recursos necesarios para la operación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como expedir de manera conjunta con la mesa directiva del Foro las bases de su integración y funcionamiento;

XVII. Coordinar la creación y funcionamiento de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, definiendo mediante los lineamientos respectivos las estrategias, programas conjuntos, articulación de acciones, recursos humanos y financieros, optimización de infraestructura, generación de intercambios, definición de criterios y estándares de calidad institucional, que permitan definir el ingreso o la permanencia de los interesados dentro de ese Sistema;

XVIII. Realizar la aportación de recursos a través de sus áreas competentes a las instituciones académicas, centros de investigación, personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, tendientes al fomento y realización de investigaciones y desarrollo tecnológicos, basados en programas y proyectos específicos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en los convenios que para ese efecto celebre el CONACYT con otros aportantes, sin que ello sea obstáculo para el manejo o incremento de su propio patrimonio;

XIX. Elaborar y financiar programas de recursos humanos de alto nivel, así como integrar en sus proyectos, los programas que para ese efecto se ofrezcan para otras Instituciones Públicas Nacionales, Organismos Internacionales o Gobiernos Extranjeros, procurando la optimización de recursos y estableciendo esquemas de coordinación eficientes, lo que se establecerá de manera detallada tanto en la normatividad interna que para el efecto se emita, como en las convocatorias respectivas;

XX. Coordinar y operar de manera conjunta con las Entidades Federativas, a través de la Dirección Adjunta de Planeación, el Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y Tecnológica, actualizando y publicando la información estadística que al efecto se derive y, a través de la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, expidiendo por medio de dichas áreas las Bases de Organización y Funcionamiento y toda aquella regulación que fuere necesaria para la instrumentación adecuada de estos Sistemas;

XXI. Ejercer a través de su Director General las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las Dependencias Coordinadoras de Sector, respecto de las Entidades Paraestatales que el Presidente de la República determine;

XXII. Regir su relación con los Centros Públicos de Investigación, por medio de convenios en los cuales se establezcan las Bases de Desempeño, cuyo propósito fundamental, será la mejora de las actividades de los Centros, que les permitan alcanzar mayores metas y logro de resultados, fungiendo como Entidad autorizada para dictaminar y resolver sobre los aspectos científicos y tecnológicos de esos instrumentos, así como la periodicidad de la evaluación de los proyectos;

XXIII. Formular y apoyar todas las acciones tendientes a la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y demás ordenamientos aplicables;

XXIV. Promover y fomentar cursos y programas de capacitación, especialización y actualización de conocimientos en ciencia y tecnología, programas de intercambio de profesores, investigadores y técnicos con otros países, mediante apoyos proporcionados por el CONACYT o derivado de convenios que para el efecto se instrumenten;

XXV. Formular, promover y fomentar programas de apoyo a los investigadores mexicanos para asegurar su permanencia en territorio mexicano o su repatriación para incorporarse a los sectores académico y productivo del país;

XXVI. Asesorar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la celebración de tratados y convenios internacionales en materia de ciencia y tecnología colaborando en el cumplimiento de los mismos, participando igualmente en los organismos o agencias internacionales relacionados con su materia y en los que México sea parte, pudiendo para ello crear oficinas, representaciones o agregadurías en las Embajadas de México en el extranjero;

XXVII. Informar anualmente sobre el estado que guarda la ciencia y la tecnología en el país, sistematizando y actualizando la información de recursos humanos, materiales y financieros dedicados a la Investigación Científica y Tecnológica y al Desarrollo Tecnológico; realizando estudios prospectivos que identifiquen las necesidades en estos rubros y estudiando los problemas que afecten la actividad general del país, promoviendo desde luego la operación de servicios de información y documentación científica, mediante los instrumentos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en el presente Estatuto;

XXVIII. Promover y ejecutar Programas de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del objeto del CONACYT, y

XXIX. Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presente Estatuto y los demás ordenamientos aplicables.

En apoyo a las funciones del Consejo General, y para el adecuado ejercicio, control y evaluación del gasto público federal de la Administración Pública Federal, en investigación científica y desarrollo tecnológico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias a la estructura programática y al sistema de información de gasto público, así como para la constitución de un ramo general específico en esta materia para identificar y dar seguimiento al presupuesto integral de la Administración Pública Federal en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las adecuaciones necesarias para el tratamiento de ramo presupuestal del CONACYT, como Entidad no Sectorizada, así como para que el mismo ejerza las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias coordinadoras de sector, respecto de las entidades paraestatales que formen parte del Sistema de Centros Públicos CONACYT, en los términos de los Artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 4.- El Director General del CONACYT, fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General;

II. Formular y presentar al Consejo General:

a) El Proyecto del Programa de Ciencia y Tecnología, para su aprobación;

b) El anteproyecto de presupuesto consolidado de Ciencia y Tecnología, que contendrá la propuesta de áreas y programas estratégicos y las prioridades y criterios de gasto público federal en estas materias, y

c) El informe general anual acerca del estado que guarda la ciencia y la tecnología en México, así como el informe anual de evaluación del programa especial y los programas específicos prioritarios.

III. Coordinar los Comités Intersectoriales que determine el Consejo General para la articulación de Políticas, Programas y Presupuestos y la Implantación de instrumentos y mecanismos específicos de apoyo;

IV. Representar al Consejo General en los Organos de Gobierno y de Administración de otras entidades paraestatales, en los cuales el CONACYT deba participar así como en Comités Comisiones, y Consejos de la Administración Pública Federal, de los cuales el CONACYT forme o deba formar parte;

V. Realizar las demás actividades que le encomiende el Consejo General;

VI. Ejercer las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República y asistir a las reuniones a que se refiere el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ejerciendo además las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias coordinadoras de sector respecto de las Entidades Paraestatales que el Presidente de la República determine en los términos de los Artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

VII. Realizar las demás actividades que le confieren la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 5.- Para los efectos del presente Estatuto Orgánico se entenderá por:

I. CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

II. SHCP, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. SECODAM, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

IV. PECYT, al Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

V. Consejo General, al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico;

VI. Foro, al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico;

VII. SIICYT, al Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica;

VIII. RENIECYT, al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas;

IX. Centros, a los Centros de Investigación integrados en el Sistema de Centros CONACYT;

X. Centros Públicos de Investigación, a las Entidades Paraestatales reconocidas como tales;

XI. Sector, al conjunto de Centros que coordine el CONACYT;

XII. Red, a la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación;

XIII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

XIV. Ley de Ciencia, a la Ley de Ciencia y Tecnología;

XV. Sistema, al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología;

XVI. SINECYT, Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica;

XVII. SNI, Sistema Nacional de Investigadores;

XVIII. Política de Estado, la que para el efecto determina el Artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología;

XIX. Conferencia Nacional, la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología;

XX. Fondos CONACYT, a los Fondos Institucionales, Sectoriales, Mixtos y de Cooperación Internacional señalados en Artículo 23 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y

XXI. Fondos de Investigación, a los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico cuyo soporte operativo estará a cargo de los Centros Públicos de Investigación, señalados en los Artículos 27 y 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

CAPITULO SEGUNDO
Estructura Orgánica

Artículo 6.- El desarrollo de las funciones a cargo del CONACYT para el cumplimiento de su objeto, se llevarán a cabo mediante la estructura orgánica siguiente:

I. Junta de Gobierno;

II. Director General;

III. Direcciones Adjuntas:

- **a)** de Planeación
- **b)** de Ciencia
- **c)** de Tecnología
- **d)** de Formación de Científicos y Tecnólogos
- **e)** de Desarrollo Regional y Sectorial
- **f)** de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación
- **g)** de Administración y Finanzas
- **h)** de Servicios Jurídicos

IV. Direcciones de Area adscritas a la Dirección General;

- **a)** Asuntos Internacionales
- **b)** Comunicación Social

V. Direcciones de Area y Direcciones Regionales adscritas a las Direcciones Adjuntas;

VI. Organo de Vigilancia y de Control;

- **a)** Organo Interno de Control

VII. Organos Colegiados:

- **a)** Foro Consultivo Científico y Tecnológico

b) Comité de Control y Auditoría

c) Comisión Asesora de la Junta de Gobierno del CONACYT

d) Consejo Directivo del SIICYT

e) Consejo Técnico Asesor del SIICYT

f) Comisión Interna de Evaluación del RENIECYT

g) Comité de Apoyos Especiales

h) Comité de Cancelación de Adeudos

i) Comité de Información

j) Comité de Dirección

Los Servidores Públicos del CONACYT, los integrantes de la Junta de Gobierno y todas aquellas personas que por el desarrollo de la función que les sea encomendada, manejen información de carácter confidencial, estarán obligados a conservarla bajo su cuidado, impidiendo su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida. El no acatamiento de lo dispuesto por el presente Artículo dará lugar a las sanciones administrativas contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las penalidades que al efecto se establezcan en otras disposiciones legales aplicables.

CAPITULO TERCERO
Junta de Gobierno

Artículo 7.- La administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, estará encomendada a una Junta de Gobierno y a un Director General en sus respectivas esferas de competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el presente Estatuto.

Artículo 8.- La Junta de Gobierno del CONACYT, estará integrada por trece miembros que serán:

I. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Un representante de la Secretaría de Economía;

III. Un representante de la Secretaría de Educación Pública;

IV. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

V. Un representante de la Secretaría de Energía;

VI. Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y

VII. Un representante de la Secretaría de Salud.

Se invitará a formar parte de la Junta de Gobierno al Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, al Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como a dos investigadores en funciones preferentemente de los dos niveles superiores del Sistema Nacional de Investigadores y a dos representantes del sector productivo, los cuales serán propuestos por el Director General del CONACYT. Cada miembro propietario contará con un suplente.

Las sesiones serán presididas por quien determine el Presidente de la República de entre los titulares de las Dependencias del Ejecutivo Federal que tenga mayor actividad científica y tecnológica, y tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los representantes propietarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deberán ser: los Subsecretarios o nivel equivalente, que tengan la responsabilidad de las funciones de promoción de investigación científica y desarrollo tecnológico en dichas Dependencias y Entidades. En el caso de los suplentes deberán contar con el nivel jerárquico de Director General o equivalente.

A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz pero sin voto a Servidores Públicos, a científicos o especialistas que, por la naturaleza de los asuntos a tratar acuerde la propia Junta de Gobierno.

Artículo 9.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año y las extraordinarias que proponga el Director General o cuando menos seis de sus miembros por conducto del Secretario del propio Organo de Gobierno.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la administración pública federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 10.- La Junta de Gobierno además de las facultades que le confieren los Artículos 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 6 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar los modelos de convenio de colaboración, contratos de fideicomiso y reglas de operación, relativos a los fondos CONACYT, que contengan las adecuaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, debiéndose informar al Organo de Gobierno la formalización por cada caso que se presente en los propios fideicomisos;

II. Aprobar los criterios específicos, que en su caso, se requieran para la constitución, administración, operación, modificación o extinción de convenios, contratos de fideicomiso y reglas de operación, relativos a los fondos CONACYT;

III. Aprobar el modelo de convenio modificatorio aplicable a todos y cada uno de los contratos de fideicomiso instituidos, para su adecuación a la Ley de Ciencia y Tecnología; así como, los convenios de extinción de dichos fideicomisos;

IV. Conocer de las disposiciones normativas que en su carácter de Organismo Descentralizado del Estado y no Sectorizado, con un ramo presupuestal y funciones de coordinación sectorial, instrumente coordinadamente con la SHCP y ejecute el CONACYT, al igual que de los lineamientos que definan su autonomía técnica, operativa y administrativa;

V. Establecer y delegar las facultades específicas a los órganos internos permanentes o transitorios que estime convenientes para la realización del objeto del CONACYT, en los términos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el presente Estatuto;

VI. Conocer y aprobar los informes que le presente el Director General para el envío de la cuenta pública;

VII. Opinar sobre las interpretaciones para efectos administrativos que realice el Director General respecto de la Ley de Ciencia y Tecnología;

VIII. Opinar, a petición del Director General, las Condiciones Generales de Trabajo del CONACYT;

IX. Aprobar la regulación del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica;

X. Vigilar el cumplimiento para el ejercicio de recursos públicos de la administración, por resultados, de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que le sean aplicables al CONACYT, en términos de lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente;

XI. Aprobar a propuesta del Director General los precios de los bienes y servicios que produzca o preste el CONACYT, de conformidad con la Ley Federal de Derechos y demás disposiciones legales vigentes aplicables;

XII. Conocer el informe que le presente la Dirección General sobre los trabajos y autorizaciones del Comité de Cancelación de Adeudos del CONACYT, así como ejercer las funciones a que se refiere el Artículo 58 fracción XVII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y a propuesta del referido Comité, y

XIII. Las demás que le establecen la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presente Estatuto y las demás disposiciones legales aplicables;

Artículo 11.- La Junta de Gobierno contará con un Secretario y un Prosecretario, quienes asistirán a las sesiones de la misma con voz pero sin voto, guardarán secrecía y reserva de los asuntos tratados; quienes además de las funciones que les confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su

Reglamento y para efectos de la fracción XVII del Artículo 6, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tendrán las siguientes facultades:

I. El Secretario:

a) Propiciar la adecuada coordinación de las funciones del Sector Financiero, con los intereses de los sectores científico, tecnológico y productivo en beneficio de la Política de Estado y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología;

b) Por acuerdo del Presidente de las sesiones o del Director General del CONACYT, convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno y de su Comisión Asesora;

c) Llevar el seguimiento de acuerdos del Organo de Gobierno y proponer a la Dirección General del CONACYT la agenda de trabajo del mismo, a fin de que éste la apruebe, y en su caso, valide con el Secretario de Estado que presida las sesiones de la Junta de Gobierno;

d) Brindar la asesoría, información y seguimiento a la Junta de Gobierno y a los consejeros o invitados que así lo soliciten, sobre los procesos judiciales o administrativos que se lleguen a instaurar en su contra, o sean en parte procesal, y con el carácter de miembros del Organo de Gobierno, en los términos de la legislación aplicable;

e) Expedir las certificaciones de los acuerdos y actas de la Junta de Gobierno, para efectos administrativos, una vez adoptados los mismos sin que sea necesario para ello la suscripción del acta respectiva;

f) Comunicar a los titulares de las unidades administrativas competentes del CONACYT, los acuerdos adoptados en las sesiones del Organo de Gobierno, a más tardar a las 72 horas hábiles siguientes a la conclusión de la sesión correspondiente, para efectos de ejecución de dichos acuerdos por parte de la Dirección General del CONACYT;

g) A propuesta de la Dirección General, presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación y evaluación, los programas y proyectos del CONACYT;

h) Fungir como Secretario de la Comisión Asesora de la Junta de Gobierno y suplir al Presidente de la citada Comisión, en sus funciones y ausencias temporales, y

i) Las demás que le encomiende el Presidente de las sesiones de la Junta de Gobierno o el Director General del CONACYT.

II. El Prosecretario:

a) Integrar de manera anticipada, el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno y su calendarización, así como someterlo a la aprobación del Pleno, tomando en cuenta los asuntos que a propuesta de quien presida la sesión, del Director General del CONACYT y del Comisario Público, se deban incluir en el mismo;

b) Pasar lista de asistencia y verificar que el número de asistentes a la sesión corresponda al mínimo requerido, para que los acuerdos tomados tengan validez; cerciorándose que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal, para poder acreditar que existe el quórum legal;

c) Dar lectura al acta de la sesión previa y tomar nota de las observaciones de los miembros de la Junta de Gobierno, realizando las adecuaciones procedentes en el acta respectiva;

d) Brindar el seguimiento correspondiente a los acuerdos emitidos en el seno de la Junta de Gobierno, verificando su cumplimiento, haciéndolo del conocimiento de los integrantes de la misma;

e) Turnar a los integrantes de la Junta de Gobierno la documentación de los asuntos a tratar en la sesión, cerciorándose de que la recepción de ésta se efectúe con una anticipación mínima de cinco días hábiles previos a la celebración de la sesión correspondiente;

f) Elaborar las actas de las sesiones que celebre la Junta de Gobierno, llevando el registro de los acuerdos tomados y una vez aprobadas las actas y para la formalización correspondiente, obtener la firma del Presidente y del Secretario;

g) Suscribir conjunta o separadamente con el Secretario las certificaciones de los documentos que obren en su poder y que se relacionan con las sesiones de la Junta de Gobierno, llevando un registro y asignación numérica progresiva de las certificaciones emitidas;

h) Fungir como Prosecretario de la Comisión Asesora de la Junta de Gobierno, con las mismas facultades reguladas en el presente Artículo y suplir al Secretario en sus funciones y durante su ausencia temporal;

i) Fungir como canal de distribución entre los integrantes del Organo de Gobierno, los Comisarios Públicos y las Areas sustantivas del CONACYT, para propiciar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, así como canalizar las solicitudes de los miembros de la Junta;

j) Resguardar los documentos derivados de las sesiones de la Junta, así como las versiones estenográficas de éstas, y

k) Las demás que le encomiende la Presidencia de la Junta de Gobierno, el Director General o el Secretario de la Junta de Gobierno del CONACYT.

Artículo 12.- Los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de Gobierno serán asentados en las actas respectivas que firmarán el Presidente de la Sesión y el Secretario, pudiendo firmar en ausencia del Presidente su suplente debidamente acreditado y del Secretario, el Prosecretario.

Coordinación Sectorial

Artículo 13.- El CONACYT ejercerá las funciones de Coordinación Sectorial, respecto de las Entidades Paraestatales que formen parte del Sistema de Centros Públicos CONACYT regulado en la Ley de Ciencia y Tecnología, en atribuciones de coordinación funcional, en el proceso de planeación, en el proceso de programación y presupuestación y en el proceso de información, de acuerdo con las siguientes atribuciones:

I. Atribuciones de coordinación funcional:

a) Generar el vínculo para la relación de las entidades paraestatales con el Gobierno Federal;

b) Participar como representante del Gobierno Federal en los Organos de Gobierno de las Entidades agrupadas en el sector;

c) Coordinar el proceso de desincorporación de Entidades Paraestatales: disolución y extinción de éstas;

d) Realizar consultorías, asesorías, estudios e investigaciones de servicios y proyectos;

e) Participar en la constitución, renovación y disolución de fideicomisos públicos;

f) Opinar e intervenir en el proceso de disolución y liquidación de Entidades Paraestatales;

g) Vigilar el cumplimiento de las Leyes aplicables;

h) Emitir y someter a la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, un proyecto de dictamen que contenga su opinión y considere el efecto social y productivo respecto de las propuestas de disolver, liquidar, extinguir, fusionar, y enajenar o transferir entidades paraestatales;

i) Verificar en sus archivos, la no existencia de consultorías, asesorías y estudios;

j) Publicar políticas, lineamientos y bases en materia de adquisiciones y arrendamientos;

k) Consolidar la información relativa a la contratación de servicios de consultoría, asesorías y estudios;

l) Establecer una base de datos sobre estudios y proyectos de obras;

m) Los centros públicos de investigación gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, sin perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que a cada centro le corresponda;

n) Los Centros regirán sus relaciones con las dependencias de la Administración Pública Federal y con el CONACYT conforme a los convenios de desempeño que en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología se celebren;

o) El CONACYT será la entidad autorizada para dictaminar y resolver sobre aspectos científicos y tecnológicos de los convenios de desempeño y sobre la periodicidad de la evaluación de los proyectos;

p) Brindar la asesoría, información y seguimiento en cuanto a los procesos judiciales o administrativos instaurados en su contra o que sean parte procesal, en las entidades coordinadas sectorialmente, particularmente en materia de amparo;

q) Brindar la asesoría y apoyo jurídico a las entidades coordinadas sectorialmente para que, previamente a la presentación ante sus respectivos Organos de Gobierno, se valide y sancione la reglamentación interna y las reglas de operación de cada Centro de Investigación coordinado.

II. Atribuciones en cuanto al proceso de planeación:

a) Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las entidades paraestatales de su sector;

b) Establecer lineamientos para que las entidades paraestatales consideren el ámbito territorial de sus acciones;

c) Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector;

d) Someter a consideración del Presidente de la República los programas sectoriales;

e) Validar y aprobar los programas institucionales de las Entidades Paraestatales;

f) Prever ante los Organos de Gobierno y Administración de las Entidades Paraestatales lo conducente en cuanto a la obligatoriedad del Plan y los Programas;

g) Establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente;

h) El Programa de Ciencia y Tecnología, será un Programa Especial;

i) La formulación del Programa estará a cargo del CONACYT con base en las propuestas que presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

j) A fin de lograr la congruencia sustantiva y financiera del Programa, su integración final será por conducto del Director General del CONACYT y su aprobación corresponderá al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

III. Atribuciones en cuanto al proceso de programación y presupuesto:

a) Coordinar el proceso de programación y presupuestación, conocer la operación y evaluar los resultados de las Entidades Paraestatales;

b) Coordinar la programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas;

c) Conocer la operación y evaluar los resultados de las entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la Ley;

d) Establecer lineamientos para la formulación de anteproyectos de presupuesto por parte de las entidades paraestatales, bajo su coordinación sectorial;

e) Coordinar e integrar el anteproyecto de presupuesto sectorial;

f) Definir lineamientos específicos para la formulación de presupuestos por parte de las entidades paraestatales, coordinadas sectorialmente por el mismo;

g) Revisar e integrar ajustes al anteproyecto de presupuesto;

h) Elaborar la exposición de motivos sectorial;

i) Proponer comités mixtos de productividad;

j) Informar a la dependencia globalizadora sobre la cancelación de adeudos de la entidad paraestatal;

k) Proponer medidas en materia de control;

l) Emitir lineamientos para el ejercicio del gasto público, vigilar su ejecución y remitir información;

m) Emitir las Reglas de Operación para la aplicación de los recursos públicos de los programas a que se refiere el Decreto Presupuesto de Egresos de la Federación;

n) Evaluar los resultados en la ejecución de programas y presupuestos;

o) Opinar en cuanto a las solicitudes de las adecuaciones presupuestarias;

p) Presentar las solicitudes de adecuaciones presupuestarias externas;

q) Remitir a la SHCP las solicitudes de modificación presupuestaria;

r) Vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables;

s) Participar en las reuniones para la fiscalización, el seguimiento y la medición del Gasto Público Federal;

t) Presentar los informes a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales;

u) Aprobar y remitir la información para la formulación de la cuenta pública;

v) Vigilar que las entidades coordinadas se ajusten a sus calendarios financieros;

w) Ministrar y autorizar transferencias;

x) Vigilar que las transferencias no devengadas se reintegren a la Tesorería de la Federación;

y) Autorizar la ministración de recursos por concepto de subsidios y aportaciones;

z) Remitir a la SHCP y aprobar las solicitudes para conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones u otorgar ayuda de cualquier clase;

aa) Remitir los registros contables de la ministración de fondos;

bb) Proporcionar las cuentas referentes a la ministración de fondos;

cc) Revocar las autorizaciones de ministración de fondos;

dd) Someter a consideración de la SHCP las modificaciones necesarias a su sistema de contabilidad, así como al de los sistemas de control de sus entidades coordinadas;

ee) Captar y validar información de las entidades coordinadas;

ff) Establecer lineamientos y periodicidad para proporcionar información;

gg) Consolidar información programática presupuestal;

hh) Cuidar que la información sectorial cumpla con los requisitos establecidos;

ii) Hacer compatibles los requerimientos de información que demande el sistema integral de información;

jj) Comunicar los lineamientos y medidas operativas de responsabilidad que dicte la SECODAM;

kk) Formular el pliego preventivo de responsabilidades;

ll) Remitir el pliego preventivo de responsabilidades a la Tesorería de la Federación;

mm) Para la ejecución anual del Programa de Ciencia y Tecnología, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de

programa y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica y tecnológica, tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la asignación del gasto en ciencia y tecnología que apruebe el Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas y programas prioritarios de atención y apoyo presupuestal especial, lo que incluirá las nuevas plazas para investigadores y la nueva Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología;

nn) Con base en lo anterior, el CONACYT y la SHCP consolidarán la información programática y presupuestal de dichos anteproyectos para su revisión y análisis integral y de congruencia global para su presentación y aprobación por el Consejo General, y

oo) En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se consignará el presupuesto consolidado destinado a ciencia y tecnología que apruebe el Consejo General.

IV.- Atribuciones en cuanto al proceso de Información:

a) En coordinación con la SHCP y la SECODAM hará compatibles los requerimientos de información que se demanden a las entidades, racionalizando los flujos de la misma.

b) Al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guarda su respetivo ramo, deberá informar el avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que le corresponda y de los resultados de las acciones previstas.

c) Captar, analizar, integrar, validar y remitir a la SHCP y SECODAM la información de las entidades, así como la documentación que le fuere solicitada.

d) Aprobar y hacer llegar a la SHCP la información mensual, bimestral, trimestral y otras que le solicite esta última a las entidades.

e) Captar y validar la información que sus entidades deban remitir a la SHCP y, en su caso, determinar las posibles causas y efectos de desviaciones proponiendo las medidas correctivas necesarias.

f) Dar a conocer a sus entidades la forma, términos y periodicidad conforme a las cuales deberán proporcionarle información contable, financiera, presupuestaria, programática y económica.

g) Aprobar y hacer llegar a la SHCP la información de las entidades para la formulación de la cuenta pública.

h) Informar a la SHCP en un plazo no mayor de 30 días naturales, una vez concluido el proceso de desincorporación de una entidad.

i) Dar a conocer a la SECODAM irregularidades que por su naturaleza e importancia impliquen un grave daño o perjuicio de urgente reparación.

j) Dar a conocer a la SHCP las responsabilidades que afecten a la Hacienda Pública Federal y al patrimonio de las entidades derivadas del incumplimiento de la ley.

k) Consolidar la información relativa a la contratación de servicios de consultoría, asesorías y estudios.

l) Presentar el informe de pasivo circulante a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales.

Comisión Asesora

Artículo 14.- Para la mejor atención y despacho de la agenda de trabajo y para auxiliar a la Junta de Gobierno, ésta constituirá un Organo Colegiado denominado Comisión Asesora, la cual tendrá por objeto asesorar a los miembros de la Junta de Gobierno que así lo soliciten; analizar, proponer y emitir opiniones previas, respecto de los asuntos que se someterán al Organo de Gobierno, así como dar seguimiento a los acuerdos adoptados y que le encomiende dicho Organo.

Artículo 15.- La integración y funcionamiento de la Comisión Asesora se realizará en los siguientes términos:

I. Será presidida por la Dependencia a la que el Ejecutivo Federal le haya encomendado presidir las sesiones de la Junta de Gobierno y la suplencia de éste recaerá en el Secretario de la propia Junta de Gobierno;

II. Ostentarán la calidad de Secretario de la Comisión Asesora y Prosecretario de la misma, las personas que para el efecto fueron nombradas dentro de la Junta de Gobierno;

III. Contará con 13 Vocales, quienes serán:

a) Un Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

b) Un Representante de la Secretaría de Educación Pública;

c) Un Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

d) Un Representante de la Secretaría de Energía;

e) Un Representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

f) Un Representante de la Secretaría de Salud;

g) El Director Adjunto de Planeación del CONACYT;

h) El Director Adjunto de Ciencia del CONACYT;

i) El Director Adjunto de Tecnología del CONACYT;

j) El Director Adjunto de Formación de Científicos y Tecnólogos del CONACYT;

k) El Director Adjunto de Desarrollo Regional y Sectorial del CONACYT;

l) El Director Adjunto de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación del CONACYT;

m) El Director Adjunto de Administración y Finanzas del CONACYT;

IV. Invitados permanentes que serán:

a) Los Comisarios correspondientes de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

b) El Titular del Organo Interno de Control en el CONACYT;

c) El Coordinador de Asesores de la Dirección General del CONACYT;

d) El Director de Comunicación Social del CONACYT;

e) El Director de Asuntos Internacionales del CONACYT, y

f) El Secretario Técnico de la Mesa Directiva del Foro.

La personalidad del representante suplente ante el Organo de Gobierno, recaerá en el mismo servidor público que funja como titular en la Comisión Asesora. Los Suplentes deberán tener como mínimo el nivel jerárquico de Director de Area o equivalente.

Las decisiones de la Comisión Asesora serán tomadas por mayoría, contando los miembros de la misma con voz y voto, a excepción de los invitados permanentes que contarán únicamente con voz.

Las sesiones de la Comisión Asesora se realizarán con una antelación mínima de quince días naturales previos a la Sesión del Organo de Gobierno, para ello deberá aprobarse al inicio de cada año el calendario de sesiones correspondiente.

La convocatoria para la celebración de las sesiones de la Comisión Asesora será enviada con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la sesión respectiva.

La Comisión Asesora, sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros y de éstos la mayoría deberán corresponder a representantes de las Secretarías de Estado que participan.

Artículo 16.- La interrelación de la Comisión Asesora con el Comité de Control y Auditoría del CONACYT se entenderá para que el COCOA conozca y se pronuncie de los asuntos de carácter financiero o administrativo que su normatividad le confiere; y, la Comisión Asesora conozca y se pronuncie sobre los asuntos sustantivos o prioritarios que la Dirección General del CONACYT o la Presidencia le encomiende, los que sumados a los del COCOA, serán los que se presenten en el orden del día del Organo de Gobierno que corresponda y sea competente.

La Comisión Asesora emitirá sus lineamientos de funcionamiento, así como las modificaciones que en su caso procedan.

CAPITULO QUINTO

Dirección General

Artículo 17.- El Director General del CONACYT, será designado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal de quien dependerá directamente, debiendo reunir los requisitos señalados en los Artículos 21, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 8, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 18.- El Director General del CONACYT, además de las facultades establecidas en el Artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 8, 9, 10, 21 y 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 9 y 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Presentar a la Junta de Gobierno, cuando lo considere pertinente, o a las Dependencias competentes de la Administración Pública Federal en forma directa los planteamientos y asuntos que correspondan en materia de planeación, programación, presupuesto, cuenta pública
y demás que resulten de las disposiciones aplicables, en virtud de ser el CONACYT una Entidad Paraestatal no Sectorizada;

II. Delegar en los Servidores Públicos del CONACYT las atribuciones que expresamente determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo;

III. Conducir, programar, coordinar y evaluar las acciones que el CONACYT deba realizar para el debido cumplimiento de las funciones de su competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
y los demás ordenamientos legales aplicables;

IV. Presentar para opinión de la Junta de Gobierno los Proyectos de Iniciativas de Ley en Materia de Ciencia y Tecnología, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del Artículo 9 de la Ley Orgánica del CONACYT;

V. En términos de lo dispuesto por el Artículo 93 Constitucional y a petición de las Cámaras, o cualquiera de las Comisiones Legislativas de Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo Federal, comparecer, brindar la información o participar en las discusiones de dictamen o aprobación, en su caso, de iniciativas de Ley o asuntos que le competen a cada una de las Cámaras, o en su trabajo de conferencia, de acuerdo con los lineamientos que dicte el Titular del Ejecutivo Federal;

VI. Presentar a la Junta de Gobierno dentro de los primeros tres meses del año siguiente, el informe de actividades y los estados financieros del ejercicio anterior;

VII. Presentar al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, dentro de los primeros tres meses del año siguiente, el informe que contiene el estado que guarda la ciencia
y la tecnología en el país;

VIII. Para la debida instrumentación del Artículo 13 de la Ley Orgánica del CONACYT, se establecerá el Comité de Apoyos Especiales, además de los Organos Colegiados que las Leyes prevean al efecto;

IX. Fungir como Representante del CONACYT ante el Comité Intersecretarial para la Aplicación de Estímulos Fiscales en Materia de Ciencia y Tecnología, ejercer el voto de calidad especializado en Ciencia y Tecnología y nombrar al Secretario Técnico del mismo;

X. Para efectos del Artículo 8 de la Ley de Ciencia y Tecnología y previo acuerdo del Consejo General, constituir los siguientes Comités:

a) Comité Intersectorial y de Vinculación de la Investigación y Educación;

b) Comité Intersectorial y de Vinculación de la Innovación y Desarrollo Tecnológico con los Sectores Productivos;

c) Comité Intersectorial para la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, y

d) Comité Intersectorial para la Evaluación y Rendición de Cuentas;

Asimismo, designar al Secretariado Técnico en apoyo a dichos Comités y al Secretario Técnico que lo auxilie en sus funciones de Secretario Ejecutivo del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

XI. Designar al Secretario Técnico de la Mesa Directiva del Foro, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología;

XII. Coordinar a través de la Dirección Adjunta de Planeación las reuniones de seguimiento al Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

XIII. Nombrar conjuntamente con la SHCP al Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para la integración del presupuesto federal en ciencia y tecnología que prevé el Artículo 9 de la Ley de Ciencia y Tecnología y que tendrá las funciones establecidas en Ley y en las Bases
de Organización y Funcionamiento que apruebe el propio Consejo General;

XIV. Revisar y analizar a través de las Direcciones Adjuntas de Administración y Finanzas y de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, de manera conjunta con la SHCP, el Proyecto Consolidado de Presupuesto Anual de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en Materia de Ciencia y Tecnología;

XV. Ejercer las funciones que le correspondan a los titulares de las Dependencias Coordinadoras de Sector, respecto de las Entidades Paraestatales sujetas a su coordinación;

XVI. Promover la creación y operación de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación;

XVII. Promover la creación y operación de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología;

XVIII. Formular y promover de manera conjunta con las autoridades competentes los planes de carrera de los investigadores, respetando los derechos laborales adquiridos en forma individual
y colectiva;

XIX. Proponer al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el establecimiento de un Sistema Independiente para la Evaluación de la eficacia, resultados e impactos de los principios, programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica
y tecnológica;

XX. Proponer a la Junta de Gobierno el establecimiento de los procedimientos de evaluación externa que le permitan conocer los resultados sustantivos programados y los efectivamente alcanzados, así como el impacto que tengan los programas del CONACYT;

XXI. Promover e instrumentar con las autoridades competentes, toda clase de actos en materia de comercio exterior y de propiedad intelectual que beneficien a la comunidad científica y tecnológica, en el marco de las disposiciones legales aplicables;

XXII. Presidir los Organos de Gobierno de los diferentes Centros Públicos de Investigación coordinados por el CONACYT, en términos de lo dispuesto por sus instrumentos de creación, así como nombrar a los Servidores Públicos del Consejo que suplirán sus ausencias;

XXIII. Coordinar la instrumentación de los estándares de calidad y certificación correspondiente en todos los procesos, realizados por el CONACYT; por conducto de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas;

XXIV. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación las atribuciones que el Artículo 6 de la Ley Orgánica del CONACYT, confiere al Organo de Gobierno;

XXV. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno, del Consejo General de Investigación y Desarrollo Tecnológico y cumplir con las recomendaciones que formulen los Comisarios Públicos acerca de los Estados Financieros dictaminados y de los informes de autoevaluación;

XXVI. Establecer los programas que propicien la permanencia en México o su reincorporación al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de los investigadores científicos y tecnólogos;

XXVII. Proponer para su aprobación ante la Junta de Gobierno la creación, transformación, disolución o extinción de Centros Públicos de Investigación con base en criterios de oportunidad de desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades, y a un sistema de evaluación de calidad y productividad institucional; debiéndose contar con la opinión del Foro; así como, emitir de manera directa las resoluciones por las cuales se reconozcan a las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal como Centros Públicos de Investigación, pudiendo contar para ello con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Foro;

XXVIII. Nombrar por conducto de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas a los Servidores Públicos que el CONACYT requiera para el cumplimiento de sus finalidades, salvo aquellos que proponga y sea competencia de la Junta de Gobierno su nombramiento;

XXIX. Establecer las Condiciones Generales de Trabajo del CONACYT, escuchando la opinión del Sindicato y de la Junta de Gobierno, en su caso;

XXX. Ordenar que oportunamente se proporcione la información solicitada por los Comisarios Públicos;

XXXI. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas del CONACYT y expedir el Manual de Organización General y demás instrumentos de apoyo administrativo necesarios para el funcionamiento de la entidad, así como de las modificaciones que se requieran para mantenerlos permanentemente actualizados, informando de ello a la Junta de Gobierno;

XXXII. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Estatuto y demás ordenamientos que rijan al CONACYT;

XXXIII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de este ordenamiento y, de estimarlo necesario, someterlas a la consideración de la Junta de Gobierno, por conducto de su Comisión Asesora;

XXXIV. Expedir los ordenamientos internos necesarios que los programas y proyectos requieran, así como interpretar y resolver cualquier circunstancia no prevista en los mismos y delegar esa función en los Directores Adjuntos de las áreas correspondientes;

XXXV. Designar a sus representantes suplentes ante los Organos de Gobierno de las entidades sujetas a su coordinación, o por aquellas que consignan sus leyes;

XXXVI. Designar con apego a la normatividad aplicable y en su carácter de Coordinador Sectorial, a los Titulares de los Centros Públicos de Investigación del Sistema CONACYT, considerando la propuesta de al menos tres candidatos que, por conducto de la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación formulen los Comités de Evaluación Externos, con base en los procesos de auscultación interna y externa que haya efectuado el CONACYT;

XXXVII. Proveer los mecanismos e instrumentos necesarios, para la transparencia y acceso a la información pública gubernamental, de acuerdo con la legislación aplicable;

XXXVIII. Delegar en la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas los actos necesarios para la ejecución de las resoluciones dictadas por el Organo Interno de Control en cumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XXXIX. Delegar en el Director Adjunto de Servicios Jurídicos, su representación en materia de amparo, de acuerdo con el Artículo 19 de la Ley de Amparo, y en todos aquellos procesos, actos, procedimientos, incidencias, recursos y actuaciones jurídicas y administrativas, en términos de la legislación aplicable, y

XL. Las demás que le señalen la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presente Estatuto, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, y demás ordenamientos aplicables.

CAPITULO SEXTO
Direcciones Adjuntas

Artículo 19.- En cada Dirección Adjunta habrá un Director Adjunto que tendrá las siguientes facultades comunes:

I. Auxiliar al Director General, dentro de la esfera de su competencia;

II. Representar al Director General y realizar las gestiones ante las dependencias correspondientes que deban realizarse conforme a las disposiciones legales en materia de planeación, programación, presupuesto, cuenta pública y demás que resulten aplicables, en virtud de ser CONACYT una Entidad Paraestatal no Sectorizada;

III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento y labores encomendadas a las Direcciones de Area de su adscripción y coordinar las que se realicen con las diversas Direcciones del CONACYT;

IV. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos encomendados a las unidades administrativas adscritas a su dirección e informarle oportunamente sobre los mismos;

V. Someter a la aprobación del Director General los estudios y proyectos que elaboren las unidades a su cargo;

VI. Evaluar la pertinencia de incorporación al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), de aquéllas relacionadas al ámbito científico, incluyendo clasificaciones conforme a las cuales se identifique la calidad y nivel de desarrollo de cada institución participando en la Comisión Interna de Evaluación del RENIECYT;

VII. Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales en todos los asuntos de su competencia;

VIII. Auxiliar al Director General del CONACYT, para el desempeño de sus atribuciones como Secretario Ejecutivo del Consejo General de Investigación y Desarrollo Tecnológico, así como desempeñar las actividades y tareas que le encomiende con tal carácter;

IX. En coordinación con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos, preparar para el Director General y respecto de los asuntos de su competencia los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República, así como las Interpretaciones Administrativas a que se refiere el Artículo 11 de la Ley de Ciencia y Tecnología;

X. Someter a la autorización del Director General los nombramientos del personal de su área hasta el nivel de Subdirector, así como decidir sobre los movimientos de dicho personal, conforme a los lineamientos que se establezcan, y suscribir todos los documentos correspondientes;

XI. Atender, conforme a los lineamientos que se establezcan, los asuntos relacionados con el trámite, registro y control de la admisión, baja y demás movimientos del personal a que se refiere la fracción anterior y suscribir todos los documentos correspondientes;

XII. Formular los proyectos de programas y de presupuesto que le correspondan;

XIII. Para los Despachos de los asuntos de la competencia de las Direcciones Adjuntas, éstas se estructurarán administrativamente con las Direcciones de Area que le sean adscritas orgánicamente por el Director General y cuyas funciones se determinarán en el Manual de Organización del CONACYT;

XIV. Ejercer el presupuesto autorizado para el área administrativa a su cargo, supervisando el desarrollo de los programas, proyectos, convenios, contratos y acuerdos que se relacionen con los asuntos de su competencia;

XV. Proponer las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo y aplicación de estándares y certificaciones de las unidades a su cargo, así como plantear su innovación;

XVI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean señalados por delegación de facultades del Director General; asimismo, autorizar por escrito a los servidores públicos subalternos para que firmen la correspondencia y documentación relacionados con los asuntos de su competencia;

XVII. Proporcionar la información y documentación que le sea requerida por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por el Foro o por las unidades administrativas del propio CONACYT, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y las políticas establecidas a este respecto, previa autorización del Director General en su caso;

XVIII. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Director General y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones a su cargo;

XIX. Asistir y participar en las reuniones de los Organos de Gobierno y cuerpos colegiados de los que formen parte;

XX. Suscribir los instrumentos jurídicos que competan a su respectiva área, contando previamente con la suficiencia y calendarización presupuestal que proceda y en los términos de las facultades que le hayan sido otorgadas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 fracción II del presente Estatuto;

XXI. Coordinar la atención y cumplimiento de las líneas de acción que le correspondan del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, así como proporcionar la información correspondiente y la que requiera la Dirección Adjunta de Planeación para satisfacer los requerimientos del Poder Legislativo Federal, y del Sistema Nacional de Metas Presidenciales, en los términos de la normatividad aplicable;

XXII. Proponer elementos para la integración del Programa Especial de Ciencia y Tecnología a través de la Dirección Adjunta de Planeación y coordinar en el ámbito de su competencia reuniones de seguimiento al Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

XXIII. Apoyar en el ámbito de su competencia el funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y del Foro;

XXIV. Proponer al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a través de las instancias legales correspondientes, las prioridades, lineamientos y criterios de asignación del gasto en el ámbito de su competencia, cuya integración de la información se llevará a cabo en las Direcciones Adjuntas de Planeación y de Administración y Finanzas;

XXV. Participar en el ámbito de su competencia en la integración, operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica;

XXVI. Participar en la ejecución de los programas y proyectos de cooperación científica y tecnológica internacional y dar a conocer las realizadas por las Entidades y Dependencias en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales;

XXVII. Asesorar a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal, a los Gobiernos Estatales, a los Municipios, a través de la Dirección Adjunta de Desarrollo

Regional y Sectorial y a los demás solicitantes en asuntos de ciencia y tecnología, por los medios legales procedentes;

XXVIII. Establecer y conducir procesos de evaluación externa y de rendición de cuentas de los programas del CONACYT en el ámbito de su competencia;

XXIX. Establecer de manera coordinada con la Dirección Adjunta de Planeación los criterios y parámetros de evaluación del impacto de los recursos federales en ciencia y tecnología;

XXX. Establecer de manera coordinada con la Dirección de Comunicación Social, los programas y apoyos a la divulgación de la ciencia y la tecnología, así como los mecanismos e instrumentos regulados para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XXXI. Expedir las certificaciones de documentos que obren en sus archivos, con el apoyo de la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos;

XXXII. Preparar y proponer al Director General para su presentación ante la Junta de Gobierno las Reglas de Operación y la reglamentación interna de los programas sustantivos, así como sus modificaciones, y

XXXIII. Las demás que les confieran las disposiciones legales vigentes, el Director General, así como las que les correspondan a las unidades administrativas a su cargo. Las disposiciones contenidas en el presente Artículo serán aplicables a las áreas adscritas a la Dirección General.

Dirección Adjunta de Planeación

Artículo 20.- A la Dirección Adjunta de Planeación corresponde:

I. Coordinar la formulación e integración del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, cuidando su congruencia sustantiva y financiera con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología y demás leyes aplicables, y proponer a la Dirección General su presentación al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico;

II. Instrumentar la ejecución, operación, seguimiento y evaluación anual del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, en los términos dispuestos por la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal;

III. Revisar y analizar en colaboración con las Direcciones Adjuntas de Administración y Finanzas y de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, y de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Anteproyecto de Presupuesto Federal de las Dependencias y Entidades en materia de Ciencia y Tecnología;

IV. Apoyar al Consejo General en la integración y la coordinación de los diferentes Comités Intersectoriales y de vinculación que en materia de Ciencia se requieran, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología;

V. Elaborar conjuntamente con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Trabajo del CONACYT, así como establecer los procedimientos necesarios para verificar su congruencia y articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología y otros programas sectoriales;

VI. Coordinar la operación y funcionamiento e integrar la información que se presenta a las sesiones de los siguientes Organos Colegiados:

a) Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

b) Comité Intersecretarial para la Integración del Presupuesto Federal de Ciencia y Tecnología;

VII. Dar seguimiento a los acuerdos y acciones realizadas por el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, para ser consistente la información sectorial que integra el CONACYT;

VIII. En coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial y por lo que hace a los Fondos Mixtos y Sectoriales del CONACYT, instrumentar los procesos para la inducción, integración, impacto, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos que concursen;

IX. Coordinar la elaboración de los informes de autoevaluación, semestrales y anuales, del CONACYT solicitados por la SECODAM y aprobados por la Junta de Gobierno;

X. Evaluar dentro del ámbito de competencia del CONACYT y de las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, los resultados que se hayan obtenido en materia de ciencia y tecnología como consecuencia de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo;

XI. Elaborar anualmente el apartado de ciencia y tecnología del Informe Presidencial de Gobierno, a partir de la información enviada por las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal;

XII. En coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, participar en el establecimiento de requisitos mínimos que deberán cumplir las instituciones académicas y de investigación u organismos especializados de carácter nacional o internacional para realizar la evaluación de los resultados de los programas gubernamentales en ciencia y tecnología relativos al ejercicio fiscal correspondiente;

XIII. Proponer a través de las instancias correspondientes de manera conjunta con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas y en coordinación con las demás Direcciones Adjuntas del CONACYT, al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, las prioridades, lineamientos y criterios de asignación del gasto federal en materia de ciencia y tecnología, incluyendo el ramo presupuestal del CONACYT;

XIV. Establecer de manera coordinada con las demás Direcciones Adjuntas del CONACYT los criterios y parámetros de evaluación del impacto de los recursos federales en materia de ciencia y tecnología;

XV. Proponer y desarrollar sistemas informáticos orientados a los objetivos institucionales y a la operación de los programas sustantivos del Consejo;

XVI. Planear y coordinar la actualización de la infraestructura informática del CONACYT;

XVII. Implementar y mantener operativo el "Cuarto de Control" del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT;

XVIII. Coordinar el desarrollo y operación de los servicios de redes y sus telecomunicaciones asociadas (red local, internet e internet inalámbrico, entre otros);

XIX. Coordinar la prestación de los servicios informáticos, para hacer más eficientes las diversas tareas administrativas que realizan las unidades del Consejo;

XX. Planear y dirigir el desarrollo del servicio de consulta a Bancos de Información (SECOBI), tanto al interior como al exterior del CONACYT;

XXI. Generar y difundir anualmente las estadísticas e Indicadores de las Actividades Científicas y Tecnológicas para proporcionar a la comunidad científica y tecnológica un panorama general de la situación y avances de la Ciencia y la Tecnología en el País;

XXII. Participar por parte del CONACYT en la planeación y elaboración de Indicadores estadísticos de ciencia y tecnología en los diferentes ámbitos que se requiera;

XXIII. Coordinar la realización de encuestas para la obtención de información requerida por el CONACYT para la generación y mantenimiento de las bases de datos;

XXIV. Elaborar un informe anual acerca del estado que guarda la ciencia y tecnología en México, el cual será presentado por el Director General al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico;

XXV. Desarrollar estudios en aquellos temas identificados como de soporte para la toma de decisiones públicas y para el diseño de políticas de ciencia y tecnología;

XXVI. Conformar, administrar y actualizar el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT), en coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial y con las demás Direcciones Adjuntas, en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología;

XXVII. Actualizar permanentemente las bases de datos de: Indicadores de Ciencia y Tecnología, del SIICYT, así como las estadísticas sobre los apoyos otorgados a través de los programas sustantivos del CONACYT;

XXVIII. Informar sobre los compromisos presidenciales que establezca el Ejecutivo Federal en materia de ciencia y tecnología;

XXIX. Realizar las actividades pertinentes para presentar la información y los documentos requeridos para la formulación, revisión y adecuación del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XXX. Presentar la información para la preparación del informe anual de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Comité de Dirección del CONACYT;

XXXI. Informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda su respectivo ramo, dando cuenta del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que le corresponda y de los resultados de las acciones previstas, y

XXXII. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el presente Estatuto y las que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

Dirección Adjunta de Ciencia

Artículo 21.- Corresponde a la Dirección Adjunta de Ciencia:

I. Definir, diseñar e implementar los diversos programas de apoyo orientados a promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica en las instituciones tanto públicas como particulares, de educación superior e investigación en el país, con el objeto de aumentar la productividad, la competitividad y el crecimiento económico y social del país;

II. Diseñar, coordinar, evaluar y dar seguimiento a los programas de apoyo a la investigación básica en México, que incidan en el fortalecimiento del posgrado nacional y en la formación y consolidación de Grupos Académicos de Investigación en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con lo establecido en los programas correspondientes de ciencia y tecnología, y el operativo anual;

III. Diseñar coordinar, evaluar y dar seguimiento a los programas de apoyo a la investigación Científica en México, que atiendan las demandas específicas de las diferentes Secretarías de Estado y las Entidades de la Administración Pública Federal, en términos de lo establecido en cada uno de los Fondos Sectoriales constituidos, de acuerdo a los programas correspondientes de Ciencia y Tecnología, y el programa operativo anual;

IV. Conducir la operación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en los términos de los ordenamientos respectivos, para lo cual el Titular de la Dirección Adjunta asumirá el cargo de Secretario Ejecutivo del SNI y propondrá las reglas de operación correspondientes;

V. Promover, coordinar y otorgar los apoyos previstos en los programas bajo su responsabilidad destinados a instituciones públicas o privadas, previamente aprobados por las Instancias de Evaluación correspondientes, así como llevar a cabo el seguimiento, control y evaluación mediante la emisión de los criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos asignados, de su aplicación;

VI. Brindar el apoyo técnico propio de su materia sustantiva para la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología
y en su caso, para los recursos destinados a los Centros Públicos de Investigación;

VII. Apoyar a los consejos o comisiones de evaluación de los diferentes Fondos Sectoriales y Mixtos en la selección y coordinación de los grupos adecuados de expertos que se requieran en términos de la naturaleza y enfoque de las propuestas sometidas en cada convocatoria;

VIII. En coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial y por lo que hace a los Fondos Mixtos y Sectoriales del CONACYT, instrumentar los procesos para la inducción, integración, impacto, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos que concursen;

IX. Apoyar, mediante la emisión de los dictámenes correspondientes, sobre la pertinencia para la creación de nuevos centros de investigación científica, en función de las necesidades
y requerimientos nacionales y en congruencia con los avances de la ciencia a nivel internacional, de manera conjunta con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros
de Investigación;

X. Apoyar al Consejo General en la integración y la coordinación de los diferentes Comités Intersectoriales y de vinculación que en materia de Ciencia se requieran, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología;

XI. Diseñar, coordinar, evaluar y dar seguimiento a los programas de colaboración con las distintas instancias nacionales e internacionales que consideren entre sus principales objetivos el apoyo a la consolidación de los grupos académicos de investigación, incluyendo el establecimiento de asociaciones de largo plazo, de acuerdo a lo establecido en los programas correspondientes de Ciencia y Tecnología, y el programa operativo anual. Se incluyen los Programas de Iniciativa Científica del Milenio, Identificación y Selección de Campos Nuevos, Emergentes y Rezagados, “National Science Foundation” (NSF) y Universidad de California (UC-MEX US), entre otros;

XII. Participar en las actividades de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología en lo que corresponda a la Investigación Científica;

XIII. Participar en la conformación de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación que tendrá por objeto propiciar intercambios en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como formular estudios y programas orientados e incentivar la profesión de investigación
y fomentar la movilidad de dichos grupos;

XIV. Diseñar, evaluar y dar seguimiento a programas específicos de apoyo a la difusión y divulgación del conocimiento que promuevan el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la Investigación Científica y Tecnológica, en coordinación con las Direcciones de Asuntos Internacionales y de Comunicación Social. En particular, promover las publicaciones científicas mexicanas;

XV. Diseñar, coordinar, evaluar y dar seguimiento a los programas de apoyo a la investigación Científica en México, que atiendan las demandas específicas de los gobiernos de las diferentes Entidades Federativas y de los Municipios, en términos de lo establecido en cada uno de los Fondos Mixtos constituidos, de acuerdo a los programas correspondientes de Ciencia y Tecnología, y el programa operativo anual;

XVI. Contribuir a la definición de los criterios y estándares para la creación de nuevos grupos y centros de investigación científica, en función de las necesidades y requerimientos de todas las entidades federativas del País, para promover la descentralización de la investigación y en congruencia con los avances de la ciencia a nivel internacional;

XVII. Apoyar a los investigadores para incorporarse a los sectores académico y/o productivo del País a fin de consolidar grupos de investigación, en colaboración con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XVIII. Promover el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la investigación científica y tecnológica, mediante la implementación de programas específicos de difusión y divulgación del conocimiento, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social;

XIX. Promover, auspiciar y coordinar la constitución de consorcios institucionales, cuyo objetivo sea facilitar el acceso a bancos de datos especializados, bibliotecas electrónicas y servicios hemerográficos, vitales para el desarrollo de las actividades científicas, en las instituciones que conformen la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, en colaboración con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XX. Impulsar la participación de la comunidad académica en la expresión de su opinión, a través del apoyo a las sociedades científicas que fomenten actividades de investigación;

XXI. Apoyar a los investigadores mexicanos, para asegurar su permanencia en el país o su repatriación para incorporarse a los sectores académico y productivo del país;

XXII. Establecer políticas coordinadas entre los diferentes programas que apoyan el fortalecimiento de la infraestructura científica de las instituciones que realizan investigación en el país;

XXIII. Fomentar y coordinar la ejecución de los programas de intercambio nacional e internacional de profesores, investigadores, técnicos y personal especializado, en el área de su competencia;

XXIV. Coordinar con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos institucionales en materia de ciencia, a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología;

XXV. Realizar tareas de evaluación y seguimiento de los proyectos financiados, efectuar estudios y análisis por disciplina de los grupos e instituciones que realizan investigación en el país, así como el diagnóstico de las necesidades y líneas de desarrollo pertinentes, según las propias áreas del conocimiento;

XXVI. Instrumentar las medidas y lineamientos específicos, así como determinar a las instituciones nacionales o extranjeras que realizarán la evaluación de los programas sujetos a su coordinación;

XXVII. Participar en la dictaminación en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación y de Tecnología, respecto de la creación, disolución o cierre de Centros de Investigación del Sector Público Federal;

XXVIII. Participar en la Formulación en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación y de Tecnología y de manera conjunta con las autoridades competentes los planes de carrera de investigadores, que garantice el

óptimo desarrollo científico y tecnológico del país, respetando los derechos laborales adquiridos individual o colectivamente;

XXIX. Apoyar en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Planeación y de Tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en particular en la integración y la coordinación de sus comités para la correcta y oportuna expresión de la comunidad académica del País;

XXX. Apoyar en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, de Tecnología y de Servicios Jurídicos, a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal en sus Esquemas Regulatorios y Funciones de Normalización, Metrología y Certificación de Empresas;

XXXI. Definir y aprobar los lineamientos generales relacionados con el Parque Científico, Espacio Físico en que se aglutinará la infraestructura y equipamientos científicos del más alto nivel, así como el conjunto de los proyectos prioritarios de la ciencia y la tecnología mexicana;

XXXII. Diseñar y operar en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Grupos y Centros de Investigación y de Tecnología, un Sistema Nacional de Estímulos e incentivos a investigadores
y grupos de investigación, respetando los derechos laborales adquiridos individual o colectivamente;

XXXIII. Asesorar en materia de Ciencia y Tecnología a dependencias y entidades de la administración pública federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, así como a los organismos de los sectores social y privado que lo soliciten en las condiciones y sobre las materias que acuerden en cada caso;

XXXIV. Promover la procuración de fondos de fundaciones filantrópicas nacionales e internacionales para el financiamiento de actividades científicas y tecnológicas, y

XXXV. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el presente Estatuto y las que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

Dirección Adjunta de Tecnología

Artículo 22.- Corresponde a la Dirección Adjunta de Tecnología:

I. Fomentar el desarrollo, la innovación y modernización tecnológica de los sectores productivos del país y facilitar la vinculación de éstos con el sector de investigación y/o entre sí mismos, a través de proyectos y programas específicos;

II. Fomentar una mayor articulación de los proyectos de innovación tecnológica entre la industria, los centros de investigación y las instituciones de educación superior, para alcanzar beneficios mutuos, conforme a los objetivos de la política previstos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

III. Dirigir, coordinar y evaluar la ejecución de los proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica, de acuerdo con lo establecido en los programas correspondientes de ciencia y tecnología y el operativo anual;

IV. Coadyuvar al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del país, a través de la concertación y ejecución de proyectos tecnológicos con participación de la iniciativa privada
y desarrollo de herramientas y procesos de gestión tecnológica que tiendan a la consecución de resultados concretos en el incremento de la competitividad empresarial;

V. Procurar una mayor articulación de los proyectos de innovación tecnológica entre la industria, los centros de investigación y las instituciones de educación superior, para alcanzar beneficios mutuos, conforme a los objetivos de la política previstos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología de mediano plazo;

VI. Brindar el apoyo técnico propio de su materia sustantiva para la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología y, en su caso, para los recursos destinados a los Centros Públicos de Investigación;

VII. En coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial y por lo que hace a los Fondos Mixtos y Sectoriales del CONACYT, instrumentar los procesos para la inducción, integración, impacto, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos que concursen;

VIII. Coordinar con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos institucionales en materia de tecnología, a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología;

IX. Promover y asesorar técnicamente al sector productivo sobre las necesidades de la creación de empresas de asistencia tecnológica, en atención a los requerimientos nacionales y a través de un mayor impulso a los centros e institutos de investigación aplicada e innovación tecnológica, tanto públicos como privados;

X. Apoyar al Consejo General en la integración y la coordinación de los diferentes Comités Intersectoriales y de vinculación que en materia de tecnología se requieran, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología;

XI. Promover y difundir al sector productivo del país los resultados y aplicaciones específicas de los proyectos de investigación e innovación tecnológica, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social;

XII. Participar en la conformación de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación que tendrá por objeto propiciar intercambios en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como formular estudios y programas orientados e incentivar la profesión de investigación y fomentar la movilidad de dichos grupos;

XIII. Promover y coordinar los esfuerzos de colaboración conjunta para el diseño y ejecución de acciones e instrumentos de impacto tecnológico con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan atribuciones relacionadas con el proceso de investigación, innovación, desarrollo y modernización tecnológica de la Planta Productiva Nacional;

XIV. Colaborar con el sector privado para la identificación de necesidades y oportunidades tecnológicas con el fin de adecuar los instrumentos de apoyo para responder mejor a las circunstancias del empresariado nacional;

XV. Establecer, coordinar y controlar el Registro de Consultores Tecnológicos que permita proporcionar asesoría, gestión tecnológica, asistencia técnica y seguimiento a los proyectos financiados por el CONACYT;

XVI. Coordinar y supervisar la aplicación del estímulo fiscal a la investigación científica y tecnológica a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente y establecer los criterios y parámetros de evaluación de recursos federales por concepto de estímulos fiscales en materia de ciencia y tecnología;

XVII. Apoyar a los Consejos o Comisiones de Evaluación de los diferentes Fondos Sectoriales y Mixtos en la selección y coordinación en los grupos adecuados de expertos que se requieran en términos de la naturaleza y enfoque de las propuestas sometidas en cada convocatoria;

XVIII. Promover el RENIECYT ante los sectores productivos del país, así como proponer los criterios de clasificación y categorización aplicables, en coordinación con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos;

XIX. Apoyar en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, de Tecnología y de Servicios Jurídicos, a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal en sus Esquemas Regulatorios y Funciones de Normalización, Metrología, Propiedad Intelectual y Certificación de Empresas;

XX. Participar en el diseño y operación en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Grupos
y Centros de Investigación y de Ciencia, un Sistema Nacional de Estímulos e Incentivos a Investigadores y Grupos de Investigación, respetando los derechos laborales adquiridos individual o colectivamente;

XXI. Participar en colaboración con las Direcciones Adjuntas de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación y de Ciencia, para la expedición de las Reglas de Operación del Sistema Nacional de Investigadores;

XXII. Participar en la dictaminación en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación y de Ciencia, la creación, disolución o cierre de Centros
de Investigación del Sector Público Federal;

XXIII. Promover en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación y de Ciencia, la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación;

XXIV. Participar en la Formulación en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación y de Ciencia y de manera conjunta con las autoridades competentes los planes de carrera de investigadores, que garanticen el óptimo desarrollo de la ciencia y la tecnología del país y respetando los derechos laborales adquiridos individual o colectivamente;

XXV. Regular de manera coordinada con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos, en los contratos de proyectos apoyados por CONACYT, las reglas y porcentajes para la participación de regalías;

XXVI. Realizar estudios y formular, en coordinación con la Dirección Adjunta de Planeación, políticas en materia tecnológica;

XXVII. Promover y asesorar iniciativas para la creación de empresas de alto valor agregado a partir de conocimiento científico y avances tecnológicos;

XXVIII. Fomentar el diseño, promoción, constitución, operación, evaluación y control de mecanismos financieros que favorezcan el desarrollo tecnológico de los sectores productivos;

XXIX. Crear, con la participación de empresas y otros actores, modelos replicables de negocio basados en innovación y/o desarrollo tecnológico;

XXX. Estructurar y operar redes institucionales y profesionales incorporando cámaras industriales, gremios profesionales, agentes tecnológicos, centros de investigación y desarrollo tecnológico, instituciones de educación superior, entre otros, para el apoyo de la difusión de la cultura tecnológica y esquemas de apoyo al sector empresarial;

XXXI. Promover la incorporación de contenidos y de programas de estudios en materia de administración y gestión tecnológica en instituciones de educación tanto públicas como privadas;

XXXII. Planear, coordinar y conducir, en coordinación con la Dirección de Asuntos Internacionales, las actividades en el ámbito de cooperación tecnológica internacional

dentro de redes, programas y organismos públicos y privados de forma bilateral o multilateral;

XXXIII. Promover y orientar la inversión extranjera para la instalación de capacidades tecnológicas en México, ello incluye el establecimiento de centros de ingeniería y diseño, así como centros de investigación y desarrollo tecnológico;

XXXIV. Participar, en coordinación con las demás Direcciones Adjuntas en proyectos de carácter institucional, así como diseñar y formular normas y procedimientos internos en el ámbito de su competencia;

XXXV. Administrar y operar los programas vigentes de Fondos Tecnológicos de Crédito, así como la recuperación de la cartera vencida y el finiquito de los proyectos;

XXXVI. Establecer posición, de manera coordinada con las Direcciones Adjuntas competentes, en cuanto a los términos de transferencia y participación de los resultados de proyectos apoyados por CONACYT;

XXXVII. Apoyar en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Planeación y de Ciencia, el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, en particular para la integración y coordinación de sus Comités, para la correcta y oportuna expresión de la Comunidad Tecnológica y del Sector Productivo del país, y

XXXVIII. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el presente Estatuto y las demás que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

Dirección Adjunta de Formación de Científicos y Tecnólogos

Artículo 23.- A la Dirección Adjunta de Formación de Científicos y Tecnólogos corresponde:

I. Fomentar la formación de los nuevos cuadros de científicos y tecnólogos que demandan las instituciones de educación superior e investigación, así como los centros de investigación y desarrollo tecnológico del país, tanto públicos como privados;

II. Establecer las políticas para formular y conducir el Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Consolidación de Científicos, Tecnólogos y Recursos Humanos de Alto Nivel del CONACYT;

III. Instrumentar, conducir y divulgar, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional;

IV. Evaluar, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, la calidad académica de los Programas de Posgrado que ofrecen las Instituciones de Educación Superior nacionales, en el marco del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional;

V. Administrar todos los procesos y modalidades relativos a los apoyos económicos para formación de recursos humanos, desde la asignación de los mismos hasta su bonificación o recuperación, en los términos previstos en el Reglamento que para el efecto se emita;

VI. Establecer y operar un Sistema de Seguimiento Académico para mantener una mayor comunicación con las Instituciones de Educación Superior y los becarios que se encuentren realizando estudios en el extranjero en el marco del Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Consolidación de Científicos, Tecnólogos y Recursos Humanos de Alto Nivel del CONACYT, así como de aquellos estudiantes que concluyeron sus estudios;

VII. Brindar la asesoría necesaria en materia de Fomento, Formación, Desarrollo y Consolidación de Científicos, Tecnólogos y Recursos Humanos de Alto Nivel a la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, para la constitución, operación,

funcionamiento, evaluación y control de los fondos regulados por la Ley de Ciencia y Tecnología y, en su caso, para los recursos destinados a los Centros Públicos de Investigación;

VIII. En coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial y por lo que hace a los Fondos Mixtos y Sectoriales del CONACYT, instrumentar los procesos para la inducción, integración, impacto, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos que concursen;

IX. Coordinar con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos institucionales en materia de Fomento, Formación, Desarrollo y Consolidación de Científicos, Tecnólogos y Recursos Humanos de Alto Nivel, a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología;

X. Coordinar el establecimiento y funcionamiento de los Comités de Evaluación del Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Consolidación de Científicos, Tecnólogos y Recursos Humanos de Alto Nivel del CONACYT, en los términos del presente ordenamiento; análogamente, y de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública, los Comités de Evaluación del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional;

XI. Instrumentar y regular las convocatorias que deriven del Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Consolidación de Científicos, Tecnólogos y Recursos Humanos de Alto Nivel, a partir de los convenios que celebre el CONACYT, para realizar estudios tanto en el país como en el extranjero;

XII. Promover, a nivel nacional e internacional en coordinación con la Dirección de Asuntos Internacionales, la divulgación del Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Consolidación de Científicos, Tecnólogos y Recursos Humanos de Alto Nivel, en el que se potencien los beneficios derivados de las convocatorias y de los convenios nacionales e internacionales que suscriba el CONACYT, con el propósito de lograr su óptimo aprovechamiento;

XIII. Apoyar al Consejo General en la integración y coordinación de los diferentes Comités Intersectoriales y de vinculación que en materia de Ciencia se requieran, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología;

XIV. Elaborar e instrumentar el Programa de Jóvenes Investigadores, con el objeto de potenciar el desarrollo de los mismos dentro del Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación,
el Desarrollo y la Consolidación de Científicos, Tecnólogos y Recursos Humanos de Alto Nivel del CONACYT;

XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario de recursos humanos especializados en investigación científica e innovación tecnológica;

XVI. Expedir la regulación interna en todo lo relativo a las funciones de su competencia e interpretar la misma, incluyendo la generada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del CONACYT, así como resolver los casos no previstos en materia de apoyos para la Formación de Recursos Humanos en sus diferentes etapas y modalidades;

XVII. Apoyar a los Consejos o Comisiones de Evaluación de los diferentes Fondos Sectoriales y Mixtos en la selección y coordinación de los grupos adecuados de expertos que se requieran en términos de la naturaleza y enfoque de las propuestas sometidas en cada convocatoria;

XVIII. Fomentar programas de formación de recursos humanos en coordinación con las demás áreas del CONACYT, con las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal y Empresas, tanto Nacionales como Extranjeras;

XIX. Recabar sistemáticamente información sobre el Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Consolidación de Científicos, Tecnólogos y Recursos

Humanos de Alto Nivel del CONACYT, a fin de evaluar su impacto en la formación de científicos y tecnólogos, a través del análisis de su evolución y resultados, y

XX. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el presente Estatuto y las que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial

Artículo 24.- A la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial le corresponde:

I. Promover, fortalecer y consolidar a nivel regional y sectorial el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como instrumentar las políticas de descentralización y desconcentración del CONACYT, para coadyuvar al desarrollo socioeconómico de las Entidades Federativas y los sectores de la Administración Pública Federal, con la participación de los sectores público, académico y productivo mediante las Direcciones de área y las Direcciones Regionales;

II. Promover y concertar los fondos sectoriales y mixtos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología, emitiendo para ello los lineamientos, bases, convocatorias, convenios, contratos
y demás instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para el desarrollo adecuado de los mismos;

III. Dirigir, coordinar y evaluar la política científica y tecnológica dentro del ámbito de las Direcciones de Area y Direcciones Regionales de acuerdo con lo establecido en los programas de ciencia y tecnología y el operativo anual;

IV. Establecer los procedimientos de concertación entre el CONACYT, los sectores de la Administración Pública Federal y las instancias estatales dedicadas a promover y fomentar el desarrollo científico y tecnológico para la ejecución de los programas correspondientes;

V. Establecer los lineamientos de operación y seguimiento del desempeño de las Direcciones de Area y Direcciones Regionales, y la coordinación de los apoyos otorgados a través de los Fondos Mixtos y Sectoriales con las Dependencias Federales participantes, y las demás Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal;

VI. Coordinar, por medio de los Secretarios Técnicos de cada uno de los Fideicomisos relativos a los Fondos Sectoriales y Mixtos, regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología, la instrumentación de los procesos llevados a cabo por las Direcciones Adjuntas y Direcciones adscritas a la Dirección General para la inducción, integración, seguimiento, impacto, evaluación y rendición de cuentas de los proyectos que concursen en dichos Fondos;

VII. Coordinar con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos institucionales a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología;

VIII. Coordinar y fomentar el fortalecimiento de las Direcciones Regionales como oficinas de administración desconcentrada del CONACYT;

IX. Promover e impulsar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas conforme a las políticas que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

X. Participar con las dependencias y gobiernos estatales que correspondan, en la coordinación del proceso, seguimiento, control y evaluación de los Sistemas de Innovación Regionales;

XI. Proponer la concertación de acciones con los gobiernos de los estados y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas, sectoriales y locales, así como la

integración de acciones encaminadas a la vinculación con los distintos sectores de la sociedad;

XII. Coadyuvar en la administración y actualización del Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y Tecnológica, en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios así como con las Universidades e Instituciones de Educación Superior a nivel Regional y con las Dependencias y Entidades a Nivel Sectorial, en coordinación con la Dirección Adjunta de Planeación;

XIII. Realizar estudios sobre desarrollo regional en sus vertientes de federalismo y regionalización;

XIV. Promover a nivel regional y sectorial el Registro Nacional de Instituciones de Empresas Científicas y Tecnológicas, en coordinación con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos;

XV. Coordinar el registro de integrantes y mantenerlo actualizado, de los Comités Técnico y de Administración de Fondos de los Fondos Mixtos y Sectoriales;

XVI. Coordinar en el ámbito de su competencia y con el apoyo de las Unidades Administrativas del CONACYT, a los Secretarios Técnicos de los Fondos Sectoriales y Mixtos;

XVII. Asesorar a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal, a los Gobiernos Estatales, a los Municipios en coordinación con demás Direcciones Adjuntas del CONACYT en asuntos de ciencia y tecnología, por los medios legales procedentes;

XVIII. Dirigir la integración, operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica, conformado por las Comisiones de Evaluación de los Fondos CONACYT, los Comités de Acreditación y el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Ciencia, Tecnología, de Formación de Científicos y Tecnólogos y Planeación;

XIX. Promover la creación, organización, funcionamiento, evaluación e impacto de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, proponiendo para ello las bases de su funcionamiento al Pleno de la Conferencia, previo acuerdo del Director General de CONACYT;

XX. Promover y Coordinar con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios el establecimiento, organización, operación y evaluación de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología, que tengan por objeto regular los apoyos que el Gobierno del Estado debe proporcionar para desarrollar, fortalecer y fomentar la investigación científica y tecnológica en el Estado, conforme lo establece la fracción V del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los objetivos que se propongan al Pleno de la Conferencia Nacional;

XXI. Promover la relación directa con los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, sin perjuicio de la relación establecida a través de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología;

XXII. Coordinar y controlar la administración financiera de los Fondos Mixtos y Sectoriales, previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, y

XXIII. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el presente Estatuto y las que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación

Artículo 25.- A la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación le corresponde:

I. Proponer al Director General los lineamientos y bases a las que se sujetará la gestión de la coordinación sectorial con los Centros Coordinados por el CONACYT, considerando su objeto, así como sus respectivos programas estratégicos de mediano plazo;

II. Proponer al Director General las políticas de desarrollo para que los Centros coordinados por el CONACYT, integrantes del sector cumplan con eficiencia, eficacia y productividad su objeto;

III. Conformar la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y alentar la integración de redes de cooperación e intercambio académico entre las instituciones de educación superior, y los centros de investigación;

IV. Apoyar la consolidación de grupos de investigación y de especialistas en las áreas estratégicas del conocimiento;

V. Incrementar el apoyo destinado a promover la creación de comunidades científicas en áreas específicas y su capacidad para transferir tecnología a las empresas;

VI. Proponer, dirigir, coordinar e implantar la política científica-tecnológica de los Centros de Investigación, de acuerdo con lo establecido en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología y el operativo anual;

VII. Promover, en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Ciencia y de Tecnología, la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación;

VIII. Promover y establecer lineamientos para la participación de los Centros agrupados en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación que establece la Ley de Ciencia y Tecnología, con el objeto de crear sinergias, potenciar programas, optimizar recursos y lograr una mayor vinculación para mejorar resultados y eficientar la operación en su conjunto, así como para concentrar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional;

IX. Promover la creación de centros públicos y privados de investigación científica y tecnológica, particularmente en áreas aún no cubiertas y fortalecer los existentes para incrementar la competitividad y la innovación tecnológica de las empresas;

X. Elaborar los estudios necesarios para opinar sobre la creación, transformación, disolución, liquidación, fusión, extinción o enajenación de las entidades paraestatales o de su participación estatal correspondiente, en el ámbito de su competencia, así como para recomendar la forma y términos para realizar lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones jurídicas aplicables así como criterios y normas emitidas por la SHCP;

XI. Promover la creación de empresas de base tecnológica a partir de los productos, servicios y tecnologías desarrollados por centros públicos de investigación;

XII. Asegurar que el CONACYT tenga la representación como Consejero y Secretario en los Organos de Gobierno de los Centros de Investigación, coordinados por este Consejo y que sus miembros representantes cuenten con la información y documentación necesarias para su participación;

XIII. Participar como Consejero y en representación del CONACYT en los Organos de Gobierno de otros Centros de Investigación y diversas dependencias y entidades y organizaciones privadas, y en Comités Técnicos y Comisiones;

XIV. Coordinar el desarrollo de las sesiones ordinarias o extraordinarias de las Asambleas Generales y de los Organos de Gobierno de los Centros del Sistema CONACYT, así como la conformación de dichos cuerpos colegiados;

XV. Coordinar la Presidencia y Secretariado en las sesiones de Organos de Gobierno de los Centros del Sistema CONACYT, de acuerdo con las designaciones y directrices de la Dirección General;

XVI. Participar, en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Dirección Adjunta de Planeación, en el establecimiento de

requisitos mínimos que deberán cumplir las instituciones académica y de investigación u organismos especializados de carácter nacional o internacional para realizar la evaluación de los resultados de los programas gubernamentales en ciencia y tecnología relativos al ejercicio fiscal correspondiente;

XVII. Promover, coordinar y evaluar el Sistema de Centros CONACYT, a fin de fortalecer y optimizar la actividad científica y tecnológica y apoyar su contribución e impacto en la solución de problemas sociales, industriales y públicos; así como impulsar el desarrollo e implantación de las mejores prácticas organizacionales en el Sistema;

XVIII. Establecer indicadores de desempeño, objetivos y metas para los Centros de Investigación CONACYT y evaluar los resultados y la calidad de los productos científicos, tecnológicos, de vinculación y de formación de recursos humanos, implantando un sistema uniforme de evaluación del desempeño que defina indicadores para medir el impacto de las actividades de los centros de investigación, en los sectores social y productivo, a través de comités de pares (Comités de Evaluación Externos);

XIX. Coordinar, concertar, dar seguimiento y apoyar el desarrollo de las sesiones ordinarias o extraordinarias de las Comisiones Dictaminadoras Externas para el ingreso, promoción y permanencia del personal científico y tecnológico de los Centros Públicos de Investigación;

XX. Apoyar, en coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial, y por lo que hace a los Fondos CONACYT, la instrumentación de los procesos para evaluar la inducción, integración, impacto, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos que concursen;

XXI. Brindar apoyo técnico para la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología y, en su caso, para los fondos de investigación de los Centros Públicos de Investigación y para los recursos destinados a dichos Centros;

XXII. Coordinar con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos institucionales en materia de ciencia y tecnología, a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología;

XXIII. Proponer los lineamientos de política y proveer lo conducente para la elaboración de los convenios de desempeño, donde se establezcan las bases correspondientes, así como asegurar que los citados convenios de las Entidades Sectorizadas se sometan a la consideración y autorización del Organo de Gobierno de dicha entidad, y ser el conducto para obtener la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Asimismo gestionar la suscripción de los referidos convenios, por parte del CONACYT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXIV. Determinar los mecanismos pertinentes para la revisión anual de los convenios de desempeño, así como para asegurar que los centros públicos presenten, la información del ejercicio fiscal correspondiente;

XXV. Establecer, los mecanismos y procedimientos que permitan al CONACYT conocer y verificar periódicamente que las entidades sectorizadas realizan y ejecutan sus programas anuales y presupuestos en congruencia con los objetivos y prioridades del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, así como adoptar o recomendar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas;

XXVI. Ejercer las atribuciones de coordinación y orientación de las acciones de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto de las entidades sectorizadas, en la esfera de su competencia, emitir la conformidad por parte del CONACYT sobre las propuestas de gasto público que realicen las entidades correspondientes para elaborar el anteproyecto de presupuesto y sus modificaciones, aprobar la información general y datos estadísticos que se envíen a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público y, en su caso, al Congreso de la Unión, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y sus disposiciones administrativas;

XXVII. Asegurar la óptima ministración de los recursos que otorga el Gobierno Federal para el desarrollo de las actividades de los Centros coordinados por el CONACYT;

XXVIII. Aprobar los lineamientos específicos a que se sujetará la formulación de los presupuestos de las entidades del sector, en congruencia con los lineamientos generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como comunicar los mismos a los titulares de las Entidades Paraestatales coordinadas;

XXIX. Aprobar los mecanismos de verificación periódica de los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las entidades y su congruencia con los objetivos y prioridades del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, y ordenar las medidas que habrán de adoptarse para corregir las desviaciones detectadas o, en su caso, reformar los programas y presupuestos respectivos;

XXX. Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su conformidad, si ésta no se emitió en la revisión del Organo de Gobierno, los anteproyectos de presupuesto de gasto financiamiento aprobados por el mismo, dentro de las Entidades Sectorizadas, con el fin de que se integren al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

XXXI. Orientar y supervisar las actividades relativas a la programación, presupuestación y evaluación del gasto, y de los resultados de las entidades paraestatales bajo su coordinación;

XXXII. Actualizar la base de datos estadísticos de los centros públicos de investigación;

XXXIII. Participar en el establecimiento y mantenimiento del SIICYT, en coordinación con la Dirección Adjunta de Planeación;

XXXIV. Promover la inscripción al RENIECYT de los Centros Públicos de Investigación en coordinación con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos;

XXXV. Participar y promover la gestión de las Instituciones de investigación interesadas en obtener su reconocimiento como Centro Público de Investigación;

XXXVI. Conformar el catálogo de proyectos comercializables del Sistema Centros Públicos CONACYT;

XXXVII. Determinar de manera conjunta con los Centros Públicos de Investigación el destino de los recursos autogenerados por éstos;

XXXVIII. Establecer un plan nacional de carrera y un sistema de compensaciones de investigadores que faciliten la movilidad interinstitucional, en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Ciencia y de Tecnología, respetando los derechos laborales adquiridos individual o colectivamente;

XXXIX. Participar en el diseño y operación en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Ciencia y de Tecnología, de un Sistema Nacional de Estímulos e incentivos a investigadores y grupos de investigación, respetando los derechos laborales adquiridos individual o colectivamente;

XL. Apoyar al Consejo General en la integración y la coordinación de los diferentes Comités Intersectoriales y de vinculación que en materia de Ciencia se requieran, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología;

XLI. Participar en colaboración con las Direcciones Adjuntas de Ciencia y de Tecnología, para la expedición de las Reglas de Operación del Sistema Nacional de Investigadores;

XLII. Coordinar las actividades de las entidades sectorizadas para asegurar su participación y la presentación de sus propuestas en la elaboración, revisión, adecuación y ejecución del Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

XLIII. Remitir a la SHCP para su autorización la solicitud de movimientos a las estructuras orgánicas y ocupacionales, así como de personal operativo que realicen las entidades coordinadas, en coordinación con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas;

XLIV. En coordinación con la SHCP y la SECODAM hará compatibles los requerimientos de información que se demanden a las entidades coordinadas, racionalizando los flujos de información, en coordinación con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas;

XLV. Captar, analizar, integrar, validar y remitir a la SHCP y SECODAM la información de las entidades coordinadas, así como la documentación que le fuere solicitada, en coordinación con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas;

XLVI. Aprobar y hacer llegar a la SHCP la información mensual, bimensual, trimestral y otras que le solicite esta última a las entidades coordinadas, en coordinación con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas;

XLVII. Captar y validar la información que sus entidades coordinadas, deban remitir a la SHCP y, en su caso, determinar las posibles causas y efectos de desviaciones proponiendo las medidas correctivas necesarias, en coordinación con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas;

XLVIII. Dar a conocer a sus entidades coordinadas; la forma, términos y periodicidad conforme a las cuales deberán proporcionarle información contable, financiera, presupuestaria, programática y económica, en coordinación con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas;

XLIX. Aprobar y hacer llegar a la SHCP la información de las entidades coordinadas, para la formulación de la cuenta pública, en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Administración y Finanzas y de Planeación;

L. Informar a la SHCP en un plazo no mayor de 30 días naturales, una vez concluido el proceso de desincorporación de una entidad;

LI. Dar a conocer a la SECODAM irregularidades de las entidades coordinadas, que por su naturaleza e importancia impliquen un grave daño o perjuicio de urgente reparación, en coordinación con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos;

LII. Dar a conocer a la SHCP, las responsabilidades de las entidades coordinadas, que afecten a la Hacienda Pública Federal y al Patrimonio de las entidades derivadas del incumplimiento de la Ley, en coordinación con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos;

LIII. Consolidar la información relativa a la contratación por parte de las entidades coordinadas de los servicios de consultoría, asesorías y estudios, en coordinación con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas;

LIV. Proponer y, previa aprobación, designar a las personas y servidores públicos, así como coordinar con ellos las actividades inherentes a su designación, y proporcionarles la asistencia y el apoyo técnico requerido, cuando deban ejercer las atribuciones que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria o entidades asimiladas a ese régimen;

LV. Determinar las cuestiones que considere pertinentes para la revisión anual de los convenios de desempeño, así como asegurar que los Centros Públicos rindan al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente, la información relativa a los Convenios de Desempeño suscritos;

LVI. Proveer por sí o a través de los miembros representantes del CONACYT, lo conducente ante los Organos de Gobierno y Administración de las entidades sectorizadas, para la oportuna elaboración de los programas anuales y los presupuestos para la ejecución del Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

LVII. Establecer, con la participación de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas y el Director General de la entidad correspondiente, los mecanismos y procedimientos que

permiten al CONACYT conocer y verificar periódicamente que las entidades sectorizadas realizan y ejecutan sus programas anuales y presupuestos en congruencia con los objetivos y prioridades del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, así como adoptar o recomendar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas;

LVIII. Recomendar, por sí o a través del representante del CONACYT en el Organo de Gobierno de las entidades sectorizadas, mediante su participación en las sesiones de éste, medidas adicionales sobre los sistemas establecidos por el titular de la respectiva entidad en materia de control, y

LIX. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el presente Estatuto y las que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

Dirección Adjunta de Administración y Finanzas

Artículo 26.- A la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas le corresponde:

I. Administrar los recursos eficientemente para satisfacer las necesidades de las diferentes unidades del CONACYT, promover una cultura de servicio y coadyuvar al logro de los objetivos institucionales;

II. Coordinar e instrumentar los Fondos Institucionales a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología;

III. Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Consejo y de las entidades sectorizadas para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

IV. De manera conjunta con la Dirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación dirigir los procedimientos y términos en que deberán proporcionar las Entidades Paraestatales coordinadas por el CONACYT la información programática y presupuestal requerida para cumplir con las obligaciones en materia presupuestal;

V. Apoyar al Consejo General en la integración y la coordinación de los diferentes Comités Intersectoriales y de vinculación que en materia de Ciencia se requieran, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología;

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de las normas por las entidades sectorizadas, para la elaboración, evaluación, revisión y adecuación de los programas y presupuestos anuales;

VII. Brindar el apoyo técnico propio de su materia sustantiva para la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los diferentes Comités Intersectoriales y de vinculación;

VIII. Planear, coordinar y facilitar la elaboración, aprobación y publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, en coordinación con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos, de las Reglas de Operación e Indicadores para Programas del CONACYT que otorgan apoyos económicos, así como el respectivo seguimiento y evaluación;

IX. Participar de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la consolidación del ramo presupuestal en Ciencia y Tecnología, en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Administración y Finanzas y de Coordinación de Grupos y Centros
de Investigación;

X. Revisar y analizar en colaboración con las Direcciones Adjuntas de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación y de Planeación y de manera conjunta con la SHCP, el Proyecto de Programa y Presupuesto de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal Materia de Ciencia y Tecnología;

XI. Participar en coordinación con la Dirección Adjunta de Planeación en la propuesta de prioridades, lineamientos y criterios de asignación del gasto federal en materia de ciencia y tecnología, incluyendo el ramo presupuestal CONACYT;

XII. Llevar el registro presupuestal y contable del ejercicio de las transferencias autorizadas a las entidades paraestatales coordinadas y elaborar el informe que se debe proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su inclusión en la Cuenta Pública;

XIII. Analizar e integrar para su inclusión en la Cuenta de la Hacienda Pública la información que corresponda al CONACYT y a las entidades de su sector;

XIV. Coordinar y evaluar la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros del CONACYT, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presente Estatuto y los demás ordenamientos aplicables;

XV. Establecer la política financiera del CONACYT y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables;

XVI. Administrar el patrimonio del CONACYT de conformidad con los lineamientos que reciba del Director General y las disposiciones legales respectivas;

XVII. Programar, coordinar, controlar y evaluar los recursos asignados al CONACYT para el desarrollo de los programas, con base en el Programa Operativo Anual, en el cual se definen proyectos, metas, tiempos de ejecución, responsables y montos a ejercer, para la consecución de los objetivos institucionales del Consejo;

XVIII. Establecer el programa de trabajo a que deberá sujetarse la formulación del anteproyecto de presupuesto del CONACYT, en función de los programas institucionales y de acuerdo con las directrices y lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XIX. Establecer los procedimientos necesarios para la eficiente operación de las finanzas del CONACYT y gestionar ante las instancias correspondientes, la autorización del presupuesto integral del mismo, así como las ampliaciones y transferencias que durante su ejercicio se requieran;

XX. Mantener de manera permanente relación con las unidades operativas de las dependencias globalizadoras, para cumplir oportunamente con las disposiciones administrativas en las gestiones y trámites de los asuntos de su competencia;

XXI. Coordinar la presentación de los estados financieros, información contable y presupuestal ante la Junta de Gobierno del CONACYT y las Dependencias globalizadoras;

XXII. Suplir al Director General en la Presidencia del Comité de Control y Auditoría de la Institución, previa designación y acreditación;

XXIII. Coordinar el Comité de Apoyos Especiales del CONACYT, así como el Comité de Cancelación de Adeudos, donde designará al Secretario Técnico;

XXIV. Controlar y dar seguimiento financiero a los Fideicomisos de apoyo a las actividades del CONACYT, así como instrumentar los mecanismos de inversión en el mercado de dinero, sujetos a la legislación del mercado de valores, banca, títulos, operaciones de crédito y actividades conexas;

XXV. Atender las necesidades administrativas relacionadas con los recursos financieros, materiales y humanos de las áreas que integran la estructura orgánica del CONACYT;

XXVI. Promover, coordinar y supervisar el desarrollo del proceso de modernización administrativa de innovación gubernamental del CONACYT a través de la descentralización, desconcentración, delegación y simplificación administrativa;

XXVII. Administrar las cuentas de Ciencia, Tecnología, Formación de Científicos y Tecnólogos y Divulgación, establecidas para la operación adecuada de los Programas Institucionales y los Fondos CONACYT;

XXVIII. Administrar, con base en los ordenamientos vigentes establecidos para la Administración Pública Federal, las políticas y lineamientos establecidos por la Dirección General para la expedición de nombramientos, remociones y demás movimientos del personal del CONACYT, así como lo relativo a sus remuneraciones;

XXIX. Propiciar el óptimo aprovechamiento del recurso humano y fomentar el desarrollo personal de los servidores públicos a través de su profesionalización, mediante el otorgamiento de apoyos administrativos, con el propósito de obtener un desempeño laboral eficiente;

XXX. Iniciar y coordinar, conforme a la legislación vigente, el establecimiento y la administración de los programas internos de racionalidad del gasto público, protección civil y capacitación del personal para el mejoramiento de las condiciones laborales, económicas, sociales y culturales, con el fin de lograr un mejor desempeño en sus actividades dentro del CONACYT;

XXXI. Elaborar y expedir, previa aprobación del Director General, los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios del CONACYT;

XXXII. Vigilar el debido cumplimiento y respeto de las Condiciones Generales de Trabajo, así como el otorgamiento de las prestaciones autorizadas y adoptar las medidas conducentes que para tal efecto se requieran, así como dictaminar la procedencia para transigir los asuntos laborales en los que el CONACYT haya sido demandado;

XXXIII. Instrumentar los actos jurídicos y administrativos que corresponderían al Director General para la ejecución de las resoluciones dictadas por el Organo Interno de Control, en cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en coordinación con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos;

XXXIV. Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Programa de Mejora Regulatoria del CONACYT cada dos años, con relación a la normatividad y trámites que aplica la institución, para propiciar la transparencia en la gestión pública;

XXXV. Brindar el apoyo técnico propio de su materia sustantiva para la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología y, en su caso, para los recursos destinados a los Centros Públicos de Investigación;

XXXVI. En coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial y por lo que hace a los Fondos Mixtos y Sectoriales del CONACYT, instrumentar los procesos para la inducción, integración, impacto, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos
que concursen;

XXXVII. Coordinar la modificación o extinción de los fondos existentes en el CONACYT que opere con carácter o no de fideicomitente de conformidad con lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología;

XXXVIII. Coordinar y controlar la administración financiera de los Fondos Institucionales y los de Cooperación Internacional, previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, en el caso de los segundos, en coordinación con la Dirección de Asuntos Internacionales;

XXXIX. Integrar las propuestas de calendarios de presupuesto conforme a los lineamientos que emita la SHCP para la calendarización del Presupuesto de Egresos de la Federación y las enviarán a ésta para su aprobación, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XL. Analizar la información referente al cumplimiento del avance programático y presupuestario, así como al ejercicio real de los flujos presupuestarios y financieros, previamente a la elaboración de la cuenta por liquidar certificada para la ministración de subsidios y transferencias, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XLI. Informar a la SHCP, entre el primer día hábil de enero y el último día hábil de noviembre sobre los oficios de liberación de inversión y/o sus modificaciones, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su autorización, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XLII. Presentar las solicitudes de adecuaciones presupuestarias externas de las entidades coordinadas a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XLIII. Dar su opinión a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales sobre las solicitudes de adecuaciones presupuestarias externas de las entidades coordinadas, para efectos de su autorización, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XLIV. Informar mensualmente a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales de la SHCP, las adecuaciones internas de la entidad coordinada, remitiendo el flujo de efectivo ajustado, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XLV. Remitir a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales de la SHCP, en la forma y términos, establecidos en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, las fuentes e instrumentos de financiamiento que se prevea utilizar y demás términos y condiciones financieras, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XLVI. Presentar informe de pasivos circulante con las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto Sectoriales de la SHCP, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XLVII. Incluir en sus presupuestos los subsidios y transferencias que otorguen directamente a sus entidades coordinadas, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XLVIII. Asegurar que las entidades sectorizadas, cumplan las normas para la elaboración, evaluación, revisión y adecuación de los programas y presupuestos anuales, y

XLIX. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el presente Estatuto y las que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos

Artículo 27.- A la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos le corresponde:

I. Brindar apoyo técnico jurídico al Director General y a todas las áreas del CONACYT en aquellos asuntos que le sean encomendados, sin perjuicio de la competencia de otras dependencias;

II. Participar conjuntamente con las demás áreas del CONACYT en la actualización y simplificación del orden normativo jurídico;

III. Representar al Director General, en materia de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 19 de la Ley de Amparo y, en todos aquellos procesos, actos, procedimientos, incidencias, recursos y actuaciones judiciales o administrativas; así como, asesorar y brindar la asistencia técnica en los juicios en los que los titulares de las áreas correspondientes intervengan con cualquier carácter en el ámbito de su competencia;

IV. Brindar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o a la Dependencia que represente al Presidente de la República, los elementos técnicos y jurídicos para facilitar la presentación de informes y actuaciones, en su caso, en materia de amparo, de conformidad con lo

establecido por los Artículos 14, 16 y 43 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 19 de la Ley de Amparo;

V. Expedir las certificaciones de los documentos que obren en sus archivos y brindar el apoyo a cualquiera de las Unidades Administrativas del CONACYT, para ese efecto;

VI. Elaborar los proyectos y, en su caso, difundir las Interpretaciones Administrativas que deriven de la Ley de Ciencia y Tecnología;

VII. Resolver los recursos administrativos de cualquier tipo que se interpongan en contra del CONACYT, así como los que deriven de las diferentes áreas integrantes del Consejo, en el ámbito de su competencia;

VIII. Regular de manera conjunta con la Dirección Adjunta de Tecnología, dentro de los contratos de los proyectos apoyados por CONACYT, las reglas y porcentajes para la participación de regalías;

IX. Establecer de manera coordinada con las Direcciones Adjuntas de Ciencia, Tecnología y Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, los esquemas regulatorios que servirán de apoyo a las Dependencias relativas a la normalización metrología y certificación de empresas, sin perjuicio de las facultades que en la materia tengan asignadas algunas otras Dependencias o Entidades;

X. Fungir como Secretario de la Junta de Gobierno del CONACYT y de su Comisión Asesora previa propuesta del Director General y nombramiento del Organo de Gobierno, en su caso y coordinar operativamente las atribuciones y funciones de la Prosecretaria de la Junta de Gobierno y de su Comisión Asesora;

XI. Sancionar los instrumentos jurídicos para firma del Director General, en su caso, así como validar con el signo distintivo correspondiente, los convenios y contratos en que el CONACYT sea parte o intervenga, cuidando en todos los casos que se cuente con la suficiencia presupuestal respectiva;

XII. Dirigir, promover y coordinar la validación, formalización y estandarización de los convenios e instrumentos jurídicos en que participe el CONACYT, incluyendo a los convenios de desempeño que suscribirán los Centros Públicos de Investigación y las contrataciones internacionales;

XIII. Coordinar el registro, guarda y custodia de los contratos, convenios y acuerdos en general que celebre el CONACYT, en cumplimiento de su objeto;

XIV. Dirigir la elaboración e instrumentación de lineamientos preventivos y la atención oportuna y eficaz de los asuntos contenciosos;

XV. Promover lineamientos jurídicos para la cancelación de pasivos, además de dirigir la recuperación de créditos o cantidades en numerario o en especie que pudiera otorgar el CONACYT;

XVI. Dirigir y elaborar, en su caso, la normatividad institucional y corporativa de acuerdo con la legislación aplicable al CONACYT;

XVII. Coordinar la asesoría jurídica y la consulta legal relacionada con los programas sustantivos del CONACYT y su instrumentación;

XVIII. Formular y proponer los criterios de aplicación que el caso amerite de la reglamentación interna del CONACYT aprobada por la Junta de Gobierno, así como de los ordenamientos internos emitidos por el Director General;

XIX. Dirigir la prestación de los servicios de comercio exterior y de Despacho Aduanal y actividades de apoyo a la investigación científica y tecnológica, pudiendo fungir como Apoderado Aduanal del CONACYT, así como Apoderado Aduanal de los Centros Públicos de Investigación coordinados por el propio Consejo en los términos de la Ley de Ciencia y

Tecnología, la Ley de Comercio Exterior, la legislación aduanera y demás ordenamientos aplicables;

XX. Dirigir la gestión ante las autoridades competentes, relativa a los trámites migratorios e internación al país, de los becarios, profesores, investigadores y demás personas apoyadas por programas que deriven del objeto del CONACYT y que se relacionen con los convenios concertados con organismos, agencias internacionales o gobiernos extranjeros;

XXI. Dirigir, en coordinación con la Dirección Adjunta de Tecnología, la consulta jurídica para la instrumentación del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo tecnológico, de acuerdo con la normatividad aplicable;

XXII. Coordinar los estudios jurídicos sobre temas de interés nacional, vinculados con las funciones del CONACYT y emitir las recomendaciones conducentes;

XXIII. Coordinar los estudios jurídico fiscales que permitan la aportación directa a los Fondos CONACYT de contribuciones, para la sustentabilidad de dichos fondos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del Artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la instrumentación de las acciones pertinentes a efecto de generar la deducibilidad de las aportaciones, que realicen las personas físicas y morales a los mismos, en términos de lo señalado en el Artículo 28 de la propia Ley;

XXIV. Coordinar el análisis y, en su caso, la elaboración de los proyectos de ordenamientos que se relacionan con la organización y funciones del CONACYT, así como aquellos presentados por los Centros Públicos de Investigación, coordinados por el propio Consejo;

XXV. Dirigir la sistematización y consulta del marco jurídico aplicable al CONACYT, difundiendo mediante los instrumentos impresos, electrónicos o por cualquier otro medio, los servicios jurídicos y corporativos que brinde, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social;

XXVI. Dirigir el apoyo jurídico y corporativo para la formalización y operación de los fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología, así como el seguimiento de la transformación o extinción de los mismos, de conformidad con la normatividad aplicable;

XXVII. Promover las gestiones que en el ámbito de su competencia le sean aplicables con las Instituciones Fiduciarias que participan y en cada uno de los Fondos en los cuales se encuentre involucrado el CONACYT, con el objeto de propiciar la adecuada ejecución de la encomienda fiduciaria, en coordinación con las Direcciones Adjuntas de Desarrollo Regional y Sectorial y de Administración y Finanzas;

XXVIII. Administrar el RENIECYT, expedir las constancias de inscripción y dirigir la administración y operación de la Comisión Interna de Evaluación del propio registro, promoviendo su sistematización, innovación y mejora continua, además de propiciar su integración al SIICYT, en los términos establecidos en las bases y reglas de operación de este último, en coordinación con la Dirección Adjunta de Planeación y de Administración y Finanzas;

XXIX. Presidir la Comisión Interna de Evaluación del RENIECYT, así como designar a su Suplente quien será encargado únicamente en casos de ausencia del Titular y con el objeto de dirigir la Sesión correspondiente;

XXX. Coordinar la asesoría jurídica a los Organos Colegiados instituidos en el CONACYT y a todos aquellos en los que el propio Consejo sea parte;

XXXI. Coordinar y promover una cultura de propiedad intelectual ante los usuarios de los Servicios brindados por el CONACYT, propiciando una vinculación estrecha con las Autoridades Competentes para el logro de ese fin, en coordinación con la Dirección Adjunta de Tecnología;

XXXII. Participar de manera conjunta con la Dirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación en la aprobación del modelo de convenio de desempeño con los Centros Públicos de Investigación en los términos de lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología;

XXXIII. Coordinar las acciones jurídicas necesarias para el otorgamiento, sustitución y revocación de poderes generales y especiales, y aquellos trámites ante fedatarios públicos que el CONACYT requiera; así como, tramitar y formalizar los acuerdos delegatorios o de suplencia del Director General a los servidores públicos de la Institución;

XXXIV. Coordinar y sancionar las publicaciones del CONACYT en el **Diario Oficial de la Federación**;

XXXV. Coordinar en el ámbito de su competencia, la promoción y defensa de los Derechos Humanos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emitan las autoridades competentes;

XXXVI. Brindar la asistencia jurídica a la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial para el establecimiento del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología y a la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación en el establecimiento de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación;

XXXVII. Brindar la asesoría, información y seguimiento a las entidades coordinadoras sectorialmente, en los procesos judiciales o administrativos, instaurados en su contra, o en aquellos que sean parte procesal particularmente en materia de amparo, en coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación;

XXXVIII. Brindar a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, la asesoría y apoyo técnico para la aplicación de las condiciones generales de trabajo, así como para la ejecución de las resoluciones dictadas por el Organo Interno de Control en cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XXXIX. En coordinación con la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, brindar la asesoría y apoyo jurídico a las entidades coordinadas sectorialmente para que, previamente a la presentación ante sus respectivos Organos de Gobierno, se valide y sancione la reglamentación interna y las reglas de operación de cada Centro de Investigación coordinado, y

XL. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el presente Estatuto y las que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

CAPITULO SEPTIMO
Direcciones de Area Adscritas a la Dirección General

Artículo 28.- Para el mejor despacho de los asuntos de la competencia de la Dirección General, quedan adscritas orgánicamente y estarán bajo su directa dependencia, la Dirección de Comunicación Social, y la Dirección de Asuntos Internacionales.

Dirección de Asuntos Internacionales

Artículo 29.- La Dirección de Asuntos Internacionales, además de las facultades establecidas en la fracción XXVI del Artículo 2 de la Ley Orgánica del CONACYT, tendrá las siguientes:

I. Fortalecer la vinculación de la ciencia y la tecnología con la comunidad internacional científica
y tecnológica;

II. Fungir como unidad de enlace y coordinación para la administración y seguimiento de proyectos financiados con recursos del extranjero como resultado de acuerdos y convenios de cooperación;

III. Ejecutar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el programa correspondiente de Ciencia y Tecnología, por cuanto al cumplimiento de las funciones de cooperación internacional previstas en la Ley de Ciencia y Tecnología;

IV. Representar al CONACYT en las reuniones internacionales por designación expresa del Director General y coordinar conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores la

cooperación científica y tecnológica que se pacte con las instituciones y gobiernos extranjeros;

V. Fomentar y mantener los nexos entre el CONACYT y las agencias internacionales e instituciones extranjeras que participen en los programas de cooperación internacional;

VI. Conducir, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores las negociaciones y gestiones con los organismos internacionales y las dependencias gubernamentales involucradas en los programas bilaterales y multilaterales de desarrollo científico y tecnológico;

VII. Fungir como órgano de enlace entre la comunidad científica internacional y el CONACYT, así como con los organismos del Sector Público e instituciones de los sectores social y privado, para la concertación de convenios que tengan por objeto la realización de proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica;

VIII. Coadyuvar al fortalecimiento de las relaciones del CONACYT, con instituciones y organismos financieros internacionales, así como con las dependencias y representaciones gubernamentales, para conocer y, en su caso, establecer nuevos programas de cooperación financiera en materia científica y tecnológica;

IX. Analizar el marco de las políticas de cooperación en materia de Ciencia y Tecnología, en coordinación con las demás Direcciones Adjuntas para ejecutar el plan y programa de acciones internacionales;

X. Fomentar y coordinar la ejecución de convenios para realizar proyectos de investigación concertados por el CONACYT con agencias internacionales y de otros países, en coordinación con las Direcciones Adjuntas del CONACYT;

XI. Promover a nivel nacional e internacional la divulgación de los programas de cooperación científica y tecnológica, derivados de los convenios de carácter internacional con el propósito de lograr su mejor aprovechamiento;

XII. Establecer, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social:

a).- Procedimientos de difusión de nuevas tecnologías para propiciar un mayor vínculo entre la comunidad científica y las empresas a nivel nacional e internacional.

b).- Difundir las actividades de la ciencia y la tecnología mexicana dentro y fuera del país.

XIII. Identificar en coordinación con la Dirección Adjunta de Tecnología, las áreas en que la transferencia de tecnología contribuya de manera eficaz a la modernización de la planta productiva, mediante el conocimiento de las fuentes o proveedores de tecnología científicas en México y en el extranjero;

XIV. Promover en coordinación con las Direcciones Adjuntas del CONACYT la instalación en México de Centros de Investigación y Desarrollo de empresas extranjeras con base tecnológica con operaciones en México, en los que participen científicos y tecnólogos mexicanos;

XV. Establecer una red de cooperación intersectorial que fortalezca la cooperación internacional;

XVI. Apoyar la cooperación internacional en áreas científicas y tecnológicas estratégicas del Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

XVII. Evaluar la situación financiera nacional en materia de ciencia y tecnología, para disponer de recursos que complementen y garanticen la fluidez de los financiamientos internacionales;

XVIII. Promover la canalización de fondos del sector privado Nacional e Internacional para la implantación de programas específicos, tendientes a la investigación, innovación, desarrollo y modernización tecnológica en actividades o sectores prioritarios;

XIX. Promover la procuración de fondos de fundaciones filantrópicas nacionales e internacionales para el financiamiento de actividades científicas y tecnológicas;

XX. Coordinar la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos de cooperación internacional a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología;

XXI. Coordinar con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos institucionales en materia de cooperación internacional a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología;

XXII. Brindar el apoyo técnico propio de su materia sustantiva para la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología
y en su caso, para los recursos destinados a los Centros Públicos de Investigación;

XXIII. En coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial y por lo que hace a los Fondos Mixtos y Sectoriales del CONACYT, instrumentar los procesos para la inducción, integración, impacto, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos
que concursen;

XXIV. Participar en la asesoría que el CONACYT brinde a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la celebración de tratados y convenios internacionales en materia de ciencia y tecnología colaborando en el cumplimiento de los mismos, participando igualmente en los organismos
o agencias internacionales relacionados con su materia y en los que México sea parte;

XXV. Promover en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, una red de Consejerías Científicas y Tecnológicas, adscritas a las Embajadas de México en el extranjero, las cuales se sujetarán para el desarrollo de sus funciones y facultades a los lineamientos que para el efecto se establezcan;

XXVI. Ejecutar programas y proyectos de cooperación científica y tecnológica internacional y dar a conocer las realizadas por las Entidades y Dependencias en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y

XXVII. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el presente Estatuto y las que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

Dirección de Comunicación Social

Artículo 30.- A la Dirección de Comunicación Social le corresponde:

I. Difundir mediante un programa anual, las actividades del CONACYT relacionadas con la investigación científica y la innovación tecnológica;

II. Diseñar, integrar, coordinar y evaluar el programa anual de difusión de las actividades del CONACYT, relacionadas con la investigación científica y tecnológica, así como presentarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación, de acuerdo con la normatividad aplicable;

III. Definir normas, políticas y lineamientos institucionales para coordinar y orientar las acciones de información, difusión y divulgación en materia de ciencia y tecnología;

IV. Establecer relaciones de coordinación con los medios especializados en comunicación científica y tecnológica que faciliten la información, la difusión y la divulgación nacional e internacional tanto de los avances en materia de ciencia y tecnología en general, como de las actividades del CONACYT en lo particular;

V. Incrementar el fondo editorial del CONACYT mediante la edición y coedición de obras sobre ciencia y tecnología, revistas y demás publicaciones, especialmente de autores nacionales;

VI. Promover y difundir la producción y coproducción de recursos y materiales audiovisuales sobre ciencia y tecnología;

VII. Programar, coordinar y supervisar la edición y coedición de las revistas y demás publicaciones que produzca el CONACYT, en los términos y con la colaboración de las áreas que determine el Director General;

VIII. Impulsar por todo el país y en colaboración con otras instituciones, las acciones de divulgación científica y tecnológica a nivel infantil;

IX. Promover y coordinar la realización de encuentros de divulgación científica en el país;

X. Promover, apoyar y asesorar la creación de redes, audiovisuales de información de ciencia y tecnología en centros de investigación e instituciones de educación superior y constituir, preservar y actualizar permanentemente bancos hemerográficos y material audiovisual para consulta pública;

XI. Supervisar la adquisición de acervo bibliográfico y materiales audiovisuales que se requieran para cumplir con las funciones institucionales, referentes a la promoción y difusión del conocimiento científico;

XII. Proporcionar asistencia técnica y brindar el apoyo necesario a las unidades administrativas para la difusión y producción de los medios y materiales relacionados con sus actividades;

XIII. Promover y coordinar la celebración de conferencias, congresos y exposiciones para la difusión y la divulgación del conocimiento científico y tecnológico;

XIV. Promover la realización de investigaciones en el ámbito de la comunicación científica y tecnológica;

XV. Brindar el apoyo técnico propio de su materia sustantiva para la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología y, en su caso, para los recursos destinados a los Centros Públicos de Investigación;

XVI. En coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial y por lo que hace a los Fondos Mixtos y Sectoriales del CONACYT, instrumentar los procesos para la inducción, integración, impacto, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos
que concursen;

XVII. Coordinar con la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, la constitución, operación, funcionamiento, evaluación y control de los fondos institucionales, en materia de divulgación científica y tecnológica, a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología;

XVIII. Contribuir al enriquecimiento de la cultura científica y tecnológica de México, haciendo uso, para ello, de todos los medios de divulgación, información y difusión;

XIX. Aprovechar el uso de la Internet, así como organizar y promover su utilización como un medio de comunicación altamente avanzado, en los términos dispuestos en el Decreto por el que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que corresponda;

XX. Auxiliar y proponer al Director General la adecuada y oportuna instrumentación de la atribución contenida en la fracción V del Artículo 18 del presente Estatuto, así como fungir como enlace legislativo del CONACYT con el Poder Legislativo Federal;

XXI. Fungir como Secretario Técnico del Comité de Apoyos Especiales del CONACYT;

XXII. Instrumentar, operar y evaluar el Centro de Atención del CONACYT, en el nivel básico de atención, así como fungir como canal de distribución ante las Direcciones Adjuntas y las Direcciones adscritas a la Dirección General, para que éstas brinden la atención y el servicio especializado que los usuarios y clientes demanden;

XXIII. Promover y coordinar en el ámbito de su competencia los lineamientos de comunicación social y de divulgación científica y tecnológica, de los Centros Públicos de Investigación, sujetos a la Coordinación Sectorial del CONACYT;

XXIV. Fungir como Unidad de Enlace en términos de lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como elaborar el Informe Anual a que se refiere el Artículo 62 del citado ordenamiento y presidir el Comité de Información regulado en su Artículo 29, y

XXV. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el presente Estatuto y las que le sean encomendadas por el Director General, en la esfera de su competencia.

CAPITULO OCTAVO
Organo Interno de Control

Artículo 31.- El CONACYT contará con un Organo de Vigilancia integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, los cuales asistirán con voz pero sin voto a las Sesiones de la Junta de Gobierno.

Artículo 32.- Los Comisarios Públicos vigilarán y evaluarán las operaciones del CONACYT, de conformidad con las atribuciones que les confiera la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, además de las que les asigne la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en la esfera de su competencia.

Artículo 33.- El Director General a través del Secretario o Prosecretario de la Junta de Gobierno, deberá proporcionar oportunamente a los comisarios públicos la información y documentación que requieran y darles las facilidades necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones.

Artículo 34.- El CONACYT contará con un Organo Interno de Control que será parte de su estructura, al frente del cual el Contralor Interno, Titular de dicho Organo, designado en términos del Artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas nombrados para el efecto.

Los Servidores Públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercen las facultades previstas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, de conformidad con lo previsto por el Artículo 47 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Artículo 35.- El Titular del Organo a que se refiere el Artículo anterior, será auxiliado por el personal que las necesidades del servicio requieran y cuyos puestos figuren en la estructura y presupuesto del CONACYT.

Artículo 36.- El Titular del Organo Interno de Control, deberá reunir los requisitos que para el desempeño de este cargo, establezca la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y no deberá contar con ningún impedimento que para ser miembro del Organo de Gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del Artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 37.- El Titular del Organo Interno de Control, además de lo dispuesto por el Artículo 34 del presente Estatuto, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dirigir la formulación del Programa Anual de Control y Auditoría con el objeto de someterlo a consideración de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y del Director General, así como planear y supervisar su correcta y oportuna ejecución e informar al propio titular de los resultados de las auditorías practicadas;

II. Supervisar auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la SECODAM sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar y evaluar las acciones en materia de desarrollo administrativo;

III. Dirigir y coordinar la verificación en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo, que se deberán ajustar a las políticas y criterios de racionalidad y austeridad dictadas por el Gobierno Federal;

IV. Programar y coordinar el seguimiento de las recomendaciones y sugerencias derivadas de las auditorías practicadas a las unidades administrativas del Consejo, centros de investigación del Sistema de Centros Públicos CONACYT e instituciones de educación superior; así como las giradas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Auditoría Superior de la Federación, auditores externos, Comisarios Públicos y aquellas que surjan de las sesiones de la Junta Gobierno o del Comité de Control y Auditoría;

V. Organizar, coordinar y vigilar la operación de los sistemas de control y evaluación, de conformidad con las disposiciones establecidas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como informar al Director General de los resultados que se obtengan;

VI. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran, y vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretaría, así como aquellas que regulan el funcionamiento de la entidad correspondiente;

VII. Coordinar y verificar el cumplimiento del Programa Nacional de Modernización de la Empresa Pública o su equivalente, así como la elaboración del informe de autoevaluación del Consejo;

VIII. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y, en su caso, llevar a cabo las acciones conducentes a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que se impongan a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida;

IX. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, así como la Tesorería de la Federación, conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, fincando cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que hubiere lugar, salvo los que sean competencia de la Dirección General mencionada en el párrafo anterior;

X. Dictar resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos y de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de las inconformidades previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, que emita el titular del área de responsabilidades;

XI. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al titular de la Secretaría, así como expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos del órgano interno de control;

XII. Recibir, tramitar y dictaminar, en su caso, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las solicitudes de los particulares relacionadas con servidores públicos del CONACYT, a las que comunicará el dictamen para que reconozcan, si así lo determinan, la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad líquida y ordenar el pago correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que el Consejo conozca directamente de la solicitud del particular y resuelvan lo que en derecho proceda;

XIII. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del Organo Interno de Control y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto;

XIV. Denunciar ante las autoridades competentes por sí o por conducto del servidor público del propio órgano interno de control que el titular de éste determine expresamente en cada caso, los hechos de que se tengan conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos e instar al área jurídica respectiva a formular cuando así se requiera las querellas a que hubiere lugar;

XV. Dirigir y coordinar la verificación para que se cumplan las disposiciones que rigen las licitaciones públicas o concursos en materia de obra pública y adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles del CONACYT;

XVI. Coordinar y vigilar el debido cumplimiento de los contratos o convenios que impliquen canalización de fondos o prestaciones de servicios por parte del Consejo;

XVII. Supervisar que los estados financieros e informes administrativos cumplan con las disposiciones normativas y comprueben fehacientemente la transparente aplicación de los recursos presupuestarios asignados al Consejo;

XVIII. Evaluar y vigilar que la estructura orgánica y funcional del Consejo, se apegue a la autorizada por la Junta de Gobierno y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las modificaciones que se realicen;

XIX. Emitir su opinión respecto a los proyectos normativos que propongan las Direcciones Adjuntas y Direcciones de Area del Consejo, a fin de asegurar que existan los elementos necesarios de control administrativo;

XX. Supervisar el cumplimiento de la normatividad relativa a la entrega-recepción de recursos y despacho de asuntos a cargo de servidores públicos de mandos y superiores;

XXI. Verificar el cumplimiento de las normas establecidas para la presentación de la declaración de situación patrimonial por los servidores públicos que determina la Ley;

XXII. Dirigir el proceso de evaluación para el correcto ejercicio del presupuesto anual del Consejo y hacer oportunamente las observaciones que procedan de acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y su Reglamento;

XXIII. Programar y proporcionar la información necesaria, a fin de que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo otorgue el asesoramiento y apoyo necesario para el debido cumplimiento de las normas de control y supervisión correspondientes;

XXIV. Participar como representante propietario del Organo Interno de Control en los diferentes comités del Consejo;

XXV. Requerir a las unidades administrativas del Consejo, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que requieran en el ámbito de sus competencias, y

XXVI. Las demás que le atribuya expresamente el Titular de la Secretaría, el Coordinador General o el Coordinador de Sector de los Organos de Vigilancia y Control, así como aquellas que les confieran las leyes y reglamentos a los órganos internos de control.

CAPITULO NOVENO
Organos Colegiados

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Artículo 38.- Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT, cuyo objetivo es promover la expresión de la comunidad científica, académica y tecnológica, así como de los sectores social, privado y productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

El Foro estará integrado por científicos, tecnólogos, empresarios y por los representantes de las organizaciones e instituciones, reconocidas por sus Areas permanentes en la investigación científica y

tecnológica, y por su representatividad de los sectores social y privado, quienes participarán de manera voluntaria y honorífica.

En la integración del Foro se observarán los criterios de pluralidad, renovación periódica, representatividad de los diversos integrantes de la comunidad científica y tecnológica y de los sectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones del país.

El Foro contará con una mesa directiva y con un secretario técnico de dicha mesa directiva, designado por el Director General del CONACYT y su organización estará basada en Comités de trabajo especializados, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Sin perjuicio de otros canales, el CONACYT deberá transmitir a las dependencias, entidades y demás instancias competentes, las opiniones y propuestas del Foro, así como de informar a éste del resultado que recaiga. Las opiniones y propuestas que presente el Foro se formularán con base en las recomendaciones que realicen sus Comités, tomando en cuenta la opinión de las comunidades.

El Foro propondrá las bases de su integración, funcionamiento y organización, las cuales serán expedidas conjuntamente por su mesa directiva y el CONACYT. Para la materialización de sus actos el Foro se constituirá en una Asociación Civil.

El Coordinador General del Foro será miembro de la Junta de Gobierno del CONACYT y el Secretario Técnico de la mesa directiva del mismo, participará como invitado permanente en la Comisión Asesora del Consejo, teniendo las facultades que establece la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presente Estatuto, las Bases de Funcionamiento del Foro y los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 39.- El Foro Consultivo Científico y Tecnológico además de las funciones establecidas en la Ley de Ciencia y Tecnología, tendrá las siguientes:

a) Proponer Programas Sectoriales y Especiales de Apoyo a la Investigación Científica, participar en su formulación y evaluación, emitiendo las opiniones respectivas;

b) Participar en la formulación y evaluación del PECYT, emitiendo su opinión respecto del mismo a las dependencias y entidades que intervengan y colaboren en su integración y ejecución conforme a lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología;

c) Participar en la formulación y evaluación de políticas de apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico y emitir su opinión sobre las mismas;

d) Participar en la formulación, evaluación y difusión de las disposiciones legales o las reformas adicionales a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica del país, así como emitir su opinión respecto de las mismas;

e) Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnólogos y cooperación técnica internacional;

f) Formular sugerencias tendientes a vincular la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector productivo, así como la vinculación entre la investigación científica y la educación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología y demás ordenamientos aplicables;

g) Opinar sobre la creación, transformación, disolución o extinción de Centros Públicos de Investigación, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología;

h) Evaluar los distintos instrumentos de fomento a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a cargo del CONACYT, proponiendo medidas tendientes a su mejoramiento y formulando propuestas para una adecuada instrumentación de las políticas nacionales relativas a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico;

i) Participar en el ámbito de su competencia en la integración, operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica;

j) Proponer las medidas y estímulos fiscales, esquemas de financiamiento, facilidades administrativas y en materia de comercio exterior, así como modificaciones a los regímenes

de propiedad industrial y derecho de autor, que estime necesarios para el cumplimiento del PECYT, y

k) Proponer a las autoridades administrativas o judiciales, así como a las instancias alternativas de resolución de controversias, que así lo requieran, a los expertos calificados para la elaboración de opiniones o dictámenes técnicos en su materia.

Artículo 40.- El CONACYT otorgará los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Comité de Control y Auditoría

Artículo 41.- El Comité de Control y Auditoría será una instancia auxiliar de la Junta de Gobierno, que no sustituye ni diluye sus responsabilidades en asuntos relacionados con respecto a los controles que deban operar en el CONACYT y las auditorías.

Artículo 42.- El Comité estará integrado por los siguientes Servidores Públicos, miembros propietarios:

El Presidente, será el titular de la Entidad, quien será suplido, en su caso, por el Titular de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas.

Vocal Ejecutivo, el titular del Organo Interno de Control.

Vocales, el Representante de la Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el representante de la Dependencia que presida las sesiones
de la Junta de Gobierno del CONACYT y el representante de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Se podrán incorporar al Comité, el Coordinador de Sector de Organos de Vigilancia y Control, Delegado o Comisario Público de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ante la Entidad, o quien designe el Secretario de la SECODAM, pudiendo ser invitado el Auditor Externo designado por la SECODAM, los titulares de las Areas Sustantivas y de Apoyo de la Entidad, que estén relacionados con los temas aprobados para desahogo en el orden del día de la sesión respectiva, además de los Servidores Públicos de otras Entidades que tengan relación estrecha con los asuntos a tratar y el seguimiento de acuerdos tomados en el Seno del Comité, a fin de que puedan apoyar en la solución de problemas.

Artículo 43.- El Comité deberá sesionar en forma ordinaria por lo menos cuatro veces al año y se podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando así se requiera.

Las sesiones ordinarias se realizarán previa convocatoria del Secretario Ejecutivo, quien remitirá a los integrantes, con cinco días hábiles de anticipación, el oficio de invitación, acompañado del orden del día y la información de los asuntos a tratar.

Artículo 44.- El Comité tendrá las funciones siguientes:

I. Promover a través de un adecuado control interno, la eficiencia, eficacia y congruencia en la operación del CONACYT;

II. Auxiliar a la Junta de Gobierno en el seguimiento de acuerdos sobre asuntos de control y auditoría, procurando agilidad, contenido técnico y objetividad en la toma de decisiones;

III. Comprobar que las recomendaciones o solicitudes efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se ejecuten informando
a dichas instancias las acciones adoptadas, evitando su recurrencia;

IV. Organizar las acciones de control y auditoría, a fin de evitar duplicidades y agilizar la resolución de los asuntos, y

V. Dar puntual seguimiento al Programa de Mediano Plazo de Cierre de la Administración.

Consejo Directivo del SIICYT

Artículo 45.- Para marcar los lineamientos y políticas que deba seguir el SIICYT, éste cuenta con un Consejo Directivo, presidido por el Director General del CONACYT, cuyas funciones son las siguientes:

I.- Establecer los lineamientos y políticas del Sistema;

II.- Revisar los informes sobre la operación y funcionamiento del Sistema;

III.- Asesorar al CONACYT en asuntos relacionados con la información sobre las actividades científicas y tecnológicas;

IV.- Ser portavoz de las opiniones y sugerencias de los usuarios;

V.- Colaborar con el establecimiento de convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación y gobiernos de las entidades federativas para que incorporen su información al Sistema, y

VI.- Realizar las demás que sean afines con las anteriores y que le confiera el Director General.

Artículo 46.- El Consejo Directivo del SIICYT está integrado por representantes de las dependencias, entidades e instituciones siguientes:

a) Academia Mexicana de Ciencias (AMC);

b) Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT);

c) Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA);

d) Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV);

e) Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (Foro);

f) Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT);

g) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI);

h) Instituto Politécnico Nacional (IPN);

i) Secretaría de Economía (SECONOMIA)

j) Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT);

k) Secretaría de Educación Pública (SEP);

l) Secretaría de Energía (SENER);

m) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT);

n) Secretaría de Salud (SSA), y

o) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Artículo 47.- El Consejo Directivo del SIICYT sesionará al menos una vez por año, a convocatoria de su Presidente o a solicitud de al menos tres de sus miembros. El Secretario Técnico, será el Director Adjunto de Planeación del CONACYT.

Artículo 48.- Las reglas a las que se sujetará la integración y funcionamiento del Consejo Directivo serán establecidas por el CONACYT a través del Director Adjunto de Planeación y aprobadas por el propio
Consejo Directivo.

Consejo Técnico Asesor del SIICYT

Artículo 49.- El SIICYT cuenta con un Consejo Técnico Asesor, el cual tiene las atribuciones siguientes:

I. Supervisar la operación y funcionamiento del Sistema;

II. Mejorar su operación y servicios y asegurarse que esté disponible al público en general;

III. Ser portavoz de las opiniones y sugerencias de los usuarios;

IV. Colaborar al establecimiento de convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación y gobiernos de las entidades federativas para que incorporen su información al Sistema;

V. Informar de los avances del SIICYT al Consejo Directivo, y

VI. Realizar las demás que sean afines con las anteriores y que le confiera el Director General.

Artículo 50.- El Consejo Técnico Asesor del SIICYT está formado por:

a) Dos funcionarios del CONACYT, representantes de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas y de la de la Dirección Adjunta de Planeación, quien lo presidirá y designará al Secretario Técnico.

b) Un representante del Foro;

c) Un representante de la AMC;

d) Un representante de una empresa inscrita en el RENIECYT, y

e) Un representante del INEGI.

Comisión Interna de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

Artículo 51.- La Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos será la encargada de administrar el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, así como de expedir las constancias de inscripción en el mencionado Registro, de acuerdo con las resoluciones que adopte la Comisión interna a cargo del CONACYT, a través de su Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos, la cual conocerá y resolverá sobre la procedencia de Registro de las solicitudes de inscripción que se presenten de acuerdo con los ordenamientos respectivos.

Artículo 52.- La Comisión Interna de Evaluación estará integrada por representantes de las siguientes unidades administrativas: Direcciones Adjuntas de Planeación, de Ciencia, de Tecnología, de Desarrollo Regional y Sectorial, de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, de Servicios Jurídicos, de Formación de Científicos y Tecnólogos y del Organo Interno de Control del propio CONACYT; así como un represente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fungirá como Presidente de la Comisión Interna de Evaluación el Director Adjunto de Servicios Jurídicos del CONACYT, quien tendrá voto de calidad y como Secretario Técnico a quien éste nombre de la propia Dirección Adjunta, quien asistirá a las reuniones de la Comisión con voz pero sin voto.

Artículo 53.- Para su operación, el RENIECYT observará las Bases de Organización y Funcionamiento que el CONACYT expedirá, así como de las Reglas de Operación y Funcionamiento de la Comisión Interna de Evaluación, de acuerdo con lo que disponga la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Comité de Apoyos Especiales

Artículo 54.- El Comité tendrá por objeto brindar la asesoría a la Dirección General del CONACYT, en la decisión de autorizar apoyos específicos solicitados a la institución y en la instrumentación del Artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 55.- Las bases de organización y funcionamiento del Comité de Apoyos Especiales serán definidas y expedidas por la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas y la Dirección de Comunicación Social, con la asesoría de la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos.

Comité de Cancelación de Adeudos

Artículo 56.- El Comité de Cancelación de Adeudos tendrá por objeto instrumentar las actividades de recuperación de apoyos económicos otorgados por el Consejo, así como proveer lo dispuesto por la fracción XVII del Artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, en apoyo a la Junta de Gobierno. Las bases de organización y funcionamiento de este Comité serán definidas y expedidas

por la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, con la asesoría de la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos y con la participación que corresponda al Organo Interno de Control.

Comité de Información

Artículo 57.- Se crea el Comité de Información, el cual operará en términos de lo dispuesto por los Artículos 29 y 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las bases de organización y funcionamiento de dicho Comité serán definidas y expedidas por el Director de Comunicación Social, con la asesoría de la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos.

Comité de Dirección

Artículo 58.- Los titulares de las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General se constituirán en una instancia permanente para la atención y despacho de sus atribuciones, auxiliando al Director General en sus atribuciones y en las prioridades que fije éste para el cumplimiento del objeto del CONACYT.
El Coordinador de Asesores de la Dirección General fungirá como Secretario Técnico de este Comité.

CAPITULO DECIMO
Direcciones Regionales

Artículo 59.- El CONACYT contará con Direcciones Regionales con el fin de hacer efectiva la desconcentración y regionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de formación, desarrollo y consolidación de científicos, tecnólogos y recursos humanos de alto nivel, mediante la asignación de funciones y servicios en estas Unidades Regionales de Administración Desconcentrada.

Artículo 60.- Al frente de cada Dirección habrá un Director Regional que contará con un nivel de Director de Area, propuesto por el Director General del CONACYT y nombrado por la Junta de Gobierno, quien será auxiliado por el personal que las necesidades del servicio requieran, conforme a las disponibilidades presupuestarias de la institución.

Artículo 61.- Los Directores Regionales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a la Dirección a su cargo;

II. Representar al CONACYT y al Director General dentro de la circunscripción territorial que corresponda a la Dirección Regional, de conformidad con las instrucciones que expresamente reciban;

III. Auxiliar, dentro del ámbito de competencia de las unidades administrativas a sus respectivos cargos, al Director General en el ejercicio de sus atribuciones;

IV. Presentar a la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial para su aprobación y evaluación de resultados, el programa de labores y los requerimientos presupuestales de la Dirección Regional a su cargo, así como vigilar la correcta aplicación de los fondos, conforme a las disposiciones aplicables;

V. Participar, dentro de la circunscripción regional de sus actividades, en la planeación, programación y ejecución de las políticas emanadas del objeto, fines y funciones del CONACYT;

VI. Promover y fomentar los programas de colaboración interinstitucional tendientes a fortalecer la capacidad científica, tecnológica y de formación, desarrollo y consolidación de científicos, tecnólogos y recursos humanos de alto nivel, de la circunscripción territorial correspondiente;

VII. Coadyuvar a la mayor articulación entre el sector académico y el sector productivo para la realización de proyectos científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo económico de las entidades federativas que comprenda la región;

VIII. Procurar la mayor difusión de los avances y logros de los programas de investigación científica y modernización tecnológica y de formación de recursos humanos de alto nivel;

IX. Mantenerse permanentemente en contacto con la comunidad científica y tecnológica y los sectores social y privado de su jurisdicción, y promover los convenios de colaboración que tengan por objeto la realización de proyectos científicos y tecnológicos interinstitucionales;

X. Apoyar, dentro de su jurisdicción, las acciones institucionales tendientes a la formación de recursos humanos orientados al desarrollo científico y a la modernización tecnológica;

XI. Difundir y promover entre las instituciones de educación superior, centros de investigación y el sector productivo de la región, las convocatorias que expida el CONACYT en todos los Fondos;

XII. Coordinar acciones con la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos para la promoción y adecuada integración de las solicitudes de incorporación al Registro Nacional e Instituciones
y Empresas Científicas y Tecnológicas, que establece la Ley de Ciencia y Tecnología;

XIII. Coordinar el establecimiento y funcionamiento de los Comités de Evaluación de los instrumentos financieros concertados con las Entidades Federativas y Municipios;

XIV. Fungir como Secretario Técnico de los Fondos Mixtos que se constituyan en su región, asumiendo las obligaciones, compromisos y responsabilidades que conlleva el desempeño de
la función;

XV. Prestar un eficiente servicio de orientación e información para simplificar y agilizar el trámite y solución de los asuntos de la competencia de la Dirección Regional a su cargo;

XVI. Acordar con la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial la resolución de los asuntos cuya tramitación corresponda a su respectiva Dirección Regional, así como de aquellos que por su importancia deben ser del conocimiento de las unidades administrativas
centrales competentes;

XVII. Rendir a la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial los informes de sus actividades y los reportes estadísticos relacionados con las funciones del CONACYT, requeridos por la
propia Dirección;

XVIII. Reclutar, seleccionar y formular las propuestas de ingreso, promoción, licencias y movimientos del personal de su Dirección Regional;

XIX. Firmar la correspondencia y demás documentación relativa al ejercicio de sus atribuciones;

XX. Vigilar que se mantenga debidamente organizado y actualizado el archivo y el inventario de los bienes de su respectiva Dirección Regional;

XXI. Auxiliar a la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial en el establecimiento de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología y de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología;

XXII. Coordinar a nivel regional las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social, y

XXIII. Las demás que se deriven de los acuerdos de coordinación correspondientes y las que se establezcan en el presente Estatuto y otros ordenamientos aplicables, o les sean

delegadas
o encomendadas por el Director General.

CAPITULO DECIMO PRIMERO

Suplencia de los Servidores Públicos del CONACYT

Artículo 62.- Durante las ausencias temporales del Director General del CONACYT, el despacho y resolución de los asuntos administrativos quedarán a cargo del Director Adjunto de Planeación y en ausencia de éste, el Director Adjunto de Administración y Finanzas.

Los Directores Adjuntos, los Directores de Area y Directores Regionales, serán sustituidos en sus ausencias temporales por los funcionarios de la jerarquía inmediata inferior de su respectiva adscripción, que designe el Director General, o los Directores Adjuntos, o Directores de Area, según el caso, por acuerdo del propio titular de la entidad.

Las ausencias del Titular del Organo Interno de Control, así como la de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas serán suplidas conforme a lo dispuesto por el Artículo 54 segundo y tercer párrafos del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- El Director General deberá expedir en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la fecha en que entre en vigor este Estatuto, el Manual de Organización del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología. En tanto, las atribuciones conferidas a las Direcciones Adjuntas o Areas equivalentes del Estatuto Orgánico anterior, se entenderán conferidas a las actuales Direcciones Adjuntas y Direcciones de Area que dependen de la Dirección General.

TERCERO.- Los asuntos pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente Estatuto, se seguirán sustanciando por las unidades administrativas que conforme a este ordenamiento les competa y de conformidad con la regulación vigente en su momento.

CUARTO.- Las modificaciones al presente Estatuto sólo tendrán lugar a iniciativa del Director General
o del Presidente de la H. Junta de Gobierno del CONACYT y mediante aprobación de ésta.

QUINTO.- Se abroga el Estatuto Orgánico aprobado por la H. Junta Directiva en su XXXII Sesión Ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 1995, las modificaciones al mismo, aprobadas mediante acuerdo RLVIII-23/02, en la sesión de la H. Junta de Gobierno del CONACYT, celebrada el 18 de marzo de 2002,
así como, las disposiciones administrativas internas que se opongan al presente Estatuto.

SEXTO.- La Dirección Adjunta de Tecnología, expedirá dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, del presente Estatuto, las Bases de Organización
y Funcionamiento del Registro de Consultores Tecnológicos.

SEPTIMO.- La Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial, expedirá dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, del presente Estatuto, las Bases de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica.

OCTAVO.- La Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, en Coordinación con la Dirección de Comunicación Social, expedirá dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, del presente Estatuto, las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Apoyos Especiales.

NOVENO.- La Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, expedirá con el apoyo de la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del presente Estatuto, las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Cancelación de Adeudos.

DECIMO.- La Dirección de Comunicación Social, expedirá dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, en el presente Estatuto, las Bases de Organización
y Funcionamiento del Comité de Información.

DECIMO PRIMERO.- La Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, dispondrá lo conducente a fin de incorporar al documento identificado como "Marco de Operación" de los Comités de Evaluación Externos de los Centros del Sistema CONACYT, la facultad para que a solicitud del propio Consejo y previo proceso de auscultación interna y externa se proponga una lista de candidatos para ocupar el cargo de Titular de los Centros CONACYT, facultad que se incorporará en la actualización de los instrumentos de creación de los Centros del Sistema CONACYT, dispuesta en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ciencia y Tecnología; asimismo, dispondrá lo conducente para incorporar en la actualización de los instrumentos de creación de las entidades coordinadas sectorialmente, la atribución para que la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos, valide y sancione la reglamentación interna y las reglas de operación de cada Centro de Investigación.

DECIMO SEGUNDO.- La Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, emitirá los lineamientos para la celebración, desarrollo y seguimiento de las sesiones de los Organos de Gobierno de las Entidades coordinadas por el CONACYT, en un plazo que no excederá del 31 de diciembre de 2002.

El presente Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se expide en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de septiembre de dos mil dos.- El Director General, **Jaime Parada Avila**.- Rúbrica.